

Causa Rol N° 18.779

Sentencia dictada por el Ministro en Visita Extraordinaria, don Álvaro Claudio Mesa Latorre.

Temuco, catorce de marzo de dos mil veintitrés. -

VISTOS:

ÍNDICE

I.	Relación de la Sentencia.....	4 - 9
II.	Resumen ejecutivo.....	9- 11
III.	Actuarios de tramitación y dato técnico.....	11
IV.	Ubicación de Doctrina.....	11- 12
V.	Ubicación de Jurisprudencia.....	12
VI.	Reflexiones de lesa humanidad.....	12
VII.	En cuanto a las tachas.....	12.
VIII.	En cuanto a la Acción Penal:	
	A. Declaraciones (38).....	13-79
	B. Documentos(49).....	79-98
	Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.....	98- 101
	Calificación jurídica de los hechos.....	101 -104
	Concepto de Lesa Humanidad.....	105-107
	C. Declaraciones indagatorias:	
	Declaración indagatoria de José Dolorindo Fernández Cofré.....	107 - 117
	Análisis de las declaraciones de José Dolorindo Fernández Cofré.....	117-135
	Declaración indagatoria de Nelson Almendras Illesca.....	135-139
	Análisis de las declaraciones de Nelson Almendras Illesca.....	139-157
	Declaración indagatoria de Marcos Antonio Aguirre Guajardo.....	158-161
	Análisis de las declaraciones de Marcos Antonio Aguirre Guajardo.....	161-179
	Declaración indagatoria de Joel Pérez Isla.....	179-187

Análisis de las declaraciones de **Joel Pérez Isla**.....187-205

Declaración indagatoria de **César Adriazola Azocar**.....205-208

Análisis de las declaraciones de César Adriazola Azocar208-226

Declaración indagatoria de **Bernardo Aedo Leiva**.....226- 231

Análisis de las declaraciones de **Bernardo Aedo Leiva**.....231- 249

Declaración indagatoria de **José Cádiz Parada**. 249-258

Análisis de las declaraciones de **José Cádiz Parada**258-276

D. En Cuanto a las Defensas:

Defensa de la abogada María Carrillo Fuentes, en representación de César Adriazola Azocar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré.....276-279

Defensa del abogado Guillermo Cáceres Silva, en representación de Joel Pérez Isla.....279-281

Defensa del abogado César Villagrán Carvallo, en representación de Marco Aguirre Guajardo..... 282

Defensa del abogado Gaspar Calderón, en representación de Bernardo Aedo Leiva.....282-284

Defensa del abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de José Cádiz Parada.....284-287

Análisis de las defensas: Consideraciones previas al análisis de la defensa:

A. Obligación de Investigar.....287-302

B. Jurisprudencia Internacional sobre graves violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.....302- 312

C. Estado de Derecho.....312- 317

D. En cuanto a la complicidad..... 317 - 318

E. Alevosía.....318

F. Reflexiones sobre los elementos probatorios.....318- 328

E. Análisis de las defensas específicas:

Análisis de la defensa específica de **Cesar Adriazola Azocar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré**328 - 332

Análisis de la defensa específica de Joel Pérez Isla	332- 333
Análisis de la defensa específica de Marco Antonio Aguirre Guajardo	334-335
Análisis de la defensa específica de Bernardo Aedo Leiva	335-337
Análisis de la defensa específica de José Cádiz Parada	337- 338
F. Reflexiones y ponderaciones finales	338-339
G. Acusaciones particulares presentadas por la Abogada Carolina Contreras Rivera en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de los querellantes.....	339- 341
H. Reflexiones sobre lesa humanidad	342- 351
I. Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal:	
Atenuante de Responsabilidad Penal.....	351-353
Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual.....	353-356
Agravantes de Responsabilidad Penal.....	356-357
Determinación de la Pena.....	357-359
Beneficios de la Ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.....	359-368
IX. En cuanto a la Acción Civil:	
Demanda civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Juan Yáñez Aedo, Nélida Yáñez Bustos y Jorge Quezada Yáñez.....	368-373
Contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer , en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	373- 382
Análisis de la contestación de la demanda civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del Consejo de Defensa del Estado.....	382-394
Acreditación probatoria del daño moral.....	394-396
Montos; reajustes e intereses de las sumas demandadas.....	396
X. Aspectos Resolutivos	396- 401

I. RELACIÓN DE LA SENTENCIA:

Que se ha iniciado esta **causa rol N° 18.779** del ingreso del Primer Juzgado de letras de Curacautín, para investigar los delitos de Homicidio y asociación ilícita de Marcos Quezada Yáñez y determinar la responsabilidad que en tales hechos le ha cabido a:

1. JOSÉ DOLORINDO FERNANDEZ COFRÉ, R.U.N 5.414.884-4, chileno, natural de Collipulli, casado, 77 años de edad, Suboficial Mayor de Carabinero en retiro, domiciliado en Municipio N°325, comuna de Lo Prado, Región Metropolitana. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 2.076 (Tomo VI), 2091 (Tomo VI), 2.135 (Tomo VII), 2.163 (Tomo VII), 2.291 a 2.292 (Tomo VII), 2.636 a 2.637 (Tomo VII) y de fs. 3.686 a 3.687 (Tomo XI)).-

2. NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA, R.U.N 8.558.995-4, chileno, natural de Los Ángeles, viudo, 63 años de edad, Suboficial Mayor de Carabinero en retiro, domiciliado en pasaje los Troncos N° 593, villa los campos de doña Beatriz, comuna de Chillan. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 1573 a 1.574 (Tomo V)).

3. MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO, R.U.N 10.467.540-9, chileno, natural de Limache, divorciado, 56 años de edad, funcionario de Carabineros de Chile en retiro, domiciliado en Las Palmas N° 126, comuna de Limache, Región de Valparaíso. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 2.298 a 2.299 (Tomo VII)).

4. JOEL ERWIN PÉREZ ISLA, R.U.N 6.766.357-8, chileno, natural de Valdivia, casado, 64 años de edad, Sargento 1° de Carabinero en retiro, domiciliado en pasaje N° 17, casa N°339, comuna de Valdivia, Región de los Ríos. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 2.381 (Tomo VII)).

5. CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR, R.U.N 7.550.123-4, chileno, natural de Osorno, casado, 67 años de edad, Oficial en retiro de Carabineros de Chile, domiciliado en calle los colonos N° 2.765, comuna de Temuco, Región de la Araucanía. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 1.521 a 1.522 (Tomo V) y de fs. 2.296 a 2.297 (Tomo VII)).

6. BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA, R.U.N 10.606.928-k chileno, natural de Villarrica, casado, 56 años de edad, funcionario de Carabinero de Chile en retiro domiciliado en calle uno N° 806, Villa la Foresta, comuna de Coyhaique, Región de Aysén. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 1.537 (Tomo V)).

7. JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA, R.U.N 7.928.074-7, chileno, natural de Penco, casado, 64 años de edad, Sargento 1° de Carabinero de Chile

en retiro, domiciliado en Armando de Folliot N° 615, comuna de Angol, Región de la Araucanía. (Extracto filiación y antecedentes de fs. 1.566 a 1.567 (Tomo V)).

Se inició la causa mediante querella criminal de fecha 05 de agosto de 2010, presentada por Alicia Lira Matus, Presidenta de la agrupación de familiares ejecutados políticos, en contra de todo aquellos que resulten responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores en el delito de homicidio y asociación ilícita, consumado, cometido en la persona de Marcos Quezada Yáñez, de **fs. 1 a 4(Tomo I)**. Que a **fs. 3.058 (Tomo VIII)**, en resolución del 24 de junio de 2020, se tuvo por abandonada.-

A fs. 474 a 481 (Tomo III), interpuso querella criminal el abogado Rodrigo Ubilla Mackenney en contra de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores por el delito de homicidio calificado consumado, cometido en contra de Marcos Quezada Yáñez, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1.620 a 1.625 (Tomo V), interpuso querella criminal el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez, en contra de los Carabineros Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azócar, Erwin Fernando Hormazabal Aedo, José Domingo Cádiz Parada, Bernardo Iván Aedo Leiva y de todos aquellos que resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, por los delitos de apremios ilegítimos y homicidio calificado consumado, cometido en contra de Marcos Quezada Yáñez, solicitando sancionarlos al máximo de las penas que señale la ley, con costas.

A fs. 1.017 a 1.022 (Tomo III) con fecha 29 de diciembre de 2014, se sometió a proceso e impuso la medida cautelar de prisión preventiva a **JOSÉ ERWIN PEREZ ISLA, MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO, CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR, ERWIN FERNANDO HORMAZABAL AEDO Y NELSÓN ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA**, como **autores** y a **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA y BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA** como **cómplices** del delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989. **A fs. 1.041 (Tomo III)** del 12 de marzo de 2015, **MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO** apela de la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1.043 (Tomo III)** en resolución de 12 de marzo de 2015, **CESAR ADRIAZOLA AZOCAR**, apeló a la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1.061 a 1.063 (Tomo III)**, **NELSON ALMENDRAS ILLESCA**, solicita libertad bajo

fianza y apela del auto de procesamiento que lo somete a proceso. **A fs. 1.064 (Tomo III)** en resolución del 13 de marzo de 2015, el Tribunal le concede libertad bajo fianza en la suma de \$200.000 (doscientos mil pesos). **A fs. 1.069 (Tomo IV)** el 12 de marzo de 2015, **ERWIN HORMAZABAL AEDO**, apela de la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1084 (Tomo V)**, en resolución del 16 de marzo de 2015, confirma la resolución apelada del 29 de diciembre de 2015, en cuanto dispuso la medida de prisión preventiva respecto de Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azocar y Erwin Fernando Hormazabal Aedo. Respecto de la resolución elevada en consulta se aprueba, en cuanto concedió libertad bajo fianza a Nelson Almendras Illesca. **A fs. 1.100 (Tomo V)**, **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA** apeló de la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1.102 (Tomo V)** **BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA**, apela de la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1.109 a 1.111 (Tomo V)**, **CESAR ADRIAZOLA AZOCAR** solicita libertad bajo fianza y apela del auto de procesamiento que lo somete a proceso. **A fs. 1.116 a 1.118 (Tomo V)**, **MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO**, solicita libertad bajo fianza. **A fs. 1.120 (Tomo V)** **JOEL ERWIN PÉREZ ISLA**, del 18 de marzo de 2015, apela de la medida cautelar de prisión preventiva. **A fs. 1.138 (Tomo V)** en resolución del 20 de marzo de 2015, se revoca la resolución del 29 de diciembre de 2014 y su complemento, y se concede la libertad provisional bajo fianza a los procesados **DOMINGO CADIZ PARADA y BERNARDO IVAN AEDO LEIVA**; además confirma la resolución del 29 de diciembre de 2014 y su complemento en cuanto dispuso la prisión preventiva a **JOEL ERWIN PEREZ ISLA**. Y se confirman las resoluciones de 17 de marzo de 2015 en cuanto a no dieron lugar a la libertad provisional de **CESAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR y MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO**, y a la subsidiaria de arresto domiciliario parcial de **ADRIAZOLA AZOCAR**. **A fs. 1.281 (Tomo V)** aprueba resolución del 10 de abril de 2015, que concede libertad provisional a los procesados **JOEL ERWIN PEREZ ISLA, MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO, ERWIN HORMAZABAL AEDO y CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR**.-

A fs. 1.796 a 1.798 (Tom VI) de 13 de diciembre de 2016, deja sin efecto auto de procesamiento de fs. 1.017 y siguientes sólo respecto de **ERWIN FERNANDO HORMAZABAL AEDO**.

A fs. 2.078 a 2.085 (Tomo VI) con fecha 16 de octubre de 2017, se sometió a proceso y a la medida cautelar de arresto domiciliario parcial a **JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ** como **COAUTOR** del delito de homicidio calificado en Marcos Quezada Yáñez, en su carácter de lesa humanidad, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989. **A fs. 2.156**

(Tomo VII) en resolución de 30 de octubre de 2017 se confirma la resolución de 16 de octubre de 2017 en cuanto somete a proceso a José Fernández Cofré con declaración.

A fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VII) del 25 de enero de 2018, modifica auto de procesamiento de fs. 1.017 y siguientes y complemento de fs. 1.103, rigiendo solamente el que dicta con fecha 25 de enero de 2018 para los procesados Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azocar, Nelson Adalberto Almendras Illesca, José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, manteniéndose vigente además el dictado de fs. 2.078 y siguientes en contra de José Dolorindo Fernández Cofré. A fs. 2.396 (Tomo VII) en resolución del 11 de junio de 2018 se confirma la resolución apelada del 06 de junio de 2018 que concede a libertad bajo fianza al procesado José Dolorindo Fernández Cofré.

A fs.2.246 (Tomo VIII), con fecha 22 de noviembre de 2019, se declaró cerrado el sumario.

A fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII) con fecha 30 de diciembre de 2019, se dictó auto acusatorio en contra de **Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Cesar Octavio Adriazola Azocar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré**, como AUTORES y a **José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva** como CÓMPLICES del delito de homicidio calificado en carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989.-

A fs. 2.763 a 2.769 (Tomo VII), la abogada **Carolina Contreras Rivera**, en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, interpuso **acusación particular** en contra de Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azocar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré como **AUTORES** y a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva como **CÓMPLICES** del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia 1° del Código Penal de la época condenándolo en definitiva e imponiendo las penas que señala, más las sanciones accesorias legales con costas.

A fs. 2.814 a 2.853 (Tomo VII), el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, por la parte querellante y demandante civil, en lo principal de su presentación formula **acusación particular** en contra de Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio

Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azocar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré como AUTORES y a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva como CÓMPLICES del delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el artículo 391 N°1, circunstancia 1° del Código Penal de la época condenándolo en definitiva e imponiendo las penas que señala, más las sanciones accesorias legales con costas. En el primer otrosí de su presentación deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco Oscar Exss Krugmann, domiciliado en calle Prat N°847, oficina 202, comuna de Temuco, solicitando tener por interpuesta la demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$ **450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)**, que se desglosan en \$**150.000.000 (ciento cincuenta millones)** para la madre, padrastro y hermano de la víctima, por concepto de daño moral, por el accionar ilícito de agentes estatales que asesinaron a su hijo y hermano, suma que deberá ser pagada con reajustes e intereses desde la fecha de notificación de esta demanda, más intereses legales; acogerla a tramitación y en definitiva condenar al demandado a pagar a los demandantes la suma señalada, con reajustes e intereses y las costas del juicio.

A fs. **3.078 a 3.098 bis (Tomo IX)**, contesta la demanda civil el **abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer**, solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas (1.Excepción de reparación satisfactiva, improcedencia de la indemnización reclamada por Nélida Yáñez, por haber sido ya reparada conforme a las leyes de reparación. 2. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima directa, respectivamente. 3. Excepción de prescripción extintiva); y negar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios **deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea** en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su forma de cómputo.

A fs. **3.287 a 3.297 (Tomo IX)**, la abogada María Graciela Carrillo, en representación de César Adriazola Azocar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré en lo principal de su escrito contesta acusación fiscal y particular.

A fs. 3.328 a 3.331 (Tomo IX), el Abogado César Villagrán Carvallo en representación de Marco Aguirre Guajardo en lo principal de su escrito contesta acusación fiscal y particular.-

A fs. 3.302 a 3.325 (Tomo IX), el Abogado Guillermo Cáceres Silva en representación de Joel Pérez Isla en lo principal opone excepción de previo y especial pronunciamiento y en el primer otrosí contesta acusación fiscal y particular.-

A fs. 3.379 a 3.388 (Tomo X), el Abogado Gaspar Calderón en representación de Bernardo Aedo, contesta acusación judicial, adhesiones y particular.

A fs. 3.402 a 3.410 (Tomo X), el Abogado Rodrigo Cortés Carrasco en representación de José Cádiz, contesta acusación judicial y particulares.-

A fs. 3.451 a 3.452 (Tomo X), con fecha 13 de diciembre de 2021, se recibió la causa a prueba.

A fs. 3.566 (Tomo X), con fecha 03 de marzo de 2022, se certificó que el término probatorio se encontraba vencido.

A fs. 3.567 (Tomo X), con fecha 03 de marzo de 2022, se trajeron los autos para efectos del artículo 499 del Código de Procedimiento Penal.

A fs. 3.568 (Tomo X), 3.601 (Tomo X), 3.603 (Tomo X), 3.617 (Tomo X), 3.640 (Tomo X), 3.698 (Tomo XI), 3702 (Tomo XI), 3.705 (Tomo XI), 3.708 (Tomo XI), se dictaron medidas para mejor resolver.

A fs. 3.729 (Tomo XI), con fecha 14 de marzo de 2023, se trajeron los autos para fallo.

II. RESUMEN EJECUTIVO:

- ACCIÓN PENAL 1° al 52 °:

1°) y 2°) En cuanto a la acción penal y elementos probatorios del proceso: Declaraciones (38) y Documentos (50); 3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal; 4°) y 5°) Calificación jurídica de los hechos; 6°) y 7°) Concepto de Lesa Humanidad; 8°) Declaración Indagatoria de José Fernández Cofré; 9°) y 10°) Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; 11°) Declaración Indagatoria de Nelson Almendras Illesca; 12°) y 13°) Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; 14°) Declaración Indagatoria de Marcos Antonio Aguirre Guajardo; 15°) y 16°) Análisis de la declaración del

acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; **17°)** Declaración Indagatoria de Joel Pérez Isla; **18°) y 19°)** Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; **20°)** Declaración Indagatoria de Cesar Adriazola Azocar; **21°) y 22°)** Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; **23°)** Declaración Indagatoria de Bernardo Aedo Leiva; **24°) y 25°)** Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; **26°)** Declaración Indagatoria de José Cádiz Parada; **27°) y 28°)** Análisis de la declaración del acusado, ponderación en relación a la prueba del proceso; **29°)** Defensa de la abogada María Carrillo representación de Cesar Adriazola Azocar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofre; **30°)** Defensa del abogado Guillermo Cáceres Silva representación de Joel Pérez Isla; **31°)** Defensa del abogado Cesar Villagrán Carvallo representación de Marcos Aguirre Guajardo; **32°)** Defensa del abogado Gaspar Calderón representación de Bernardo Aedo Leiva; **33°)** Defensa del abogado Rodrigo Cortés Carrasco representación de José Cádiz Parada; **34°) Consideraciones Previas al Análisis de la Defensa: A.** Obligación de investigar. **B.** Jurisprudencia internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos (delitos de lesa humanidad) pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán. **C.** Estado de Derecho; **D.** En cuanto a la complicidad; **E.** alevosía; **F.** reflexiones sobre los elementos probatorios; **35°)** Análisis de Defensa Específica de los acusados Cesar Adriazola Azocar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofre; **36°)** Análisis de Defensa Específica del Acusado Joel Pérez Isla; **37°)** Análisis de Defensa Específica del Acusado Marco Antonio Aguirre Guajardo; **38°)** Análisis de Defensa Específica del Acusado Bernardo Aedo Leiva; **39°)** Análisis de Defensa Específica del Acusado José Cádiz Parada; **40°)** Acusación particular de la abogada Carolina Contreras Rivera; **41°)** Acusación particular del abogado Sebastián Saavedra Cea; **42°)** Análisis de las acusaciones particulares; **43°)** Reflexiones sobre lesa humanidad; **Circunstancias Modificadorias de Responsabilidad Penal: 44°)** Atenuante de Responsabilidad Penal; **45°)** Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual; **46°)** Agravantes de Responsabilidad Penal; **47°), 48°) y 49°)** Determinación de la pena; **50°), 51°) y 52°)** Beneficios de la ley 18.216 y sus modificaciones posteriores.

- **EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL 53° al 59°:**

53°) Demanda Civil interpuesta por el abogado Sebastián Saavedra Cea en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Yáñez Bustos y Jorge Quezada Yáñez; **54°)** Contestación de la Demanda Civil por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer, en representación del

Consejo de Defensa del Estado; 55°) Análisis de la contestación de la demanda civil efectuada por el Fisco de Chile; 56°) Acreditación probatoria del daño moral; 57°) Montos; 58°) y 59°) reajustes e intereses de las sumas demandadas.

III. ACTUARIOS DE TRAMITACIÓN Y DATO TÉCNICO:

- a. Fecha de inicio de la causa: 26 de diciembre de 2011.
- b. Actuario de Tramitación Sumario: Tamara Chihuailaf Fuentealba.
- c. Actuario de Tramitación Plenario: Leslie Villalobos Retamal, Mariela Zúñiga y Francisca Rabié Figueroa.
- d. Tomos: XI
Tomo I de fs.1 a 350.
Tomo II de fs. 351 a 708.
Tomo III de fs. 709 a 1.066
Tomo IV de fs. 1.067 a 1.417
Tomo V de fs. 1.418 a 1.747
Tomo VI de fs. 1.748 a 2.096 bis.
Tomo VII de fs. 2.097 a 2.472
Tomo VIII de fs. 2.478 a 3.061.
Tomo IX de fs. 3.062 a 3.377
Tomo X de fs.3.378 a 3.657
Tomo XI de fs. 3.658 en adelante.
Cuaderno Juzgado del Crimen.-
Cuaderno de compulsas.
Cuaderno separado.
- e. Fojas: 401
- f. Considerandos: 59

IV. UBICACIÓN DE DOCTRINA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 12°), 20°), 26°), 27°), y 30°) (autores citados en esta sentencia por orden alfabético: Cristi, Renato; Cury, Enrique; Díaz Labrano, Roberto Ruiz; Fernández Neira, Karinna; García Pino, Gonzalo; Guzmán Brito, Alejandro; Haro Reyes, Dante Jaime; López Goldaracena, Óscar; Lorenzetti, Ricardo; Marshall Barberán, Pablo; Nash Rojas, Claudio; Nogueira, Humberto; Ortiz Quiroga, Luis; Rawls,

John; Ruiz-Tagle, Pablo; Taruffo, Michel; Vergara Blanco, Alejandro; Villar Borda, Luis; Vilhena Vieira, Oscar; Zaffaroni, Eugenio Raúl).

V. UBICACIÓN DE JURISPRUDENCIA:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 5°), 34°), 43°), 45°) 51°) y 55°).

VI. REFLEXIONES DE LESA HUMANIDAD:

Sobre esta materia se encuentran los siguientes considerandos: 6°), 7°), 34°), 43°), 45°) y 51°).

CONSIDERANDO:

VII. EN CUANTO A LAS TACHAS

1°) Que doña Damary Melo Melo en representación del Programa de Derechos Humanos, interpuso tachas respecto en audiencia testimonial del 14 de enero de 2022, de la testigo Elizabeth Emilia Solís Báez, respecto a la cual alega debe ser inhabilitada por afectarles las causales descritas en los numerales 7 y 8° del artículo 460 de Código de Procedimiento Penal. Argumenta que esta testigo mantiene una relación matrimonial con Joel Pérez Isla y que además tiene interés patrimonial y personal, toda vez que la apoya económica y mutuamente, siendo un aporte importante en su familia. 2°) Que, el abogado Guillermo Cáceres Silva, habiéndosele conferido traslado, escruta sean rechazadas las tachas, por cuanto la testigo asevera es un apoyo emocional no económico, toda vez que ejerce una actividad remunerada independiente de su marido. Agrega, el vínculo matrimonial no inhabilita a la testigo para prestar declaración, no existiendo una inhabilitación legal relativa al cónyuge y por ser extemporánea e infundada solicita se rechace. 3°) Que primero cabe reflexionar que debemos ponderar todos los antecedentes de una manera integral y desde esa perspectiva en relación a la causal N°8 del artículo 460 del código ya citado, invocado por doña Damary Melo debe ser acogida pues la testigo manifiesta que desde el año 1984 es cónyuge de Joel Pérez Isla, lo que le resta objetividad, por carecer de la imparcialidad necesaria para declarar al tener en el proceso interés directo o indirecto. En consecuencia se la causal del artículo 460 N°8 del Código de Procedimiento Penal, y así se dirá en lo resolutive. 4°) Que en la relación a la causal del N°7 artículo 460 del Código de Procedimiento Penal, el Tribunal habiéndose acogido la tacha por el numeral

anterior se hace innecesario pronunciarse sobre la causal del N°7 del artículo 460 del Código Penal.-

VIII. EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL

1º) Que a **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)** con fecha 30 de diciembre de 2019, se dictó auto acusatorio en contra de Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Cesar Octavio Adriazola Azócar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré como **AUTORES**, y a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva como **CÓMPLICES** del delito de homicidio calificado, **en su carácter de lesa humanidad**, en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989.-

2º) Que con el objeto de establecer en autos la existencia del ilícito penal señalado, se han reunido durante el curso de la investigación los siguientes elementos de convicción, además de los ya enunciados que se encuentran en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)** como las querellas deducidas antes individualizadas. Sin perjuicio, del análisis de la pruebas rendidas durante el plenario.

A. DECLARACIONES (38).-

Los testimonios que a continuación se detallan corresponden a una síntesis de los aspectos sustanciales y pertinentes en relación a los hechos investigados, que los testigos expresaron:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. Reinaldo Antonio Fernández Poblete. | 17 Daniel Orlando Quiroz Carrasco |
| 2. Roberto Eduardo Ruiz Aguilar | 18 Carlos Florentino Fabres Jiménez |
| 3. Erick Ramón Vásquez Órdenes | 19 José David Manríquez Toledo |
| 4. Fideromo Vásquez López | 20 Manuel Segundo Rioseco Molina |
| 5. Claudio Hernán Contreras Valencia | 21 Ervin Patricio Barría Carrasco |
| 6. Nélica Eliana Yáñez Bustos | 22 José Daniel Lagos Pulgar |
| 7. Jorge Absalón Quezada Yáñez | 23. Juan Nolberto Maldonado Pacheco. |
| 8. María Angélica Augsburguer Estay | 24 Oscar Luis Viñuela Aller |
| 9. Haydee Del Pilar Yáñez Quezada | 25 Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter |
| 10. Bernardino Segundo Ortiz Henríquez. | Berger |
| 11. Jorge Darío Pulgar Troncoso. | 26. Mauricio Avelino Andrés Catalán |
| 12 Luis Hernán Sánchez Mallet Troncoso | Devlahovich |
| 13 Mario Alfredo Palma Silva. | 27 Pedro Roberto Rey |
| 14 Hernán Segundo Briones San Martín | 28 María Abristela Yáñez Aedo |
| 15 Luis Diber Aguilera Ortiz | 29 Jaime Antonio Muñoz Candía |
| 16 Juan Francisco Flores Morales | 30 Joselin Eduardo Salazar Salazar |

31 Romeo Kolh Lazzari

32 Erwin Fernando Hormazábal Aedo

33 Johny Alex Concha Salazar

34 Jorge Omar Montoya Martínez

35 José Arturo Araneda Pulgar

36 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa

37 Roberto René Cáceres Acuña

38 Carlos Alejandro Gutiérrez Astete

A.1 REINALDO ANTONIO FERNÁNDEZ POBLETE (50 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 20 de julio de 1989, rolante de fs. 84 (Tomo I), soslaya que el 24 de junio de 1989 cumplía con el turno de guardería en el Hospital de Curacautín, el cual inició a las 20:00 horas. A eso de las 21:19 horas, llegaron tres funcionarios de Carabineros en un furgón policial, los cuales traían el cuerpo de Marcos Quezada Yáñez. El cadáver fue llevado a la morgue en una camilla, para su autopsia. Junto al cadáver traían un oficio que indicaba las vestimentas del occiso, agregado a fs. 36. Afirma, no haber vuelto a ingresar a la morgue durante el turno. A las 08:00 horas del día siguiente terminó su turno y regresó a trabajar el día lunes a las 13:00 horas. Atina, su participación fue recepcionar el cadáver y verificar que las vestimentas descritas en el oficio, correspondieran a las vestimentas del occiso. Divulga, que Carabineros le manifestó que esa persona se había suicidado en el calabozo. Recalca, que no revisó el cadáver, por cuanto no le correspondía. Estima, no haber observado lesiones, sin perjuicio de un surco parejo y ancho en el cuello, distinto al que deja una soga o lazo.

A.2 ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR (33 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 105 (Tomo I); a fs. 147 (Tomo I) y a fs. 2318 a fs. 2319 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 12 de julio de 1989 rolante de fs. 105 (Tomo I), refiere que la noche del día 23 o madrugada del 24 de junio del año 1989, desconocidos forzaron su kiosco de venta de regalos, confites y baratillos, ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique, Curacautín, por la parte posterior izquierda de la techumbre, utilizaron un elemento contundente para hacer palanca en la unión del techo con la estructura del kiosco. De lo anteriormente descrito, se percata el 24 de junio a eso de las 09:00 horas, dirigiéndose a Carabineros para efectuar la denuncia. Al llegar al lugar Carabineros, le manifestó que existían indicios inequívocos de un intento de robo. Soflama los cables de electricidad que alimentaban el kiosco se encontraban fuera del pendiente del árbol. Luego de dos horas supo cuáles eran las especies que le habían sustraídos entre ellas, prestobarbas, calcetines y cartones de cigarrillos.

El deponente concurrió nuevamente a Carabineros y le indicaron sus sospechas hacia un individuo, de lo cual sería informado una vez detenido.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco, ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de diciembre de 2017 rolante de fs. 2318 a fs. 2319 (Tomo VII), delibera que el año 1986 vivía junto a su cónyuge e hijo en Curacautín. Sin precisar fecha exacta pero como todos los días fue a su kiosco de nombre "Macarena" ubicado en O'Higgins entre las calles Calama y Serrano, percatándose que alguien había ingresado por el techo de dicho recinto y había sustraído algunas especies como cajetillas de cigarros y algunos relojes digitales. Inmediatamente fue hasta dependencias de la 5ta. Comisaria de Curacautín con la intención de cursar una denuncia por el delito de robo, donde se le informó en ese mismo momento que el autor del delito ya había sido detenido mientras cometía el ilícito. Glosa, no tuvo conocimiento del nombre de la persona, desconociendo todo tipo de antecedente, con la salvedad que era de sexo masculino. Al cabo de un mes es citado por la Fiscalía Militar de Angol quienes se apersonaron en la ciudad de Curacautín, a objeto de tomar declaración en relación al fallecimiento del autor del robo de su negocio, de la cual se había enterado hace algunos días, que mientras se encontraba detenido al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín se había ahorcado. Precisa, que en el terreno contiguo estaba la casa del dueño de la panadería "Shafír" de quien desconoce mayores antecedentes. En relación a la víctima de los hechos investigados cuya identidad es Marcos Quezada Yáñez señala que no lo conoce ni ha oído nombrar antes, pero presume se trataría de la persona que fue detenida por ingresar a robar a su negocio.

A.3 ERICK RAMÓN VÁSQUEZ ÓRDENES (23 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 121 a fs. 122 (Tomo I); a fs. 293 (Tomo I); fs. 1261 a fs. 1262 (Tomo IV); fs. 1266 (Tomo IV); fs. 1726 (Tomo V) y de fs. 2469 a fs. 2470 (Tomo VII)

En declaración judicial de fecha 25 de julio de 1989 rolante de fs. 121 a 122 (Tomo I), acota que el día 24 de junio de 1989 salieron junto al Carabinero

Contreras y Sargento Primero **José Fernández**, alrededor de las 13:30 horas, desde el retén el manzanar con dirección a Curacautín. A las 15: 45 se presentaron en la Comisaria de dicha ciudad, para posteriormente salir en comisión de Alcoholes a recorrer las calles de la ciudad. Entre los lugares que se fiscalizaron, estuvo el restaurant el Cairo, en el cual se detuvo a una persona, llegando con él a la guardia, a eso de las 16: 35 horas. Luego, en calle carrera con Iquique, se detuvo por ebriedad en la vía pública a otro individuo, que fue entregado a la guardia a las 17:55 horas. Al último detenido lo llevó con ayuda del Carabinero **Bernardo Aedo** a los calabozos. En esta dinámica, acompañó al detenido a orinar, apreciando por la ventanilla del calabozo n° 1, había otro detenido que miraba por ahí, riéndose de lo que decía el detenido ebrio. La situación descrita, duró 5 o 10 minutos aproximadamente. Al regresar a la guardia estaba el Sargento Primero **Fernández** haciendo los partes de alcoholes. A las 18:40 aproximadamente se dirigieron a la shoperia Rucahuín, volviendo alrededor de las 19:25 horas. Aproxima, al llegar a la guardia no estaba personal, evidenciando que se encontraban en el calabozo n° 1 con el detenido colgado. Estaban presentes el Sargento Primero **Fernández**, Cabo **Cádiz** y Carabinero **Aedo**, este último se quedó vigilando el calabozo. Alega, en la guardia de la Comisaria estaban los familiares del detenido, quienes no supieron de inmediato lo que había pasado. Blasona, se hizo presente el Teniente y el señor Comisario. Suma, no vio al detenido que se suicidó e ignora las razones de su detención. Apoya por comentarios de funcionarios supo que el detenido se suicidó y nadie intervino su muerte. Exclama que todos saben lo tranquilo que es el Cabo **Cádiz** y el Carabinero **Aedo**, venía recién saliendo no tenía mayor experiencia.

En declaración extrajudicial de fecha 25 de junio de 1989 **de fs. 293 (Tomo I)**, dice que el día 24 de junio integraba la comisión de alcoholes de la unidad. A las 17:50 horas aproximadamente llegaron a la guardia con un detenido por ebriedad. Luego del registro correspondiente, lo llevaron al calabozo junto al Carabinero **Aedo**, específicamente al dos porque el uno estaba ocupado con un detenido por robo. El detenido del calabozo uno miraba por la ventanilla hacia el exterior y esbozaba una sonrisa, a consecuencia de las palabras que proliferaba el detenido ebrio.

En declaración judicial de fecha 10 de abril del año 2015, rolante de fs. 1261 a 1262 (Tomo IV), ratifica declaraciones que rolan de fs. 121 a 123 y de fs. 293 a 294 de este proceso y la de fs. 103 de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. Atestigua que en Manzanar eran cinco o seis funcionarios, los cuales fueron enviados a Curacautín por ser personal de

confianza del Sargento **Fernández**, el cual integraba la comisión de Alcoholes. Apunta que la comisión empezó alrededor de las 13:30 a 14:00 horas y finalizó una vez ocurrido el hecho con el detenido que se había ahorcado en el calabozo. Lo anterior debe haber sido cercano a las 19:00 o 20:00 horas aproximadamente, del día 24 de junio de 1989. Puntualiza, el último detenido estaba bastante ebrio, por lo que para prevenir caídas o lesiones, el Carabinero **Bernardo Iván Aedo Leiva** lo acompañó hasta los calabozos, para hacer el ingreso del aprehendido allí. Esta fue la razón por la cual no siguió el protocolo habitual de ingreso de detenidos, el cual consiste en dejarlos a disposición de la guardia y ellos se encargaban del registro e ingreso a los calabozos. Siendo la única oportunidad en la cual ingresó al cuartel ese día. Depone, que vio al detenido por robo en su celda, quien se reía de las palabras que les decía el detenido por ebriedad. En ningún momento se quejó o dijo alguna cosa como para dejarlo en libertad. Se notaba tranquilo en el calabozo. Escruta que cuando llegó a la unidad junto al Carabinero **Contreras** tomaron conocimiento de la muerte del detenido; le parece haber visto el cuerpo del detenido ahorcado. No recuerda haber visto al vigilante exterior. Sugiere sin tener la convicción que el Teniente **Adriazola** estaba en el momento que el cuerpo fue descolgado de la viga. El sargento **Fernández** fue quien siguió el protocolo para la revisión del cuerpo, frente al Teniente, al Mayor **Catalán**, Juez Viñuela y el fotógrafo Pepe Rey. Todos ellos observaban interviniendo directamente sólo Fernández, es decir, tocando el cuerpo, desvistiéndolo, etc. Descarga, el procedimiento regular que se seguía en esa época para ese tipo de situaciones, es que el cuerpo del ahorcado se descuelga del vínculo y desviste, dejándose constancia de todas sus pertenencias, en el parte indicando lo que se observa y lleva el detenido. Narra, solo vio la marca en el cuello del detenido, producto del vínculo con el que se ahorcó, pese a que el cuerpo estaba desnudo, no se veían otras lesiones visibles en las manos u otra parte del cuerpo. Mientras lo revisaba **Fernández**, recuerda haber visto resto de semen y excremento en sus calzoncillos. Adosa, cuando llegó al calabozo estaba **Cádiz, Aedo y Fernández** en el cuartel, sin perjuicio que a los minutos llegó el Teniente Adriazola y el resto de la superioridad.

En diligencia de careo entre Juan Nolberto Maldonado Pacheco y Erick Vásquez Ordenes, de fecha 10 de abril del año 2015, rolante de fs. 1266 (Tomo IV), cuenta que no reconoce a la persona con quien se le carea. Niega haber detenido a José Maldonado, o tal vez fue el último detenido por ebriedad. Relata que una vez entregado el último detenido por estado de ebriedad, el Sargento **Fernández** les ordenó ir a tomar once, volviendo más tarde a la unidad. Proclama que ese día vestía de civil, por ser la vestimenta cuando se estaba en

comisión de servicio. Puntualiza que se movilizaban en el vehículo particular de Fernández. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 25 de octubre del año 2016, rolante **de fs. 1726 (Tomo V)**, propone no recordar si vio a **Joel Pérez Isla** en el cuartel el día 24 de junio de 1989, después de haberse retirado de su turno. Es poco lo que puede aportar, recuerda a **Joel Pérez Isla** como funcionario de Carabineros, quien se desempeñaba en el año en que ocurrieron estos hechos, con el grado de Cabo Segundo de la Quinta Comisaría de Curacautín. Debiendo cumplir órdenes de seguridad en dicha ciudad, la cual era chica. Espeta que Marcos Quezada Yáñez, fue un muchacho de 18 a 19 años de edad, detenido en esa época por haber entrado a robar un kiosco y si es él, parece que fue detenido por la comisión civil compuesta por el Cabo Segundo **Nelson Almendras Illesca** y el Carabinero **Erwin Hormazábal Aedo**. Recuerda que el Mayor **Catalán** era comisario de la Unidad y **Adriazola** Subcomisario de los Servicios. Mayores detalles no tiene debido al tiempo transcurrido.

En declaración judicial de fecha 25 de octubre del año 2018, rolante **de fs. 2469 a 2470 (Tomo VII)**, refiere que ha prestado declaraciones relativas a esta causa, indicando que este hecho ocurrió hace 28 años más o menos a la fecha, mientras se desempeñaba como Carabinero en la Quinta Comisaría de Curacautín. Decanta, que el día que murió Marcos Quezada, luego del almuerzo y estando en el retén de Carabineros Manzanar de Curacautín, el Sargento Primero **Fernández**, por orden del Comisario don **Mauricio Catalán**, integró una comisión de alcoholes. Saliendo del Retén en dirección a la Comisaría alrededor de las dos de la tarde en compañía del Sargento Primero **José Fernández Cofré** y el Cabo Segundo **Contreras Valencia**, todos vestidos de civil y en la camioneta particular del Sargento Primero **José Fernández**; manejada por él mismo. A eso de las 15:45 horas aproximadamente, efectuaron recorridos por las calles de Curacautín, pasando un parte de alcoholes y trasladando un detenido a la Comisaría, lo que ocurrió más o menos a las cinco de la tarde. Una vez que dejaron al detenido en la Comisaría, continuaron recorriendo la ciudad. Así las cosas a las 18:00 horas, encontraron a otro "curado" en calle Cancha Carrera, quien fue trasladado a la Comisaría. Puntualiza que el Sargento Primero **Fernández** quedó en la unidad confeccionando la documentación. Él junto al Cabo Segundo Contreras fueron a tomar once o colación, regresando más o menos a la Comisaría a las 19:45 horas, estando medio oscuro, con la finalidad de retomar el servicio. Cuando estaba en el pasillo de acceso de la Comisaría, se enteró por el vigilante exterior, a saber el Carabinero **Manríquez**, que un detenido se había ahorcado en el interior de la

Comisaría. Razón por la cual, se mantuvo en la guardia mientras los carabineros más antiguos concurrían al interior del cuartel, momentos después llegó a la Comisaría, el Comisario don **Mauricio Catalán** y el Teniente **Adriazola Azocar**, quienes constataron lo sucedido. **En ningún momento ingresó a los calabozos**, se mantuvo en la guardia. Posteriormente, don Mauricio llamó al Magistrado del Juzgado del Crimen de Curacautín, señor Viñuela y a la vez se llamó al fotógrafo, Pepe Rey, actualmente fallecido. Desde la guardia vio a la persona fallecida, cuando lo tenían en el patio de la Comisaría y se le estaba haciendo la inspección ocular. Después llegó al lugar personal del Hospital y se llevaron el cuerpo, percatándose que se trataba de una persona joven, contextura delgada, más o menos un metro setenta y cinco de estatura. Más tarde, llegaron los familiares a quienes se les había avisado. Inquire, transcurridos veinte días más o menos, fue citado a declarar a la Fiscalía Militar de Angol, enterándose que la persona había muerto por ahorcamiento. Conjetura que **Fernández**, era el jefe de patrulla el día de los hechos. Agrega, las personas detenidas ese día, no hicieron mayor problema ni opusieron resistencia. Urde, **Fernández**, se quedó en la Unidad confeccionando la documentación del último detenido y él junto a su compañero salieron a colar, una vez que entregaron todo. Explicita, la persona fallecida ya se encontraba al interior de la unidad, no siendo detenida por ellos.-

A.4 FIDEROMO VÁSQUEZ LÓPEZ (42 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 124 a 125 (Tomo I); 665 a 666 (Tomo II) y de fs. 1818 a 1820 (Tomo VI).

Declaración judicial de fecha 27 de julio del año 1989, rolante de fs. 124 a 125 (Tomo I), refiere que un día del mes pasado, en circunstancias que se desempeñaba como jefe del primer turno de servicio en la población de Curacautín tomó conocimiento del robo de una panadería y el sospechoso era **Marco Quezada Yáñez**, motivo por el cual se le encargó ubicar y detenerlo. Adosa que a las 12:30 horas, tomó conocimiento que el Cabo 2° **Pérez y Almendras**, junto a otros dos carabineros habían detenido a Quezada. El detenido se encontraba en una sala contigua a la guardia acompañado de sus aprehensores y el Teniente **Adriazola**, a quienes les hizo entrega del dinero sustraído. Luego volvió a salir y regreso alrededor de las 14:45 horas, efectuando la constancia del detenido por robo, momento en el cual el detenido estaba sentado en una banca de la guardia, y ya había confesado su participación en el robo. A las 15:15 horas hizo abandono del cuartel con dirección a su casa. El detenido continuaba sentado en la guardia. Urde, el turno del día siguiente comenzó a las 14:20 horas, tomando conocimiento que el detenido se había

ahorcado en el calabozo, desconociendo mayores antecedentes. El detenido no tenía lesiones corporales visibles ni indicios de haber sido maltratado o castigado, pero se veía afligido al parecer por problemas de índole familiar.

Declaración judicial de fecha 30 de noviembre del 2012, rolante de **fs. 665 a 666 (Tomo II)**, señala que se desempeñaba de Sargento 1° en la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín. En ese lugar estuvo hasta 1991. El deponente recuerda como parte de la dotación de la 5° Comisaría de Curacautín a Nelson **Almendras Illesca**, al Cabo 2° **Pérez Isla, Mendoza, Ferrada, Flores y Cádiz Parada**. Asevera que en la 5° Comisaría de Curacautín existía una comisión civil y el jefe era **Nelson Almendras Illesca** y un Carabinero de apellido **Rivera**. La comisión estaba directamente relacionada con el jefe de la unidad, el Comisario **Catalán Devlahovic**. Suma, estaba el Teniente **Adriazola Azocar**, quien era Subcomisario de la 5° Comisaría de Curacautín. Proclama que tenía muy buen trato con los subalternos. Soslaya que el Comisario **Catalán** era muy estricto con los Carabineros que servían en la unidad. Recuerda el caso de Marcos Quezada Yáñez, quien se habría suicidado, en uno de los calabozos de la 5° Comisaría de Curacautín. Soflame, ese día era el jefe de turno, tenía 7 u 8 personas a su cargo. Continúa, el horario de cumplimiento del turno era de 7:00 a 13:00. Así las cosas, recibieron una denuncia que daba cuenta de un robo en una panadería. Como a las 8:00 salió la comisión civil a investigar esta denuncia. Durante la mañana supo que la comisión civil, integrada por **Illesca** y **Rivera** detuvo detenido al sospechoso. Asevera, que ignora si se interrogó al detenido, porque no tuvo contacto visual ni físico. Barbulla, no recuerda que se hayan hecho comentarios relacionados con una supuesta intervención de carabineros de la 5° Comisaría de Curacautín en la muerte del detenido Quezada Yáñez. Anima, que no recuerda que se hayan efectuado apremios físicos a los detenidos en la 5° Comisaría de Curacautín, o que funcionarios hayan tenido problema con los detenidos por exceso de fuerza contra ellos. Sostiene que durante sus años de servicio, concurrió en dos o tres oportunidades, a procedimientos de levantamiento de cadáver por ahorcamiento. La posición de la cabeza era siempre hacia adelante, con el mentón hacia el pecho. El nudo del vínculo generalmente estaba hacia atrás o hacia el costado, nunca hacia adelante. El tribunal exhibe las fotografías que rolan de fojas 156 a 159, el deponente difunde que no encuentra normal la posición en que se encuentra la cabeza del cadáver, ya que a los procedimientos que fue la cabeza siempre ha estado hacia adelante y el nudo hacia atrás o al costado. No puede dar mayores opiniones respecto a esas fotografías.

Declaración judicial de fecha 21 de diciembre del año 2016, rolante de fs. 1818 (Tomo VI), ratifica declaración que rola de fs. 124 a 125 y de fs. 665 a

666. Adosa, tenían un sistema de turnos de ocho horas, desde las 07:00 hasta las 15:00 horas, y luego el siguiente turno por ocho horas, y así sucesivamente. Los ingresos y salidas del turno quedaban registradas en el libro de guardia, debiendo decir "salida del primer turno". Hace presente que sólo debe constar en el libro de guardia el nombre del jefe de turno y la cantidad de acompañantes, pero no sus nombres. Para saber los nombres de los acompañantes existía una lista o carriola aparte y se le entregaba al Suboficial de guardia, de esa forma se tenía conocimiento de los integrantes de cada turno. Comenta que tenían un libro de población en el que consignaban todo lo ocurrido en el patrullaje y lo que pasaba con el personal, distinto al libro de guardia. El Tribunal le lee y exhibe el documento de fs. 192 respecto a regreso del primer turno. El deponente indica que efectivamente esa es la constancia de la recogida a la unidad. Divulga, el retiro efectivo desde la unidad puede variar como 15 a 20 minutos desde que entregaban el turno. Distingue, los solteros salían a sus respectivas pensiones, vestidos de civil. Explaya, que había piezas en la Comisaría para alojar, eran alrededor de 10 camas al parecer. Ostenta, el registro o allanamiento de los detenidos se realizaba en la guardia, para que haya testigos, estando el Suboficial de guardia y los aprehensores quedando todo debidamente registrado. Una vez efectuado el procedimiento el detenido debe pasar inmediatamente al calabozo, no puede estar en la guardia porque se puede dar a la fuga o pasar cualquier otra cosa. Explica que él tenía 8 funcionarios en el primer turno, trabajando en parejas, para poder repartirse en toda la población. Asevera que no participó de la detención de Marcos Quezada. Inquiere, los calabozos tenían una ventana que daba al pasillo, y además, había una tarima de madera dentro de él. Comenta, la función de los estafetas era traer documentación de sus destacamentos para que el Comisario firmara o tomara conocimiento. Los estafetas se movilizaban en micro. Estos no cumplían funciones en la Comisaria. Colige que en ese tiempo había locomoción constantemente a Lonquimay. Ignora si **José Araneda Pulgar**, era parte de la dotación de la 5° Comisaria de Curacautín, pero tenía un gesto involuntario en su rostro cada vez que alguien le hablaba, porque al parecer padecía de un problema estomacal, que le provocaba el movimiento involuntario con el rostro y cuerpo. Musita, que no recuerda si existía un carro o camilla en la 5° de comisaría de Curacautín. El Tribunal lee las preguntas contenidas en la presentación de fs. 1.534 y siguientes. El deponente afirma que no le consta la hora, ya que estando libres, se van. Agrega, el Suboficial de guardia es quien deja las constancias. Anexa, que no observo nada, no lo detuvo y menos allanó al detenido.

A.5 CLAUDIO HERNAN CONTRERAS VALENCIA (25 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 126 a 127 (Tomo I); 549 a 551 (Tomo II); 1259 a 1260 (Tomo IV); 1265 (Tomo IV), 1632 a 1633 (Tomo V) y de fs. 2443 a 2444 (Tomo VII).

Declaración judicial de fecha 27 de julio del año 1989, rolante de fs. 126 a 127 (Tomo I), Inquiere que el 24 de junio pasado, alrededor de las 13:30 horas junto al Sargento **José Fernández Cofré** y el Carabinero **Erik Vásquez Ordenes**, salieron del retén de Carabineros de Manzanar con destino a la 5° Comisaria de Curacautín para dar inicio al servicio en la Comisión Civil de alcoholes. A eso de las 15:45 horas, el Sargento se presentó ante el Suboficial de guardia, **José Cádiz Parada**, para que autorice el inicio el servicio a la población de Curacautín. Como las 16:20 horas, en el negocio de alcoholes, el cairo, se detuvo a un sujeto por ebriedad, cursándose un denuncia al regente del local. El detenido fue trasladado a la 5° Comisaria de Curacautín. Puntualiza, a las 17:40 horas en calle Iquique con General Carrera, se detuvo a una persona por ebriedad, llegando a la Comisaria junto al detenido a las 17:55 horas. A las 18:40 horas, el Sargento lo autorizo junto al Carabinero **Vásquez**, para que fueran a tomarse un café. El Sargento se quedó confeccionando los partes de alcohol que se cursaron. El café lo tomaron en el local Rucahuín, regresando a la unidad a las 19:25 horas. Al regresar el Carabinero **Manríquez**, les comentó que un detenido se había ahorcado. Acto seguido, ingresó al interior del cuartel, apreciando que en el calabozo N° 1, había una persona de sexo masculino colgado de una viga sin vida. Para lograr su objetivo empleo un chaleco de lana de color azul. El Carabinero **Aedo** cuidaba del calabozo en ese momento. Posteriormente llegó el Comisario y Subcomisario quienes constataron el hecho, procediendo a descolgarlo, para trasladarlo al patio, donde se inspeccionaron las vestimentas, apreciando que había semen en su pene y fecas. Su vestimenta estaba manchada con cal de color blanco, específicamente la casaca, pierna, espalda y brazos. Terminada la revisión, lo subieron al furgón policial, trasladándolo a la morgue del hospital local. Espeta, fuera de la marca que tenía en su cuello, no vio otras lesiones corporales. Asegura que no vio al detenido antes que se ahorcara ni escucho comentarios que se le haya castigado físicamente. Supo que la identidad del detenido era Marco Quezada, y se le imputaba haber participado en un robo.

Declaración judicial de fecha 13 de abril del 2012, rolante de fs. 549 a fs. 551 (Tomo II), depone que ingresó a Carabineros de Chile en diciembre de 1984, siendo su primera destinación la 5° Comisaría de Curacautín. En ese lugar estuvo

hasta 1990 sirviendo en diferentes destacamentos de esa Comisaría. Sin embargo en la base estuvo cuatro años. En lo pertinente sostiene que el 24 de junio de 1989 se desempeñaba en el retén de Carabineros de Manzanar. El jefe del retén era el Sargento **José Fernández**, recordando a los Carabineros **Rain Gallardo**, **Erik Vásquez Órdenes** y Cabo 1° **Bruno Flores Paredes**, aunque no puede asegurar si para esa época específicamente. Urde que en Curacautín el Comisario era el Mayor **Mauricio Catalán Devlahovich** y el Subcomisario el Teniente **Adriazola**. Desconoce si algún carabinero en Curacautín pertenecía al SICAR. Señala que uno de los integrantes de la Comisión Civil era el Cabo 2° **Adalberto Almendras Illesca**, empero desconoce si en 1989 aun lo era. Respecto a los hechos materia de esta investigación manifiesta que con motivo de una orden dada por el Comisario de la época acompañó al Sargento **Fernández** a Curacautín para efectuar una fiscalización de Alcoholes. A eso de las 14:00 horas marcaron hora de salida. Luego de varias de horas de trabajo se tomaron un descanso para comer, separándose del grupo para ese efecto. Regresó a las 19:00 aproximadamente siendo informado por el vigilante de exterior, al parecer de apellido **Aedo**, que un detenido se había suicidado al interior del calabozo, colgándose para tal fin. Dichos que corroboró al llegar al calabozo, y ver al occiso pendiendo de una viga, al parecer con un chaleco alrededor de su cuello. Conjetura, estaban presentes en el lugar otros Carabineros, el Comisario y el Juez del Crimen de Curacautín, Sr. Viñuela Aller y un fotógrafo. Asegura que no vio cuando bajaron el cadáver, pero si sabe que el cuerpo fue revisado afuera del calabozo en presencia del sr. Magistrado. Ignora si los funcionarios de Carabineros que descolgaron el cuerpo lo revisaron, pues estaba a una distancia de tres metros del grupo que efectuó esta tarea, la que se verificó en un patio interior de la unidad. Decanta, no pudo apreciar lesiones en el cuerpo de la persona que se suicidó y que Vs. señala se trataría de Marcos Quezada Yáñez, a quien no conoció. Basa, no recuerda haber visto fecas o eyaculación en la ropa de la víctima. El Tribunal lee la declaración prestada a fs. 126 de autos y a fs. 106 de la causa rol 119-89 de la Fiscalía Militar de Angol, tenida a la vista. El deponente ratifica la declaración, aunque insiste que no recuerda haber visto fecas y semen en las vestimentas del occiso. En lo demás, los hechos sucedieron como se ha descrito en esa declaración que es más cercana a su ocurrencia. Respecto de Marcos Quezada Yáñez no sabe por qué motivo estaba detenido ni quiénes participaron en el procedimiento.-

Declaración judicial de fecha 10 de abril del 2015, rolante de **fs. 1259 a 1260 (Tomo IV)**, ratifica declaración prestada ante el Tribunal que rola de fs. 549 a 551. Rectifica en el sentido que el vigilante exterior era el Carabinero Manríquez.

Asegura que no conoció a Quezada Yáñez. En ese tiempo vivía en el retén de Manzanar, pues era soltero. Trabajó en Curacautín desde septiembre de 1985 hasta febrero o marzo de 1987, después de eso lo trasladaron al retén de Manzanar. Su función como comisión de alcoholes era fiscalizar los diferentes locales de alcoholes de la comuna de Curacautín. Recalca, estuvieron hasta las 18:00 horas aproximadamente de patrullaje en la población; suma, no recuerda si hubo detenidos. Pero, al llegar a la Comisaría, **Fernández** les ordenó que fueran a comer algo, para continuar con el servicio. Cuenta, fue con Vásquez a comer un completo y café a un restaurant, llamado Rapanui, luego de dos horas, regresaron al cuartel, siendo sorprendidos con el hecho que un detenido se había ahorcado. Esta situación la supieron por Manríquez. Al ingresar al cuartel, aprecio que el procedimiento se había adoptado. Difunde, cuando una persona era detenida, se ingresaba en la guardia para ser allanada, además se le revisaba la vestimenta y si tenía lesiones. Esto estaba a cargo del personal de guardia, pero en presencia de los aprehensores. Luego los detenidos son ingresados a los calabozos por el personal de guardia, no interviniendo ni cooperando en esta parte e inclusive se mantiene hasta la fecha. Atestigua, no recuerda haber ingresado más allá de la guardia de la Comisaría, tampoco que **Vásquez** o **Fernández** hayan ido al sector de los calabozos, de hecho Fernández hizo la documentación en la guardia. Especula, ese día o el siguiente, regresaron.

Diligencia de careo entre Juan Nolberto Maldonado Pacheco y Claudio Hernán Contreras Valencia, de fecha 10 de abril del año 2015, rolante de fs. 1265 (Tomo IV), sostiene que no recuerda a la persona que está a su lado, niega haber detenido a José Maldonado, con quien se le carea. Tampoco participó en el hecho que menciona Maldonado con respecto a una supuesta maniobra dentro de los calabozos con el detenido Quezada. Soflama, ese día solo quedo **Fernández** en el cuartel, ya que los autorizó para ir a comer fuera de la unidad. Se mantiene en sus dichos.

Declaración judicial de fecha 28 de septiembre del año 2016, rolante de **fs. 1632 a fs. 1633 (Tomo V),** el Tribunal lee las preguntas mencionadas en la presentación de fojas 1.534 y siguientes. El deponente señala no haber visto a Joel Pérez Isla en el cuartel el día 24 de junio de 1989 después de haberse retirado de su turno. Ese día llegó del Retén Manzanar hasta la Comisaría de Curacautín, porque el mando dispuso que debía fiscalizar alcoholes por ese día. Dirigiéndose junto al Sargento **Fernández Cofré** y el Carabinero **Vásquez Ordenes**, alrededor de las 15:00 horas aproximadamente. Puntualiza que para ese servicio vestían de civil. Aquilata que detuvieron a una persona en el sector

alto y cursaron partes de alcoholes en locales que estaban en la salida norponiente de la comuna, específicamente en el camino que va a Victoria. La persona que fue detenida fue trasladada en vehículo particular de **Fernández**, en dicho vehículo se realizaba el servicio. La razón por la cual vestían de civil, fue para dar cumplimiento a lo ordenado por el mando, y así llegar de sorpresa a los locales, y ser efectiva la fiscalización, misma razón por la que se movilizaron en la camioneta station wagon, color beige o café claro de **Fernández**. Utiliza, trabajaron de forma continua hasta las 18:00 horas, luego el jefe de Servicio, vale decir Sargento Fernández, les dio tiempo para comer, regresando como a las dos horas aproximadamente. Apunta, cuando llegaron estaba el magistrado Viñuela en la Comisaria junto al fotógrafo, a consecuencia de lo cual ignora el procedimiento que se adoptó. Desconoce si estaba **Pérez Isla** de servicio cuando llegó, pues no lo vio, sólo estuvo con el personal de guardia, es decir **Cabo Cádiz, Manríquez** y un tercero que al parecer era el Carabinero **Aedo**.

Declaración judicial de fecha 18 de octubre del 2018, rolante de fs. 2443 a 2444 (Tomo VII), ratifica las declaraciones que rolan de fs. 1.259 y siguientes y la de fs. 1.632 y siguientes. El Tribunal lee las preguntas mencionadas en la presentación de fojas 2.281 y siguientes. El deponente refiere que respecto a los horarios y recorridos que hicieron el día que murió el señor Quezada, se remitirá a las declaraciones que ha prestado y ratificado en el proceso, sin perjuicio que exista alguna variación en los horarios, como por ejemplo que el tiempo que fueron a comer completo, haya sido de una hora u hora y media, y no dos. Sobre las actividades del Sr. **Fernández** cimiento que junto al Carabinero **Vásquez** salieron desde el Retén el Manzanar hacia Curacautín, ingresando alrededor de 10 minutos a la guardia de la unidad para presentarse con el Suboficial **Cádiz**, iniciando el servicio de fiscalización de alcoholes a la población. Basa de la fiscalización resultaron dos personas detenidas, la primera de ellas fue aprehendida en el restaurant el cairo, ubicado en la salida a Victoria, siendo trasladado a la unidad. Y un sujeto que transitaba en estado de ebriedad, y para evitar que le pasara algo, lo condujeron a la unidad. Ambos detenidos son entregados a la guardia de la unidad, para que uno de los funcionarios de la guardia lo trasladará al calabozo, siendo acompañado, cree por el Cabo **Vásquez**. Delibera, de acuerdo a lo expresado por el Suboficial **Fernández**, iban a trabajar toda la noche, por ende los autorizó para ir a comer con **Vásquez**, regresando una hora y media más tarde. Aquilata, todo el servicio lo hicieron con **Fernández**, salvo cuando fueron a comer, que se quedó confeccionando la documentación en la guardia. Al regresar de comer se encontraron con el procedimiento que ha mencionado en sus declaraciones anteriores.

A.6 NELIDA ELIANA YAÑÉZ BUSTOS (40 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 144 (Tomo I) y de fs. 219 a 220 (Tomo I).

Declaración extrajudicial de fecha 19 de julio del año 1989, rolante de fs. 144 (Tomo I), apunta que es la madre de Marco Quezada Yáñez quién tenía 17 años de edad y vivían junto a su conviviente Vicente Yáñez Aedo, su hijo Jorge Quezada Yáñez y los dos menores Sergio Omar y Wilson Reiner de 11 y 10 años, respectivamente. Espeta que el 23 de junio de 1989 a las 22:30 horas, Marco salió de la casa y no regresó. A consecuencia de lo anterior, al mediodía del día siguiente salieron a buscarlo. Aproxima que a eso de las 15:00 en el centro de Curacautín, supo que fue detenido por Carabineros. Su sobrina Haydee Yáñez Quezada de 15 años concurrió a la Comisaria para preguntar si efectivamente estaba detenido, donde le manifestaron que no podía recibir visitas, pero si comida y frazadas. Por lo cual a las 19:10 horas, su sobrina nuevamente fue a la Comisaria a dejarle comida y frazadas, lo cual fue recepcionado por funcionarios de Carabineros. Detalla que a medianoche llegó Carabineros a solicitarle que fuese a la Comisaria de forma inmediata, siendo notificada en ese lugar, del deceso de su hijo y que se encontraba en la morgue para autopsia. Arguye que el 27 de junio lo trasladaron a Temuco para practicarle la autopsia en el Servicio Médico legal. Al día siguiente les entregaron el cuerpo, el cual fue velado y sepultado en Curacautín. Refiere ignorar el motivo de la detención y muerte, pero de acuerdo a lo leído en el informe del médico legal, alega fue por acción de la corriente eléctrica que Carabineros le aplicó.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto del año 1989, rolante de fs. 219 a fs. 220 (Tomo I), barbullita que su hijo era callado y reservado. El viernes 23 de junio, alrededor de las 22:30 horas, Marco Quezada Yáñez estaba vistiéndose para salir a un malón con sus amigos, comprometiéndose a volver temprano. Advierte a eso de las 04:00 horas, sintió ruido en la calle, estaba preocupada por su hijo. A la mañana siguiente verificó que su hijo no había llegado a dormir a la casa, enviando a su hijo menor a buscarlo. Este regresó al mediodía, manifestando que una persona de apellido Tapia, le contó que estaba detenido por Carabineros. Arguye que envió a su sobrina Haydee María Yáñez, a Carabineros a consultar, quienes le indicaron que estaba detenido e incomunicado, sin embargo podía recibir comida y frazadas. A raíz de lo precedente, a las 19:10 horas se le llevó lo permitido. No obstante, a medianoche llegó personal de Carabineros a notificarla que el Mayor de Carabineros necesitaba conversar con ella. Así las cosas, el Carabinero **Fernández**, en una sala contigua a la guardia,

le informaron que su hijo se ahorcó con una chomba, por lo cual había sido trasladado a la morgue. Distingue, su hijo no hubiese tomado una decisión así. Al día siguiente le solicitó a Carabineros el informe de su hijo. Cimienta que su hijo el día viernes vestía una polera corta con el cuello de franjas blancas, un blue jeans claro, chomba roja, parca azul marina, calcetas y zapatillas blancas. Descarga, no reconoce la chomba que se le exhibe, niega que haya pertenecido a su hijo, y que llevara puesta esa prenda el día viernes. Blasona, era una persona tímida que no contaba sus problemas. Vio a su hijo cuando se lo entregaron en Temuco, posterior a la autopsia. Decanta, en el hospital le informaron que el cuerpo de su hijo lo entregaron alrededor de las 20:00 horas.

A.7 JORGE ABSALÓN QUEZADA YÁÑEZ (16 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 409 a 411(Tomo II) y de fs. 425 a 426(Tomo II).

Declaración judicial de fecha extrajudicial de fecha 25 de marzo del año 2011, rolante de fs. 409 a fs. 411 (Tomo II), sostiene que en el año 1989, tenía 15 años de edad y residía en la comuna de Curacautín, junto a su madre Nélida Eliana Yáñez Bustos, su hermano Marcos de 17 años de edad y la pareja de su madre de nombre Juan Vicente Yáñez Aedo. Afirma que su hermano en esa época cursaba el tercer año de enseñanza media y militaba en el Partido por la Democracia (PPD), participando de las actividades que realizaba la juventud de dicho partido, sobre todo para ese año, ya que se acercaban las elecciones presidenciales. En cuanto a las circunstancias que rodearon la muerte de su hermano, refiere que el día 24 de junio de 1989, alrededor de las 20:00 horas fue a comprar a un negocio ubicado en calle O'Higgins, emplazado en el centro de la comuna. Continúa, el propietario del negocio le contó que Carabineros había detenido a su hermano Marcos. A consecuencia de esto, fue a comunicarle a su madre, para posteriormente ir a la 5° Comisaría de Carabineros, junto a su prima Haydee Yáñez Quezada, a preguntar lo sucedido con su hermano y ver si necesitaba algo. Soflana que una vez en la Comisaría, son atendidos por el Carabinero de guardia, quien les informó que Marcos estaba detenido por sospecha, y que se encontraba incomunicado. Ante esta situación, le dejaron una frazada para que se la entregue a Marcos y posteriormente regresa a su domicilio. Arguye, a eso de la medianoche llegó a su domicilio el Suboficial Fernández junto a dos funcionarios policiales, a informarle a su madre que al interior del calabozo Marcos se había ahorcado con su propia chomba, motivo por el cual lo trasladaron hasta la morgue. Escruta, de acuerdo a sus recuerdos, esa noche permanecieron en su domicilio, y a la mañana siguiente su padrastro fue a la morgue del hospital de Curacautín, con el objeto de ver a su hermano y averiguar cuál había sido la causa de muerte. Según supo por Juan Yáñez, a su padrastro no lo dejaron

entrar hasta el lugar donde tenían a Marcos, sin embargo por medio de un amigo que trabajaba en las calderas del hospital pudo entrar. Ahí manifestó que Marcos se encontraba completamente vestido, incluso tenía sus zapatillas y parka pero los dedos de sus dos manos estaban de color negro, aparentemente como si fuese un hematoma, además de una herida en la cabeza. Colige, el cuerpo de su hermano permaneció en la morgue del hospital por cinco días, debido a que los doctores se declararon incompetentes para realizar la autopsia del cuerpo de Marcos, siendo trasladado hasta la ciudad de Temuco, donde se estableció que su causa de muerte se debió a un Shock por acción eléctrica. Posteriormente, su cuerpo regresó a Curacautín, y pudo ser sepultado en el cementerio municipal. Expresa, la muerte de su hermano fue investigada por la Fiscalía Militar de Angol, prestando para esos efectos declaración su madre, sin tener respuesta a la fecha. Musita, en esos años la Comisaria estaba ubicada en la intersección de las calles pisagua y Prat, y de acuerdo a vecinos del lugar, presumen que el cuerpo de su hermano lo habrían sacado de la 5° Comisaria, a eso de las 18:00 horas. Evidencia, que su padrastro pudo escuchar una conversación entre el fotógrafo Pepe Rey con un Carabinero de la Comisaría, antes aludida, donde este último le manifiesta al fotógrafo, que solo le entregará a él las fotografías. Urde, que su madre se encuentra con principio de trombosis, razón por la cual está imposibilitada de viajar.

Declaración judicial de fecha 27 de septiembre del año 2011, rolante de fs. 425 a fs. 426 (Tomo II), ratifica declaración de fs. 409 a 411. Descarga que su hermano Marcos Quezada Yáñez a la época de los hechos tenía 17 años de edad y pertenecía a las juventudes del Partido por la democracia (PPD). Ese mismo año él comenzó a militar, estaba inscrito en el partido, tenía su carnet del partido. Los dos se hicieron militantes porque en la sede del partido, emplazada en calle Prat con Yungay de Curacautín, había una mesa de pin pon, por tanto, iban a jugar y comenzaron a forjar amistades. Puntualiza, que iban casi todos los días. No recuerda altercado alguno en el partido ni que Carabineros haya ido al lugar. Explaya, en esa época estaba la campaña del Sí y el No. Distingue que el partido salía a pintar, sin embargo era chico, los partidos más grandes eran los socialistas y demócrata cristiano, no obstante su familia nunca fue apegada a la política. Ignora si su hermano anteriormente fue detenido por personal de Carabineros. Espeta, el día 24 de junio del año 1989, no recuerda hora, en la tarde, fue a comprar al negocio llamado "Ciro", ubicado en calle O'Higgins, y el dueño del local llamado Hugo Tapia, le preguntó por qué habían detenido a su hermano, como a mediodía. Conversación que le contó a su madre, siendo enviado junto a su prima Haydee Yáñez a preguntar a la Comisaria. Su madre quedó en la casa. En la

Comisaría de Curacautín, el carabinero de guardia les dijo que su hermano estaba detenido por sospecha e incomunicado. Indica, ese día, como a las 23:30 horas llegó el Carabinero Fernández, quien era vecino y le avisó a su mamá que Marcos se había ahorcado en el calabozo con una chomba. Su mamá lloraba, así que su padrastro habló con el Carabinero, quien le dijo que Marcos estaba en la morgue de Curacautín. Al día siguiente su padrastro fue a la morgue de Curacautín a ver el cuerpo. Él posteriormente le contó que una persona que trabajaba en las calderas del Hospital, de nombre Hernán Briones, lo dejó acceder a la morgue, para ver a Marcos, expresando que se encontraba completamente vestido, con todos los dedos de las manos quemados y un golpe en la cabeza. Precisa, cuando entregaron el cuerpo, el ataúd estaba cerrado, apreciando exclusivamente la cara. Glosa, sobre las indagaciones realizadas por su padrastro, las ratifica, ya que vecinos de donde está la Comisaría de Carabineros contaron que el día de los hechos, cuando se estaba oscureciendo, vieron movimientos inusuales de Carabineros. Llegaban más funcionarios los cuales corrían de adentro hacia fuera. Suma, que el caso de su hermano aparece en los registros del Informe Rettig.

A.8 MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY (41 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 146(Tomo I), 272 a 273 (Tomo I); 568 a 569 (Tomo II) y de fs. 1748 a 1749 (Tomo VI).

Declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 1989, a fs. 146 (Tomo I), cuenta que es propietaria de una panadería y negocio ubicado en calle Gregorio Urrutia N° 240 de Curacautín. Blasona el 02 de junio tomó de prueba a Marco Quezada Yáñez para hacer el aseo, sin embargo no era apto para trabajo, siendo despedido el día 10 del mismo mes. Lo anterior sumado a que, en algunas oportunidades sustrajo pequeñas cantidades de dinero al resto del personal del local, lo cual no se denunció para evitar trámites judiciales. El sábado 24 de junio pasado se percató que desconocidos ingresaron a su local, forzando la puerta ubicada en el pasillo que da a la panadería sustrayendo la suma de \$9.000 y un cuchillo carnicero. En virtud a lo precedente fue a la Comisaria de Carabineros para dar cuenta de los hechos, manifestando que sospechaba de Marcos Quezada Yáñez, principalmente porque la persona que robó, conocía el lugar. Conjetura, a las 13:30 horas Carabinero le comunicó que la persona antes mencionada, había confesado su autoría, reconociendo el cuchillo que le habían sustraído y el formón que utilizó para forzar la puerta. Justifica que el 25 de junio se enteró que Marcos Quezada Yáñez se había ahorcado en la Comisaria. Suma concurrió al Tribunal a reconocer el cuchillo y rollos de monedas sustraído.

Declaración judicial de fecha 21 de septiembre de 1989 de fs. 272 a fs. 273 (Tomo I), aquilata no recordar la fecha exacta, pero hace dos o tres meses aproximadamente ingresaron a robar a la panadería, efectuando una denuncia en la Comisaría de Carabineros de Curacautín. Depone que su marido se percató de la situación como las siete de la mañana. Las especies sustraídas fueron un cuchillo y diez mil pesos en dinero efectivo, entre billetes y monedas. Urde que no firmó nada en Carabineros, pero fueron a constatar el hecho al lugar. En ese momento informó que sospechaba de Marcos Quezada Yáñez, quien había trabajado unos días haciendo aseo en la panadería. Esgrime que los funcionarios de Carabineros le evidenciaron que el niño tenía malos antecedentes, inclusive cumplía condena y que de ser así lo detendrían y reconocería su autoría, como en ocasiones anteriores. Colige que a eso de las 14:00 en la Comisaría conversó con el Carabinero Pérez, quien le contó que el niño estaba detenido y portaba el cuchillo, el dinero sustraído y el formón. Señala no haber visto al detenido, ya que no es posible ver desde el exterior hacia el interior del furgón. Apoya que al día siguiente el panadero que trabaja en el local y arrienda una habitación a la mamá de Quezada, le manifestó que este se habría suicidado en la Comisaría.

Declaración extrajudicial de fecha 27 de junio de 2014 de fs. 568 a fs. 569 (Tomo II), escruta que llegó a vivir en el año 1972 a la comuna de Curacautín junto a su marido, a saber Julio Peigna Maillanca específicamente al domicilio ubicado en calle Sargento Aldea N° 565. A fines del año 1987 se asoció con un matrimonio para reabrir una panadería, la cual estaba ubicada en la calle Gregorio Urrutia con el nombre "Panadería Suiza". Anexa que a principios del año 1989, con la necesidad de tomar a una persona que hiciera aseo en la fábrica de la panadería, ubicada en el mismo local, se presentó un joven de dieciséis años aproximadamente de nombre Marcos Quezada, a quien no conocía. Pero lo contrató para que hiciera aseo durante el día. Este muchacho trabajo varias semanas, pero después tuvo que prescindir de sus servicios, ya que había días en los cuales no llegaba a trabajar. **Durante el periodo que estuvo pudieron conversar, y él le manifestó que no estaba conforme con la oposición, en algunas ocasiones participaba en las marchas que se hacían en el pueblo.** Glosa que el 24 de junio del año 1989 llegó junto a su marido cerca de las 07:30 horas a la panadería con la finalidad de abrir el local, siendo avisados al llegar por Patricia Erices, dependiente del local que la puerta del costado se encontraba abierta apreciando que faltaba un cuchillo carnicero y monedas de cien y cincuenta pesos, que se dejaban en rollitos de papel en una caja de madera con llave, los cuales eran destinados para los vueltos de las ventas del otro día, no recordando

la cantidad que sumaba ese dinero, pero sí que se acostumbraba dejar sólo monedas, ya que los billetes eran llevados al domicilio por seguridad y también para ser depositados en el Banco. Posteriormente junto a su marido fueron a la Comisaría de Carabineros de Curacautín con el propósito de cursar la denuncia, sin manifestar que tenía sospechas en alguna persona, no recuerda si firmó algún documento. Continúa que ese mismo día o al parecer el domingo, llegó personal de Carabineros a la Panadería, siendo informada de que habían encontrado y detenido al autor del robo y que se trataba de Marcos Quezada Yáñez, quien había confesado el delito, agregando además los Carabineros que el cuchillo lo habían encontrado en unos matorrales de una calle, parece que fuera calle Chorrillos, cerca del estero Manzanoco, para luego éstos funcionarios retirarse del local. Sostiene que en horas de la noche de ese mismo día, se enteró por comentarios de la gente que Marcos Quezada se había suicidado al interior de la Comisaría de Carabineros, ignorando mayores detalles de este hecho. Inquire, a los días de la muerte de Marcos Quezada, fue a declarar a la Fiscalía Militar de Angol, lugar donde fue entrevistada por un Oficial de Ejército, quien a medida que iba relatando los hechos y respondiendo a sus preguntas, escribía la declaración en una máquina de escribir, en un momento este funcionario se ausentó por varios minutos, para luego continuar, el cual una vez finalizado, solamente le hizo firmar el documento, sin haberlo leído antes de firmarlo. Con respecto al punto anterior, afirma que nunca manifestó tener sospechas de Marcos Quezada Yáñez, como tampoco tener antecedentes que éste joven haya robado anteriormente a algún empleado de la Panadería, información que no es verídica. Por otra parte, no se acostumbraba a dejar en la Panadería dinero en billetes, situación que le parece raro, ya que según la declaración que se le lee en este acto y que brindó en esa época a la Fiscalía Militar, aparece una suma de dinero en billetes que no corresponde y que no cierto, ya que como señaló anteriormente no se dejaba dinero en billetes en el local. Destaca, que **Marcos Quezada Yáñez, era un joven alegre y bueno para las travesuras**, pero jamás observó en él una actitud de malas intenciones, suma que mientras trabajo en la panadería, nunca se perdió dinero como tampoco especies, de hecho él no tenía acceso al local, sino que a la fábrica.-

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada ni decir que sospechaba de él. Posterior a la denuncia llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos, porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se

retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja, envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) es ratificado, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Ni recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería nombra a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

A.9 HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA (15 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 145(Tomo I), 221 a 222 (Tomo I); 570 a 571 (Tomo II) y de fs. 652 (Tomo II).

Declaración extrajudicial de fecha 19 de julio de 1989, a fs. 145 (Tomo I), advierte que vive frente a la casa de su tía Nélide, recuerda que el sábado 24 de junio de 1989 su primo Marcos fue detenido por Carabineros e ignora los motivos. Ese día a eso de las 16:30 horas, su tía la envió a la Comisaría para saber si efectivamente esto era verídico. En la Comisaría le informan que es efectivo, sin embargo no era posible verlo, pero si quería podía llevarle comida y frazadas. A las 19:15 horas, concurrió nuevamente a la Comisaria a dejarle comida, café y frazadas a Marcos, momento en el cual se quedó sentada esperando que Marcos se lo sirviera para llevar de regresó los recipientes de la comida, pero un funcionario de Carabineros, le dijo que se fuera y luego retirará las cosas. Esa noche estuvo hasta las 23:00 horas aproximadamente en casa de su tía, ya que había una comida especial, por el santo del conviviente, a saber Juan Yáñez. Aquilata, a las 01:30 horas la despiertan, para avisarle que su primo Marcos se había suicidado en la Comisaria.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélide Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez,

fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Soflama, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 652 (Tomo II), ratifica las declaraciones que rolan a fs. 145, 221 a 222, y a fs. 570 a 571. Soflama que a la época tenía 15 años de edad, no recuerda mucho de la vida de Marcos, era una persona reservada. Atestigua que en esos años vivía con sus abuelos en Curacautín, frente a la casa de Marcos Quezada. Afirma que él no tenía problemas psicológicos ni psiquiátricos.

A.10 BERNARDINO SEGUNDO ORTÍZ HENRÍQUEZ (22 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 25 de julio de 2012, rolante de fs. 578 a fs. 579 (Tomo II), en lo pertinente esgrime que el 24 de junio de 1989, se encontraba de primer turno en la población, parece con un Cabo de apellido Pérez y Bascuñan, entre otros. Así las cosas tomaron conocimiento de la detención de una persona por el delito de robo, que fue trasladada a la Comisaría. Sin embargo, no recuerda el nombre de los Carabineros ni detenidos que participaron en el procedimiento. Ensaya, a las 15:00 horas entregó su turno, y se fue a la localidad de Melefquén, cerca de Panguipulli, donde viven sus padres. Al día siguiente, a las 13:00 horas aproximadamente regresó a la Comisaría de Curacautín. En ese lugar se enteró que el detenido del día anterior se había suicidado al interior de los calabozos, colgándose de una viga para tal efecto. Hace presente que a esta persona no la conoció y que según se le ha dado a conocer por Usía., se llamaba Marcos Quezada Yáñez. Anima, fue el Carabinero

Bernardo Aedo quien lo encontró colgado en el calabozo mientras efectuaba la ronda de rigor en ese sector. Ignora si había algún carabinero en Curacautín que perteneciera al SICAR. Adosa, no presenció el momento que bajaron el cadáver, inclusive recuerda que el Magistrado de la época fue hasta la Comisaría a verificar la muerte de esta persona. De igual forma, no sabe que funcionarios de Carabineros descolgaron o revisaron el cuerpo.

A.11 JORGE DARÍO PULGAR TRONCOSO (30 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 26 de julio de 2012, rolante de fs. 586 a fs. 587 (Tomo II), en lo pertinente sustenta que para el 24 de junio de 1989, se encontraba en Curacautín, sin embargo no recuerda si estaba de servicio. Consultado por la muerte de Marcos Quezada Yáñez, quien se suicidó por ahorcamiento al interior de un calabozo de la unidad. Al parecer, recibió la guardia al día siguiente de lo ocurrido. Sin embargo, no vio el cadáver. Colige, los calabozos en aquel tiempo estaban en el patio afuera de la unidad, eran construcciones de madera muy antiguas. Recuerda a dos Carabineros que trabajaban en Dipolcar, los Sargentos Aravena y Mancilla. Ellos tenían una oficina fuera de la unidad ubicada en el ex edificio de la Gobernación y dependían de la Prefectura. Desconoce que funcionarios descolgaron o revisaron el cuerpo. Comenta, ese día en la unidad debió haber estado el Cabo 2° Cádiz, de Suboficial de guardia y alguno de los choferes, que según recuerda eran los Cabo 2° José Luis Erices Rodríguez, José Eduardo Mendoza Delgado y Jaime Antonio Muñoz Candía. El Tribunal le exhibe la fotografía de fs. 39 de la causa rol 119 -89 de la Fiscalía Militar de Malleco. El deponente señala le llama atención la forma en que aparece colgada la persona retratada en la fotografía que se le exhibe porque según su experiencia, el nudo va detrás del cuello.-

A.12 LUIS HERNÁN SANCHEZ MALLET TRONCOSO (26 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 30 de agosto de 2012, rolante de fs. 597 a fs. 598 (Tomo II), urde que ingresó a Carabineros de Chile el 1 de marzo de 1984, siendo dotación de la 5° Comisaría de Curacautín hasta el año 1996. Sostiene que el 24 de junio de 1989 se encontraba trabajando en la Tenencia fronteriza de Liucura, dependiente de la 5° Comisaría de Curacautín. Específicamente en el paso fronterizo Pino Hachado. Desde el 1° de octubre de 1987 a 1992, se desempeñó en ese paso fronterizo. Estimula que acerca de los hechos que se investigan, solo supo de oídas que una persona joven de sexo masculino se habría suicidado al interior de un calabozo de la 5° Comisaría de Curacautín. Aquilata, los calabozos estaban en el patio posterior de la unidad, los operativos eran dos. Especula, eran de cemento, pero no recuerda si el techo era

de madera o adobe. Reitera que la construcción era muy antigua. El Tribunal le exhibe la fotografía de fs. 39 de la causa rol 119 -89 de la Fiscalía Militar de Malleco. El deponente señala llamarle la atención, la forma en que aparece colgada la persona retratada en la fotografía, porque generalmente en los procedimientos de suicidio por ahorcamiento a los que concurrió, los suicidas presentaban el mentón o la cabeza hacia adelante y al extraer el vínculo, que puede ser la soga, corbata o lo que sea, presentaban una herida tipo surco en el cuello. Apunta, como Comisario en el año 1989, al Mayor de Carabineros Mauricio Catalán Devlahovic, a los Suboficiales Mayores Araneda, Urrutia y Fernández; y Carabineros de apellido Barrientos, Fritz, entre otros. Especula, Fritz trabajaba en el retén Malalcahuello que es dependiente de la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín, pero no está seguro.

A.13 MARIO ALFREDO PALMA SILVA (40 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 13 de septiembre de 2012, rolante de fs. 615 (Tomo II), sostiene que Ingresó a Carabineros de Chile el 16 de octubre de 1972. Fue destinado a la 5° Comisaría de Curacautín en 1975, sirviendo en diferentes destacamentos de esa unidad hasta 1989. Inquire, que si bien estaba en la base de Curacautín, cuando ocurrieron los hechos materia de la investigación, no estaba de servicio ese día, por cuanto se enteró por comentarios. El funcionario de guardia que estuvo ese día era el Cabo Cádiz. Prefiere que las primeras indagatorias las tomo el Teniente Adriazola, quien era el Subcomisario de los servicios, correspondiéndole efectuar la labor de toma de actas en un par de actuaciones, no obstante no recuerda a quienes tuvo que tomarle declaraciones. Después la causa pasó a la Fiscalía. Estimula, durante su carrera funcionario le correspondió ver cadáveres de personas que se suicidaron por ahorcamiento. Específicamente un detenido que se ahorcó en Victoria utilizando su camiseta para esos efectos.

A.14 HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN (58 años a la fecha de los hechos). En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que conoció a Marcos Quezada Yáñez quien era un joven tranquilo, vivía con sus padres y hermanos frente a su casa. Anima en el año 1989 trabajaba como operador de las calderas en el Hospital de Curacautín y estaba casado con Cristina Barrientos Leiva. Evidencia, recuerda con exactitud la muerte de Marcos Quezada Yáñez, ocurrida en las vísperas de la noche de San Juan. Supo por comentarios que Marcos se había ahorcado en el calabozo de la Comisaria de Carabineros de Curacautín, después de haber sido detenido supuestamente por el delito de robo a una panadería de

nombre "Suazo" ubicada en la calle Gregorio Urrutia, desconociendo mayores detalles al respecto. Descarta rotundamente el haber ayudado al Juan Yáñez Aedo, padrastro de Marcos, a ingresar a la morgue, toda vez que había un funcionario a cargo de esa unidad, la cual se manejaba con llaves. Explicita que el traslado y permanencia del cuerpo de Marcos a la Morgue, se mantuvo en secreto por parte de los Carabineros, no teniendo la posibilidad de verlo, debiendo agregar que el cuerpo estuvo alrededor de tres días para luego ser trasladado a Temuco, donde finalmente se le efectuó la autopsia. Dice que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

A.15 LUIS DIBER AGUILERA ORTIZ (26 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 28 de noviembre de 2012, rolante de fs. 647 a fs. 648(Tomo II), descarga que en Junio del año 1989 se desempeñaba en la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín con el grado de Cabo 2°. En esa Comisaría estuvo alrededor de 5 años. Nombra como parte de la dotación de la Comisaría a Cádiz Parada, Sargento Palma, Jiménez, el Mayor Mauricio Catalán y el Capitán Sotelo. También recuerda al Teniente Adriazola Azocar, quien tenía buen trato con el personal y los detenidos, el Capitán Mauricio Catalán siempre retaba al Teniente Adriazola por tener ese buen trato. El Cabo Palma como era de la Comisión Civil en aquel tiempo. Arguye, el día 24 de junio de 1989 se encontraba de guardia **José Cádiz Parada**. Ese día él estaba de franco. Tomó conocimiento de la muerte por ahorcamiento del detenido Marcos Quezada Yáñez, al día siguiente de sucedido los hechos, no recuerda haber oído comentarios que responsabilizaran a Carabineros. Afirma que no conoció a la persona. En su experiencia policial ha tomado el procedimiento de 10 cadáveres por ahorcamiento. En la mayoría de los casos, la posición de la cabeza de las personas ahorcadas es hacia adelante o hacia el lado. Nunca vio ahorcados con la cabeza hacia atrás. En relación con el nudo del vínculo, éste siempre ha estado hacia atrás.

A.16 JUAN FRANCISCO FLORES MORALES (40 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 28 de noviembre de 2012, rolante de fs. 649(Tomo II), aquilata que en el año 1989 servía en la Tenencia Liucura, dependiente de la 5° Comisaría de Curacautín. En Liucura estuvo desde el año

1987 hasta el año 1990 aproximadamente. Cuenta, que se enteró por comentarios de Carabineros que iban regularmente a la Comisaría de la localidad, de la muerte de Marcos Quezada Yáñez. La situación le interesó, porque el Suboficial de guardia Cádiz Parada fue su Subalterno. Este carabinero era muy tranquilo, muy preocupado de las labores policiales. Nunca supo de comentarios que relacionaran la intervención de Carabineros en la muerte de Marcos Quezada Yáñez. Asevera, que le correspondió asistir a 3 procedimientos por suicidios por ahorcamiento, y siempre la posición de la cabeza era con el mentón hacia adelante y el nudo del vínculo estaba hacia atrás o lado.

A.17 DANIEL ORLANDO QUIROZ CARRASCO (52 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 28 de noviembre de 2012, rolante de fs. 650 a fs. 651 (Tomo II), refiere que en junio del año 1989, servía como Suboficial en la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín, específicamente como práctico en primeros auxilios del servicio médico. No efectuaba turnos. Le correspondía atender a los carabineros y sus familiares. Puntualiza que trabajaba junto al doctor de apellido Chahín. Su horario de trabajo era de 8:00 a 19:00 horas. Detalla que las dependencias del servicio médico estaban en el mismo edificio de la Comisaría, pero tenía una entrada independiente. Sin embargo, en la parte posterior había una puerta que conectaba a la Comisaría. Asegura que no tenían mayor relación con el personal de la unidad. Urde, no le correspondía atender detenidos. Si estos tenían problemas de salud, se debían trasladar al hospital para que les extendieran un certificado de salud. Conjetura, recuerda el de Marcos Quezada Yáñez, ya que el doctor Chahín le mostró una copia del informe de autopsia donde se concluía que la causa de la muerte del detenido se refería shock por acción eléctrica, y según el informe, el cadáver tenía marcas de acción eléctrica en el abdomen. Todo esto le causó extrañeza, pero creía la versión de Carabineros que se refería al ahorcamiento de esta persona. De la nómina de personas que se le da a conocer, y que habrían estado de turno al momento del ahorcamiento de Marcos Quezada Yáñez, entre los que figuran José Fernández Cofré, José Cádiz Parada, Bernardo Aedo Leiva, José Manríquez Toledo, Erick Vásquez órdenes y Claudio Contreras Valencia, puede decir que los recuerda a todos. Eran carabineros jóvenes. Respecto de José Fernández Cofré, manifiesta que al parecer, ese Carabinero no hacía servicio en la Comisaría de Curacautín, sino que en otro retén perteneciente a la unidad, cree que en el Retén Manzanar. Alega, no recuerda que se haya apremiado físicamente a los detenidos en la 5° Comisaría de Curacautín, o que haya habido problemas con algún Carabinero por exceso de fuerza con un detenido.

A.18 CARLOS FLORENTINO FABRES JIMÉNEZ (39 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 29 de noviembre de 2012, rolante de fs. 655 a fs. 656(Tomo II), basa que en junio del año 1989, servía en la Subcomisaria Frontera Lonquimay, ostentaba el grado de Carabinero. Esta unidad era dependiente de la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín. Respecto del caso de Marcos Quezada Yáñez, quien según se le informa habría estado detenido en la 5° Comisaría de Curacautín y habría fallecido en ese lugar producto de un suicidio por ahorcamiento, no sabe nada al respecto. Es primera vez que escucha de este caso. Blasona, recuerda al Teniente Adriazola, como parte de la dotación de Carabineros de Curacautín. Este oficial tenía muy buen trato con los detenidos y con el personal. Divulga, cuando convocaban a reuniones en la Unidad de Curacautín, siempre veía a Joel Pérez Isla, Carlos Ponce Salvo, Claudio Contreras Valencia y Nelson Almendras Illesca, de civil. Asegura que este último era el jefe de esa comisión. El Comisario Catalán mantenía una relación cercana con Almendras Illescas, hacían reuniones en su oficina. Aduce, cuando es destinado a Curacautín, en el año 1991, todavía trabajaba Almendras Illescas en la unidad, y se caracterizaba por ser una persona prepotente, incluso con los mismos Carabineros de la unidad. Esta persona tenía la venia del Comisario Catalán para realizar sus actividades. Sofloma, que Nelson Almendras Illescas, les hizo una charla sobre "clandestinidad" y enseñaba a tomar procedimientos. Él siempre se sentía muy orgulloso de lo que hacía y miraba en menos la labor de los otros Carabineros. No recuerda al Carabinero David Manríquez Toledo. El nombre Erwin Hormazábal Aedo, lo recuerda como parte de la dotación de Curacautín. Recalca, que no vio ningún tipo de agresión a detenidos mientras estuvo en Curacautín. Tampoco escucho comentarios que se hayan efectuado sobre algún Carabinero que se sobrepasara con los detenidos.

A.19 JOSÉ DAVID MANRIQUEZ TOLEDO (24 años a la fecha de los hechos). Declara a fs. 119 a 120 (Tomo I); 135 (Tomo I); 657 a 658 (Tomo II); 1719 (Tomo V) y de fs. 2589 a 2590 (Tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 25 de julio de 1989, rolante de fs. 119 a fs. 120 (Tomo I), blasona que el 24 de junio de 1989 se encontraba de servicio de guardia en la Comisaria de Carabineros de Curacautín, y alrededor de las 13:00 horas llegó la pareja de carabineros del primer turno, siendo el más antiguo el Cabo Pérez, con Marcos Quezada detenido a quien ya ubicaba por haber sido anteriormente aprehendido por hurto. Terminado su servicio de vigilancia exterior, ingresó nuevamente al cuartel, apreciando que el detenido se encontraba en su calabozo. Recalca que durante la tarde inspeccionó los calabozos, no habiendo

novedades. Sostiene que el único contacto que tenían, era cuando se le preguntaba si estaba bien. Detalla, la última ronda la efectuó un poco de las 18:00 horas, porque a esa hora, retomaba su función de vigilante exterior. Barbullá, el detenido le solicitó si podía llevarlo al baño, situación a la cual accedió, relata que se veía bien físicamente, pero anímicamente decaído. Distingue, después de las 19:30 horas, supo que el detenido se había ahorcado en el calabozo, ignorando que ocurrió al interior, ya que no se le permitía entrar mientras cumplía su función como vigilante exterior. Evidencia que llegó el fotógrafo y el juez del crimen de la comuna. Sugiere, desde el exterior no se escuchó ni un lamento o grito. Cuenta, en la tarde fueron dos personas a preguntar por el detenido, una de ellas era su prima, y luego regresaron con comida y un chal cree. Ostenta, no haber oído comentarios en el sentido que el detenido haya sido maltratado. Musita, durante la tarde llegaron dos detenidos por ebriedad, los que estaban en el calabozo del lado, que se encontraba Quezada. Afirma que no le hizo nada al detenido, ni participó de su allanamiento, con la salvedad que lo acompañó al baño, dando fé que en ese momento no tenía lesiones visibles en su cuerpo.

En declaración extrajudicial de fecha 20 de julio de 1989, rolante de fs. 135 (Tomo I), sugiere que hace más de dos años es funcionario de Carabineros, y hace un año y medio más o menos se desempeña en la Comisaria de Curacautín. Atina, que el 24 de junio pasado, estaba de guardia, y en horas de la mañana una señora fue a cursar una denuncia por un robo a su negocio, ocurrido durante la noche. En esa dinámica, a las 12:45 comenzó su servicio de vigilante exterior, viendo llegar a unos colegas con el detenido Marcos Quezada Yáñez, quien ingresó a la guardia y luego a una sala ubicada frente a esta, al parecer el sujeto había reconocido su autoría. Señala que no recuerda la hora en que es ingresado al calabozo, pero fue en la tarde cuando efectuaba las rondas en los calabozos por dos horas, con una frecuencia de 15 minutos aproximadamente, Quezada Yáñez le pidió que lo llevará al baño a orinar, regresándolo a su calabozo, constatando que físicamente estaba bien, pero decaído de ánimo. A las 18:00 horas nuevamente se fue a cumplir el servicio de guardia exterior, ocupando su puesto el Carabinero Bernardo Aedo Leiva, quien encontró al detenido Quezada Yáñez ahorcado y dio cuenta de ello al Suboficial de guardia, Cabo José Cádiz Parada. Ignora mayores antecedentes.

En declaración judicial de fecha 29 de noviembre de 2012, rolante de fs. 657 a fs. 658 (Tomo II), ratifica las declaraciones que rolan de fojas 119 a 120, 135 y 292 a 293. Anexa, las rondas consistían en mirar a los detenidos por la mirilla del calabozo. Suma, el único contacto físico que tuvo con el detenido fue

cuando lo sacó a orinar. En ese momento el detenido no presentaba lesiones visibles, ni signos de ebriedad. Sólo presentaba un estado anímico bajo. Precisa, habían dos detenidos que estaban en el calabozo de al lado. En su labor como Carabinero, concurrió a un procedimiento en que una niña se había ahorcado. Recuerda que en esa oportunidad la cabeza estaba hacia el costado. Fue el único caso de suicidio por ahorcamiento que vio. El Tribunal le exhibe la fotografía que rola de fojas 159, el deponente manifiesta que no ve nada extraño en la fotografía que se le muestra, ni la posición de la cabeza del cadáver, ni la posición del vínculo. Refiere no haber escuchado comentarios que se relacionaran con una posible intervención de Carabineros de la 5° Comisaría de Curacautín, en la muerte del detenido Marcos Quezada Yáñez. No supo si algún Carabineros fuera conocido por tratar mal a los detenidos.

En declaración judicial de fecha 14 de octubre del 2016, rolante de fs. 1719 (Tomo V), arguye que en junio de 1989, se encontraba destinado y prestando servicios en la 5° Comisaría de Carabineros Curacautín. En ese entonces ostentaba el grado de Carabinero, con dos años de servicio en la Institución. Asegura que en ese tiempo las guardias eran de 24 horas, por tanto no se puede hablar de turnos. El mencionado día estuvo de turno de guardia de 24 horas. Ahora bien, respecto al Sr. Pérez Isla, dice que su nombre le suena, era un funcionario de Carabineros, pero no recuerdo haberlo visto ese día al terminar su turno. El servicio de guardia terminaba a las 08:00 horas. Aquilata, que el 25 de junio de 1989, a las 08:00, es decir al término de la guardia realizada, había mucha actividad en el cuartel inclusive estaba presente el Sr. Prefecto de Malleco, a raíz de los hechos acontecidos al interior de un calabozo de la unidad. Todo esto hacía más difícil el poder ver las actividades de otros colegas. Agregar a lo anterior, que al terminar una guardia, el funcionario solo desea ir a descansar.

En declaración judicial de fecha 11 de abril del 2019, rolante de fs. 2589 a fs.2590 (Tomo VIII), ratifica las declaraciones que rolan de fs. 119 a 120, 135, fs. 292 a fs. 293, fs. 657 a fs. 658 y de fs. 1.719. El tribunal le consulta cómo supo que Quezada Yáñez reconoció su participación en los hechos que se le imputaban. El deponente sostiene que cuando estaba de vigilante se rumoreaba que Quezada había asumido su responsabilidad. Cuenta que hacía dos funciones, de cuartelero que estaba preocupado de entregar armamento, que el cuartel estuviera en orden, pasar por los calabozos para saber el estado de los detenidos, si los había; y como vigilante exterior encargados de dar seguridad al cuartel. Para esos efectos se turnaba con Aedo Leiva. En relación a los hechos que se le han expuestos y constan a fs. 2.300 y siguientes, afirma que se ingresó un

detenido, pero ignora quien lo interrogó o si fue objeto de apremios, ya que no estuvo presente en su ingreso. Justifica, que asumió sus valores de vigilante exterior a las 18:00 horas hasta las 20:00 h. Detalla, efectivamente llevó al detenido a orinar, pero antes de las 18:00 horas. Escruta, el estado de los calabozos de Curacautín era malo, de adobe, húmedo, con viga a la vista y parece que el piso era de cemento. No había luz en esas dependencias. Haciendo una comparación podría decir que eran como una cueva, húmedos, helado tétrico en invierno. Además, estaban ubicados en el patio de la unidad, no como ahora que están en dependencias internas de las unidades. Glosa, los dormitorios de los solteros estaban al lado de los calabozos, es decir, había que pasar por fuera de ellos para acceder a los dormitorios, estaban separados por unos 3 metros aproximadamente pero en una misma línea. En cuanto a las dimensiones de los calabozos, éstos tenían aproximadamente dos metros de altura. Aduce, cuando estaba de vigilante exterior, el Carabinero Aedo, le pidió la linterna y le manifiesta que al parecer el detenido se había ahorcado. En ese momento supo de lo sucedido. Luego acompañó a Bernardo Aedo para pasarle la linterna y en ese momento vio a Quezada, comunicándole de inmediato al Suboficial de guardia. Apoya, que Araneda Pulgar era funcionario de la unidad, y tenía un movimiento involuntario en su cuerpo y según recuerda siempre tuvo ese movimiento, desde que lo conoció. Sobre la comisión de alcoholes compuesta por **Fernández Cofré**, ellos tenían un trabajo libre, es decir, iban y venían de las cantinas a la unidad fiscalizando. Ellos trabajaban de civil, no usaban uniforme. No recuerda si utilizaban vehículos, porque siempre los vio a pies.

A.20 MANUEL SEGUNDO RIOSECO MOLINA (28 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 30 de noviembre de 2012, rolante de fs. 663 a fs. 664(Tomo II), arguye, que en junio del año 1989, servía como cabo 2° en la Tenencia de Liucura, que dependía de la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín. Recuerda como parte de la dotación de Liucura al Oficial Enrique Hevia, Sargento 1° Juan Flores Morales, Sargento Carlos Ferrada, Cabo 1° Carlos Medina Inostroza, Cabo 1° Carlos Catalán. Proclama, sirvió en la unidad base, entre los años 1985 y 1986 y luego entre 1989 a 1990, no recordando fecha exacta. Detalla, en la 5° Comisaría de Curacautín efectivamente existía una comisión civil. Integraban ese grupo Osvaldo Rivera Contreras y Nelson Almendras Illescas, quienes siempre vestían de civil. Tengo entendido que la labor de ellos era cumplir órdenes judiciales y también la prevención de delitos. Asegura que Nelson Almendras Illescas era el jefe de la comisión civil. Explana, el Teniente Adriazola Azocar, era el Subcomisario de la 5° Comisaría de Curacautín. Tenía muy buen trato con los subalternos. Cuenta, que se enteró del caso de

Marcos Quezada Yáñez, por comentarios generalizados entre los Carabineros que servían en el sector. Agrega, el hermano de Quezada Yáñez, cuyo nombre no recuerda en este momento, es cónyuge de una prima de su señora. En tanto, manifiesta no recordar que se hayan realizado comentarios relacionados con una supuesta intervención de carabineros de la 5° Comisaría de Curacautín en la muerte del detenido Quezada Yáñez, de igual forma, que se hayan efectuado apremios físicos a los detenidos en la 5° Comisaría de Curacautín, o que alguno de los Carabineros de la Comisaría, haya tenido problemas con detenidos por exceso de fuerza en contra de ellos. Decanta que durante sus años de servicios, le ha correspondido concurrir a 3 o 4 procedimientos de levantamiento de cadáver por ahorcamiento. La posición de la cabeza era siempre hacia adelante, con el mentón hacia el pecho. El tribunal exhibe las fotografías que rolan de fojas 156 a 159, el deponente señala que no puede hacer ningún comentario respecto a las fotografías, por no ser perito. Sin embargo no encuentra normal la posición en que se encuentra la cabeza del cadáver, ya que a los procedimientos a los que debió concurrir, la cabeza siempre ha estado hacia adelante

A.21 ERVIN PATRICIO BARRÍA CARRASCO (25 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 03 de enero del 2013, rolante de fs. 709 a fs. 710(Tomo III), atestigua que ingresó a Carabineros de Chile el 1 de diciembre de 1984, siendo su primera destinación la 5° Comisaría de Curacautín. En julio de 1988 es trasladado a la Tenencia de Liucura hasta el año 1992. Refiere haberse enterado de los hechos que se investigan, pero ignora mayores detalles, pues no estaba en el lugar cuando ocurrieron. Especula, al parecer se suicidó por ahorcamiento, según señalaron. Comunica, durante sus años de servicio, le ha correspondido concurrir a varios procedimientos de levantamiento de cadáver por ahorcamiento. Generalmente ha sido al interior de domicilios y en árboles, para lo cual utilizaron cuerdas o alambres. Continúa, la posición de la cabeza es siempre hacia adelante, con el mentón hacia el pecho. El nudo del vínculo generalmente hacia atrás o hacia el costado, nunca hacia adelante. El tribunal exhibe las fotografías que rolan de fojas 37 a 40 en la causa rol 111 - 89 de Fiscalía Militar de Angol. El deponente señala que no había visto antes una posición similar a la que se encuentra la cabeza del cadáver que se le exhibe, ya que en los procedimientos a los que concurrió, la cabeza siempre estuvo hacia adelante y el nudo hacia atrás o al costado. Adopta, viendo las fotografías, y atendida la distancia que hay entre la pared y el lugar de la viga donde se colgó el occiso, debe haber ocurrido un golpe cuando este se lanzó desde la tarima en que se sostenía antes de quedar colgando de la viga. Supone, que esto debió haber dejado huellas en la parte posterior de la cabeza. Además, si murió por estrangulamiento debería haber

tenido la lengua hacia afuera y haber eyaculado, que son los signos más característicos, según su experiencia. Basa, si en un procedimiento resultaba una persona detenida en la calle, era trasladada a la unidad policial y allí se le entregaba al Suboficial de Guardia para que hiciera el parte correspondiente. También en ese momento se le allanaba e interrogaba ya sea por el personal aprehensor o por la comisión Civil. Sin embargo, durante el período 1985 -1989 en que este hecho ocurrió, era un carabinero muy nuevo por lo que no practicaba interrogatorios ni recuerda cómo era el procedimiento en aquellos años. Distingue, la comisión civil la integraba el Carabinero Almendra Illesca. Junto con él trabajaban dos o tres Carabineros más, cuyos nombres no recuerda. Especula, quizás ellos tomaron declaración al detenido. Decanta, fue compañero de trabajo con Romelio Molina Bustos en Liucura cuando este hecho ocurrió. Actualmente, esta persona se encuentra con licencia médica producto de un accidente automovilístico que sufrió hace par de meses y que le ha traído consecuencias en su salud, aunque quizás también pueda estar haciendo uso de su feriado legal.

A.22 JOSÉ DANIEL LAGOS PULGAR (37 años a la fecha de los hechos), declara a fs. 158 (Tomo I), fs. 307 (Tomo I), fs. 1249 a fs. 1250 (Tomo IV); fs. 1469 a fs. 1470 (Tomo V) y de fs. 1561 a fs. 1562 (Tomo V).-

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 158 (Tomo I), sostiene que el día 24 de junio, alrededor de las 16:00 horas, es detenido en Curacautín, por personal de Carabineros, por ebriedad, siendo trasladado de inmediato al cuartel. En el cuerpo de guardia es registrado y llevado a un calabozo, ignora a cual. En el calabozo durmió pero en un momento determinado abrieron la puerta e ingresaron a Juan Maldonado, detenido también por ebriedad. Como a las 02:45 horas lo sacaron del calabozo para trasladarlo al centro de detención preventiva de Curacautín, donde se mantuvo hasta que fue presentado al Tribunal. Suma, no sabe a qué hora sacaron a su compañero de celda, probablemente estaba dormido. Utiliza, mientras permaneció en el calabozo, no escuchó movimientos extraños que vinieran de los calabozos contiguos al que él estaba. Tampoco sintió que se abrieran las puertas. Al tercer día de su detención, por la prensa se enteró que un detenido había fallecido en el interior de un calabozo de la Comisaría de Curacautín, de lo cual ignora detalles.

En declaración judicial de fecha 04 de julio de 1989, rolante de fs. 307(Tomo I), barbulla que el 24 de junio de 1989, es detenido por Carabineros al interior del negocio de alcoholes el cairo, siendo conducido por el personal aprehensor hasta la Comisaría. Lo registraron en la guardia, para trasladarlo al calabozo, permaneciendo sentado en su interior, y durmiendo a ratos. Al tiempo

después, ingresaron a otra persona en estado de ebriedad al calabozo, quien decía algunas palabras, pero siguió durmiendo. Continúa, en ningún momento vio a un detenido en el calabozo de al lado. Manifiesta que no escuchó ni vio nada anormal o extraordinario, recordando solamente cuando lo fueron a buscar al calabozo para subirlo al furgón que lo llevó a la cárcel. Relata, se enteró de la muerte de una persona en la Comisaria, por las noticias del diario.

En declaración judicial de fecha 01 de abril del año 2015, rolante de fs. 1249 a fs. 1250(Tomo IV), copia a fs. 1469 a fs. 1470 (Tomo V), siguiere que para el año 1989, residía en la ciudad de Curacautín en la Población Padre Juan. Respecto a la víctima de los hechos investigados cuya identidad se le da a conocer en este acto como Marcos Quezada Yáñez, sobre quien se le comenta fue encontrado ahorcado en uno de los calabozos de la 5ta. Comisaria de Carabineros de Curacautín el día 23 de junio de 1989, cuando él se encontraba detenido por ebriedad al interior de uno de los calabozos de esa unidad policial, musita que por el estado etílico en que se encontraba no tomó conocimiento de los hechos que ocurrieron ese día al interior de la unidad, no escuchó ni vio nada, ya que estuvo durmiendo en todo momento, incluso no recuerda el momento de su detención ni ingreso a calabozos, solo recuerda, el momento en que quedó en libertad, a eso de las 09:00 horas del día siguiente. Continúa, no se percató de ninguna situación anómala al momento de su salida de la Comisaria. En los días posteriores, se enteró por el comentario de terceras personas que el mismo día en que estuvo detenido se había ahorcado una persona al interior de la unidad, pero no le tomó mucho asunto ya que se comentaba que el joven en cuestión se había suicidado. Narra, en más de una ocasión fue detenido por estado de ebriedad y no recuerda que los calabozos donde era dejado hayan tenido tarimas de madera en el piso. Destaca, el Carabinero Fernández, era oriundo de Curacautín, y muy conocido. Urde, nunca conoció a la familia de la víctima.

En declaración judicial de fecha 17 de agosto del año 2015, rolante de fs. 1561 a fs. 1562(Tomo V), ratifica las declaraciones de fojas 158, 307 y 1249 y siguiente, a excepción de lo señalado a fojas 158 y 307 en relación a la forma en que se enteró de la muerte de esta persona, ya que no fue por la prensa, si no por comentarios de terceras personas y tampoco recuerda haber sido trasladado a la cárcel de Curacautín. Cimienta, en el año 1989 vivía en Curacautín, no recuerda la calle, ya que arrendaba en varios inmuebles. Fue detenido en esa época por Carabineros de la Comisaría de Curacautín en dos oportunidades por andar en estado de ebriedad. Especula, no recuerda fecha ni hora exacta, pero fue en el año 1989, mientras bebía alcohol en un local llegó Carabineros y como estaba

ebrio, fue detenido y trasladado en el furgón policial a la Comisaría de Curacautín. Fue el único detenido de la cantina. En la Comisaría el cuerpo de guardia lo registró y llevó a un calabozo, como estaba solo empezó a dormitar, pasó un par de horas y llegó otro detenido ebrio, a quien no conocía, pero algo le hablo esta persona. Dice, luego en Fiscalía se enteró que se llamaba Juan Maldonado pero nunca más lo volvió a ver. Recuerda que al día siguiente, alrededor de las 09:00 horas, fue dejado en libertad, ignora que sucedió con el Sr. Maldonado, no recuerda si éste aún estaba en el calabozo cuando es dejado en libertad. Apunta, prácticamente durmió toda la noche ya que estaba ebrio. De todas maneras a la única persona que vio detenida fue a Juan Maldonado porque compartían calabozo. Asevera que mientras estuvo en el calabozo no vio ni escuchó nada anormal o extraño. Cuenta que el calabozo tenía como 2 metros por 2 metros, no recuerda otras características del calabozo, tampoco puede afirmar si el piso tenía tarimas de madera. Adosa, no recuerda cuantos calabozos tenía la Comisaría pero había más de uno, tampoco puede precisar donde estaban ubicados. Anexa, desconocer los nombres de los Carabineros que se detuvieron, tampoco sabe que funcionarios estaban en la Comisaria esa noche. Blasona, al Carabinero de apellido Fernández, lo ubica por ser de Curacautín, pero no tiene ninguna relación de amistad con él, ni siquiera sabe su nombre. No tiene la certeza, si el Carabinero Fernández era de la dotación de la Comisaría de Curacautín en esa época. Destaca que cuando estuvo detenido en la Comisaría de Curacautín no sufrió ningún apremio, ni tampoco fue golpeado. Señala que no conoció a la víctima de autos Marcos Quezada Yáñez ni a su familia, se enteró a los días después por comentarios de terceras personas que el día que estuvo detenido, se había ahorcado una persona en la Comisaría de Curacautín.

A. 23. JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO (43 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 160 (Tomo I); 312(Tomo I); 1.087 a 1.088 (Tomo IV); 1.122 a 1.124 (Tomo IV); 1.264 (Tomo IV), 1.265 (Tomo IV); 1.266 (Tomo IV), 1.710 a 1.711 (Tomo V); 1.821 a 1.822 (Tomo VI); 1.963 a 1.964 (Tomo VI); 2.210 (Tomo VII) y de fs. 2.625 a 2.627 (Tomo VIII).

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 160(Tomo I), cuenta que el 24 de junio de 1989, aproximadamente a las 18:00 horas, es detenido por Carabineros en la vía pública de la comuna de Curacautín, por transitar en estado de ebriedad, siendo conducido al cuartel. Continúa, en el cuerpo de guardia es registrado y llevado al calabozo grande, donde permaneció una persona de apellido Lagos. Decanta, al interior del calabozo, no sintió ruidos o movimientos extraños, ni que se hubiera abierto la

puerta del calabozo adyacente. Hace presente que por su estado, la mayor cantidad de tiempo lo pasó durmiendo. A eso de las 24:00 es dejado en libertad, previo al pago de una multa. Soslaya, cuando abandonó el cuartel no vio nada extraño. Refiere que al día siguiente por comentarios de la gente, se enteró de la muerte de un detenido en el calabozo. Asegura, no recuerda si había otro detenido en la guardia cuando llegó. El día que fue detenido estaba celebrando su día, porque se llama Juan.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de julio de 1989, rolante de fs. 312(Tomo I), arguye que el 24 junio es detenido en la vía pública por ebriedad, siendo trasladado por personal de Carabineros, hacia la Comisaría, registrado en la guardia y trasladado al calabozo, donde se encontraba un hombre de apellido Lagos, esto debe haber ocurrido alrededor de las 18:00 horas. Delibera, en el calabozo se quedó dormido hasta la medianoche. Atestigua vio a unos funcionarios de Carabineros en el patio y les solicitó que lo soltaran, situación que ocurrió momentos después. Aquilata, el detenido que estaba en el calabozo junto a él, lo conoció ayer cuando se encontraron en la Comisaría. Asegura, no haber escuchado ni visto nada anormal. Suma que al día siguiente cuando se encontraba en su casa, por comentarios de otras personas, se enteró que había muerto una persona en la Comisaría.

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría. En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de

madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta. Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En diligencia de careo de fecha 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco, César Octavio Adriazola Azocar, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Erwin Fernando Hormazábal Aedo. José Domingo Cádiz Parada, Bernardo Iván Aedo Leiva y Joel Pérez Isla, rolante de fs. 1122 a 1124 (Tomo IV), ratifica la declaración que rola de fs. 1087 a fs. 1.088. Apunta, reconoce los rostros de las personas que están a su lado, eran Carabineros de Curacautín. Sin embargo, ignora si ellos participaron en las maniobras con el joven Quezada y que ha relatado. Sólo al Carabinero de apellido Fernández lo recuerda en dicho proceder. Se mantiene en sus dichos.

En diligencia de careo de fecha 10 de abril de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y don José Fernández Cofré, rolante de fs. 1264 (Tomo IV), el deponente reconoce a la persona que está a su lado, es un carabinero apodado chico de apellido Fernández de la dotación de Carabineros de Curacautín de 1989. Ratifica la declaración de fs.1.087 a 1.088. Fernández andaba vestido de Carabinero y en la cuca o vehículo institucional. Se mantiene en sus dichos.-

En diligencia de careo de fecha 10 de abril de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y don Hernán Contreras Valencia, rolante de

fs. 1265 (Tomo IV), el deponente no reconoce a la persona que está a su lado. Ratifica declaración de fs.1.087 a 1.088. Se mantiene en sus dichos.-

En diligencia de careo de fecha 10 de abril de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y don Erik Vásquez Ordenes, rolante de fs. 1266 (Tomo IV), el deponente no reconoce a la persona con quien se le carea. Ratifica la declaración que rola de fs. 1087 a fs. 1.088. Arguye, ese día los carabineros andaban vestidos de uniforme y en la "cuca" o vehículo de carabineros. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a fs. 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente. Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbulla, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Sofloma, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos. Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venia desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán

Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el "tic" que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

Diligencia de careo con fecha 21 de diciembre del 2016, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y don José Arturo Araneda Pulgar rolante de fs. 1963 a fs. 1964 (Tomo VI), señala reconocer a la persona que esta su lado, por ser Carabinero en Curacautín, hace 25 años aproximadamente. Ratifica declaración que rola de fs. 1.087 y siguientes. Sugiere que no puede precisar que el Carabinero con el "tic" nervioso que menciono en la declaración y que habría cooperado en la maniobra con Quezada Yáñez, sea el

señor que en estos momentos se le carea. Recalca, según recuerda no había otro carabinero con un "tic", era la única persona. Cuenta, no ha recibido amenazas ni llamados de otras personas para amedrentarlo por esa situación. Soslaya, el Carabinero que tenía el "tic" ya lo padecía en ese tiempo. El Tribunal le consulta si la persona que tiene a su lado participó en la maniobra con el carrito descrita a fs. 1.088 o en el grupo de carabineros que menciona. El deponente refiere que cuando ingresó detenido esta persona estaba en la oficina de la unidad, en la guardia específicamente en la entrada; cuando se retiró ya no se encontraba. Se mantiene en sus dichos.

En declaración judicial de fecha 22 de diciembre del 2016, rolante de fs.2210 (Tomo VII), el Tribunal exhibe la fotografía que rola de fs. 2.015, sin mencionar la identidad de la persona. A propósito de la cual asevera que corresponde Araneda, el del tic, a quien vio en la unidad cuando ingresó a los calabozos. Asegura que es la misma persona a la que ha hecho mención en sus declaraciones anteriores, es decir la persona del tic. Sostiene, a las dos horas después de haber ingresado al calabozo pudo percatarse de los ruidos y risas que ha mencionado a fs. 1076. Justifica, cuando llegó a la unidad vio Araneda, pero no puede situarlo en el grupo que entro al joven en una camilla. Sin embargo, esta seguro que Fernández, sí, pues iba mandando y además lo conocía, por ser del pueblo, esto a través de la luz que alumbraba cuando abrieron una puerta.

Diligencia de careo con fecha 29 de julio de 2019, entre don José Dolorindo Fernández Cofré y don Juan Nolberto Maldonado Pacheco rolante de fs. 2625 a fs. 2627 (Tomo VIII), el tribunal lee en lo pertinente la declaración a fs. 1710, el deponente ratifica sus dichos. Reconoce a la persona con quien se le carea, anexando que efectivamente fue él quien lo trasladó a la Comisaria. Alega, efectivamente se tomó algunas copas de vino, pero lo que ha dicho, se debe a que él lo vio. Ratifica de igual forma diligencia de careo que consta a fs. 1264. Se mantiene en sus dichos.

A. 24 OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER, (37 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 168 a fs. 169 (Tomo I) y de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI).

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaria de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido

Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecia que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una парка y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles. Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflora que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. Señala recordar a Marcos Quezada Yáñez pues era un joven que había cometido algunos delitos en la comuna de Curacautín, mientras se desempeñaba como Juez del Crimen de esa ciudad. Además, tiene entendido que era ayudante de una persona de apellido Weisse que asumió cargos públicos en la comuna. Describe a Marcos Quezada como una persona alta y corpulenta. Detalla, los calabozos de la unidad de Carabineros de Curacautín estaban fuera de ella, en el patio. Esta comisaría era vieja, la guardia estaba en la esquina de Prat con Arauco y los calabozos estaban en el patio de ella. El Tribunal le exhibe las fotografías de fs. 37 y siguientes y fs. 193 y siguientes. El deponente afirma que esos eran los calabozos, aunque no recuerda la tarima que se aprecia en ellas. El Tribunal le lee la declaración que rola de fs. 1.087 y siguientes. Sin embargo, no recuerda haber visto a otro detenido en ese lugar. Ostenta, que vivía a unas tres cuadras

de la Comisaría, y cuando lo llamó el Comisario fue inmediatamente. Al llegar, el calabozo estaba abierto y pudo apreciar el cuerpo suspendido, alumbraron con linterna. Precisa, estuvo poco tiempo en ese lugar, porque luego llamó el Fiscal Militar de Angol indicando que concurriría hasta la unidad. Ensaya, no recuerda el número de funcionarios que había en el lugar, pero fue con el Comisario y un par de funcionarios más. Comenta, no alcanzó a ver cuándo descolgaron el cuerpo, porque el Fiscal Militar avisó telefónicamente que él se constituiría en el lugar. Indica, no vio ningún carrito en el cuartel de Carabineros cuando se constituyó.

A.25 WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER (71 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 173 a 174 (Tomo I); 235 a 236 (Tomo I); 237 a 238 (Tomo I) y de fs. 308 a 309(Tomo I).

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte alta del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría hacer pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del

cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), exploya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente

es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

A. 26. MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLACHOVICH (39 años de edad a la época de los hechos), declara a fs. 223 a 224 (Tomo I); 1497 a 1499 (Tomo V) y de fs. 1638 (Tomo V).-

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 223 a fs. 224 (Tomo I), acota el 24 de junio de 1989 se encontraba en su domicilio y pasó por la Comisaria a retirar especies personales. En ese momento se

presentó el Cabo de guardia Cádiz, informándole las novedades de la guardia, entre esas que había un detenido por robo en los calabozos. Por consiguiente, dispuso que confeccionaran el parte correspondiente para enviarlo a la cárcel pública, la que se encargaría de ponerlo disposición del Tribunal. A eso de las 18:30 horas pasó nuevamente por la Comisaría, preguntando si el detenido había sido enviado a la cárcel, pero el Suboficial de guardia respondió negativamente. Afirmando que no habían podido confeccionar el parte porque llegaron otros detenidos. Así las cosas, reiteró la orden y se fue a su casa. A las 20:00 horas aproximadamente, llegó a su casa el Subcomisario de Servicios, el Teniente Adriazola, a informarle que el detenido por robo que estaba en los calabozos, había sido encontrado por el personal de la guardia, ahorcado. Continua, se dirigió inmediatamente a la Comisaria, constatando que en el calabozo n°1 se encontraba colgando por el cuello el detenido Marcos Quezada Yáñez, para lo cual utilizó una chomba azul, que paso por sobre la viga donde van clavadas las tejas. Detalla que dispuso al Teniente Adriazola que fijara el sitio del suceso y tomaran fotografías al occiso. En el intertanto se comunicó vía telefónica con el Juez del Crimen comentándole lo sucedido. El Juez concurrió a la Comisaria y junto a él estuvo en el calabozo donde se encontraba el cuerpo. También fue el fotógrafo señor Rey, a tomar fotografías en presencia del Juez. Desarrolla que se le dio cuenta telefónicamente a la Prefectura de Malleco y por su intermedio al Fiscal Militar, quien ordenó levantar el cadáver. Escruta, dispuso que descolgaran el cadáver, procediendo a revisar el cuerpo para establecer que no tuviera heridas ni contusiones, o cualquier otra señal que hiciera presumir la acción de terceras personas, comprobante que tenía semen y manchas de fecas en los calzoncillos. Luego, instruyó que lo trasladarán a la morgue, y seguir el procedimiento habitual. Proclama, de acuerdo a lo internamente investigado a la fecha, no existen evidencias que hubiera intervención de terceras personas en la muerte del detenido, salvo el primer informe de autopsia que indicaba como posible causa de muerte, la aplicación de corriente eléctrica. Colige, los interrogatorios realizados en la Comisaria arrojan el mismo resultado, que lo vieron hasta última hora en el calabozo, parado en la ventana, que lo sacaron a ordinar y luego lo encontraron colgado cuando lo fueron a sacar para comer. Anexa, familiares del detenido le llevaron alimentos y frazada. Basa, a las 16:00 le informaron que habían llegado familiares a preguntar por el detenido y les habían dicho que le llevaran alimentación y frazadas. Asegura, la chomba que se le exhibe es la que utilizó el detenido para colgarse por el cuello. Agrega, la chomba roja que se le exhibe, el detenido la tenía puesta bajo la parca.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente Adriazola, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que Adriazola le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo Cádiz, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba Aedo, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento Fernández, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría atacar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia. Dice, la interrogación

del detenido debe ser efectuada en la guardia. En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenciones u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito. Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños. Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimienta, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaria de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.

En declaración judicial de fecha 22 de septiembre de 2016, rolante de fs. 1638 (Tomo V), sostiene que no se encontraba de servicio el día que sucedió la detención de Marco Quezada Yáñez. Por último quiero expresa que durante el inicio de este procedimiento, como no se encontraba de servicio no concurrió a la Comisaria, a la hora que ocurrió la detención en la guardia e ingreso a los calabozos.-

A.27 PEDRO ROBERTO REY (56 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo

I), adopta que no recuerda la fecha exacta, pero hace unos meses atrás, alrededor de las 19:30 o 20:00 horas llegó hasta su casa un Carabinero a solicitarle que concurriera a la Comisaría para tomar unas fotografías que necesitaban de forma urgente. A lo cual concurrió inmediatamente a la Unidad policial, siendo conducido a los calabozos, viendo a una persona que se encontraba colgando por el cuello, con los brazos abajo aparentemente ahorcado. Cuenta que tomó las fotografías de afuera hacia el interior, otra más cerca, una tercera de primer plano y cuarta desde el interior. Funda, en el lugar se encontraba el Juez del Crimen de Curacautín, don Oscar Viñuela, y varios Carabineros, entre ellos el Comisario. Luego se retiró del lugar, desarrolló las fotografías y posteriormente las entregó con sus negativos, por ser algo confidencial. Asegura, las fotografías que se le exhiben corresponden a las que tomó en esa oportunidad. No apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.

A.28 MARIA ABRISTELA YÁÑEZ AEDO (36 años a la fecha de los hechos). En declaración judicial de fecha 21 de agosto de 1989, rolante de fs. 241 (Tomo I), narra el 24 de junio pasado, no recuerda la hora acompañó hasta el cuartel de la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín a la Srta. Yáñez. En una primera oportunidad fueron a consultar si efectivamente Marcos Quezada Yáñez, estaba detenido ahí, lo cual fue confirmado por el funcionario de guardia, no recuerda el motivo de la detención. En ese momento, no pudieron ver a Marcos, ignora el lugar donde estaba. Pero Carabineros les manifestó que podían llevarle alimentos y ropa para abrigarse. En la segunda oportunidad que fueron, a eso de las 19:20 horas, le llevaron alimento y frazadas, cosas que fueron entregadas en la guardia y se retiraron. Invoca, no se preocupó de los detalles, solo acompañaba a Haydee. Afirma, no vio nada extraño en la Comisaría. Delibera que conocía a Marcos Quezada de vista. Recalca, la relación que tiene con la señora Nélida, es que convive con su hermano.

A.29 JAIME ANTONIO MUÑOZ CANDIA (56 años a la fecha de los hechos), declara a fs. 255 a fs. 256 (Tomo I) y de fs. 1738 a fs. 1739 (Tomo V).

Declaración judicial de 23 de agosto de 1989, rolante a fs. 255 a fs. 256 (Tomo I), apunta el 24 de junio pasado cumplía servicio de chofer en la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín. Es del caso que alrededor de las 13:00 horas, el Cabo segundo Joel Pérez Isla, le ordenó acompañarlo en el furgón Z-353, hasta la calle Chorrillos detrás de un liceo, conjuntamente con el detenido Marcos Quezada y aprehensores Cabo 2° Almendras y Carabinero Hormazábal a fin de recuperar un cuchillo y formón que había lanzado allí el detenido hecho que

en su presencia reconoció. Al llegar al lugar, luego de indicar el sitio preciso y previa autorización para ingresar al sitio, el Cabo Almendras ubicó los elementos. Interpreta que regresaron al cuartel. Además se colocaron en contacto con los dueños de la panadería que había sido robada por el detenido, quienes reconocieron el cuchillo de su propiedad. El formón ignora si pertenecía a ellos. El detenido bajo del furgón y fue ingresado hasta el cuerpo de guardia por los aprehensores, no teniendo más contacto con él. Atina, ese mismo día y a eso de las 19:30 horas, en circunstancias que se encontraba en el casino viendo televisión, aprecio a sus colegas que se movilizaban de un lugar a otro, salió a ver qué pasaba, siendo informado por el Cuartelero Carabinero Aedo, que el detenido Marcos Quezada Yáñez, se encontraba colgando en su calabozo. Al ir al lugar, aprecio que efectivamente yacía suspendido el cuerpo de Quezada Yáñez, quien había utilizado una chomba azul para ahorcarse. Suma, no ingresó al calabozo, solo miró por la ventanilla, sin perjuicio que el Carabinero Aedo, estaba de punto fijo impidiendo el acceso. Asevera, en los minutos posteriores llegó el Subcomisario y Comisario de la Unidad, y el señor Magistrado del Juzgado del Crimen de Curacautín. Glosa que recibida la instrucción verbal de levantamiento de cadáver, se descolgó al detenido y trasladó a la morgue del Hospital local lo cual se hizo en el furgón z-353, que era conducido por él. Inquieta, el detenido no fue castigado físicamente por ningún funcionario, tampoco amenazado o forzado a reconocer su autoría, al contrario se mostraba tranquilo y cooperó con ellos. Estimula que en el lugar donde fueron recuperadas las cosas existía un estero. Relata que el detenido utilizaba dos chombas, una de color azul que utilizó para ahorcarse y no recuerda el color de la otra. Glosa que se constituyó en el lugar un fotógrafo de apellido Rey, a quien personalmente fue a buscarlo a su casa y luego llevó de regreso. Recalca, nada se le hizo al detenido.

Declaración judicial de 09 de noviembre de 2016, rolante a fs. 1738 a fs. 1739(Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 255 a 256. Colige que en esa época solo estaba a cargo del vehículo policial. Era uno de los conductores oficiales que tenía la unidad. No recuerda en qué turno estaba ese día, pero si era día de semana lo más probable es que estaba de primer patrullaje, pues se turnaban para tener fines de semanas libres. El primer patrullaje era de 08:00 a 20:00 h. El sistema de turnos que tenían los conductores, no era el mismo que realizaban los funcionarios de patrullaje en la población. Musita, que no recuerda los horarios de ellos, porque los conductores tenían un sistema diferencia de turnos, solo eran tres personas en esa labor. Suma, lo más probable, por la declaración que prestó, es que ese día estuviera de conductor. Decanta, en un

procedimiento de detención por algún delito el conducto regular es que se llame al vehículo policial y éste se dirija hasta el lugar donde están los funcionarios con el detenido, se traslada hasta la unidad policial, y luego los funcionarios a cargo del procedimiento se bajan e ingresan a la persona. En ningún momento debía ingresar a la unidad, pues el procedimiento de ingreso es del personal de patrullaje y cargo del procedimiento. Funda, en sus 30 años de servicio en la institución y de experiencia, cuando una persona es detenida e ingresada en la guardia, y la persona confiesa el delito o dice dónde están las especies, es el personal a cargo de la aprehensión, quien debe ir hasta el lugar a hacer las indagaciones, pero sin sacar al detenido. Explana, la única forma que el personal haga indagaciones con un detenido es antes de llegar a la guardia. Es poco común y cree el único caso que recuerda, en que habiendo ingresado un detenido a la unidad, se le saque de ella para hacer indagaciones sobre algún delito. Apoya, el casino donde se encontraba esa tarde, se ubica a 20 o 30 metros de los calabozos. Describe que los calabozos tenían vigas a la vista, y que fueron esas las que aprovechó Quezada Yáñez para suicidarse. En todo caso en esa época no hacía labores de cuartelero, sólo era conductor, nunca ingresó al sector de los calabozos, salvo el día a ver el cuerpo de Quezada Yáñez. Soflama, estuvo desde 1989 hasta el año 1997 desempeñándose en Curacautín, o en unidades dependientes de ella. Cuenta que supo el color del chaleco con que se suicidó Quezada Yáñez, porque había una luz que alumbraba hacia adentro del calabozo. Descarga, no sabe el momento que escuchó a Marcos Quezada, reconocer que lanzó el cuchillo y el formón al lugar que lo llevaron, manifiesta que pudo sacar cuando lo sacaron de la unidad y subieron al vehículo. En ningún momento ingresó a la unidad, ni participó de su interrogatorio. No recuerda que Marcos Quezada, haya tenido alguna dolencia, quejarse, o lesión visible. Ostenta, es la única vez que vio a Marcos Quezada fue ese día. Urde, llevaba 6 meses desempeñándose en la unidad y nunca lo había visto, no era una persona que fuera habitual verlo en la Comisaría por cometer delitos. Atestigua, haber oído que el detenido Quezada andaba con panfletos, pero eso no le consta. No sabe en qué momento lo escuchó, presume pudo haber sido cuando lo detuvieron, pero no puede precisarlo. En la unidad no tenía un puesto fijo, podía recorrerla, pero mantenerse atento a los llamados para concurrir con el vehículo. Decanta, en esa época había comisión civil o de alcoholes, pero ellos actuaban vestidos de civil. En relación a los vehículos que ellos utilizaban, no recuerda haber prestado colaboración para sus labores, tal vez se le pidió cooperación a otro conductor. El deponente realiza un croquis a mano alzada de la Comisaría de Carabineros de Curacautín en el mes de junio del año 1989, en que indica que entrando a la

unidad está la guardia, luego una oficina que al parecer era de Teniente, luego el casino; después un baño y posteriormente el patio. Luego, fuera de la unidad, en el patio estaban los calabozos. Los dormitorios de los solteros estaban al otro lado de los calabozos, en el lado opuesto. Frente a la guardia estaba la oficina de partes y cumplimiento de órdenes judiciales, a su lado la oficina del Comisario. El Tribunal ordena agregarlo al proceso. Justifica que en la época siempre se supo que una persona se había ahorcado, incluso hubo una investigación por el detenido ahorcado en custodia de Carabineros. En los años posteriores, supo que esa persona había sido apremiada, al parecer este rumor lo escuchó en la población en Curacautín. Efectivamente había un funcionario del Retén de Malalcahuello de grado Suboficial o Sargento, que tenía una especie de "tic", es decir cada cierto rato hacía un movimiento involuntario con su cara o cabeza. De la nómina que se le da a conocer que rola de fs. 525 y siguientes, cree que José Araneda podría ser esa persona, pero no está seguro.

A.30 JOSELIN EDUARDO SALAZAR SALAZAR (38 años a la fecha de los hechos), declaración judicial de fecha 23 de agosto de 1989, rolante de fs. 264 (Tomo I), atina que el 24 de junio pasado, después de las 12:00 horas y en circunstancias que se encontraba en la calle chorrillos, acompañado de Romeo Kolh Lazzari, reparando un vehículo de éste, apareció el furgón de los Carabineros de Curacautín trayendo varios uniformados. Uno de ellos, consultó por el propietario de un predio, resultando ser de don Romeo, quien a solicitud de Carabineros pasó la llave para abrir una puerta y así de esta forma los policías pudieron ingresar en su interior, ya que según el decir de estos, andaban buscando unos elementos que habían sido lanzados. Luego de una breve búsqueda, uno de los uniformados encontró un formón y cuchillo, para retirarse del lugar, procediendo a cerrarla nuevamente. Soflame que los Carabineros no bajaron a ninguna persona del vehículo policial, siempre la parte posterior estuvo cerrada, no vio a nadie civil, que anduviera con Carabineros. Arguye, no conoce a Marcos Quezada Yáñez. Asegura que Carabineros no bajó a nadie del furgón, solo uniformados. Ignora si en su interior había algún detenido.

A.31 ROMEO KOLH LAZZARI (72 años a la fecha de los hechos), declaración judicial de fecha 26 de septiembre de 1989, rolante de fs. 274 (Tomo I), dice que hace un tiempo atrás, no recuerda fecha se encontraba en un sitio de su propiedad ubicado en chorrillos n° 300, Curacautín, donde tiene un pequeño taller particular. Decanta que en ese momento se encontraba con un señor apellido Salazar, quien le ayuda en pequeñas cosas. Descarga que él le

avisó que Carabineros necesitaba entrar a la propiedad para revisarla porque aparentemente alguien había tirado unas cosas en ella, por tanto los autorizó. Posteriormente la misma persona, le manifestó que habían encontrados los fierros que buscaban. Apunta que no dialogó con Carabineros, ni supo cuando llegaron o se fueron, solo facilitó la llave para que les abrieran.

A.32 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO (23 años a la fecha de los hechos), declaraciones rolantes de fs. 112 a 114 (Tomo I); 137 (Tomo I); 687 a 689 (Tomo II); 690 (Tomo II); 691 a 693(Tomo II), 1067 a 1068 (Tomo IV); 1122 a 1124 (Tomo IV) y de fs. 1639 a 1641 (Tomo V).-

En declaración judicial de fecha 21 de julio de 1989, de fs. 112 a fs. 114 (Tomo I), copia que se encuentra de fs. 687 a fs. 689, aduce el 24 de junio pasado cumplió el servicio de primer turno en la población de Curacautín, teniendo como jefe de pareja al Cabo Pérez. Apoya que estaban en la Comisaria cuando el Teniente Adriazola le ordenó al Cabo Pérez que debían concurrir a la panadería, ubicada en calle Gregorio Urrutia a investigar una denuncia de robo efectuada por la dueña de la panadería, quien expresó tener sospechas en la persona de Marcos Quezada. Además se les acercó una persona informándoles que durante la noche habían intentado ingresar a robar a su local, ubicado en calle O'Higgins, sin señalar nombres. Lo anterior fue comprobado por inspección personal que hicieron. Luego continuaron hacia la panadería, donde entrevistaron a la dueña y trabajadores constatando la efectividad del robo, concluyendo que el autor conocía el local. La propietaria de la panadería expuso que tiempo atrás Marcos Quezada, había trabajado en el local y sustrajo \$ 500 a un trabajador, motivo por el cual sospecha de esa persona. En esa dinámica, salieron a buscar a Marcos Quezada. En ese intertanto, entrevistaron a dos civiles quienes aportaron con puntos donde estuvo la noche anterior. Luego se encontró al Sargento Flores, quien estaba disponible, comentándoles sobre el robo de un kiosco, inclusive habían tratado de cortar los alambres eléctricos, cree que los cortaron. Cuenta, alrededor de las 12:35 horas, cuando conversaban con el dueño de los flippers, se encontraron con el Cabo Almendras y el Carabinero Aguirre. Detalla, de pronto apareció Marcos Quezada, caminando por calle O'Higgins hacia el poniente, salieron a su encuentro para informarle que necesitaban conversar con él en la Comisaria. Fue trasladado a pie, sin ser esposado. Transcurrido 10 minutos aproximadamente llegaron a la Comisaria, ingresaron a la guardia y luego a una pieza contigua donde hay una mesa de pin-pon, procediendo el Cabo Pérez a interrogar al detenido, en presencia del Teniente Adriazola, reconociendo en forma instantánea su autoría e incluso extrajo de un bolsillo el dinero sustraído. Anexa, el detenido

narró que tenía problemas en la casa. En cuanto al cuchillo, dijo que lo había tirado al estero manzanoco, donde concurren con el detenido en el furgón policial, recuperando el cuchillo y un formón. Divulga, cuando iban de retorno a la Comisaría, a la altura del hospital, se encontraron con la dueña de la panadería, el Cabo Pérez conversó con ella. Además se le informó telefónicamente al Teniente Adriazola, el resultado de la diligencia. Colige, el Cabo Pérez con el Cabo Almendras, confeccionaron la minuta para hacer el parte. Blasona, en esos momentos el detenido estaba en la guardia, evidenciando que le regaló un cigarrillo. A las 14:30 horas es ingresado al calabozo por los Carabineros Aguirre y Aedo. Dice que a las 15:00 horas hace abandono del cuartel y se va a Victoria, pues su turno concluyó. Aquilata, a las 14:25 horas, del día siguiente, regresó a cumplir sus funciones, tomando conocimiento que el detenido Quezada, se ahorcó en el calabozo. Atestigua, el detenido no fue castigado, o víctima de un tormento físico o psicológico. Estima, no le vio lesiones, ni tampoco manifestó ningún tipo de dolor o molestia. Anexa, el detenido no permaneció solo con un funcionario policial, nada se le hizo al detenido. Esgrime que el comportamiento del detenido fue pasivo, siempre cooperó con el procedimiento policial, pero no quería ir a la cárcel, es más deseaba solucionar de forma amigable el problema con la dueña de la panadería.

En declaración extrajudicial de fecha 11 de julio de 1989, de fs. 137(Tomo I), copia a fs. 690, sugiere hace dos años que pertenece a Carabineros de Chile, ostenta el grado de Carabineros y hace más de un año que está en la Comisaria de Curacautín. El sábado 24 de junio de 1989, se desempeñaba en el primer turno, junto al Cabo Joel Pérez Isla. Así las cosas, a las 10:00 horas, le ordenaron ubicar al individuo Marcos Quezada Yáñez, por ser sospechoso del delito de robo ocurrido durante la noche en la ciudad. Al salir a recorrer, a eso de las 12:30 horas en la intersección de las calles serrano con O'Higgins, se encontraron con la pareja de Carabineros, compuesta por el Cabo Almendras y el Carabinero Aguirre, en momentos que conversaban y de manera sorpresiva apareció el sospechoso, siendo detenido y trasladado a la Comisaria. Continúa, en la Comisaria es interrogado confesando su participación en el robo a la panadería, ubicada en calle Gregorio Urrutia de Curacautín, y de sus carteras sacos unos rollos de monedas, billetes y papeles que parecían panfleto. Además señaló haber sustraído un cuchillo carnicero, el que botó en el estero Manzonoco, cerca del Liceo Industrial. En compañía del Cabo Pérez y Cabo Almendras, fueron con el detenido a recuperar la especie, que fue encontrada junto a un formón. Agrega, el detenido reconoce al formón de su propiedad, y cuenta lo utilizó para

abrir una puerta y caja donde se encontraba el dinero sustraído. Habla, una vez en la unidad, los Cabos Pérez y Almendra confeccionaron la minuta sobre los hechos, entregándola al Suboficial de guardia, junto al detenido y especies recuperadas. Propone, a las 15:00 horas terminó su turno y viajó a Victoria, a casa de su polola, regresando a Curacautín al día siguiente, alrededor de las 13:45 horas. Expone, en ese momento se enteró del suicidio de Marcos Quezada Yáñez. Evidencia, al detenido no se le castigo, y los rumores que se le habría aplicado corriente, es absolutamente falso, del tiempo que lleva en Carabineros nunca se ha utilizado ese método para interrogar, ignora completamente como se hace y sin en algún lugar se emplea.

En declaración judicial de fecha 18 de diciembre de 2012, rolante de fs. 691 a 693(Tomo II), ratifica íntegramente las declaraciones judiciales y extrajudiciales prestadas ante la Fiscalía Militar de Angol, rolantes de fs. 687 a 690. Complementa que Quezada Yáñez manifestó su deseo de no volver a la cárcel, pues al parecer había estado en ese lugar con anterioridad y seguramente tuvo algún problema. En aquel tiempo a los detenidos no se los llevaba al hospital para constatar lesiones, salvo que tuviera lesiones visibles, y por orden del Suboficial de guardia. En el caso de Quezada Yáñez no presentaba lesiones visibles. Continúa, el procedimiento terminó alrededor de las 13:00 horas con la detención del sospechoso, esclarecimiento de los hechos y la recuperación de las especies. Acota, no participó del interrogatorio al que fue sometido Quezada ni recuerda quien lo hizo, pero fue breve. Sin embargo, cuando fueron al lugar donde había tirado el cuchillo y el formón, conversó con él al interior del calabozo del furgón policial. En este lugar le dijo dónde había botado estas especies y además expresó que no quería llegar a la cárcel. Piensa que ese fue el motivo, por el cual se suicidó, es decir, por el temor que le provocó tener que regresar al centro penitenciario. Urde, Marcos Quezada Yáñez, no era un activista político. El Tribunal le lee lo pertinente de la declaración de José Cádiz Parada de fs. 606. El deponente refiere que no es efectivo lo que él asevera. Explana, no participó o por lo menos no recuerda haber participado del Interrogatorio a Marcos Quezada Yáñez al interior de la Comisaría. Sí, haber conversado con él en el furgón cuando se desplazaron a recuperar las especies, posterior a ser interrogado. Atina, no vio lesiones en las manos del detenido Quezada. El Tribunal le lee la declaración de Daniel Orlando Quiroga Carrasco a fs. 650. El deponente señala haberse enterado con posterioridad del informe de la autopsia, el cual indicaba que Quezada Yáñez presentaba lesiones atribuibles a la aplicación de electricidad. Era comentario generalizado en la Comisaría. Sin embargo, no le

consta, pues no tuvo acceso al informe tanatológico. Especula, llegaron a la conclusión que las marcas o erosiones que presentaba en las manos se las provocó cuando tomó los cables eléctricos que colgaban en el kiosco que quiso robar. Seguramente estos cables le pegaron un "chispazo" y por este motivo se hirió las manos y se desistió de robar el kiosco. Arguye, esa noche estuvo la comisión de alcoholes que venía del Retén Manzanal, integrada por el Suboficial Fernández y dos colegas. Menciona como integrantes del SICAR a los Cabos Aravena y Mansilla. Cuenta, durante su vida funcionaría le correspondió levantar el cadáver de un menor que se suicidó por ahorcamiento. El tribunal le exhibe las fotografías rolantes de fs. 37 a 39 en la causa rol 119-89 de Fiscalía Militar de Angol. El declarante expresa no tener experiencia para pronunciarse respecto de la postura corporal ni mecánica del nudo con el que Quezada Yáñez se suicidó. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de Carlos Florentino Fabres Jiménez, de fs. 655. A lo cual indica, recordar al Cabo Almendras con un carácter fuerte y muy buena relación con el Mayor Catalán. Sin embargo no es efectivo que en aquel tiempo Almendras integrara la Comisión civil, puesto que esto sucedió tiempo después de ocurrido el hecho investigado. Alega, era normal por seguridad, que dentro de las unidades policiales, existiera un tambor con agua y otro con arena. Aquilata, no haber visto el momento en que el detenido es ingresado al calabozo, pero haber oído cuando el Comisario le ordenó a Cádiz que enviara al detenido a la cárcel. Era un procedimiento común en aquellos tiempos. Hasta los ebrios eran llevados a la cárcel. Dice, se fue Victoria a la casa de su polola y actual ex señora, regresando al día siguiente a Curacautín donde se enteró de lo sucedido.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), soflama que Marcos Quezada Yáñez cuando fue detenido, no tenía lesiones visibles. No recuerda que se haya quejado de dolor físico. Decanta, el procedimiento regular cuando se detiene a una persona, consiste en que ésta se aprehende en la vía pública, se lleva a la unidad y en alguna dependencia, cercana a la guardia, se le toma la declaración y se hacen los documentos para entregarlos junto al detenido en la guardia. Detalla, en esa época los calabozos eran de 4 metros por 2 metros aproximadamente, altos, de concreto y pasaban vigas por el techo. Además, estaban complementados con una tarima de madera para que descansaran los detenidos, la cual medía 2 metros de largo y 1.50 centímetros a 2 metros de ancho aproximadamente. Señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vínculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre

estas. Agrega, jamás vio el cuerpo sin vida y ahorcado de Marcos Quezada Yáñez. Ese día, una vez que terminó su turno, a las 15:00 horas, se vistió de franco y tomó el bus en los buses Bío Bío con destino a Victoria, y luego a Temuco, el cual salía a las 15:30 horas, para concurrir a esta última ciudad y ver a su entonces cónyuge. En la noche se desplazó hacia Temuco para dormir en la casa de sus padres. A la Comisaría regresó al día siguiente, en el bus que llegaba cerca de las 14:00 horas a Curacautín para presentarse a su servicio de segundo turno que correspondía a las 14:25 horas. Se enteró al asumir el turno que el detenido del día anterior se había ahorcado, ya que en ese tiempo no existían teléfonos comunicarse. La autorización para concurrir a Temuco se la dio el Comisario, esto porque hacía vida de soltero en el cuartel. Arguye, actualmente es funcionario de Carabineros en servicio activo, jefe de Retén de Sarmiento de la 1º Comisaría de Curicó, y se encuentra al cuidado de sus hijos, de 16 años y de 9 meses de edad, y esta situación le tiene bastante preocupado.

Diligencia de careo de fecha 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco; César Octavio Adriazola; Marco Antonio Aguirre Guajardo; Erwin Fernando Hormazábal Aedo; José Domingo Cádiz Parada; Bernardo Iván Aedo Leiva y Joel Pérez Isla, de fs. 1122 a 1123 (Tomo IV), el deponente no reconoce a la persona con quien se le carea, y alega es la primera vez que escucha que el detenido fue objeto de supuestos apremios. Se mantiene en sus dichos.

Declaración judicial de fecha 23 de septiembre de 2016, a fs.1639 a 1643 (Tomo V), el detenido estaba sin lesiones ni contusiones visibles, conforme a constancia del libro de guardia dejada a las 13,00 horas, en los folios N°105 y N°06 párrafo N°1 conforme a fotocopia de fojas 190 y 191 que en los párrafos finales señala textualmente "registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no deja dinero ni especie de valor, no presenta lesiones ni contusiones visibles". Musita, ignora las condiciones en que ingreso al calabozo, haciendo presente que, como ha dicho antes, esta persona no presentaba lesiones ni contusiones, además que el trámite a que se refiere, lo hizo el Carabinero Marcos Aguirre Guajardo y el Carabinero Bernardo Aedo Leiva, conforme a sus propias declaraciones prestadas en la causa. Explica, que con Joel Pérez se encontraban en el primer turno de población, terminado el servicio a las 15:00 horas, cuando salió el otro turno a la población, de lo que se dejó constancia del termino de servicio en el libro guardia Folio N°192, párrafo 15 y a su vez el jefe de servicio de primer turno Sargento 1 ° Fideromo Vásquez López, que dejó la recogida en el libro de población con horario de 15,20 horas, con la

respectiva constancia de detención y entrega en a la guardia de Marco Quezada, sin novedad, conforme a transcripción efectuada en el sumario administrativo de Carabineros de Chile, por parte del Señor Comisario Mauricio Catalán Devlahovich, que se encuentra agregado a fojas 45. Ensayo, Joel Pérez se retiró cómo casado a su domicilio. Inquieta, a las 15:25 horas, autorizado por el mando de la Unidad para trasladarse fuera de la guarnición, con lista de cero una a la ciudad de Victoria, para regresar a su servicio de segundo turno el día domingo 25 de junio de 1989, a las 14:25 horas, de ello quedó constancia en el libro de guardia, a folio 192, párrafo n° 17 que consta en la causa. Precisa, el domingo 25 de junio de 1989, alrededor de las 14 horas, se enteró del fallecimiento de Marcos Quezada. Ostenta, el Carabinero José David Manríquez Toledo, se encontraba de servicio de guardia rotando el rol de cuartelero y vigilante exterior con el Carabinero Bernardo Aedo Leiva. También hace presente que los Carabineros Bernardo Aedo Leiva y Erik Vásquez Ordenes, señalaron que alrededor de las 18,00 horas ingresaron a un detenido por ebriedad a un calabozo colindante en el *que se encontraba Marcos Quezada*, y constaron por la ventanilla del calabozo que este se encontraba con vida, de ello hay constancia a fojas 33,34 y 35 por parte de Bernardo Aedo y a fojas 121 y 122 de Erik Vásquez, el detenido que ellos ingresaron se llama Juan Norberto Maldonado Pacheco.

A.33 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR (21 años a la fecha de los hechos), declaraciones a fs. 1915 a 1916 (Tomo VI) y de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII).

En declaración extrajudicial de fecha 08 de marzo del 2017, rolante a fs. 1915 a 1916 (Tomo VI), expone que en agosto de 1987 ingresó a Carabineros de Chile, siendo su primera unidad la 5ta. Comisaría de Carabineros de Curacautín hasta el año 1995. El deponente refiere que en el año 1989 era dotación de la 5ta. Comisaría de Curacautín ostentando el grado de Carabinero. Cuenta que esa unidad estaba al mando del Mayor Catalán siendo secundado por el Capitán Adriazola. Dentro de sus compañeros de funciones recuerda a Hormazabal, Almendras, Patricio Ramírez, Roberto Cáceres Acuña, Carlos Herrera Aguilera, Jorge Montoya Martínez, Hugo Muñoz López, entre otros. Ostenta que sus funciones al interior de la Comisaría, consistían en realizar servicios ordinarios, así como servicios a la población, guardia en el cuartel, patrullajes y esporádicamente vigilancia de calabozos, entre otras cosas. Invoca, durante su carrera funcionaría jamás perteneció a organismos extra o institucionales de inteligencia, así como tampoco realizó cursos o especializaciones en el área. Asevera que al interior de la 5ta. Comisaría de

Curacautín existía una comisión civil, enterándose por comentarios que el funcionario Almendras, pertenecía a esta comisión, no teniendo certeza de dicha situación. Inquiere, no tiene memoria de la fecha exacta, pero en una ocasión se enteró por dichos de otros funcionarios que una de las personas detenidas, se habría suicidado al interior del calabozo, desconociendo mayores antecedentes de las circunstancias de la muerte de esa persona. Glosa, que no conoció a la víctima y desconoce las circunstancias de su fallecimiento. Urde que con el paso de los años, se enteró que algunos funcionarios en retiro de Carabineros, que estuvieron de servicio y participaron de la detención de la persona indicada, se encuentran procesados por el suicidio del detenido al interior del calabozo, no conociendo mayores detalles de la situación.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), ratifica la declaración extrajudicial que rola de fs. 1.915 a 1.916. Sin embargo, desea rectificar o añadir algunas cosas según lo que expresará. Ese día estaba saliente de servicio nocturno, volvió tarde – noche, como las 19:00 o 20:00 horas. Continúa, los sistemas de turnos de esa época, no los recuerda. El Tribunal le exhibe las fojas 141 y 147 del expediente rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia que se tiene a la vista. El deponente indica ese día efectivamente estaba de turno, no recuerda donde fue, pero entraron a las 15:00 horas al turno, y luego regresaron a la unidad, pero no los dejaron entrar, así que continuaron patrullando hasta las 23:00 horas aproximadamente. Interpreta, tomó conocimiento en la tarde del hecho que se investiga, al llegar a la unidad, recordando que no permitían ingresar a la unidad porque un detenido se había ahorcado al interior. Incluso, musita que tuvo que permanecer un lapso de tiempo más o menos largo fuera de ella, porque no dejaban entrar, esto lo recuerda porque dormía en la Comisaría. Explana, al tiempo después se supo que la comisión civil estuvo en el procedimiento, pero es lo único que sabe. No tiene memoria que lo haya llamado la Fiscalía Militar a declarar por este caso. Recuerda al Suboficial Mayor Araneda quien en esa fecha tenía un "tic" nervioso en la zona del rostro y cuello. Esta persona trabajaba en Malalcahuello en ese tiempo. Se conocieron en Carabineros, en Curacautín. Desconoce el origen del "Tic" de Araneda, cuando lo conoció esta persona ya tenía esa condición. Destaca, si bien no recuerda haber visto ese día Araneda, era común que los jefes de unidades menores hayan ido a dejar documentación a la Comisaría. Reitera que no tiene claro bien lo que pasó ese día, pero no estuvo físicamente en la unidad, sino de patrullaje en la población. Delibera, José Fernández Cofré, era parte de la dotación de Curacautín, suma él vivía en Curacautín y viajaba al retén de Manzanar, en esa época se demoraban entre 10 a 15 minutos para llegar a ese

sector. Desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, José Fernández Cofré haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad. Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

A.34 JORGE OMAR MONTOYA MARTÍNEZ (27 años a la fecha de los hechos), declaraciones a fs. 1917 a 1918 (Tomo VI) y de fs. 2129 a 2130 (Tomo VII).

Declaración extrajudicial de fecha 08 de marzo de 2017, rolante a fs. 1917 a 1918 (Tomo VI), atina que en diciembre de 1985 ingresó a Carabineros, siendo su primera unidad la 5ta. Comisaría de Carabineros de Curacautín, unidad en la que permaneció hasta el año 1998. Barbulla que en el año 1989, era dotación de la 5ta. Comisaría de Curacautín, ostentando el grado de Carabinero. Recuerda que esa unidad estaba al mando del Mayor Mauricio Catalán Devlaouch, siendo secundado por el Capitán César Adriazola Azocar. Dentro de sus compañeros de funciones menciona a Romelio Molina Bustos, Alonso Tekol Gallardo, Patricio Ramírez Gática, Juan Flores Morales, Roberto Cáceres Acuña, Carlos Herrera Aguilera (+), Johnny Concha Salazar, Bernardino Ortiz, Hugo Muñoz López (+), Carlos Gutiérrez Astete y Mario Luna Cea (+), entre otros. Su labor al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín durante el año 1989, consistían en realizar labores de estafeta de esa unidad policial, en donde diariamente se trasladaba hasta la Prefecto Malleco, ubicada en la ciudad de Angol. Glosa, durante su carrera funcionaría jamás perteneció a organismos extra o institucionales de inteligencia, así como tampoco realizó cursos o especializaciones en el área. Divulga, al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín existía una comisión civil, enterándose por comentarios que el Cabo 2do. Almendras Illesca, pertenecía a esta comisión, no teniendo certeza de dicha

situación. Barbullá, supo por comentarios de otros funcionarios que una de las personas detenidas al interior de los calabozos de la unidad policial, se habría suicidado desconociendo mayores antecedentes de las circunstancias de la muerte de esa persona, así como tampoco tiene memoria de los funcionarios que lo detuvieron. En relación a la víctima de los hechos investigados, cuya identidad se le da a conocer como Marcos Quezada Yáñez, señala que no lo conoció ni lo ha oído nombrar antes, desconociendo con exactitud las circunstancias de su fallecimiento. Afirma, la pensión el dante, estaba ubicada en calle Arturo Prat, entre las calles Yungay e Iquique, desconociendo si en la actualidad continúa funcionando como tal.

Declaración judicial de fecha 25 de octubre de 2017, rolante de fs. 2129 a fs. 2130 (Tomo VII), ratifica la declaración extrajudicial que rola de fs. 1.917 a 1.918. En esa época cumplía labores de estafeta, teniendo que dirigirse diariamente hasta la comuna de Angol, a la Prefectura de Malleco a dejar documentación y además, llevar lo pertinente a Curacautín. Para esas labores utilizaba locomoción colectiva, es decir bus. Detalla que para poder ir a Angol, debía llegar a Victoria, luego hacer un trasbordo y tomar otro bus para ir a Angol, pues no había buses directos entre Curacautín y Angol. En uno de los trayectos se demoraba alrededor de 2 horas, es decir era el tiempo en llegar desde Curacautín a Angol. Dice, en junio de 1989 estaba soltero, debiendo pernoctar diariamente en el lugar destinado para ello dentro de la unidad. El Tribunal le exhibe al deponente la foja 141 de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista en este proceso. El deponente indica que respecto al registro que se señala en esa foja, donde consta que ingresó a las 15:05 horas a la unidad, significa que efectivamente cumplió con su labor y llegó a la unidad. Luego de concluir su labor diaria de estafeta, se dirigía al archivo de la unidad, de la cual estaba a cargo, archivando todo tipo de documentación especialmente todo lo que se originará de la oficina de partes. Manifiesta, el archivo estaba ubicado justo al lado de la oficina de partes y al lado de la oficina del Comisario. En relación a la distancia de los calabozos, la oficina de archivo estaba a unos 8 o 10 metros desde la salida hacia el patio interior de la unidad. Especula, el practicante de la unidad era un Suboficial Mayor, cuyo nombre no recuerda. Su régimen de trabajo en la unidad era diurno, desde las 08:00 hasta las 13:00 aproximadamente y luego entre las 15:00 y las 19:00 h. aproximadamente. Tiene entendido que cuando el practicante no estaba, la oficina quedaba con llave. En relación a lo que se le consulta, copia de las llaves de esa oficina, por protocolo, deberían quedar en la guardia de la unidad, a cargo del funcionario correspondiente. Estima, el médico de la unidad, iba esporádicamente, ciertas

horas al me, pero su régimen de trabajo no puede precisarlo. Basa, en cuanto a una camilla o carro que pudiera haber existido en la unidad de Curacautín, no recuerda haber visto algo similar, salvo la camilla de la oficina del practicante, pero no tenía ruedas, era fija. Respecto a José Fernández Cofré pertenecía al retén Manzanar, dependiente de la unidad de Curacautín. Recuerda que era jefe de ese Retén. No recuerda que esta persona se haya desempeñado en la unidad de Curacautín haciendo servicios en junio del año 1989, solo lo conocía como jefe de Retén. Comenta, la comisión civil en esa época se dedicaba a investigar delitos. No recuerda que hubiera una comisión especial para investigar el tema de los alcoholes. Delibera, acerca de la comisión que integró Fernández Cofré el día de los hechos que se investigan, junto a dos funcionarios más del Retén Manzanar en la Comisaría de Curacautín, dice desconocer el hecho, ignorando las razones para que este funcionario fuera a la unidad en circunstancias que había bastante personal en unidad de Curacautín. Soslaya que el Suboficial Araneda tenía un "Tic" nervioso en el rostro. Esta persona cuando llegó el año 1986, ya tenía esa condición. No recuerda haberlo visto el día de los hechos que se investigan.

A.35 JOSÉ ARTURO ARANEDA PULGAR (46 años a la fecha de los hechos), declara a fs. 1952 a 1953 (Tomo VI); 1960 a 1961 (Tomo VI) y de fs. 1963 a 1964 (Tomo VI).

En declaración extrajudicial de fecha 24 de mayo de 2017, a fs. 1952 a 1953 (Tomo VI), comienza haciendo una reseña de su carrera funcionaria, en lo pertinente decanta que para la fecha de los hechos investigados, se desempeñaba como Jefe de Retén Malalcahuello ubicado a 30 kilómetros aproximadamente de Curacautín, teniendo a cargo siete funcionarios de menor antigüedad. Adosa que el Retén Malalcahuello dependía directamente de la Comisaría de Curacautín, teniendo comunicación directa con estos. Recuerda que esa unidad estaba a cargo del Mayor Mauricio Catalán Devlahovich. Sus labores como Jefe de Retén de Malalcahuello consistían en coordinar, supervisar y en muchas oportunidades realizar los distintos servicios montados, motorizados o de infantería junto a su personal, como asimismo las entrevistas que ordenaban por pauta la superioridad con el Retén Manzanar y Sierra Nevada. Relata, no recuerda que durante su permanencia en el Retén Malalcahuello hubiese recibido una instrucción donde debiera prestar colaboración junto a sus funcionarios dependientes, a la 5ta. Comisaría de Curacautín. Atestigua que era común que asistiera a la Unidad Base (5ta. Comisaría de Curacautín) a las reuniones efectuadas por el Mayor Mauricio Catalán y el Subcomisario Capitán César

Adriazola Azocar, además de buscar y entregar documentación a esa como a los distintos Tribunales. Consultado por la víctima, refiere haberlo conocido, toda vez que era un joven de la localidad quien usualmente andaba distintos lugares de la ciudad, tales como paraderos de buses, plaza, siendo regularmente visto jugando o compartiendo con otros jóvenes de su edad. En una oportunidad el Comisario Mayor Mauricio Catalán, citó a los Jefes de Destacamentos y personal de la unidad a una reunión urgente, donde dio a conocer una situación que tenía relación con un joven que se habría suicidado al interior de un calabozo en la 5ta. Comisaría de Curacautín. En razón de eso, dio instrucciones necesarias, haciendo énfasis en asegurar los calabozos, es decir fijar los objetos al interior de éstos así como también restringir el acceso al tendido eléctrico y en lo posible mantener un vigilante de calabozos para prevenir situaciones de ese tipo. Desconoce quiénes detuvieron a Marcos Quezada Yáñez, así como también cualquier antecedente respecto al procedimiento, además de los funcionarios que estuvieron de guardia o servicio la noche en que falleció.

En declaración judicial de fecha 30 de mayo de 2017, a fs. 1960 a 1961 (Tomo VI), ratifica la declaración extrajudicial del día 24 de mayo de 2017. Afirma, los viajes a la Comisaría de Carabineros de Curacautín eran periódicos, ya que en esa época, específicamente en diciembre de 1988, se produjo la erupción del cráter navidad del volcán Lonquimay, por lo que había que hacer una vigilancia permanente en los sectores. Por esta razón, es que viajaba constantemente a Curacautín, sosteniendo reuniones de coordinación con las diferentes autoridades de la zona. Musita, el cráter navidad estuvo haciendo erupción durante bastante tiempo y esa información está en la prensa de la época ya sea escrita o audiovisual. Invoca, en esa época mantenían una libreta de patrullaje, donde se anotaban todos los movimientos que se hacían dentro del territorio, inclusive las cargas de combustibles fuera del territorio. Explaya, cuando se presentaba en una Unidad Base, es decir en la 5º Comisaría de Carabineros de Curacautín, citado por el comisario correspondiente, sus entradas y salidas de esa unidad quedaban registradas en el libro de guardia, siendo responsabilidad del Suboficial de guardia anotar esa información, y su vigilancia del Comisario y Subcomisario de la unidad. Precisa, las constancias se hacían al momento de retirarse de la comuna, es decir, se iba en bus a Malalcahuello y cuando estaba abordando el bus llamaba a la unidad y decía que se retiraba de ella. En ese momento el Suboficial de guardia debía anotar la salida de la unidad. Lo mismo pasaba cuando se andaba en vehículo de la unidad. El tic se le originó cuando estaba jubilado. Recuerda que fue a andar a caballo y se accidentó, padeciendo una lumbociática con una hernia discal. Todo esto se produjo

alrededor del año 1997. Antes de esa fecha no tenía un "tic" como este. Difunde, no recuerda que otro funcionario tuviera algo similar. El tribunal le lee en lo pertinente, lo descrito a fs. 144, de causa rol 119/89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, a la vista en este proceso. El deponente asevera, es perfectamente posible que aparezca saliendo de la unidad, pues en esa época también tenía permiso para ir una vez a la semana o en una cierta cantidad de días a alojar a Curacautín, junto a su familia, que residía en ese lugar. Respecto lo que se señala en el libro de guardia como "V/P 1 y 5" corresponde a "Ver Párrafo 1 y 5", es decir ver párrafos 1 y 5 del mismo libro de guardia. Su entrada no aparece en lo pertinente del libro, pero eso se debe a que no está completo, faltan las hojas del día anterior. El Tribunal le lee, en lo pertinente, la declaración que rola de fojas 1.087 y siguientes. El deponente indica desconocer totalmente el procedimiento que señala Juan Nolberto Maldonado Pacheco, al cual no conoce e ignora que funcionario tenía un "tic " en la cara y que podría ser el que menciona esta persona. Supo de lo sucedido con el joven, pero al tiempo después, cuando él Mayor los citó a una reunión por los procedimientos con detenidos. Tampoco supe quien detuvo al joven, ni cuál era el personal en ese momento.

En diligencia de careo de fecha 30 de mayo de 2017, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y José Araneda Pulgar, a fs. 1963 a 1964 (Tomo VI), refiere que no se conoce a la persona que a esta su lado, el tribunal le indica que se trata de don Juan Nolberto Maldonado Pacheco. Ratifica la declaración que rola de fs. 1.960 y siguientes. Alega, no haber estado en la Comisaría cuando se adoptó el procedimiento. Suma, es primera vez que ve a esta persona, no tiene nada que decir de él. Continúa, supo lo que sucedió a los 2 o 4 días después, cuando el Mayor convocó a una reunión y antes de ella los funcionarios comentaron lo que había pasado. Incluso al ir al patio, no pudieron ir al sector de ese calabozo porque estaba clausurado, seguramente por la investigación en curso. Ahora, en el destacamento no se enteraron de lo sucedido, ya que ese tipo de cosas no se dan a conocer vía radial. Apoya, cuando los Carabineros le comentaron del joven que se había suicidado en los calabozos, le pregunté por el nombre e indicó que lo ubicaba. Todos los carabineros de la unidad saben que no estuvo allí, en los momentos que ocurrieron los hechos que se investigan.

A.36 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA (45 años a la fecha de los hechos), declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a

hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Cuenta, en Curacautín, era referente político de izquierda desde los 15 años, ayudando a la formación del Partido por la Democracia en aquella época, es decir, año 1989 aproximadamente. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido, y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquiere, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven eran muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explana que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Este joven vivía en la calle Angostura y su patio colindaba con un Carabinero de apellido Fernández, apodado "el chico" y que vivía en la avenida Manuel Rodríguez entre Iquique y Yungay. En una oportunidad lo detuvieron porque usaba un par de zapatillas nuevas, las cuales él le había pasado dinero para que las comprará, tuvo que ir él mismo a Carabineros a mostrar las boletas. En otra oportunidad lo detuvieron por andar con unos panfletos, eran cosas que se inventaban y no comprobaban. Espeta, el Carabinero Fernández era muy malo, se especializaba en torturas, esto lo sabe porque todo Curacautín lo sabía y además, cuando estuvo preso esta persona disfrutaba con eso. Recuerda muy bien a un escribiente que actualmente vive en Lonquimay, además del Teniente Sanhueza, quienes participaban en las torturas el año 1973 en la Comisaría de Curacautín. Conjetura, Fernández estaba en Curacautín en esa época, y si no estaba lo mandaban a buscar a Victoria, que es el lugar donde también se desempeñó. El tribunal le consulta si el escribiente que se refiere es Luis Mora Morales, señalando el deponente que no, que no es esa persona. Que el escribiente al que se refiere vive actualmente en la comuna de Lonquimay, es casado con una mujer de apellido Oliva y el cuñado tiene una vulcanización en Curacautín en la primera cuadra de calle Manuel Rodríguez. Narra, era asesorado por don Federico Klein Reidel y María Elena Pezoa Contreras en el tema jurídico o algunas otras cosas el año 1973. Ensaya, cuando supo del fallecimiento del muchacho, él fue con la madre de Marcos Quezada a dejarle comida y el que estaba de guardia les dijo que se llevaran la comida porque no servía de nada, no dando explicaciones. Entonces llamó por teléfono al abogado Klein a Temuco y al otro día en la mañana llegó a Curacautín, y entonces él le pidió que fuesen hablar con el juez, don Oscar Viñuela, este magistrado dijo que Marcos Quezada Yáñez no tenía ningún indicio de ahorcamiento, porque estaba con una chomba roja semi puesta, con sus manos quemadas en los dedos y semi desnudo con la

chomba por un lado puesto. Explicita, que don Federico amenazó al Juez con un recurso de Queja por no haber ido con un actuario hasta ese lugar y haber levantado un acta por esa gestión y que eso el juez no lo podía hacer. En ese momento Viñuela dijo que Marcos Quezada no tenía los síntomas propios de un ahorcamiento, como es la salida de fluido del cuerpo, el cuello morado, entre otras. La conversación descrita él la presencié. Agrega, Viñuela dijo que iba a conseguir con el Mayor que había en ese tiempo, Mauricio Catalán, de quien era amigos de asados y todas esas cosas, que los dejaran entrar a la Comisaria. Acompañó al Abogado Klein en su gestión y fueron a la Comisaria, apreciando el cuerpo de Marcos Quezada en el suelo de la celda, esperando a una tanatóloga de Angol, que era la de Carabineros. Todo esto fue alrededor de las 11:00 de la mañana del día siguiente. El juez Viñuela no los acompañó a la Comisaría. Escruta, la celda era nueva, no tenía vigas en las paredes pero sí en el techo. Sin embargo, a pesar de tener vigas en el techo, no había espacio por el que se pudiera poner algo para colgarse. Como sabía que iban a hacer un informe sesgado, armó un escándalo en el pueblo a través de la radio y llamó a las diversas radios contando este hecho, entre ellos a la radio Cooperativa en Santiago, en Temuco a la radio Ñielol y también a la radio Chilena. Aproxima, en Temuco había un médico tanatólogo de nombre Wolfgang Reuter y don Federico Klein se comunicó con él y el médico fue a Curacautín a ver el cuerpo y emitió un informe y en él se consignó que Marcos Quezada fue electrocutado, tenía quemaduras en varias partes de cuerpo. Este informe no lo vio, pero sabe que existe porque se lo comentó don Federico Klein y el mismo médico. Incluso sabe que el doctor pidió ir a ver la celda y sacó sus conclusiones. Soflame, no ingresó a la celda con el médico, esperó afuera de la Comisaría. Anexa, el informe más preciso fue el que evacuó el Juez Viñuela. Este informe nunca lo leyó, pero presume que este magistrado informó lo mismo que dijo al abogado Klein. Afinca, desconoce si el Abogado Klein aún vive, en esa época tenía alrededor de 70 años, era una persona mayor. Esta persona era el presidente del Partido por la Democracia a nivel regional y tuvo varios cargos públicos a nivel nacional y extranjero. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de intentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

Respecto al Carabinero José Araneda Pulgar, le decían "el mascada grande" porque tenía un problema nervioso en su mandíbula, como una especie de "tic". Según lo que puede acordarse este "tic" lo tenía desde los años 70 aproximadamente. Hace presente al Tribunal que no está en condiciones física de viajar hasta Temuco, por lo que pide tener presente su condición de salud al momento de volver a prestar declaración por estas causas que se investigan. Es su mayor interés cooperar en todo lo que pueda, pero siempre que sea cercano a su domicilio, es decir a Curacautín.

A.37 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA (27 años a la fecha de los hechos), declaraciones de fs. 2072 a 2073 (Tomo VI) y de fs. 2186 a 2187 (Tomo VII).

Declaración extrajudicial de fecha 13 de septiembre de 2017 rolante de fs. 2072 a 2073 (Tomo VI), anima que el 01 de octubre de 1981 se contrató en Carabineros de Chile, su primera destinación fue 5ta. Comisaría de Curacautín, unidad en la que permaneció alrededor de 14 años, desempeñándose en los distintos destacamentos dependientes de esa unidad, tales como, Manzanar, Rariruca, Malalcahuello, Liucura, entre otros, hasta el año 1996. En relación a su consulta, anexa que en el año 1989, ostentaba el grado de Carabinero, y se desempeñaba en la 5ta. Comisaría de Curacautín. Recordando que esa unidad estaba al mando del Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, siendo secundado por el Capitán César Adriazola Azocar. Dentro de sus compañeros de funciones recuerda a Patricio Ramírez Gática, Juan Flores Morales, Albino Jiménez Altamirano, Bernardino Ortiz Henríquez, Lucas Bascuñan Valdebenito, Roberto Ruiz Aguilar y Carlos Gutiérrez Astete, entre otros, quienes ostentaban su mismo grado. De los funcionarios más antiguos, menciona al Suboficial José Fernández Cofré y Alonso Tekol Gallardo. Atestigua, sus labores al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín durante el año 1989, consistían en desempeñarse como conductor de servicio, lo que significaba que debía conducir cada vez que se salía de turno a la población, recordando además que los funcionarios de apellidos Mendoza y Muñoz, igual se desempeñaban como conductores, correspondiéndole incluso trasladar al Comisario en sus labores de jefe. Siendo esas sus labores, toda vez que en la Unidad tenían dos vehículos. Manifiesta que durante su carrera funcionaría jamás perteneció a organismos extra o institucionales de inteligencia, así como tampoco realizó cursos o especializaciones en el área. Afirma que al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín existía una comisión civil, quienes según recuerda se hacían cargo de los procedimientos por robo, hurto, entre otras cosas, y siempre vestían de civil.

Anexa, la comisión civil, estaba compuesta por los funcionarios de apellidos Almendras Illesca, Pérez Isla y Ponce Salvo, entre otros que no puede recordar en este momento. Describe, al iniciar su servicio de conductor a las 08:00, supo que durante la noche una de las personas que se encontraba detenida al interior de los calabozos del cuartel se había suicidado, sin tener mayor información, inició su servicio y salió a la población, incluso sin saber la identidad de la persona fallecida. Distingue, al llegar al cuartel, los calabozos estaban aislados, y el personal del servicio de turno del día interior, aun se encontraba en la Unidad, no recordando quienes eran. En relación a la víctima Marcos Quezada Yáñez, lo conocía por ser de Curacautín y al ser una ciudad pequeña era habitual que se conocieran entre todos, enterándose posteriormente que la persona que había muerto al interior de un calabozo correspondía a Marcos Quezada, sorprendiéndose, aún más, pues desconocía de su detención. Indica, era habitual que Marcos Quezada Yáñez, permaneciera en la unidad, varias veces fue detenido por el delito de hurto, siendo uno de los delincuentes habituales. Relata, jamás supo que al interior de la 5ta. Comisaría de Curacautín hubiese algún elemento para dar corriente a las personas, desconociendo inclusive la causa de muerte de Marcos Quezada. Suma, con el paso de los años no se ha enterado de ningún otro antecedente de los hechos investigados.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), ratifica la declaración extrajudicial de fs. 2.072 a 2.073. Está seguro que el día 24 de junio de 1989, no estaba de servicio, porque llegó al día siguiente. El Tribunal le exhibe la fs. 147 y fs. 150 de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, a la vista en este proceso, en las cuales se menciona que él estaba de servicio en la población y además participó del traslado de un detenido hasta el Centro de Detención preventiva de la comuna de Curacautín. El deponente indica que a pesar de lo que se le lee y exhibe no recuerda haber estado ese día en la unidad. Han pasado tantos años que tiene exactitud de lo que ocurrió, sólo lo que ha manifestado en su declaración policial. Continúa, al entrar al servicio el día siguiente, la parte de los calabozos estaban aislados, con cinta. Los furgones estaban alejados de ese sector. Decanta, nunca declaró por este hecho ante un Tribunal o Fiscalía Militar. Aquilata, Arturo Araneda Pulgar tenía un "tic" en el cuello, hacía un movimiento involuntario con su rostro. Era la única persona que tenía en esa época esa condición o "tic". El Suboficial Mayor Torres, era practicante de la unidad, se desempeñaba en una dependencia ubicada alrededor de 8 metros de los calabozos. Este funcionario, al parecer, tenía horario de lunes a viernes y creo que cada quince días debía trabajar los fines de semana. También había un médico de apellido Chaín e iba dos veces a la

semana, cree que los miércoles y viernes, pero nunca los fines de semana. Deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una saña donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas. Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio. El Tribunal le consulta si ha mantenido contacto telefónico, personal o de otro tipo con otros funcionarios de la época de la unidad de Curacautín para intercambiar información respecto al caso que se investiga. El deponente señala que no lo ha tenido.

A.38 CARLOS ALEJANDRO GUTIÉRREZ ASTETE (20 años a la fecha de los hechos), declaración extrajudicial de fecha 16 de noviembre de 2018, a fs. 2560 a 2561 (Tomo VIII), dice que ingresó a Carabineros de Chile el día 1 de diciembre del año 1987, al Grupo de Instrucción Ancud, cumpliendo instrucción por un año siendo destinado a la 5ta. Comisaria de Carabineros de Curacautín, hecho que se concretó en el mes de diciembre de 1988. Hace presente, que en Curacautín estuvo cerca de dos años pasando por distintos destacamentos como el Reten Rariruca y reten Manzanar. Para 1989 la 5ta. Comisaria de Carabineros de Curacautín estaba a cargo del Mayor Mauricio Catalán, siendo secundado en el mando por el Capitán Cesar Adriazola Azocar, del resto del personal indica al Cabo 2do. Pérez Isla, el Suboficial Suazo, los Carabineros Ortiz, Hormazabal, Concha Aedo, Ponce y Rivas Inostroza. En junio de 1989, cumplía labores en la 5ta. Comisaria de Curacautín, aún no era enviado a los retenes dependientes de esta unidad y por lo que recuerda generalmente salían a efectuar servicios en la población los que se dividían en primer, segundo tercer turno, durmiendo en las dependencias habilitadas para esos efectos, en la Comisaria. Escruta, que el día de los hechos, esto es 24 de junio de 1989, iba llegando de su franco a la Comisaria, cuando al ingresar vio al personal alterado, comentando que al interior de un calabozo se había ahorcado una persona, no teniendo mayores detalles al respecto. Descarga no recordar las identidades de los funcionarios de guardia que estaban de turno ese día, lo que sí tiene claro es que el Capitán Adriazola, se encontraba a cargo de la unidad puesto que el Mayor Catalán se encontraba fuera de la unidad, ignorando si estaba con feriado o permiso. Divulga, el Cabo Aedo, se encontraba cumpliendo la función de vigilante exterior. Estima haber llegado cuando estaba oscureciendo a la unidad, porque venía de Temuco, porque su madre vivía en dicha ciudad, debe haber sido a las 21:30 aproximadamente, sin

embargo se fue acostar porque al día siguiente estaba de primer turno, sumado a que el Capitán Adriazola, no lo consideró en el procedimiento que había en el calabozo. En relación a lo anterior, exclama posteriormente a este hecho en medio de una reunión de "Pago de Haberes", se habló sobre la muerte de esta persona, aconsejando el Capitán Adriazola que no se hablará más del tema debido a que se había iniciado un sumario por ese hecho. Asegura, no haber tomado conocimiento de ningún detalle de la muerte del niño de 17 años, por medio de colegas.

B. DOCUMENTOS (49).-

- 1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney.
2. Documento acompañado en la querella criminal presentada por Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez.
3. Oficios del Servicio Médico legal de la Araucanía.
4. Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.
5. Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad.
6. Informes de Carabineros de Chile.
7. Oficio del III Juzgado Militar de Valdivia.
- 8 Copia de causa rol 119-89 de ingreso del IV Juzgado Militar de Valdivia.
- 9 Informe del departamento de medicina criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile.
- 10 Copia de sentencias ordenadas a agregar al proceso.
- 11 Informe en derecho del Abogado Doctor Hernán Quezada Cabrera ordenadas a agregar al proceso.
12. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago.
13. Resolución reserva n° 226, de 03 de agosto de 2016 de la Jefatura Nacional de Criminalística.
14. Informe policial n° 4874/702, de 06 de octubre de 2016 de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile.-
15. Informe Pericial Planimétrico n° 384-2016, de 05 de diciembre de 2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Temuco, de la Policía de Investigaciones de Chile
16. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco
17. Informe n° 1169 del Servicio de Registro Civil e Identificación.
18. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental.
19. Ordenes de investigar, debidamente diligenciadas de la unidad de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile.
20. Certificación del Secretario de la Fiscalía Militar de Angol.
21. Dictamen Fiscal N° 33, de fecha 18 de diciembre de 1989, del IV Juzgado Militar.
22. Sobreseimiento N° 12, de 11 de enero de 1990 del IV Juzgado Militar.
23. Memorándum n° 50/10, de 02 de septiembre de 2010.
24. Oficio N° 308, de fecha 28 de octubre de 2010 de la Corte Marcial Chile.
25. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.
26. Oficio del Intendente IX a doña Nélida Yáñez Bustos.
27. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín.
28. Acta de inspección ocular.
29. Orden de ingreso, de fecha 03 de julio de 1989, emitido por el IV Juzgado Militar.

30. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín.
31. Orden de egreso del 07 de julio de 1989, del IV Juzgado Militar de Valdivia.
32. Ficha clínica de Marcos Quezada Yáñez.
33. Oficio N° 589, del 03 de agosto de 1989 de Carabineros de Chile.
34. Resolución N° 1629, del 09 de agosto de 1989, del departamento de Asesoría técnica.
35. Set fotográfico del sitio del suceso, de fecha 03 de julio de 1989.
36. Oficio Reservado N° 336, de la Prefectura de Carabineros Malleco N°21.
37. Informe pericial de análisis N° 01589, del 09 de septiembre de 1989.
38. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco.-
39. Resolución exenta n° 02, de 05 de enero de 2005, de Carabineros de Chile.
40. Informe médico de Cesar Adriazola Azocar, de Carabineros de Chile.
41. Certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación.-
42. Certificado emitido por Carabineros de Chile, del 17 de marzo de 2015.
43. Resolución exenta N° 02, de 19 de febrero de 2007, de Carabineros de Chile.
44. Certificado médico de Joel Pérez Isla, de fecha 19 de marzo de 2015.
45. Certificado médico de Joel Pérez Isla, de fecha 08 de abril de 2015.
46. Oficio N° 419, del 22 de octubre de 2018, del departamento de derechos humanos de Carabineros.
47. Oficio N° 0058, del 10 de enero de 2022 del Hospital de Coyhaique.
48. Informe de la Vicaría de la Solidaridad.
49. Oficio N° 1169, del departamento de archivo general de Registro Civil e Identificación.

B.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 445 (Tomo II), copia de la cual se encuentra a fs.206 (Tomo I), 491 (Tomo II) y 1619 (Tomo V), certificado de nacimiento de Marcos Quezada Yáñez.-**
- b) A fs. 446 (Tomo II), copia de la cual se encuentra a fs. 205, 373, 493 (Tomo II) y 1619 (Tomo V) certificado de Defunción de Marcos Quezada Yáñez.**
- c) A fs. 447(Tomo II), copia de la cual se encuentra a fs. 492 (Tomo II), inscripción de nacimiento de Marcos Quezada Yáñez.-**
- d) A fs. 448 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 370 y 494 (Tomo II), registro de defunción de Marcos Quezada Yáñez.-**
- e) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez, consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.**

- f) **A fs. 450 (Tomo II)**, copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelactasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*
- g) **A fs. 453 (Tomo II)**, copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotanológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*
- h) **De fs. 454 a fs. 456 (Tomo II)**, copia simple de los antecedentes del caso, presentado a la **Comisión Chilena de Derechos Humanos de Marcos Quezada Yáñez** que reúne los datos antecedentes de la víctima.
- i) **A fs. 457 (Tomo II)**, copia simple de los antecedentes del caso, presentado por la **Agrupación de familiares de ejecutados políticos a la Comisión nacional verdad y reconciliación, de Marcos Quezada Yáñez**, que reúne los datos antecedentes de la víctima, en octubre de 1990.-
- j) **A fs. 458 (Tomo II)**, copia que se encuentra a fs. 510 (Tomo II), **contiene copia simple del boletín CODEPU, junio- julio de 1989**, que hace referencia al caso sublite.

k) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que Marcos Quezada Yáñez, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

B.2. Documento acompañado en la querella criminal presentada por Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez, de fs. 1620 a 1625 (Tomo V), que se desglosa de la siguiente forma:

a) A fs. 1615 a 1.617 (Tomo V), certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación.-

B.3 Oficios del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 489 (Tomo II), contiene oficio n° 0197, del 19 de enero del 2012 del Servicio Médico Legal de la Araucanía, en virtud al cual remite fotocopia de protocolo de autopsia n° 181/1989 de Marcos Quezada Yáñez.

b) De fs. 1642 (Tomo V), contiene oficio n° 1854, del 27 de septiembre de 2016 del Servicio Médico Legal de la Araucanía, en virtud al cual informa que revisado el archivo histórico de tanatología, el número de autopsia correcto para el procedimiento realizado a don Marcos Quezada Yáñez corresponde al n° 181/1989. De igual forma, aparece adjunto un informe histológico, del 11 de julio de 1989.

c) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ *a) La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b) Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c) La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d) Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando*

el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e) La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrica característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f) Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g) Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h) La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

B.4 Informe del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

a fs. 518 (Tomo II), en virtud del cual se adjunta toda la información que posee de **Marcos Quezada Yáñez**, lo que se desglosa de la siguiente forma:

- a) A fs. 496 (Tomo II), contiene copia simple de la cédula nacional de identidad de Marcos Quezada Yáñez.-**
- b) De fs. 497 a fs. 504 (Tomo II), contiene informe del Comité de Solidaridad del Obispado de Temuco, del 13 de noviembre de 1990, que reúne antecedentes de la víctima.**
- c) Oficio n° 799, de fecha 21 de noviembre de 1990, rolante de fs. 512 (Tomo II), del Juzgado de letras de Mayor cuantía de Curacautín, informa el ingreso de las dos causales criminales, que tuvo Marcos Quezada Yáñez.**
- d) Oficio n° 1345, de fecha 30 de octubre de 1990, rolante de fs. 513 a 514 (Tomo II), de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, cita a prestar declaración a personal de Carabineros, que pueda tener conocimiento acerca del caso de Marcos Quezada Yáñez.**
- e) Oficio n° 1442, de fecha 08 de noviembre de 1990, de fs. 515 (Tomo II), de la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, solicita copia del sumario administrativo realizado al interior de Carabineros, por la muerte de Marcos Quezada Yáñez.**
- f) Oficio n° 762, de fecha 19 de noviembre de 1990, de fs. 516 (Tomo II), del Consejo Asesor superior de Carabineros, da respuesta al oficio N° 1442.**

B.5 Antecedentes proporcionados por la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad de fs. 351 a fs.371 (Tomo II), contiene expediente de la causa rol 119-89, del 4° Juzgado Militar de Valdivia, por la muerte de Marcos Quezada Yáñez.

B. 6 Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

- a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros,** que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.
- b) De fs.1815 a 1816 (Tomo VI), contiene Oficio n° 483, de fecha 15 de diciembre de 2016, del Departamento Derechos Humanos de Carabineros,** que adjunta el listado con la dotación del personal, entre marzo y diciembre de 1989, que se desempeñaba en unidades dependientes de la Comisaría de Curacautín.
- c) De fs.1990 a 2044 (Tomo VI), contiene Oficio n° 368, de 20 de septiembre 2017, del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros,** adjuntando los documentos que se desglosan de la siguiente manera:
 - c. i) De fs. 1990 a 2032 (Tomo VI),** copia fiel de la hoja de vida del funcionario José Arturo Araneda Pulgar, en el periodo que abarca los años 1965 a 1994, consta que ingresó en el año 1965 a Carabineros de Chile, y que en febrero de 1989 se presentó en el Retén Malalcahuello, hasta abril de 1992 donde es trasladado a la Subcomisaria de Lonquimay.
 - c.ii) De fs. 2015 a 2016 (Tomo VI), copia fiel de la fotografía de José Arturo Araneda Pulgar de la época.**
 - c.iii) De fs. 2033 a 2036 (Tomo VI),** copia fiel de Ficha médico- dental del funcionario José Arturo Araneda Pulgar.-
 - c.iv) A fs. 2037 (Tomo VI), copia fiel de la Resolución N° 565 de fecha 12 de junio de 1981,** certifica la comisión médica de Carabineros, en lo pertinente que el funcionario José Arturo Araneda Pulgar,

permaneció 41 días enfermo, por haber padecido de parálisis vestibular izquierdo súbita. Se encuentra recuperado y apto para el servicio.

c.v) A fs. 2038 (Tomo VI), contiene copia fiel del certificado de examen de salud de medicina preventiva de José Arturo Araneda Pulgar, de fecha 07 de noviembre de 1990.

c.vi) A fs. 2039 (Tomo VI), contiene copia fiel de la relación de licencias por enfermedad del Suboficial Mayor José Araneda Pulgar, del 01 de junio de 1994.

c.vii) A fs. 2040 (Tomo VI), certificado del Hospital de Carabineros, de fecha 31 de agosto de 2017, no mantiene registro ni ficha clínica del Suboficial Mayor José Arturo Araneda Pulgar.

c.viii) A fs. 2041 (Tomo VI), certificado de la Dirección de Sanidad de la Contraloría médica de Carabineros, de fecha 01 de septiembre de 2017, e informa que los registros de la época se encuentran incinerados, de acuerdo al D.S n° 3612 del Ministerio del Interior de 04 de julio de 1961.

c.ix) A fs. 2042 (Tomo VI), certificado de la Subdirección de red del centro médico dental Temuco de Carabineros de Chile, de fecha 30 de agosto de 2017, estampa que no existe ficha médica o dental del Suboficial Mayor José Araneda Pulgar Araneda, almacenada en dicho centro.

B. 7. Oficio del III Juzgado Militar de Valdivia, de fecha 15 de octubre de 2010, de fs. 437 a fs. 438 (Tomo II), acompaña certificación de causa rol 119-1989, emitido por Secretario del Tercer Juzgado militar y copias autorizadas.

B.8 Copia de causa rol 119-89 de ingreso del IV Juzgado Militar de Valdivia, por muerte del detenido Marcos Quezada Yáñez, de fs. 8 (Tomo I) a la fs. 368 (Tomo II), incorporada a fs. 520 (Tomo II).

B.9 Informe del departamento de medicina criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 755 a fs. 758 (Tomo III), informe N° 89, de 28 de octubre de 2013, en lo pertinente concluye que: “ **a)** Marcos Quezada Yáñez se encontraba vivo al momento del ahorcamiento; **b)** las lesiones cervicales descritas, corresponden al vínculo blando de lana, del suéter periciado; **c)** el occiso previo a su ahorcamiento, fue expuesto por terceros, a electricidad en ambas manos; **d)** probablemente

posterior a la electricidad, Marcos Quezada Yáñez, se encontraba incapacitado para realizar maniobras conducentes a su ahorcamiento, por lo que este acto, debió ser realizado por terceros.”

b) De fs. 1691 a fs. 1692 (Tomo V), informe N° 99, de 18 de agosto de 2016, en lo pertinente concluye: “ a) *El señor Marcos Quezada Yáñez, se encontraba vivo al momento del ahorcamiento; b) las lesiones cervicales, son concordantes con el vínculo blando, suéter de lana, encontrado en el sitio del suceso; c) el occiso previo a su fallecimiento, sufrió quemaduras del tipo eléctricas en dedos pulgar e índice, de ambas manos; d) las quemaduras, necesariamente fueron provocadas o facilitadas por un tercero, ya que el occiso se encontraba en un calabozo; e) las quemaduras fueron de carácter superficial, las que no impedían realizar maniobras necesarias para ahorcarse; f) En este contexto, se trataría de un ahorcamiento tipo suicida.”*

B.10 Copia de sentencias ordenadas a agregar al proceso, que se desglosan de la siguiente forma:

- a) De fs. 773 a 804 (Tomo III),** contiene Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 14 de marzo de 2001, causa caratulada “Barrios Altos vs Perú”.
- b) De fs. 805 a 881 (Tomo III),** contiene Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de fecha 26 de septiembre de 2006, causa caratulada “Almonacid Arellano y otros vs. Chile”.
- c) De fs. 882 a 898 (Tomo III),** contiene Sentencia de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Rancagua, en causa rol 103-2011, de fecha 12 de enero de 2013, que confirma la sentencia apelada de 18 de agosto de 2011.
- d) De fs. 899 a 908 (Tomo III),** contiene Sentencia de la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 29 de julio de 2013, en causa rol 40.184, en la cual se rechazan los recursos de casación en el fondo formalizados por los abogados Mario Márquez Maldonado, Marco Romero Zapata y Rodrigo Cortés Muñoz, en sus presentaciones en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua de 14 de enero de 2013, la que no es nula.
- e) De fs. 909 a fs. 973 (Tomo III),** contiene Sentencia de reemplazo de la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 22 de julio de 2011, rol 5219-10.

B.11 Informe en derecho del Abogado Doctor Hernán Quezada Cabrera ordenadas a agregar al proceso según resolución de fs. 974 (Tomo III), contenido de fs. 975 a 1013 (Tomo III).

B.12. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio

Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1539 a 1550 (Tomo V), informe pericial documental médico de forense, de fecha 14 de septiembre de 2015, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye: “ **a)** *la causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento;* **b)** *Debido a la escasa información disponible en el protocolo de autopsia no puede descartarse que el cuerpo del afectado haya presentado otras lesiones que no fueron descubiertas en el procedimiento, así como tampoco se puede confirmar ni descartar que las lesiones descritas en ambas manos correspondan a aplicación de corriente eléctrica;* **c)** *La muerte de la víctima es compatible (considerando el estudio de las fotografías, el tipo de vínculo y los hallazgos cervicales) con una muerte violenta sugerente del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia;* **d)** *En los antecedentes tenidos a la vista no se consignan elementos objetivos que permitan estimar la data de muerte del afectado al momento de realizarse la autopsia;* **e)** *Si se conservara la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha, respetuosamente se sugiere al Tribunal remitirla al Departamento de Tanatología del Servicio Médico Legal de Santiago para que sea re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”*

b) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: “**a)** *Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez;* **b)** *La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento;* **c)** *No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida;* **d)** *La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento;* **e)** *Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia;* **f)** *Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa*

histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”

B.13. Resolución reserva n° 226, de 03 de agosto de 2016 de la Jefatura Nacional de Criminalística, de fs. 1628 (Tomo V), informa remisión del expediente y disco compacto, mediante oficio (R) 1022 a la Brigada de Homicidios Metropolitana.

B.14. Informe policial n° 4874/702, de 06 de octubre de 2016 de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1693 a 1699 (Tomo V), en lo pertinente concluye: *“se puede establecer que la causa de muerte de Quezada Yáñez, corresponde a una asfixia por ahorcamiento tipo suicida, descartándose la participación de terceras personas en el hecho. De igual forma en relación a las marcas tipo quemaduras que presentaba la víctima en ambas manos, serian compatibles con exposición a la electricidad las que estarían en concordancia con la manipulación de los cables eléctricos sacados, desde el interior del kiosko de propiedad de Roberto Ruiz Aguilar, el 24 de junio de 1989, producto de un delito de robo en el cual se presume la participación de Quezada Yáñez.”*

B.15. Informe Pericial Planimétrico n° 384-2016, de 05 de diciembre de 2016 del Laboratorio de Criminalística Regional Temuco, de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fs. 1782 a 1793 (Tomo VI), dicho documento en lo pertinente concluye: *“a) La primera acción que habría realizado Marco Quezada Yáñez, habría sido la de subir sobre la tarima de madera que se encontraba apoyada en el muro poniente del calabozo, lo cual habría sido posible ya que él poseía una altura de 1,8 metros, según protocolo de autopsia, y la tarima 1,1 metros, además el poste central de la tarima ofrece una superficie de apoyo suficiente para ponerse de pie sobre ella; b) La segunda acción, la de alcanzar la viga, si habría sido posible, puesto que una vez de pie sobre la tarima, y según lo graficado en la lámina 3 de este Informe, una persona de 1,8 metros de altura alcanzaría con sus manos la viga ubicada a 2,73 metros de altura al piso desde su borde superior, inclusive encontrándose esta viga a una altura mayor a la descrita en los antecedentes; c) Una vez en esta posición el ángulo formado por el cuerpo y la horizontal (65°), es más cercano a la vertical, lo que brindaría estabilidad al sujeto; d) La acción de alcanzar con una manga del sweater la viga, encontrándose la otra manga anudada al cuello, o a la inversa, una vez anudada a la viga, alcanzar con la otra manga el cuello, habría sido posible, ya que la*

dimensión de extremo a extremo del sweater correspondería a 1,34 metros, longitud que cubriría los 56 centímetros, que según el Corte A-A' contenido en lámina 3 de este Informe, habría desde el cuello del sujeto a la viga; e) Por último, según esta Perito la acción de pasar por la rendija una de las mangas del sweater habría sido dificultosa según la posición adoptada por el sujeto, pero posible según tamaño graficado en este Informe; f) Sugiere a Ilustrísima Usía solicitar un pronunciamiento a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, respecto de apreciaciones netamente criminalísticas sobre la dinámica de los hechos por los cuales habría fallecido Marco Quezada Yáñez. Los antecedentes en los cuales se basa el presente Informe, se expresan en planos de planta, cortes, elevaciones e imágenes las que se presentan en cinco láminas y se incorporan al presente Informe Pericial Planimétrico.”

B.16. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.

B.17. Informe n° 1169 del Servicio de Registro Civil e Identificación, de fecha 22 de diciembre de 2016, de fs. 1880 a 1884 (Tomo VI), copia de lo cual se encuentra en cuaderno reservado de fs. 1 a 260, el cual acompaña fotografías de las cédulas de identidad, otorgados en los próximos años a 1989, en lo pertinente, n°60) Nelson Adalberto Almendras Illesca; n° 66) José Domingo Cádiz Parada; n° 81) Joel Pérez Isla; n°86) Bernardo Iván Aedo Leiva y n° 88) Marco Antonio Aguirre Guajardo.

B.18. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: “a) *Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”*

B.19. Ordenes de investigar, debidamente diligenciadas de la unidad de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 379 a 381 (Tomo II), recopila antecedentes de la víctima Marcos Quezada Yáñez.

b) De fs. 405 a 421 (Tomo II), declaración del hermano de la víctima. En el anexo 4° dicho informe acompaña recorte del diario nacional, edición de fecha 10 al 16 de julio de 1989, titulado “*Marcos Quezada Yáñez, Morir a los diecisiete*”, la noticia versa sobre Marcos Quezada Yáñez, militante del Partido por la democracia, en las dependencias de la prefectura de Carabineros de Curacautín, el sábado 24 de junio. Anexo N° 6, incorpora recorte de prensa titulado “Que se mató”, señala Nélida Yáñez la tesis de la autoeliminación se debilitó aún más con el resultado de la autopsia practicada en Temuco. Continúa, la versión del episodio acontecido en el recinto policial de Curacautín, fue alterado internacionalmente por quiénes le quitaron la vida a su hijo Marcos. Cree, que pudo haber influido la tarjeta amarilla que portaba en su billetera, y que le habían entregado del partido. Las fotos falsas las tomó un vecino de ellos, refiere.

c) De fs. 533 a 547 (Tomo II), recaba información del Servicio Registro Civil e Identificación, y del Directorio de informes comerciales, antecedentes de los actuales domicilios y teléfonos de los funcionarios que prestaban servicios en la 5° Comisaria de Curacautín, para junio de 1989.

d) De fs. 562 a 571 (Tomo II), contiene declaraciones de testigos.

e) De fs. 639 a 643 (Tomo II), contiene declaración de testigo.-

f) De fs. 731 a 737 (Tomo III), contiene declaración de testigo.-

g) De fs. 1073 a 1079 (Tomo IV), contiene declaración de testigo.-

h) De fs. 1463 a 1468 (Tomo V), contiene declaraciones de ex funcionarios de Carabineros, que eran dotación o dependientes de la 5° Comisaria de Curacautín, a junio de 1989.

i) De fs. 1907 a 1914 (Tomo VI) declaraciones de ex funcionarios de Carabineros, que eran dotación o dependientes de la 5° Comisaria de Curacautín, a junio de 1989.

j) De fs. 1971 a 1974 (Tomo VI), contiene declaración de ex funcionario de Carabineros.-

k) De fs. 2061 a 2067 (Tomo VI), contiene declaraciones de ex funcionarios de la 5° Comisaria de Curacautín.

l) De fs. 2313 a 2317 (Tomo VII), contiene declaración de Roberto Eduardo Ruiz Aguilar.

m) De fs. 2557 a 2561 (Tomo VIII), contiene declaración de testigo.-

n) De fs. 1073 a 1079 (Tomo III), contiene declaración de testigo.-

B.20. De fs. 355 (Tomo II), de fecha 07 de diciembre de 1989, certifica el Secretario de la Fiscalía Militar de Angol, que los inculpados José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Aedo Leiva, permanecieron privados de libertad entre los días 03 y 07 de julio de 1989.

B.21. Dictamen Fiscal N° 33, de fecha 18 de diciembre de 1989, del IV Juzgado Militar de fs. 357 a 360 (Tomo II), en causa rol 119-89, instruida por la Muerte de Marcos Quezada Yáñez, dictaminó solicitar al señor Juez Militar, se sirva pronunciar auto de sobreseimiento definitivo total en la causa caratulada en contra de N.N., por muerte de Marcos Quezada Yáñez, de conformidad a lo preceptuado en el artículo 408 n°2 del Código de Procedimiento Penal.

B.22. Sobreseimiento N° 12, de 11 de enero de 1990 del IV Juzgado Militar, de fs. 271 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra a fs. 434, en lo pertinente sobresee total y definitivamente en la presente causa caratulada en contra de N.N. por muerte de Marcos Quezada Yáñez.-

B.23. Memorándum n° 50/10, de 02 de septiembre de 2010, fs. 374 a 377 (Tomo II), en lo pertinente de la lista N° 2, sobre listado de casos que ingresaron a servicios médicos legales regionales, certifica que ingresó Marcos Quezada Yáñez, rol N° 354-2010, fecha de defunción 24/06/89 de la Circunscripción de Curacautín.

B.24. Oficio N° 308, de fecha 28 de octubre de 2010 de la Corte Marcial Chile, de fs. 385 a 386 (Tomo II), copia de lo cual se encuentra a fs. 436 (Tomo II), refiere que la ltma. Corte Marcial, conociendo del recurso de apelación interpuesto en causa rol 119-89, en contra de la resolución que sobreseyó definitivamente dichos autos, resolvió confirmar la resolución apelada con declaración que el sobreseimiento es temporal.

B.25. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quedada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989.

B.26. Oficio del Intendente IX a doña Nélida Yáñez Bustos, con fecha 18 de octubre de 1989, a fs. 413 (Tomo II), en lo pertinente refiere que la Fiscalía Militar letrada de Malleco, se encuentra investigando el suicidio de su hijo Marcos Quezada Yáñez.-

B.27. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

B.28. Acta de inspección ocular, de fecha 26 de junio de 1989, a fs. 16 (Tomo I), observando que se trata de una chomba o sweater de lana de color azul claro con rayas blancas en las mangas. La manga izquierda se encuentra fuertemente anudada desde el extremo de su puño a la altura del hombro formando un nudo corredizo de horca.

B.29. Orden de ingreso, de fecha 03 de julio de 1989, emitido por el IV Juzgado Militar, de fs. 38 (Tomo I), la cual ordena recibir en el centro de detención preventiva de detenidos e incomunicados al Cabo 2°, José Domingo Cádiz Parada y Carabinero Bernardo Aedo Leiva, inculpados por el delito de violencias innecesarias causando la muerte.

B.30. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

- a) **A fs. 45 (Tomo I), copia certificada en lo pertinente de la constancia estampada en el libro de novedades de la población, de fecha 24 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín,** refiere “*Se deja constancia que personal efectuó diligencias de un robo, efectuado en horas de la noche en la Panadería Suiza, de propiedad de María Augsberger Estay, ubicado en calle Gregorio Urrutia n° 240, donde se procedió a detener a Marcos Quezada Yáñez, 18 años, sin oficio, estudios básicos, sin cédula de identidad, domiciliado en calle Angostura n° 860, quien declaró confeso ser el autor del robo de un dinero y especie. Se recuperó en poder de éste la suma de \$6.385, un cuchillo cocinero y un formón, los cuales había botado en el estero Manzanoco. Mayores antecedentes al respecto*”

fueron proporcionados al Suboficial de guardia. Quedo citada a comparecer la afectada al Juzgado del Crimen a la audiencia del día lunes 26 del actual, a las 14:00 horas. Labor: detenido por robo. Fdo. Fideromo Vásquez López, Sargento 2° de Carabineros. Suboficial de población, José Domingo Cádiz Parada, Cabo 2° de Carabineros, Suboficial de guardia.”

- b) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105,** en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo.
- c) A fs. 46 a 47 (Tomo I), copia de constancia estampada en el párrafo N° 26, folio N° 111, de fecha 24 de junio de 1989,** que da cuenta del suicidio del detenido a las 19:23 horas.-
- d) A fs. 48 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de ronda, en el folio 70, de fecha 24 de junio 1989,** en lo pertinente se deja constancia, que concurrió a la Unidad el Sr. Magistrado del Crimen por Curacautín, quien manifestó que el detenido ahorcado se encontraba en libertad condicional por delito similar.
- e) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín,** al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero José Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.
- f) A fs. 50 (Tomo I), contiene certificado de Carabineros de Chile, de fecha 30 de junio de 1989,** en lo pertinente certifica que el Cabo 2° Domingo Cádiz Parada, entre las 08:00 horas del día 24 de junio de 89, a las 08 :00 horas del día 25 de junio del 1989, efectuó servicio de Suboficial de Guardia en la unidad base.
- g) A fs. 51 (Tomo I), certificado de Carabineros de Chile, de fecha 30 de junio de 1989,** en lo pertinente certifica que el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva, entre las 08:00 horas del día 24 de junio de 89, a las 08 :00

horas del día 25 de junio de 1989, efectuó servicio de Suboficial de Guardia en la unidad base.

B.31. A fs. 56 (Tomo I), orden de egreso del 07 de julio de 1989, del IV Juzgado Militar de Valdivia, que ordena poner en libertad al Cabo 2° Domingo Cádiz Parada y al Carabinero Bernardo Aedo Leiva, por no haber mérito por ahora para someterlos a proceso.

B.32. Ficha clínica de Marcos Quezada Yáñez, remitido por el Hospital de Curacautín, con fecha 18 de julio de 1989, **de fs. 86 a 92 (Tomo I),** en cual no consta que exista un diagnóstico o antecedentes de enfermedades mentales ni psiquiátricas del suscrito.-

B.33. Oficio N° 589, del 03 de agosto de 1989 de Carabineros de Chile, de fs. 185 a 204 (Tomo I), adjunta libro de novedades de guardia de la 5ta Comisaria de Curacautín, en lo pertinente consta que el 24 de junio de 1989, a las 13:00 horas llegó el detenido Marcos Quezada Yáñez, confesó del delito de robo, estampando que no presenta lesiones ni contusiones visibles. Para luego a las 19:23 horas, dejar constancia del suicidio.

B.34. Resolución N° 1629, del 09 de agosto de 1989, del departamento de Asesoría técnica, de fs. 239 a 240 (Tomo I), adjunta informe técnico N° 2, el cual concluye: *“a) las impresiones digitales estampadas en la ficha índice como en ficha decidactilar de Quezada Yáñez, corresponden a filiaciones realizadas con fecha 30 de diciembre de 88; b) Los dibujos digitales correspondientes a las respectivas filiaciones, no presentan alteraciones de tipo morfológico en sus dactilogramas.”*

B.35. Set fotográfico del sitio del suceso, de fecha 03 de julio de 1989, de fs. 259 a 263 (Tomo I), ordenadas por el Tribunal al momento de la visita inspectiva.

B.36. Oficio Reservado N° 336, de la Prefectura de Carabineros Malleco N°21, de fs. 286 a 319 (Tomo I), adjunta sumario administrativo, a propósito de la muerte del detenido Marcos Quezada Yáñez, en un calabozo de la 5ta Comisaria de Curacautín, que en la inspección ocular certifica no tener lesiones atribuibles a terceras personas el cadáver. Que según se estampa en el

número sostiene: “José Domingo Cádiz no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de las visitas efectuadas a los mismos.”

B.37. Informe pericial de análisis N° 01589, del 09 de septiembre de 1989, de fs. 323 a 326 (Tomo I), copia de lo cual se encuentra de fs. 330 a 333 (Tomo I), en lo pertinente concluye: *“a) la causa precisa y necesaria de la muerte es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, (escasas lesiones externas, mínimas lesiones internas, fenómeno asfíctico evidente y ausencia de otro signo patológico); b) El contenido del protocolo de autopsia- aunque incompleto- es coincidente con la causa de muerte de asfixia por ahorcamiento con vínculo blando. El Autopsiador mal interpretó los hallazgos y elaboró una causal de muerte carente de todo fundamento; por otra parte, hace gala de un limitado léxico médico legal, ya que la transversalidad u horizontalidad de un surco lo encasilla de inmediato, sin más preámbulos en homicidio o suicidio, así como considera que eyacular y defecar son fenómenos que se ven en otras causas, cuando son característicos del episodio convulsivo, una de las fases del fenómeno asfíctico; c) De los antecedentes aportados y sin transgredir ninguna ley de la física, es muy posible que el occiso haya utilizado la tarima con el fin de alcanzar la viga y consumir su propósito al menos, por su estatura y conformación, pudo haber trepado en ellas. Las manchas de cal en la chaqueta y el nudo orientado hacia la pared, constituyen a conformar este cuadro de auto- ejecución.”*

B.38. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: *“ a) Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b) Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando,*

aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c) Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; d) Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria "Angol", de esta dependencia, con una sanción consistente en "dos días de arresto" con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°."

B.39. Resolución exenta N° 02, de 05 de enero de 2005, de Carabineros de Chile, de fs. 1051 a 1053 (Tomo III), en lo pertinente indica que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2015, Nelson Adalberto Almendras Illesca se encuentra en servicio en la institución.

B.40. Informe médico de Cesar Adriazola Azocar, de Carabineros de Chile, de fecha 16 de marzo de 2015, de fs. 1105 (Tomo IV), en lo pertinente refiere que el paciente fue diagnosticado con Diabetes Mellitus Tipo II, en tratamiento actual con Galvus met 50/1000, dos comprimidos al día. En control de 13.01.2015 presenta descompensación metabólica, se plantea posibilidad de cambiar tratamiento a insulina si persiste con mal control a patología base.

B.41. Certificados de nacimientos emitidos por el Registro Civil e Identificación, de fs. 1151 a 1154 (Tomo IV).-

B.42. Certificado emitido por Carabineros de Chile, del 17 de marzo de 2015, de fs. 1155 (Tomo IV), estampa que el Suboficial Erwin Hormazábal Aedo, presta servicios policiales en el Retén de Carabineros Sarmiento, dependiente de la 1ra Comisaria de Carabineros Curicó, desempeñándose como jefe de Retén, hace dos años.

B.43. Resolución exenta N° 02, de 19 de febrero de 2007, de Carabineros de Chile, de fs. 1180 (Tomo IV), en lo pertinente concede retiro voluntario en carácter de absoluto de Joel Erwin Pérez Isla, de dotación de la 1° Comisaria de Valdivia, a contar del 01 de marzo de 2007, con nota conducta “Buena”.

B.44. Certificado médico de Joel Pérez Isla, de fecha 19 de marzo de 2015, de fs. 1182 a 1183 (Tomo IV), en lo pertinente consigna que el suscrito es portador de una diabetes mellitus tipo II. Requiere control de su enfermedad, régimen especial de alimentación y uso de medicamentos.

B.45. Certificado médico de Joel Pérez Isla, de fecha 08 de abril de 2015, de fs. 1270 (Tomo IV), en lo pertinente consigna que el suscrito es portador de una diabetes mellitus tipo II, hipertensión arterial, ulcera varicosa, cara anterior, pierna izquierda. Control y tratamiento en dicho centro médico dental.

B.46 Oficio N° 419, del 22 de octubre de 2018, del departamento de derechos humanos de Carabineros, acompaña los documentos que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 2456 (Tomo VII), certificado emitido con fecha 05 de octubre de 2018, de la Prefectura de Malleco N°21, en lo pertinente soslaya que tras exhaustiva revisión, no tienen antecedentes, planos, fotografías del exterior e interior y/o croquis de la 5ta Comisaria Curacautín, correspondientes a la década de 1980 o cercano al año 1989.

b) A fs. 2457 (Tomo VII), certificado emitido con fecha 18 de octubre de 2018, de la Dirección de logística del departamento de cuarteles, en lo pertinente señala que tras exhaustiva revisión, no existen antecedentes que permitan establecer la existencia de fotografías y planos del exterior e interior y/o

croquis de la 5° Comisaria Curacautín, correspondiente a la década de 1980 cercano al año 1989.

c) A fs. 2458 (Tomo VII), contiene certificado emitido con fecha 10 de octubre de 2018, de la Dirección de logística, departamento de bienes raíces, suscribe que el documento anverso es copia fiel al documento que contiene la carpeta Kardex, correspondiente a la 5ta Comisaria Curacautín, que lleva la repartición..

d) A fs. 2459 (Tomo VII), contiene certificado emitido con fecha 10 de octubre de 2018, de la Dirección de logística del departamento de bienes raíces, suscribe que el documento anverso es copia fiel al documento que contiene la carpeta Kardex, correspondiente a la 5ta Comisaria Curacautín, que lleva la repartición.

B.47. Oficio N° 0058, del 10 de enero de 2022 del Hospital de Coyhaique, de fs.2685 a 2717 (Tomo VIII), adjunta copia de ficha clínica integra N° 97679, correspondiente a Bernardo Aedo Leiva.

B.48. Informe de la Vicaría de la Solidaridad, de fs. 2862 a 3028 (Tomo VIII), resume la situación represiva y gestiones judiciales y/o administrativas de la víctima de autos.

B.49. Oficio N° 1169, del departamento de archivo general de Registro Civil e Identificación, de fecha 22 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1 a 260 (Tomo reservado), remite fotografías de las cédulas de identidad otorgada en los años próximos a 1989, entre ellas en el N° 60, Nelson Almendras, N° 66 José Cádiz Parada, N° 81 Joel Pérez Isla, N°86 Bernardo Aedo Leiva y N°88 Marco Antonio Aguirre Guajardo.

3°) Artículo 488 del Código de Procedimiento Penal. Que los elementos de convicción antes reseñados constituyen presunciones judiciales, que por reunir las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, permiten tener legalmente acreditado que:

A.- Que a raíz de una denuncia por robo que afectó al local comercial "Panadería Suiza" en la comuna de Curacautín, el día 24 de junio de 1989, alrededor de las 12:30 horas, fue detenido en la vía pública Marcos Quezada Yáñez, de 17 años de edad, quien era sindicado como el único sospechoso del ilícito, por haber trabajado de manera ocasional en dicho lugar. Su aprehensión fue practicada por cuatro funcionarios de Carabineros de la Comisaría de Curacautín, entre ellos los cabos Joel Pérez Isla y Nelson Almendras Illesca y los

carabineros Marcos Aguirre Guajardo y Erwin Hormazábal Aedo. Al momento de la detención, Quezada Yáñez no presentaba lesiones visibles.

B.- Que una vez en la comisaría, Quezada Yáñez fue ingresado a una dependencia destinada al entretenimiento de los funcionarios de la unidad, contigua al cuerpo de guardia. Allí fue interrogado por todos sus aprehensores y el Teniente César Adriazola Azócar, quien, además, dirigía el interrogatorio del detenido. Luego de que supuestamente Quezada Yáñez se atribuyera participación en el ilícito investigado, fue trasladado fuera del recinto policial hasta el sector del estero Manzanoco, a un terreno privado, cercano a un establecimiento educacional, ya que supuestamente habría tirado algunas especies en dicho lugar. Este traslado estuvo a cargo de los cabos Pérez Isla y Almendras Illesca, además del carabinero Aguirre Guajardo. Posteriormente, fue nuevamente conducido hasta el recinto policial, entregándosele al cuerpo de guardia, siendo interrogado nuevamente, tal como se dirá en la siguiente letra.

C.- Que el mismo día 24 de junio, tres funcionarios de la unidad de carabineros de Manzanar, entre ellos el jefe de ese retén, Sargento José Dolorindo Fernández Cofré, y los carabineros Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Órdenes, se constituyeron en la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín, ya que el comisario de dicha unidad les ordenó formar la comisión civil encargada de la fiscalización de alcoholes en la comuna. Durante sus labores, la comisión descrita procedió a la aprehensión de dos personas, entre ellos José Lagos Pulgar y Juan Maldonado Pacheco, quienes fueron conducidos hasta los calabozos de la Quinta Comisaría de Carabineros de Curacautín e ingresados en ellos a las 16:35 y 17:55 horas respectivamente, según da cuenta el propio Libro de Novedades de Guardia ese cuartel. Que Maldonado Pacheco, al cabo de unos minutos luego de haber sido ingresado en esas dependencias, escuchó gritos de dolor de una persona de sexo masculino, oyendo cada vez el ruido característico de paso de electricidad y risas de algunos carabineros, prolongándose esta situación entre dos o tres minutos, aproximadamente. Posteriormente, el detenido escuchó alboroto y paseos de carabineros por frente al calabozo en que se encontraba, observando el ingreso de funcionarios de carabineros con palos o vigas y luego una persona joven sobre un carrito o camilla, trasladado por personal de carabineros, entre ellos el sargento José Dolorindo Fernández Cofré, que esa noche se encontraba integrando la comisión civil de alcoholes en esa localidad.

D.- Que alrededor de las 19:20 horas, del mismo día 24 de junio de 1989, familiares de Quezada Yáñez concurrieron hasta la unidad de Carabineros a fin de

consultar por su estado y dejarle alimentos. Sin embargo, el cabo José Cádiz Parada, que en esos momentos estaba de servicio de guardia, les manifestó que regresaran más tarde, no informándoles que en el momento de revisar el calabozo en que se hallaba Marcos Quezada, el carabinero Bernardo Aedo Leiva lo encontró colgado con una chomba desde una de las vigas.

E.- Que acontecido lo anterior, el cabo Cádiz Parada comunicó la situación de Quezada Yáñez a sus superiores, entre ellos al Teniente César Adriazola Azócar, quienes concurren al lugar y observaron que la persona de Quezada Yáñez pendía sin vida desde una de las vigas del calabozo.

F.- Que el cadáver de Quezada Yáñez fue remitido al médico legista Wolfgang Reuter Berger, junto con el parte policial que indicaba que al parecer Quezada Yáñez habría fallecido por ahorcamiento. El profesional determinó que la causa precisa y necesaria de la muerte de Marcos Quezada Yáñez era atribuida a "shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica aplicado en algunos dedos de ambas manos". Lo precedente es corroborado, además, por el informe del Departamento de Medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, a fs. 758, el cual concluye que Quezada, previo a su ahorcamiento, fue expuesto por terceros a electricidad en ambas manos y que probablemente posterior a dicha exposición se encontraba incapacitado para efectuar maniobras conducentes a su ahorcamiento, lo que es coherente con el ingreso de Quezada Yáñez a esa repartición, sin lesiones visibles y la declaración del principal testigo, Juan Maldonado Pacheco y el informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes. Del mismo modo el informe del mismo servicio de fs. 2.596 donde sugiere que puede ser ahorcamiento, pero no desmiente que hubo acción de corriente eléctrica, no pudiendo desvirtuar los dichos del testigo Juan Maldonado Pacheco.-

G.- Que por lo anterior, la persona de Marcos Quezada Yáñez, una vez detenido y llevado al cuartel policial fue objeto de apremios con uso de electricidad, en este caso en ambas manos, lo que le causó un desmayo o falta de conciencia. En tales circunstancias no hacía posible que Quezada Yáñez, por su estado de salud, por las condiciones en que estaba en el calabozo, ubicación de la viga y utilización de la prenda que sirvió de vínculo, se hubiera ahorcado, tal como se ha dicho en la letra anterior. Muerte que finalmente no permite descartar la participación de terceros, según el propio informe del Servicio Médico Legal de fs. 1.599 y siguientes y el de fs. 2596. De todo esto tomó conocimiento tanto el personal de guardia, interrogador y quienes se encontraban de servicio de guardia el día de los hechos. Además, en ninguna pieza del expediente militar de la época

que se tiene a la vista, se deja constancia que al momento del ingreso a la unidad policial, Marcos Quezada Yáñez haya tenido lesiones visibles en alguna parte del cuerpo, lo que es coincidente con el informe de la Sección de Asuntos Internos Provincial Malleco de Carabineros de Chile, que rola a fs. 103 y siguientes. Finalmente, en relación al principal testigo del proceso, Juan Nolberto Maldonado Pacheco, es el propio informe psiquiátrico del Servicio Médico Legal de Temuco, de fs. 2.046 y siguientes, el que concluye que es una persona normal sin alteración de juicio de realidad, lo que además se ve corroborado por mantener un relato coherente y similar cada vez que ha comparecido en el proceso.

4°) Calificación. Que los hechos antes reseñados en esta etapa procesal, constituyen el delito de **homicidio calificado** de Marcos Quezada Yáñez, previsto y sancionado en el **artículo 391 N°1 del Código Penal**, en su texto vigente a la fecha de los hechos investigados, en su **carácter de lesa humanidad**.

5°) Calificación. Que el ilícito antes reseñado, es además delito de lesa humanidad. Así se ha pronunciado este Tribunal, la ltma. Corte de Apelaciones de Temuco y la Excma. Corte Suprema en las siguientes causas tramitadas ante este Ministro en Visita Extraordinaria:

A. Causa rol 27.525 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014;

B. Causa rol 27.526 del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014;

C. Causa rol 45.345 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014;

D. Causa rol 113.990 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015;

E. Causa rol 113.989, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016;

F. Causa rol 18.780 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015;

G. Causa rol 29.877, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016;

H. Causa rol 45.344, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016;

I. Causa rol 45.371, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016;

J. Causa rol 45.342, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015;

K. Causa rol 29.869, del Juzgado de Letras de Pitrufquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016;

L. Causa rol 27.527, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016;

M. Causa rol 114.001, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016;

N. Causa rol 113.986, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016;

O. Causa rol 63.541, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016;

P. Causa rol 45.363, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017;

Q. Causa rol 114.048, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017;

R. Causa rol 10.868, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017;

S. Causa rol 114.003, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017;

T. Causa rol 10.851, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016;

V. Causa rol 10.854, del Primer Juzgado de Letras de Puerto Montt, seguida por el homicidio calificado en las personas de Dagoberto Segundo Cárcamo Navarro, José René Argel Marilicán, Adolfo Omar Arismendi Pérez, Carlos Mansilla Coñuecar, Jorge Melipillán Aros, José Armando Ñancuman Maldonado, sentencia de 28 de octubre de 2017;

W. Causa rol 45.359 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de Domingo Huenul Huaquil, sentencia de 31 de agosto de 2017.

X. Causa rol 54.035 del Primer Juzgado de Crimen de Puerto Montt, apremios ilegítimos en las personas de Mario Enrique Contreras Vega, Cesar Vladimir Leiva Garrido, Domingo Álvarez Cárdenas, Raúl Ángel Andrade Oyarzún, Marco Antonio Romero Arias, Enrique Becker Álvarez, Carlos Jerges Torres Vera, Noé Alejandro Cárdenas Alvarado, Werne Víctor Haro Oyarzún, sentencia de 23 de diciembre de 2017.

Y. Causa rol 65.535 del Juzgado de Letras de Angol, seguida por los apremios ilegítimos en las personas de Manuel Marcelino Ramírez Zurita, sentencia de 25 de mayo de 2018.

Z. Causa rol 45.343, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 09 de noviembre de 2020.

A.1 Causa rol 57.071, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia de 09 abril de 2021.

B.2. Causa rol 113.997, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia de 02 de junio de 2021.

C.3 Causa rol 45.354, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia de 16 de junio de 2021.

D.4 Causa rol 45.361, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020;

E.5 Causa rol 114.000, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020;

F.6 Causa rol 4-2010, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018;

G.7 Causa rol 45.362, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018.

H.8 Causa rol 114.007, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018.

I.9 Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018.

J.10 Causa rol 113.996, del Primer Juzgado del crimen de Temuco, seguida por el Homicidio calificado y apremios ilegítimos en la persona de Tomás Segundo Esparza Osorio y apremios ilegítimos en la persona de Javier Enrique Esparza Osorio, sentencia de 30 de junio de 2018.

K.11 Causa rol 29.979 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado de Domingo Obreque Obreque, sentencia de 07 de abril de 2014.

L.12 Causa rol 45.365, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Luis Armando Horn Roa, sentencia de 25 de febrero de 2021.

M.13 Causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de Pedro Millalén Huenchuñir, sentencia de 11 de mayo de 2022.

N.14 Causa rol 44.305 del juzgado del Crimen de Puerto Varas, seguida por el homicidio calificado en las personas de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, sentencia de 25 de enero de 2019.

O.15 Causa rol 45.368 del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado de José Bernardino Cuevas, sentencia de 30 de marzo de 2019. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados.

6°) Concepto de Lesa Humanidad. Que sobre lo anterior y en cuanto al origen, evolución histórica y definición de los delitos de lesa humanidad el concepto de delitos de "lesa humanidad" o de "leyes o normas de la humanidad", surgieron durante el siglo XX y ha permanecido en constante evolución a través del tiempo. Este concepto, tuvo su origen en varios instrumentos internacionales a saber:

A. Convención de la Haya sobre las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre de 1899 y 1907. Fundamento del concepto de: "leyes de la humanidad" plasmado en la Cláusula Martens: "Mientras que se forma un código más completo de las leyes de la guerra, las altas partes contratantes juzgan oportuno declarar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del derecho de gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública" (**Óscar López Goldaracena. Derecho Internacional y crímenes contra la humanidad.** 2008. Fundación de Cultura Universitaria, Uruguay. pp. 29 – 34).

B. Que en la Declaración de 28 de mayo de 1915 de los Gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Rusia en la que denunciaron las masacres a los armenios por parte del Imperio Otomano como crímenes de lesa humanidad, tal como lo expresan los autores (Derechos Humanos: Justicia y Reparación. **Ricardo Lorenzetti**, editorial Sudamericana). Hay que precisar, como lo ha dicho la literatura, que el crimen contra la humanidad excede con mucho en su conducta el contenido ilícito de cualquier otro delito. Asimismo, el Derecho Penal no está legitimado para exigir la prescripción de las acciones emergentes de estos delitos y si lo hiciere sufriría un grave desmedro ético: no hay argumento jurídico ni ético que le permita invocar la prescripción (Nueva Doctrina Penal, "Notas Sobre el Fundamentos de la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad" **Eugenio Raúl Zaffaroni**, pág. 437 a 446). Del mismo modo, el crimen de lesa humanidad es aquel injusto que no solo contraviene los bienes jurídicos comúnmente garantizados por las leyes penales, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, esto es, se mira al individuo como cosa. La característica principal es la forma cruel y bestial con que diversos hechos criminales son perpetrados. Sin perjuicio de otros elementos que también lo constituyen como son la indefensión, la impunidad, que serán analizados con posterioridad. Es un ultraje a la dignidad humana y representan una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamados en la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes.

7º) Que en una reflexión más integral podemos indicar que una perspectiva para abordar la justicia de transición es el valor social y jurídico de la verdad, esto es, la función que asume el concepto de verdad no sólo en contextos específicos, sino también en la justicia de transición y en especial en el plano más amplio de la dinámica social política y jurídica. Así Bernard Williams nos plantea las virtudes de la verdad como la sinceridad y la precisión en referencia a la realidad, son factores esenciales en la dinámica social. El mismo autor plantea la conexión entre verdad y política e indica que la verdad constituye una característica esencial de la democracia por cuanto asegura la libertad de los ciudadanos contra el poder tiránico. Plantea también que la exigencia de que el poder actúe el valor de la verdad determina el factor efectivamente democrático en el ámbito del sistema político liberal. Esto es, el valor político de la verdad deriva del hecho de que la medida de un sistema político funda sus relaciones entre el poder y los ciudadanos en la verdad y determina el grado de democracia del sistema. El poder tiránico se funda en una verdad envenenada, es decir, sobre una mentira, mientras que el sistema democrático se funda en el principio de verdad. Por su lado, Michael Lynch insiste en el valor fundamental de la verdad en el contexto de la democracia liberal, puesto que señala que si nos importan los valores liberales, nos debe importar la verdad. Por otro lado, desde un punto de vista más amplio el principio de la verdad se configura como una condición esencial para la efectividad del ordenamiento jurídico, esto es, la efectividad del ordenamiento jurídico se funda en la hipótesis de que el sistema sea capaz de establecer la verdad respecto de tales conductas. Más específico, la consideración del valor jurídico de la verdad se refiera a la administración de justicia. En términos más simples, en palabras de Gerome Frank, no existe una decisión justa que se funde en hechos equivocados. Es decir, la verdad de los hechos es una condición necesaria para que se arribe a una decisión justa. A propósito de la justicia de transición ha habido un discurso ambiguo, puesto que se ha expresado que el silencio y el olvido respecto de los crímenes pasados son el mejor método para facilitar la construcción de la nueva sociedad. Esto puede ser respondido no solo por las víctimas sino por la sociedad entera en cuanto puede ser difícil o imposible aceptar que los graves actos de violencia cometidos contra miles de personas sean silenciados en nombre de la pacificación social. Hay que reflexionar sobre las dudas que surgen, sobre el tipo de paz social que se quiere lograr sobre la base de la falta de verdad efectiva sobre los crímenes y las

correspondientes responsabilidades relacionadas con los hechos cometidos. El principal efecto del silencio es que antiguos criminales escapan masivamente de la justicia (ejemplos caso del Alemania post nazista y la Italia post fascista) se convierten en buenos y honorables ciudadanos de la democracia, en ese sentido se pregunta el autor si realmente se puede hablar de democracia cuando se habla de un sistema político que evita sistemáticamente la búsqueda de la verdad sobre sus precedentes históricos inmediatos, no obstante ser clara la cantidad y calidad de los crímenes cometidos. En consecuencia, citando nuevamente a Williams, es que el diagnóstico es negativo respecto a las pretendidas democracias que sistemáticamente rechazan la búsqueda de la verdad. (**Michel Taruffo** (2018): “La verdad. Consideraciones sobre la verdad y justicia de transición” En Revista de Estudios Judiciales, año 2018, n° 5, ediciones DER. pp. 19 – 30).-

C. DECLARACIONES INDAGATORIAS.

Respecto al acusado JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ JOFRÉ.-

8°) Que prestando declaración indagatoria JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ (44 años a la época de los hechos), quién declaró de fs. 117 a 118 (Tomo I); 1251 a 1253 (Tomo IV); 1254 a 1257 (Tomo IV); 1471 a 1473 (Tomo V); 1780 (Tomo VI); 1896 a 1898 (Tomo VI) y fs. 2625 a 2627 (Tomo VIII).

Declaración judicial de fecha 28 de julio de 1989, de fs. 117 a 118 (Tomo I), barbulla es jefe del Retén de Carabineros de Manzanares donde se desempeña de forma habitual. El 24 de junio pasado, el señor Comisario de Carabineros de Curacautín, le ordenó constituirse en la Comisaría para trabajar en la Comisión Civil de alcoholes, acompañándose de dos funcionarios de su destacamento, esto son Claudio Contreras Valencia y Erik Vásquez Ordenes. Apoya que a las 15:45 horas se presentaron en la unidad base ante el Suboficial de guardia, Cabo 2° Cádiz a quien hizo su presentación y salida a la población en el libro de guardia en comisión de alcoholes. Durante el servicio manifiesta que efectuaron tres denuncias por ley de alcoholes, con dos detenidos por ebriedad, entre las 15:45 y 17:55 horas. Conjetura, en momentos que confeccionaba los partes y mientras sus acompañantes fueron a tomar once, alrededor de las 19:15 horas, se hicieron presente en la guardia dos mujeres, las que traían alimento a un detenido que se encontraba en los calabozos por delito de robo. Justifica que aparece corriendo el cuartelero, llamando desde el pasillo al Suboficial de Guardia Cádiz, a quien vio asustado y sorprendido, actuar por el cual dedujo algo ocurría. Además, les indicó a las dos mujeres que dejarán la comida y al día siguiente

fueran a buscar las cosas. Descarga que el Cabo Cádiz le informa que el detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, se había ahorcado en el calabozo. Expone, en compañía del mismo funcionario constató el hecho, presenciando a una persona colgada desde una viga para lo cual empleo una chomba. Continúa, la tarima estaba en forma vertical arrimada a una pared, la del costado poniente. Destaca, era el más antiguo de la Unidad, así que por lo cual ordenó aislar el sitio del suceso disponiendo que un funcionario se mantuviera punto fijo e impidiera el ingreso de cualquier otro funcionario, mientras no se constituyera la Jefatura de la unidad. Narra, fue a la guardia, tomó el teléfono y llamó al Teniente Adriazola, para informar lo sucedido, llegando al lugar, en cuestión de minutos. El Teniente verificó el hecho, y lo acompañó hasta el domicilio del Comisario, ubicado a una cuadra y media del cuartel, siendo este último quien ya en la unidad, da cuenta a la Prefectura de Malleco. Dice, después se recibió la orden de levantamiento de cadáver, razón por la que enviado a la morgue del hospital local. Delibera, fue la persona que sacó del cuello de la persona, la manga del chaleco con que se ahorcó, pues fue imposible soltar el nudo que tenía amarrado a la viga, todo esto con apoyo de otros funcionarios, quienes levantaron el cuerpo, para retirar la mencionada manga del cuello. Especula, a simple vista no se apreciaban lesiones atribuibles a terceras personas, a excepción del surco pronunciado en el cuello. Suma, el pene tenía restos de semen y el bóxer de excremento. Explana, al detenido no lo vio llegar al cuartel, tampoco en el interior del calabozo y no lo conocía antes de su muerte. Reconoce en la fotografía la chomba que usó el detenido para ahorcarse.

Declaración extrajudicial de fecha 30 de marzo de 2015, rolante de fs. 1251 a 1253 (Tomo IV) señala que ingresó a Carabineros de Chile el día 1 de junio de 1966. Precisa que nunca estuvo en una misión-extra institucional en organismos de inteligencia como la DINA o CNI. Asevera que entre los años 1985 – 1990 se desempeñaba en la 5ta Comisaría de Carabineros de Curacautín, estando a cargo del Retén Manzanar, por casi todo el periodo en que permaneció en dicha zona. En el año 1989, ostentaba el grado de Sargento 1° de Carabineros y se desempeñaba en el Retén antes mencionado. Según recuerda, para esa época el Oficial a cargo de la 5ta. Comisaría de Curacautín, unidad de la cual dependía su destacamento, era el Mayor Mauricio Catalán Devhlauch, siendo secundado en el mando por un Teniente de apellido Adriazola. Respecto a la víctima de los hechos investigados cuya identidad se le da a conocer en este acto como Marcos Quezada Yáñez, atestigua recordar esta situación, ya que ese día se encontraba con su personal subalterno cumpliendo servicios en Curacautín, específicamente efectuando la labor de comisión de alcoholes, por orden del

Mayor jefe de unidad. Estima que esa es la razón por la que se apersonó con los Carabineros, Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Ordenes en la 5ta. Comisaría a eso de las 15:30 horas de ese sábado, se desempeñaba como Suboficial de Guardia el Cabo 2do. José Cádiz Parada, al cual le hizo entrega de un papel donde estaba anotado el nombre de los funcionarios, con número de revolver y esposa, ordenándole dejar constancia de su presentación y salida a la población. Invoca, después de una hora, llegó con dos detenidos, los cuales fueron entregados al cuerpo de guardia para su ingreso a calabozo. Para nuevamente salir a la población y fiscalizar negocios de alcoholes, tomando algunas infracciones y otros dos o tres detenidos, los cuales fueron trasladados a la Comisaria. Ostenta, cerca de la 19:30 horas, regresó a la unidad y según recuerda autorizó a los Carabineros que andaban junto a él, fueran a comer ya que en la noche seguirían trabajando, fijándoles como hora de presentación las 21:00 horas. Así las cosas, se ubicó en la sala de guardia a confeccionar los partes de alcoholes, por las infracciones que había pasado esa tarde, mientras el Cabo Cádiz, confeccionaba el parte del detenido Quezada, para que con una copia de este, fuera enviado el detenido a la cárcel. Dice, cerca de las 20:00 horas se apersonó en la guardia el Carabinero que estaba de cuartelero informando que uno de los detenidos estaba colgado en el calabozo. Posteriormente junto a Cádiz y el Carabinero antes aludido concurrieron al calabozo, comprobando que efectivamente había un detenido colgado desde una viga de la techumbre del calabozo, y al parecer se trataba de Quezada. Por lo anterior, ordenó al cuartelero que se quedara de punto fijo en el lugar, mientras él daba cuenta telefónica al Oficial de servicio, quien recaía en la persona del Teniente Adriazola. Utiliza, en ese momento llegaron dos niñas, quienes le traían comida a Quezada, pero le dije a Cádiz, que les dijera a ambas que dejaran la comida y regresaran después. Escruta, ocurrida esta situación, llegó el Teniente Adriazola, quien inmediatamente se apersonó en el calabozo y verificó la situación. Concurrió junto al Teniente al domicilio del Mayor Catalán a informar lo sucedido, apersonándose inmediatamente. Funda, el Mayor contactó al Magistrado Viñuela, quien en su presencia bajó el cuerpo y remitió a la morgue de Cautín, por orden verbal del Fiscal Militar de Angol, previo a ello, llamaron a pepe rey, para que fotografíe el cuerpo del fallecido. Colige, bajó el cuerpo de Quezada, el cual estaba colgado de una viga del calabozo, debiendo subirse a una tarima, que había al interior de la habitación, recordando que en el intento de bajar el cuerpo se cayó. Detalla, el calabozo no tenía iluminación, se alumbraba con linternas. Sugiere, trasladaron el cuerpo del calabozo al patio, donde le sacaron sus vestimentas, comprobante que tenía manchas de excremento y semen. Precisa, su cuello tenía marcado por la

acción de la amarra que se hizo en la zona. El vínculo correspondía a una manga de la chomba de lana, color azul, la cual fue remitida al Tribunal. Glosa, la altura del techo, tenía cerca de 2 metros con 20 centímetros, en el lugar no había luz eléctrica, ni enchufes, solo se iluminaba por la luz del patio. Esa tarde, en que ocurrieron los hechos, estaba junto a él, en el cuartel, Cádiz, el Cuartelero y el Vigilante, no recordando que hubiese otros funcionarios en esos momentos. Advierte, no era habitual la aplicación de corriente a los detenidos, no estaban permitidos los apremios y torturas a detenidos por parte del Mayor Catalán. Basa, la causa de muerte de Quezada, fue por ahorcamiento. Blasona, en relación a lo que se le expone en este acto en el sentido que el protocolo de autopsia de la víctima menciona como causa de muerte la acción de corriente eléctrica aplicada a algunos dedos de la mano de la víctima, señala desconocer la situación, empero no se percató, al revisar el cuerpo de la víctima, que alguno de sus dedos estuvieran quemados. Asegura, ese día junto a sus acompañantes vestían de civil. Propone, es efectivo que cuando llegó la madre de Quezada a la unidad, fue quien le avisó sobre la muerte de Quezada, inclusive que estaba en la morgue del Hospital de Curacautín. Anima que no conocía a Marcos Quezada, solo ubicaba de vista a la madre, pero no tiene antecedentes sobre su persona. Supo que la detención de Quezada fue cerca de las 12:00 horas de ese mismo día por un Cabo de apellido Pérez, junto a otro Carabinero cuya identidad ignora, a raíz de una denuncia que había efectuado el dueño de una panadería el cual imputaba a Quezada. Descarta la participación de algún funcionario en la muerte de Quezada y no le resultan extrañas las circunstancias en que se suicidó Quezada.

Declaración judicial de fecha 10 de abril de 2015, rolante de fs. 1254 a 1257 (Tomo IV), ratifica las declaraciones que rola de fs. 117 a 118 y la extrajudicial del día 30 de marzo de 2015. Cuenta, en marzo de 1974 cumplió funciones en la 5° Comisaría de Curacautín, esto hasta el año 1985, año en que lo trasladaron al retén Manzanar, por seis meses. Luego, fue trasladado al retén Rari Ruca, por un período de 1 año 8 meses y posteriormente regresó al retén Manzanar. En noviembre o diciembre de 1989 es trasladado a la comuna de Yumbel. Manifiesta, que en esa fecha se desempeñaba como Jefe de Retén de la localidad de Manzanar, junto a 4 funcionarios entre los que recuerda al Cabo Flores y Carabineros Ramírez Neira, Claudio Contreras y Erik Vásquez. Acota, el 24 de junio de 1989, día de San Juan, se encontraba cumpliendo servicios en la comisión de alcoholes en Curacautín, junto a Contreras y Vásquez. Divulga, esta orden había sido dada a mediados de esa semana por el Mayor Catalán quien lo citó a su oficina e instruyó que debía presentarse el día sábado 24 de junio para realizar el servicio de alcoholes. Recuerda que el Mayor Catalán le preguntó si

quería trabajar con personal de la Comisaría de Curacautín o funcionarios de su destacamento, respondiendo que prefería trabajar con estos últimos. Estima, cree que el Mayor no tenía confianza en su personal, por eso no utilizó personal de la Comisaría para efectuar servicios de alcoholes. Justifica, tenía experiencia en esas labores, tal vez por eso lo tomó en cuenta, a pesar de que nunca trabajó directamente en la Comisaría. Musita, el 24 de junio iniciaron el servicio a las 15:30 horas aproximadamente y al Suboficial de guardia le hizo entrega de un papel con el nombre de los funcionarios, armamento y número de esposa. Saliendo inmediatamente a la población junto a sus dos funcionarios. Ese día hubo 4 o 5 detenidos, todos por ebriedad, haciendo entrega de ellos en el cuerpo de guardia, donde el cuartelero los allanaba y luego conducía al calabozo. Destaca, sólo entregaban los detenidos en el cuerpo de guardia y regresaban a la población. Ninguno de sus funcionarios ingresó hasta los calabozos a ayudar al cuartelero a ingresar detenidos. Esa era labor era del Suboficial de guardia y del Cuartelero. Apunta, no ingresó al sector de los calabozos ni al interior de la Comisaría, permaneció en el cuerpo de guardia y desde ahí salía a la calle, no recuerda que su personal haya ingresado al interior del cuartel. Describe las dependencias de la Comisaría de Curacautín, cercano a los calabozos estaban los baños y justo al lado de los baños estaba la oficina del radio operador. Frente a los calabozos había unas dependencias que al parecer eran dormitorios. Además estaba la dependencia de la enfermería y la oficina del Comisario en un lugar fuera de la Comisaría, es decir, tenía entrada a parte. Las caballerizas estaban ubicadas en el patio, frente a los calabozos. El deponente realiza un croquis a mano alzada de las dependencias de la comisaría. El Tribunal ordena agregarlo al proceso. El radio operador era un funcionario de Carabineros, que no recuerda su nombre, pero el horario de funcionamiento era de lunes a viernes, desde las 08:00 a 19:00 horas. Los días sábado sólo trabajaban en la mañana hasta las 13:00 horas aproximadamente. Glosa, al momento de ver ahorcado a Quezada, no estaba el radioperador y tampoco vio funcionarios en el sector de los calabozos. Revela, no conocer a Quezada, pero ubicaba a su madre, porque vivía en una calle cercana a la vía férrea, paralela a Manuel Rodríguez. Colige, en ese tiempo era casado, su domicilio estaba en la comuna de Curacautín, en calle Manuel Rodríguez. A pesar de que estar destinado en Manzanares, su familia siguió residiendo en la comuna de Curacautín, en la calle ya mencionada. Arguye, posterior a 1989, lo trasladaron a varios lugares, empero su familia continuó viviendo en Curacautín, porque su señora era profesora en dicha comuna, y no podía dejar su trabajo. Alega, permanentemente visitaba su hogar, por lo menos 2 veces al mes y cuando sus destinaciones eran cercanas, viajaba todos los días,

como es el caso de Victoria. Invoca, él confeccionó los partes por infracción de alcoholes en la guardia del cuartel. Incluso recuerda haber llevado su máquina de escribir propia, y ubicarse en una esquina de la mesa del cuerpo de guardia. Justifica, en el cuartel estuvo desde las 17:30 hasta las 21:00 horas aproximadamente, en ese período confeccionó los partes por infracción de alcoholes, donde no efectuó servicios a la población, incluso alrededor de las 19:30 horas, autorizó a sus subalternos Contreras y Vásquez, que se fueran a comer, debiendo regresar a las 21:00 horas a la unidad, para seguir con su labor. Dice, él manejaba el horario de la comisión de alcoholes, por instrucción del Comisario que lo dejó a cargo de la comisión, ya que siempre había trabajado en comisiones civiles, en la Comisaría de Curacautín, Yumbel y Victoria. Incluso en la ciudad de Victoria, años más tarde, estuvo a cargo del Servicio de Investigaciones Policiales. Ese día la comisión de alcoholes termina su función cuando se descubrió al detenido Quezada ahorcado en su calabozo. Después de eso, dio la orden a su personal para que se fueran a la casa y al día siguiente retornar al destacamento. El Tribunal le consulta si alguno de los funcionarios que estaban bajo su mando tenía problemas nerviosos o "Tics" en la cara. El deponente no recuerda si alguno de ellos tuviera ese tipo de problemas. Tampoco que los funcionarios de Curacautín hayan sufrido algo similar.

Declaración extrajudicial de fecha 30 de marzo de 2015, de fs. 1471 a 1473 (Tomo V), acota ingresó a Carabineros de Chile el día 1 de junio de 1966, contratándose en la 1ra. Comisaría de Carabineros de Angol. Niega haber sido miembro de una comisión extra institucional en organismos de inteligencia como la DINA o CNI. Asevera que entre los 1985 y 1990, se desempeñó en la 5ta Comisaría de Carabineros de Curacautín, estando a cargo del Retén Manzanar, por casi todo el periodo en que estuvo en dicha zona. Para el año 1989, ostentaba el grado de Sargento 1ro de Carabineros. Divulga, para esa época el Oficial a cargo de la 5ta. Comisaría de Curacautín, unidad de la cual dependía su destacamento, era el Mayor Mauricio Catalán Devlahovic, siendo secundado en el mando por un Teniente de apellido Adriazola. Respecto a la víctima de los hechos investigado, cuenta que ese día se encontraba con su personal subalterno cumpliendo servicios en Curacautín, específicamente efectuando labor de comisión de alcoholes, servicio que se les ordenó cumplir ese sábado el Mayor jefe de unidad. Por esa razón, se apersonó con los Carabineros Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Ordenes, en la 5ta. Comisaría a eso de las 15:30 horas de ese sábado, recordando que ese día se desempeñaba como Suboficial de Guardia el Cabo 2do. José Cádiz Parada, a quien le entregó un papel con los nombres de los funcionarios, número de revolver y de esposa,

ordenándole dejar constancia de su presentación y salida a la población. Según recuerda, al rato de una hora llegaron con dos detenidos, los cuales fueron entregados al cuerpo de guardia para su ingreso a calabozos. Salieron nuevamente a la población a fiscalizar negocios de alcoholes, pasando algunas infracciones, deteniendo a dos o tres personas, las cuales fueron trasladadas a la Comisaria. Explicita, cerca de la 19:30 horas, regresaron a la unidad, y según recuerda autorizó a los Carabineros de su destacamento, que fueran a comer ya que en la noche seguirían trabajando, fijándoles como hora de presentación las 21:00 horas. Es así, que se instaló en la sala de guardia a confeccionar los partes de alcoholes, por las infracciones que habían pasado esa tarde, mientras el Cabo Cádiz confeccionaba el parte del detenido Quezada, para que con una copia de este, fuera enviado el detenido a la cárcel. Estima, cerca de las 20:00 horas se apersonó en la guardia el Carabinero que estaba de cuartelero informando que uno de los detenidos estaba colgado en el calabozo. Posteriormente, junto a Cádiz y el Carabinero antes aludido concurren al calabozo, comprobando que efectivamente había un detenido colgado desde una viga de la techumbre del calabozo y por lo que comentaban los Carabineros se trataba de Quezada. Por lo anterior, ordenó al cuartelero que se quedara de punto fijo en el lugar, mientras le daba cuenta telefónica al Oficial de servicio, quien recaía en la persona del Teniente Adriazola. Evidencia, en esos momentos llegaron dos niñas a la unidad, quienes le traían comida a Quezada. Puntualiza, instruyó a Cádiz que les dijera a ambas que dejaran la comida y regresaran después. Soflame, llegó el Teniente Adriazola, quien se acercó al calabozo para verificar la situación y concurrir en su compañía al domicilio del Mayor Catalán a informar lo sucedido. En el lugar, el Mayor contactó al Magistrado de apellido Viñuela, en su presencia se bajó el cuerpo y se remitió a la morgue de Curacautín, por orden verbal del Fiscal Militar de Angol, previo a ello, se contactó a un fotógrafo de la ciudad, llamado Pepe Rey, para que fotografiara el cuerpo del fallecido. Anexa, le correspondió bajar el cuerpo de Quezada, que estaba colgado de una viga del calabozo, subiéndose a una empalizada que había al interior de la habitación, inclusive en un intento se cayó. Afınca, el calabozo no tenía iluminación, se alumbraban con linternas. Interpreta, una vez sacado el cuerpo del calabozo, lo trasladaron al patio, donde sacaron sus vestimentos, observando manchas de excremento y semen, sumado a que tenía su cuello marcado por la acción de la amarra que se hizo en el cuello. Decanta el vínculo que utilizó Quezada para ahorcarse, correspondía a una chomba, utilizando una manga de esta en el cuello y la otra para amarrarse a la viga del techo. Esta chomba era de lana, color azul, la cual se remitió al tribunal. Atina, en la altura del techo tenía cerca de 2 metros 20 centímetros y en el lugar

no había luz eléctrica ni enchufes, solo se iluminaba por la luz del patio. Esa tarde, en que ocurrieron los hechos estaban en el Cuartel junto a Cádiz, el Cuartelero y el Vigilante, no recordando que hubiese otros funcionarios en esos momentos. Conjetura, no era habitual aplicar corriente a los detenidos en ese tiempo, no estaban permitidos los apremios y torturas a detenidos por parte del Mayor Catalán. Respecto a la causa de muerte de Quezada, menciona que fue por ahorcamiento. En relación a lo que se le expone en este acto en el sentido que el protocolo de autopsia de la víctima menciona como causa de muerte la acción de corriente eléctrica aplicada a algunos dedos de la mano, desconoce esa situación. Al revisar el cuerpo de la víctima no se percató que los dedos de sus manos estuvieran quemados. Efectivamente ese día junto a sus acompañantes vestían de civil. Blasona, efectivamente cuando llegó la madre de Quezada a la unidad, le avisó sobre la manera en que murió, incluso le informó que el cuerpo ya estaba en la morgue del Hospital de Curacautín. Basa, nunca conoció a Marcos Quezada, solo ubicada de vista a su madre. Con posterioridad supo que la detención de Quezada, fue cerca del mediodía, por el Cabo Pérez junto a otro funcionario, del cual ignora su identidad, a propósito de una denuncia efectuada por el dueño de panadería, que imputaba a Quezada. Apoya, descarta la participación de un funcionario en la muerte de Quezada, y no le resultan extrañas las circunstancias en que se suicidó.

Declaración judicial de fecha 30 de noviembre de 2016, rolante de fs. 1780 (Tomo VI), en junio de 1989 se encontraba destinado y prestando servicios en la 5° Comisaría de Carabineros Curacautín. Además, recuerda, que en esa fecha se encontraba a cargo de un Reten, específicamente Manzanar, ubicado a 18 kilómetros de Curacautín, hacia Lonquimay. Ostentaba el grado de Sargento 1°. Estimula, no haber visto el 24 de junio de 1989 en el cuartel a don Joel Pérez Isla. Ese día que era sábado, había designado por el Sr. Comisario, Mayor Mauricio Catalán, para realizar en Curacautín una Comisión de Alcoholes, que consistía en fiscalizar botillería y negocios de expendio de bebidas similares. Lo hizo acompañado de dos Carabineros pertenecientes al Reten Manzanar, a su cargo. Recuerdo haber llegado a realizar ese servicio a las 15:00 horas de ese día, presentándose al Cuerpo de Guardia, con el Suboficial de Guardia el Cabo Cádiz, requiriendo la documentación pertinente para el cumplimiento del cometido indicado. Para este servicio vestían de civil. Expone que junto a Cádiz, se encontraba en el Cuartel otro Carabinero, cuyo nombre no recuerda, pero se desempeñaba como cuartelero. Aparte de estas dos personas, no vio a nadie más en el Cuartel. Hace presente que era día sábado. Barbulla, el servicio referido de alcoholes, se realizaba en un vehículo particular, de su propiedad. Recalca que

no vio a Joel Pérez Isla en el cuartel, ese día 24 de Junio de 1989. Por cierto, Pérez Isla era un Cabo 2° de dotación de la referida 5° Comisaria. Espeta que ese día 24 de junio volvieron al Cuartel en unas dos o tres oportunidades yendo a dejar detenidos, ocasiones en que tampoco vio a Pérez Isla en el Cuartel

Declaración judicial de fecha 06 de enero de 2017, de fs. 1896 a 1898 (Tomo VI), ratifica las declaraciones judiciales prestadas el 10 de abril de 2015. Musita que el día 24 de junio se hizo cargo de la comisión de alcoholes sin límite de horario, comenzando a las 15:30 horas. Esa comisión la integró junto a Claudio Contreras y Erick Vásquez. Detalla, desde el cuerpo de guardia iniciaron la comisión. Recuerda que en la guardia estaba el Suboficial de guardia y cuartelero. También había un vigilante exterior, pero estaba fuera. Aduce, la primera llegada a la unidad fue a las 16:30 horas aproximadamente, dejando algunos detenidos en la guardia, haciendo su entrega al Suboficial de guardia, explica el cuartelero hacía el allanamiento, todo esto en presencia del personal aprehensor. Relata, para esa labor utilizaban un furgón beige que era de su propiedad. Aproxima, la segunda vez que llegaron con un detenido, fue a eso de las 18:00 horas. Delibera, no tiene certeza si al momento de hacer alguna notificación de infracción de alcoholes detuvieron a alguien en algún local. Inquieta, vio al Suboficial de guardia haciendo un documento por un detenido por robo, ignorando en qué lugar estaba el detenido. Funda, a las 18:30 salieron a la población, regresando alrededor de las 19:00 horas, para comer y salir nuevamente. Explana, el que sea un día sábado, provoca que con mayor razón haya que fiscalizar. Ostenta, que ordenó a uno de los funcionarios a cargo, que llevaran la máquina de escribir para hacer sus denuncias, sentándose en una esquina del mesón del Suboficial de guardia, y envió a sus subalternos a comer, para seguir trabajando después. Estando en la confección de los parte llegaron dos niñas jóvenes y traen unas viandas. Cádiz le comento que eran de Manzanar-Atestigua, en ese momento llegó corriendo el cuartelero diciendo Cabo, Cabo, se va al pasillo y llega con cara de preocupación, contándole que un detenido estaba ahorcado. Fueron junto a Cádiz y cuartelero inmediatamente al calabozo, alumbrando con linterna y vio que estaba ahorcado con una chomba azul. Había una tarima apoyada en la pared. Dice, a las 18:00 pasó el Comisario a la unidad, y el Cabo Cádiz le comentó que confeccionaba el parte. A lo anterior, el Comisario le ordenó que lo hiciera de forma inmediata, para enviarlo a la cárcel. Cádiz se atrasó mucho. Siguiendo con el relato de esa noche, apenas se comunica a Cádiz sobre el detenido ahorcado llamó por teléfono al Teniente Adriazola, quien llegó a los 5 minutos aproximadamente, verificando la situación, y dejando a un funcionario de punto fijo. Fue junto a Adriazola hasta la casa del Comisario que

estaba como a 120 metros del cuartel. Suma que el Mayor Catalán ordenó comunicarle al magistrado. Le advirtió que los hechos eran competencia del Fiscal Militar, pero el Comisario igual quiso llamar al magistrado Viñuela, constituyéndose el Juez a la media hora después, observando lo que sucedía. Incluso, le sugirió al Comisario buscar al fotógrafo de la ciudad, don Pepe Rey, porque eventuales coletazos de la situación y había que informar mejor la jefatura. Él fue a buscar al fotógrafo. Detalla, se subió a la tarima para bajar el cuerpo, sin embargo se cayó sobre el Comisario. Como no pudo la primera vez, el Comisario lo sujeto, para poder con sus manos desatar el nudo de la viga, y bajar el cuerpo, el cual tendieron en el patio para revisarlo. Continúa, vieron el cuello y le sacaron los pantalones, luego lo vistieron nuevamente. Posteriormente, entre varios carabineros lo subieron a un vehículo con dirección a la morgue. La maniobra fue normal, no muy ruidosa. Especula que los detenidos tuvieron que ver lo que sucedía porque los calabozos estaban paralelos. Delibera, el joven detenido, debe haber sido alto, por eso pudo subirse a la tarima y hacer el nudo. El Tribunal le consulta si en la unidad de Curacautín había un carro o camilla. El deponente señala que no había carro o camilla. Incluso para sacar el cuerpo lo hicieron entre 4 personas, pero en brazos, no en camilla o carro. Tampoco recuerda con quienes hizo esa maniobra. El Tribunal le lee en lo pertinente la declaración de Juan Maldonado Pacheco de 21 de diciembre de 2016. El deponente no recuerda la camilla que menciona. Soslaya, al sacar el cuerpo del joven lo hicieron con las manos, es decir, no utilizaron otros implementos, como por ejemplo martillos. Insiste que no había camillas, bajaron el cuerpo a pulso, sólo con las manos. Asevera, Maldonado, miente. Adosa, él dice que fue detenido en una "cuca" de Carabineros, pero él fue trasladado en su vehículo. Señala, en la Comisaría no escuchó gritos de dolor ni supo de interrogatorios, menos estando el Mayor Catalán de Comisario, pues era una persona estricta con los subalternos. Espeta, los hechos sucedieron como los relata, no está mintiendo o encubriendo a alguien. Alega, tenía 24 años de servicio y una familia constituida, no arriesgaría su carrera, por una cosa así.

Diligencia de careo de fecha 29 de julio de 2019, entre don José Dolorindo Fernández Cofré y don Juan Nolberto Maldonado Pacheco fs. 2625 a 2627 (Tomo VIII), atestigua que si conoce al señor Maldonado, ratifica sus dichos acerca que no tiene participación de los hechos. El deponente le manifiesta al señor Maldonado, cual es el motivo de continuar con las mentiras, que si estaba sobrio ese día, ¿cómo dice que estaban vestidos con uniforme?, si lo hacían de civil, porque prestaban un servicio de la ley de alcoholes y para efectuar ese control de ley de alcoholes tienen que hacerlo de civil, ese era el motivo por el cual

cumplía una orden del señor Comisario de la 5ª Comisaría de Curacautín, el día de los hechos que fue el día el 24 de junio. Anexa, el señor Maldonado estaba en manifiesto estado de ebriedad, transitando por la vía pública, motivo por el cual le ordenó a sus acompañantes que lo condujeran a la Comisaría en el vehículo que andaban. Detalla, el vehículo particular de su propiedad que era una camioneta Chevrolet color beige. En ese vehículo trasladaron al señor Maldonado a la Comisaría, era más o menos las 18:00 horas, estaba lloviendo o lloviznando bastante fuerte y ese señor transitaba en manifiesto estado de ebriedad ese era el motivo de su detención. El motivo por el que fue detenido, era evitar que se quedara dormido en cualquier lugar, en las condiciones que transitaba en la vía pública. Escruta, trabajó por 16 años en la base de la unidad, en la Comisaria, haciendo toda clase de servicio, lo vio en varias oportunidades, pero nunca le dirigió la palabra, es la primera vez que lo detuvo personalmente y condujo a la Comisaria. Urde, el día de los hechos que fueron el 24 de junio del año 1989, si no se equivoca, se desempeñaba como Jefe de Retén en un destacamento de Manzanar que está a 18 kilómetros de Curacautín, llegando con su personal, entre las 14:00 o 14:30 horas desde el Retén con destino a la base unidad, vistiendo de civil, tenía todo su equipo en el destacamento donde trabajaba y salió vistiendo de civil conjuntamente con sus acompañantes y eso lo puede ratificar el personal de guardia que eran tres funcionarios que estaban en el lugar. Se mantiene en sus dichos.

9º) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ**, quien fue sometido a proceso a **fs. 2.078 a 2.085 (Tomo VI)**, con fecha 16 de octubre de 2017. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **AUTOR** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción:

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto a los anteriores acusados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 2.- María Angélica Augsburguer Estay. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 12 Roberto René Cáceres Acuña. |
| 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. | 13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco |
| 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. | |

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna

falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Soflana, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continúa, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaría de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, apreció que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles.** Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflame que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se apreciaba en ellas.**

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que

suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), explaya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a

Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría intentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito.** Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y **sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños.** Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimiento, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la

unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaría de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8 PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que **no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.**

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, **José Fernández Cofré** haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primeros auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a mano alzada de la parte posterior de

la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad.** Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explica que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de atentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para**

trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas. Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado

superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente. Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba.** Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbulla, pudo sentir que **en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera.** Continúa, **en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito.** Soflama, **entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venia desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney.
2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía.
3. Informes de Carabineros de Chile.
4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago.

5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017.
6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017.
7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.
8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.

9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín.

10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco.

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotanológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del*

pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado"

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ **a)** *La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b)* *Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c)* *La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d)* *Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e)* *La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f)* *Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g)* *Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h)* *La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un*

calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: *“a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”*

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo

VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: *“a) Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”*

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quezada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en esta parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el

cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios **Sargento Primero José Fernández Cofré,** Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** *Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b)* *Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c)* *Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución*

del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°;

d) *Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”*

10°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **AUTOR** en los términos del artículo N° 15 N°1 del Código Penal al acusado **JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA.-

11°) Que prestando declaración indagatoria **NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA** (29 años a la época de los hechos), quién declaró de **fs. 110 a 112 (Tomo I); 138 (Tomo I); 695 a 696 (Tomo II); 1092 a 1093(Tomo IV); y fs. 1659 (Tomo V).**

Declaración judicial de fecha 21 de julio de 1989, rolante de fs. 110 a 112 (Tomo I), aquilata el 24 de junio de 1989 efectuó el servicio de primer turno en la población de Curacautín junto al Carabinero Marcos Aguirre Guajardo. Desarrolla que a eso de las 11:00 horas el jefe de turno, el Sargento Fideromo Vásquez López, les comunicó que aparentemente ocurrió un robo en la panadería suiza y se sospechaba de Marcos Quezada Yáñez. En uno de los recorridos, alrededor de las 12:30 horas, se encontró con una pareja compuesta por el Cabo Pérez y Carabinero Hormazábal, con quienes comentaron el delito. Transcurrieron 15 minutos aproximadamente, apareció caminando el individuo por calle O'Higgins al llegar a Serrano, procediéndose a su detención y trasladarlo a la unidad, caminando sin ser esposado. Descarga que luego de unos dos minutos en la unidad, el Cabo 2° Pérez, quedó en una dependencia contigua al cuerpo de guardia solo con el detenido, mientras él fue a la guardia. Al regresar estaba el Teniente Adiazola. Una vez interrogado el detenido por el Cabo Pérez reconoció en forma espontánea y sin apremio físico su participación, sacando de entre sus ropas dinero, en billetes y monedas, que eran producto del robo a la panadería, este trámite se extendió por 10 o 15 minutos. Explana, al ser consultado por el cuchillo carnicero, manifestó haberlo lanzado al estero manzanoco detrás de un establecimiento educacional. Así las cosas, fueron con el detenido esposado y en el furgón de la Unidad, se trasladaron hasta el sector donde presumiblemente había tirado el arma blanca. En dicho lugar, y previo solicitar autorización al dueño del predio, junto al Carabinero Hormazábal, rastrearon la orilla del estero, encontrando el deponente, el cuchillo y un formón. El detenido se quedó afuera del furgón. Explica, regresaron al cuartel, y la denunciante reconoció el cuchillo. Funda, el formón fue utilizado para descerrajar la entrada al local e ingresar a esta. Barbullá, en la guardia se entregó las especies y al detenido al Suboficial de guardia, y se procedió a confeccionar una minuta con lo actuado, a objeto de que éste confeccionará la denuncia, y en horas de la tarde, se trasladará al detenido a la cárcel. Conjetura, se retiró de la unidad a las 15:00 horas, por haber terminado su servicio y se dirigió a su domicilio. Manifiesta, el 25 a las 14:25 horas, fue informado por el Cabo Pérez que el detenido por robo se había suicidado en un calabozo. Decanta, el detenido Marcos Quezada Yáñez, no fue víctima de malos tratos, ni amedrentamientos, castigos físicos, ni se le presionó psicológicamente para que reconociera su autoría en el delito, su declaración fue espontánea. El trato hacia su persona, fue paternal, ya que evidencio problemas con su madre, la cual constantemente le pedía que se fuera de la casa. Explana que el detenido fue aprehendido en la vía pública; de inmediato se le condujo al Cuartel específicamente hasta el cuerpo de guardia y posteriormente se le pasó a una

pieza contigua donde hay una mesa de pin pon. No recuerda si en ese momento estaba el Teniente Adriazola. Recalca que nada se le hizo al detenido. Cuando se retiró del cuartel el detenido estaba en el calabozo, lugar al cual no fue. Explica, no haber observado lesiones visibles a simple vista, tampoco expresó algunas molestias. Su comportamiento fue normal. El detenido según recuerda vestía una parca azul y blue jeans. El Teniente Adriazola estuvo presente cuando el detenido reconoció su autoría, entregó el dinero sustraído e indicó donde haber botado el cuchillo y formón.

Declaración extrajudicial de fecha 10 de julio de 1989, rolante de fs. 138 (Tomo I), aduce que hace 10 años pertenece a Carabineros de Chile con el grado de Cabo 2° y hace un año y medio trabaja en Curacautín. Acota que el 24 de junio pasado, se desempeñaba en el primer turno de Servicio de Población, junto al Carabinero, Marcos Aguirre. Anexa, a las 11:00 horas, les comunicaron que habían ingresado a robar a una panadería, y debían ubicar al sospechoso, identificado como Marcos Quezada Yáñez, iniciando las diligencias de inmediato, y siendo alrededor de las 12:30 horas, se encontraron con otra pareja de funcionarios, compuesta por el Cabo Pérez y Carabinero Hormazábal, en la intersección de las calles O'Higgins con Serrano, apareciendo sorpresivamente el sospechoso, al que detuvieron inmediatamente y trasladaron al a Comisaría. Continúa, una vez ahí, en presencia de los aprehensores y del Teniente César Adriazola Azocar, confesó su delito, entregando el dinero sustraído y manifestó haber robado un cuchillo, el cual había lanzado en el estero manzonoco, detrás del Liceo Industrial. Ensayó, con el Cabo Pérez, Carabinero Hormazábal y el detenido se trasladaron hasta el lugar, encontrando el referido cuchillo y un formón, el cual utilizó para forzar la puerta y un cajón de la panadería en donde cometió el delito. Funda, confeccionaron la minuta sobre los hechos, que se entregaron en la guardia, junto al detenido y las especies recuperadas, a objeto de que el personal de guardia, confeccionará el parte correspondiente y enviará al detenido a la cárcel. Inquiere, a las 15:00 horas terminó su turno y se fue a su domicilio, al regresar al día siguiente a su trabajo, esto es las 14:25 horas, para iniciar el segundo turno, es decir hasta las 23:00 horas, se enteró que el detenido Quezada Yáñez, se habría suicidado en uno de los calabozos. Señalar, el detenido no fue maltratado físicamente en la Comisaría se le dio un trato familiar, inclusive confesó tener problemas familiares, en especial con su madre, sumado que no quería regresar a la cárcel donde anteriormente estuvo procesado por otros delitos.

Declaración judicial de fecha 19 de diciembre de 2012, rolante de fs. 695 a 696 (Tomo II), explicita que ingresó a Carabineros de Chile el 1 de abril

de 1979, siendo su primera destinación la 1° Comisaría de Angol. Llegó a la 5° Comisaría de Curacautín en enero o febrero de 1989. En ese lugar permaneció hasta fines de 1991, cuando fue destinado a la región Metropolitana. Ratifica sus declaraciones judiciales y extrajudiciales prestadas en la causa rol 119 - 89 de la Fiscalía Militar de Angol rolantes de fs. 110 a 113 y a fs. 138 de ese proceso. Asegura, que no conocía a Marcos Quezada Yáñez, anexa, quizás fue detenido por las características físicas o vestimentas, datos que les deben haber proporcionado para realizar la diligencia. Justifica el Cabo Pérez y el Teniente Adriazola interrogaron al detenido por un lapso de 15 a 20 minutos, período en el cual estuvo presente. Narra, el detenido Quezada Yáñez no presentaba lesiones físicas visibles al momento de ser detenido. Tampoco al momento de ser entregado al Suboficial de Guardia, que en ese entonces era el Cabo Cádiz, quien no hizo reparos sobre este aspecto. Ahora bien, recuerda que el detenido Quezada Yáñez comentó acerca de problemas con su madre. Barbulla, durante su vida funcionaria le correspondió levantar dos o tres cadáveres de personas que se suicidaron por ahorcamiento. El vínculo utilizado era un cordel. El tribunal le exhibe las fotografías rolantes de fs. 37 a 39 en la causa rol 119 - 89 de Fiscalía Militar de Angol. El deponente señala de acuerdo a la experiencia, que en dos oportunidades el cadáver estaba con su cabeza hacia adelante, pero en una tenía la cabeza hacia atrás, como se le exhibe en las fotografías. Puede ser que la cervical se fracturará con el impulso de la caída al momento de quedar colgado el cuerpo y por ese motivo quedó en la posición que se refleja en las fotografías comentadas. Estima, al momento de ocurrir estos sucesos no pertenecía a la comisión civil, pero al año siguiente, si la integró. Anima que el Sargento 1° Mancilla era parte del SICAR en Curacautín. Estos funcionarios no trabajaban en la Comisaría, tenían una oficina aparte, no recordando dónde. No recuerda haberlos visto en la unidad cuando estos hechos investigados por Usía se suscitaron.

Declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, de fs. 1092 a fs. 1093(Tomo IV), cimienta no recordar a un Carabinero de apellido Fernández que haya estado cumpliendo servicios en la unidad el día en que ocurrieron los hechos relacionados con esta investigación, y a nadie con ese apellido como parte de la dotación de la Comisaría, ni nadie que haya cumplido servicios excepcionales y que pudiese haber sido de dotación de una unidad inferior. El Tribunal le consulta si recuerda al funcionario José Fernández Cofré. El deponente habla, había un Suboficial Mayor de apellido Fernández que vivía en Curacautín, no recordando si es que era jefe del Retén Manzanares. Adosa, no es habitual que los funcionarios de otros destacamentos inferiores a la Comisaría cumplieran

servicios en ésta, pero en esa época realizaban de manera esporádica. Es decir, a veces personal de unidades inferiores les llegaban a apoyar sus labores. Ese tipo de información no queda en la hoja de vida, pero si en los libros de guardia y de población. Proclama, los calabozos de esa unidad eran de tipo mixto, es decir, material sólido y madera. No recuerda muy bien, pero al parecer el suelo de los calabozos era de cemento con tarimas de madera cubriéndolo para que no pasara la humedad hacia arriba. Apunta, al parecer no había bancos para sentarse, ni camas para que los detenidos se acostaran. Sólo una especie de "palet" o tarima de madera de no más de 30 centímetros, medían aproximadamente 1.20 m de ancho por 2.20 m. de largo aproximados de grosor para que la humedad no traspasara a los detenidos.

Declaración judicial de fecha 21 de septiembre de 2016, a fs. 1659 (Tomo V), dice que el día de la detención de Marco Quezada Yáñez se encontraba de Primer turno en la Población en la ciudad de Curacautín. En tanto el día 24 de Junio de 1989, alrededor de las 10:00 a 11:00 de la mañana, en calle O'Higgins, frente al Banco del Estado se encontró con otro turno de Carabineros, al mando del Cabo Primero Joel Pérez Isla, no recuerda el nombre del otro funcionario que lo acompañaba. Adosa que los funcionarios iban con un detenido que era sindicado por el delito de robo a una panadería trasladándolo entre los cuatro a la Comisaria que quedaba a una distancia de cinco o seis cuadras. Esgrime que el detenido Quezada era un muchacho de aproximadamente 18 años de edad, delgado, alto, no presentaba ninguna lesión física y caminaba sin problema, de esta forma fue entregado a la Guardia. Allí lo recibió el Suboficial de Guardia que era el Cabo Primero Cádiz y el Carabinero Aedo, recuerda haber escuchado que reconoció el delito que se le imputaba. Adopta, se retiró de la Comisaría para seguir con sus labores en la calle hasta las 15:00 horas. Exclama, no vio entrar al detenido al calabozo, porque fue entregado en la guardia y sin novedad. Suma, el Cabo Joel Pérez Isla estaba de primer turno, en la Población de Curacautín, de 08:00 a 15:00 horas. Justifica, al término del turno, los funcionarios se formaban en la antesala de la Comisaria y entregaban el armamento. De la forma antedicha, lo realizó ese día con Joel Pérez. Continúa, luego se retiró a su domicilio, ignora si Pérez regresó a la Comisaría. Por último, al día siguiente regresó a la Comisaría a las 14:30 horas a comenzar su turno a las 15:00 horas, recién ese día supo de la muerte del detenido Quezada.-

12°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA**, quien fue sometido a

proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VI)**, con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **autor** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrados en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto del anterior acusado, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

- | | |
|--|--|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. |
| 2.- María Angélica Augsburger Estay. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa. |
| 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. | 12 Roberto René Cáceres Acuña. |
| | 13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco |

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no

le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Soflana, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada

le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaria de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parka y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles. Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de

levantamiento de cadáver emano de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflama que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, aunque no recuerda la tarima que se apreciaba en ellas.

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del

cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), exploya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente

es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo

vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría atentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de detenciones u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era**

ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito. Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños. Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimiento, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaría de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8 PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que **no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.**

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que usó un chaleco de vínculo, lo

que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, **José Fernández Cofré** haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad.** Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explana que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo

acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de atentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas. Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría. En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar**

hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta. Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los **gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente.** Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba.** **Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández.** **Barbulla, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflama, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente,

Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

1. Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney.
2. Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía.
3. Informes de Carabineros de Chile.
4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago.
5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017.
6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017.
7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.
8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.
9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín.
10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco.

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: **“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”** Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: **“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro**

de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), **contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal**, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ **a)** *La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b)* *Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c)* *La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d)* *Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e)* *La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de*

ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrica característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f) Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g) Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h) La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: “a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un

ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: “a) *Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”*

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quedada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en este parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero Jose Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** *Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b)* *Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando,*

aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c) Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; d) Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”

13°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **AUTOR** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO.-

14°) Que prestando declaración indagatoria MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO (21 años a la época de los hechos), quién declaró de fs. 115 a 116 (Tomo I); 139 (Tomo I); 1038 a 1039 (Tomo III) 1122 a 1124 (Tomo IV); 1268 (Tomo IV) y fs. 1678 (Tomo V).

Declaración judicial de fecha 21 de julio de 1989, rola a fs. 115 a fs. 116 (Tomo I), el sábado 24 de junio de 1989, se encontraba de servicio de primer turno, acompañando al Cabo Segundo **Nelson Almendras**. Recorrían la población, cuando les comunicaron de un robo ocurrido en la panadería suiza, dedicándose todo el turno a ese procedimiento, e intentar ubicar al individuo, catalogado como sospechoso, por indicaciones de la denunciante. Que, además trabajó en la panadería. Arguye, a las 12:30 horas se encontraron en el centro con otra pareja, compuesta por el Cabo Pérez con el Carabinero Hormazábal. Refiere unos minutos después, por la calle y en dirección a ellos, transitaba Marcos Quezada Yáñez, siendo detenido y trasladándolo a pie hacia la Comisaria, sin necesidad de esposarlo. En cuerpo de guardia, lo pasaron a una sala de entretenciones para tomarle declaración, reconociendo rápidamente su participación en el delito, y sacando de entre sus ropas, unos rollos de monedas y billetes, que entregó al Teniente Adiazola. Dijo haber sustraído un cuchillo y un formón que utilizó para ingresar, los cuales lanzó al río. Musita, los Cabo, Pérez y Almendras, junto al Carabinero Hormazábal, esposaron al detenido y fueron al lugar donde había botado las especies, regresando más tardes con ellas. Continúa, solucionado el problema e ingresado el detenido a los calabozos, concluyó su turno, retirándose a las 15:00 horas. Aquilata, haber ingresado al detenido al calabozo, junto al Carabinero cuartelero. Detalla, a las 20:00 horas, transitaba por el centro de la ciudad, y una pareja de servicio de Carabineros, le comentó del suicidio de Marcos Quezada en el calabozo. Sin embargo, al encontrarse de franco, no concurrió a la unidad, sino a la lista de los solteros, a las 01:00 horas, empero todo estaba normal a esa hora. Asevera, no vio el cadáver porque no estaba en la unidad. Agrega que si bien acompañó al detenido hasta la sala de entretenciones, salió inmediatamente, regresando al momento después; cuando el detenido hacia entrega del dinero sustraído y panfletos. Alega que en ningún momento vio que lo apremiaran físicamente, tampoco ha oído comentarios al respecto, nadie se explica la razón de su suicido, no obstante por comentarios posteriores, se dice que cuando estaba en la guardia, en más de una oportunidad, manifestó que no quería volver a la cárcel, y por lo mismo buscaba conversar con la señora para que lo ayudará. Suma, no le hizo nada al detenido. Espeta, el detenido no se comportó rebelde, siempre estuvo tranquilo. Evidencia que al ser

detenido no presentaba lesiones visibles, tampoco cuando regresaron con las especies, pero sí comentó tener problemas con sus padres, desde niño. Delibera, lleva dos años en la Institución, parte de ellos en la Comisaría de Angol. Cimienta, un amigo de él manifestó que la madre del detenido, días antes a lo sucedido, lo había agredido.

Declaración extrajudicial de fecha 10 de julio de 1989, rola a fs. 139 (Tomo I), refiere que hace dos años pertenece a Carabineros de Chile y tiene el grado de Carabinero, hace poco más de tres meses que se desempeña en la Comisaría de Curacautín. Urde que el 24 de junio de 1989, se desempeñaba en turno desde las 07:00 a 15:00 horas en compañía del Cabo Almendra. Alrededor de las 10:00 horas, les ordenaron ubicar a Marcos Quezada Yáñez, porque se presumía era autor del delito de robo, cometido en una panadería de la ciudad. A eso de las 12:30 horas, en la intersección de las calles O'Higgins con Serrano, se encontraron con la pareja de turno de Carabineros, conformada por Cabo Pérez y el Carabinero Hormazábal, gestándose una conversación acerca del delito y el sospechoso. En ese momento y forma sorpresiva, apareció Quezada Yáñez, procediendo a su detención, siendo trasladado hasta la Comisaría, lugar en donde confesó haber ingresado a robar a la panadería suiza, sacando de entre sus prendas el dinero sustraído, y manifestando que el cuchillo lo botó en un estero cercano. Así las cosas, cimienta salieron los colegas con el detenido en el furgón. Detalla, regresaron al rato, con el cuchillo y el formón que había utilizado para cometer el delito. Delibera, los colegas más antiguos que participaron en la detención de Quezada Yáñez, confeccionaron una minuta, que fue entregada a la guardia, junto al detenido y las especies recuperadas. Espeta, a las 15:00 horas, terminó su turno y salió de franco. A las 20:00 horas, se encontró con una pareja en el centro, y le comentaron lo sucedido, pero ignora detalles de los hechos. Asevera, el detenido no recibió ningún apremio, hasta la hora que él permaneció en la unidad.

Declaración judicial de fecha 12 de marzo de 2015, rola a fs. 1038 a fs. 1039 (Tomo III), ratifica las declaraciones que rolan de fs. 115 a 116 y la de fs. 139. Soslaya, en esa época era habitual, que cuando se detenía a personas fueran interrogados en el cuerpo de la guardia de la unidad. En el caso de Marcos Quezada Yáñez, ignora por qué lo interrogaron en la sala de entretenciones que está contigua a la guardia, eso fue una excepción. Recuerda que el Cabo Almendras y el Teniente Adriazola estaban presentes al momento de interrogar. No recuerda si Erwin Hormazabal participó del interrogatorio. Decanta, el procedimiento cuando se detenía a una persona por un delito, se trasladaba a la

unidad, allanaba el cuerpo en la guardia y se ingresaba inmediatamente a los calabozos. Los otros funcionarios, una vez que Marcos Quezada confesó el delito, lo llevaron fuera de la unidad para buscar las especies, ignora si fue por orden de algún superior. No recuerda exactamente qué funcionarios los trasladaron fuera del cuartel. Suma, no sabe porque se adaptó el procedimiento de trasladarlo fuera de la unidad para buscar las especies. Asegura al ser allanado, se le encontraron panfletos de vinculación política. Señala, Marcos Quezada no quería volver a la cárcel, porque al parecer había tenido problemas en ese lugar. El deponente realiza un croquis a mano alzada respecto a la dependencias de la Comisaría de Curacautín en 1989. El Tribunal ordena incorporarla al proceso. Describe, los calabozos eran viejos, con puerta de madera y no recuerda si había una cama o palé de madera en él. Las vigas eran de color verde. Desarrolla, una vez ingresado el detenido al calabozo, se fue hacer servicio a la población, enterándose de su muerte en horas de la tarde, cuando estaba franco, por medio de un colega que estaba de servicio en la población. Arguye, Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones visibles al momento de ser ingresado al calabozo. No recuerda que se quejara de dolores en alguna parte de su cuerpo. Esto lo sabe porque junto al Carabinero de apellido Aedo lo ingresaron al calabozo.

Diligencia de careo de fecha 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco; César Octavio Adriazola Azocar; Marco Antonio Aguirre Guajardo; Erwin Fernando Hormazábal Aedo; José Domingo Cádiz Parada, Bernardo Iván Aedo y Joel Pérez Isla rola a fs. 1122 a 1124 (Tomo III), sostiene no reconocer a la persona con quien se le carea, y nunca escuchó lo que relata Maldonado. Reitera, nunca supo sobre apremios contra el detenido. Se mantiene en sus dichos.

Declaración judicial de fecha 09 de abril de 2015, rolante de fs. 1268 (Tomo IV), suscita que comparece voluntariamente ante Usía a fin de solicitar su libertad bajo fianza o en subsidio arresto domiciliario total o parcial, según estime Usía. Lo anterior debido a que lleva un mes aproximadamente detenido en la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, considerando que no es un peligro para la seguridad de la sociedad ni para el éxito de la investigación. Cuenta, haber sido funcionario de Carabineros, 4 años, no jubiló ni tiene grado de retiro, debiendo subsistir trabajando en diferentes oficios, para mantener a su familia. Anexa, hace poco pudo comprar un vehículo que utiliza como taxi colectivo en la ciudad Limache. Este oficio le ha permitido mantener a su familia, pagar la pensión alimenticia de una de sus hijas y solventar los diferentes gastos que tiene. Atestigua, es el conductor de ese vehículo, el cual ni siquiera ha terminado de pagar y actualmente nadie lo conduce, por lo que estar detenido en la 2°

Comisaría de Carabineros de Temuco le produce un problema para a toda su familia. Recalca, no ser un peligro para la seguridad de la sociedad, ni para el éxito de la investigación, en caso de otorgarle su libertad bajo fianza. Además, hay un procesado excarcelado de nombre Nelson Almendras, que estaba en su misma situación, es decir, procesado como autor y actualmente está en libertad bajo fianza.

Declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2016, a fs. 1678 (Tomo V), decanta que Marcos Quezada se encontraba en buen estado físico, sin lesiones visibles ni atribuibles a terceras personas al momento de ser entregado al personal de guardia. Recalca que ingreso en buenas condiciones físicas, incluso él mismo lo llevó para su ingreso junto el cuartelero, por lo que le consta lo señalado precedentemente. Refiere, no recuerda exactamente que turno tenía Joel Pérez, pero al parecer era el primer turno. Acota, desconoce si don Joel Pérez se retiró del cuartel, se imagina que sí, como lo hace todo el personal que es casado. Señala, no haber visto ese día a Joel Pérez Isla en el cuartel.

15°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO**, quien fue sometido a proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VI)**, con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **autor** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto a los anteriores acusados puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

- | | |
|--|--|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. |
| 2.- María Angélica Augsburguer Estay. | 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |

11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa.

13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco

12 Roberto René Cáceres Acuña.

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Soflana, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaria de

Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles.** Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflama que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se aprecia en ellas.**

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto,

estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), explaya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el

occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedo asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos

funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría atentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito. Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños.** Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimiento, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaria de

Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8 PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, José Fernández Cofré haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad. Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante.**

Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explica que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de intentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas.** Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente

señala que según su recuerdo los **gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente.** Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbullá, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflame, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppá del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso

del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

- | | |
|---|---|
| 1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney. | 6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017. |
| 2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía. | 7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 3. Informes de Carabineros de Chile. | 8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago. | 9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín. |
| 5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017. | 10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco. |

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

- a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal**

tardía de Marcos Quezada Yáñez, consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), **contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación**, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ a) La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b) Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c) La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d) Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e) La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f) Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g) Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h) La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre

ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, **Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada** y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: *“a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”*

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: *“a)*

Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quezada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Pérez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en esta parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero José Fernández

Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** *Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1, de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b)* *Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c)* *Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; d)* *Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras*

b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”

16°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado JOEL ERWIN PÉREZ ISLA.-

17°) Que prestando declaración indagatoria **JOEL ERWIN PÉREZ ISLA (30 años a la época de los hechos)**, quién declaró de **fs. 80 a 83 (Tomo I); 142 a 143 (Tomo I); 294 (Tomo I); 580 a 583 (Tomo II); 584 a 585 (Tomo II); 1212 a 1214 (Tomo IV); 1269 (Tomo IV); 1666 a 1667 (Tomo V) y fs. 2452 (Tomo VII).**

Declaración judicial de fecha 19 de julio de 1989, de fs. 80 a 83 (Tomo I), copia de la cual se encuentra a fs. 580 a 583, cuenta el 24 de junio pasado se encontraba de servicio de primer turno en la Comisaria de Carabineros de Curacautín. Se encontraba junto a su acompañante tomando desayuno en el casino, cuando el Teniente Adriazola, le ordenó investigar el robo ocurrido en horas de la noche en la panadería suiza de la ciudad. En ese momento, en la guardia estaba la afectada con su marido de apellido Paine. Los denunciante manifestaron tener sospechas de un trabajador que tuvieron en el local de apellido Quezada. Al ir saliendo de la Comisaría el Teniente Adriazola, exclamó que un señor daba cuenta de que habían intentado forzar el candado de su negocio, y no podía abrir. Debiendo pasar a ver ese problema, por estar ambos locales en el mismo sector. Narra, pasaron al local del señor, y efectivamente habían tratado de

abrirlo. A simple vista comprobaron que no faltaba nada. Continuaron hacia la panadería, inspeccionando el lugar y verificando que el candado había sido forzado. Manifiesta que incluso delante de los trabajadores, que el autor de los hechos, era alguien que conocía el lugar. Cuando conversaron sobre el sospechoso, recordó que el individuo tenía antecedentes por otros delitos. Explica, durante la mañana hizo averiguaciones, estableciendo que a Quezada, lo vieron alrededor de las 22:00 horas, y posteriormente cerca de las 03:00 horas cercano a una discoteca. Por medio de un Sargento, que fue a su casa, supo que éste no había alojado en ella. Glosa, a las 12:45 horas, estaba conversando en calle O'Higgins esquina Serrano con el dueño del flipper ubicado en el mismo lugar. Instante en que apareció por la calle ese señor. De inmediato se acercaron a él, para informarle que estaba detenido y por ende debía acompañarlos a la Comisaría. Ensayá, se fueron conversando y sin esposarlo. Al llegar al cuartel, estaba el Teniente Adriazola, y como la guardia estaba ocupada, se le ordenó pasar a la pieza que está al frente de ella, quedándose por el lapso de uno o dos minutos solo con el detenido; luego llegó el Teniente y comenzaron a consultarle en relación a los hechos que se investigaban. Pero en menos de un minuto, reconoció su participación en el robo, abriéndose la chaqueta saco unos rollos de moneda y billetes. Ostenta, se le preguntó por el cuchillo carnicero sustraído, manifestando que lo botó en un estero que pasa por la parte posterior del liceo. Anexa, dijo que el resto del dinero lo ocupó para alojar en la pensión Dante y cigarrillos. Luego de esto, el Teniente se fue a su domicilio. Conjetura. El detenido por medidas de seguridad, fue esposado y concurrieron junto al Cabo Almendra, Carabinero Hormazábal y el chofer al lugar donde había botado el cuchillo. Lo anterior fue como las 13:15 horas aproximadamente. Narra que al llegar al lugar, se quedó con el detenido en la calle y sus acompañantes solicitaron permiso al dueño de la propiedad, para ingresar y regresar con las especies, a saber el cuchillo y un formón. Aprovecharon el viaje y ubicaron a los dueños de las especies, quienes reconocieron el cuchillo. Regresaron con el detenido a la Comisaría. Delibera, en la guardia le ordenó a un Carabinero que le diera un cigarrillo al detenido. Después de eso, informó por teléfono al Teniente Adriazola, que habían encontrado las especies restantes. Blasona, se le dejó toda la documentación al Suboficial de guardia para que lo ingrese a los libros, confeccione el parte respectivo y el oficio para remitir al detenido a la cárcel. Estima que el detenido insistía en conversar con la afectada, para no ir a la cárcel. Una vez concluido lo anterior, se fue a su domicilio, regresando al día siguiente a iniciación del servicio de segundo turno a las 14:25 horas. En ese momento, es informado que el detenido se suicidó el día anterior en los calabozos. Evidencia,

cuando él se retiró el detenido estaba en el calabozo. Inquieta que en ningún momento el detenido fue apremiado. Su confesión fue espontánea, ya que andaba con parte de los medios de prueba en los bolsillos. El dinero lo sacó de inmediato. No hubo diálogo áspero con el detenido. Adosa, el señor que autorizó la entrada a su propiedad, debió haber visto al detenido, porque estaban cerca, y se mantuvieron afuera del furgón. Reitera, no se amedrentó verbalmente al detenido, el trato fue cordial por su colaboración. Lo que ocurrió después que se retiró a su domicilio, lo ignora. Esgrime, el detenido al momento de su detención no presentaba lesiones visibles y los movimientos de sus manos eran normales. Por conversaciones posteriores con un panadero que sostuvo la dueña de la panadería y que conocía al occiso, éste arrendaba una pieza en la casa de la madre, se supo que recibía malos tratos de parte de ésta, siendo agredido por ella, el día anterior a su muerte.

Declaración extrajudicial de fecha 10 de julio de 1989, de fs. 142 a 143(Tomo I), estimula que hace once años pertenece a la institución, ostenta el grado de Cabo 2° y hace un año y medio aproximadamente se desempeña en la 5ta Comisaría de Curacautín. Basa que el 24 de junio de 1989 se desempeñaba en el primer turno, servicio de población junto al Carabinero Erwin Hormazabal Aedo, siendo alrededor de las 10:00 horas, el Teniente Adriazola, les ordenó se hicieran cargo de una investigación de robo, ocurrido en la panadería suiza, ubicada en calle Gregorio Urrutia de Curacautín, porque los afectados estaban en la unidad, dando cuenta del hecho. Glosa, en la misma oportunidad, llegó el dueño de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique, cuyo nombre no recuerda, para dar cuenta que desconocidos durante la noche habían ingresado a robar a su local. Los dueños de la panadería afectada, manifestó tener sospechas serias de Marcos Quezada Yáñez, por tener antecedentes de delincuente, por anteriormente sustraído el dinero del panadero del local. Advierte, llegaron primeramente al quisco, constatando que el candado había sido palanqueado y la llave no se encontraba bien, pero después de varios intentos lograron abrir el candado, constatando a simple vista que los desconocidos no lograron ingresar al local. Continuaron destino a la panadería verificando que efectivamente habían hecho palanca a una puerta de corredera de manera, ubicada inmediatamente a la caja, donde también palanquearon un cajón que está escondido debajo del mostrador de venta y sustrajeron la suma de \$ 8.000 y un cuchillo tipo carnicero. Comenta, alrededor del mediodía transitaba con el Carabinero Hormazabal, en dirección al kiosco que habían tratado de robar y su dueño manifestó que afortunadamente no le habían sustraído nada, pero habían cortado las cadenas que aseguran el techo, y además habían cortado los cables eléctricos de la

instalación eléctrica del local, verificando inmediatamente los daños, apreciando que los dos cables que pasaban entre el techo y la muralla, se encontraban cortados. Agrega, a las 12:45 horas, se logró ubicar al sospechoso, Marcos Quezada Yáñez, en la esquina de calle O'Higgins con Serrano. Previo se habían reunido con la otra pareja de Carabineros que estaba de servicio, compuesta por el Cabo Almendra y el Carabinero Aguirre. Procediendo los cuatro a detener al muchacho y se fueron a la Comisaría, conversando, sin necesidad de esposarlo. Ya en la unidad, el detenido confesó su participación y sacó de entre sus ropas, unos rollos de monedas, monedas sueltas, tres billetes de mil pesos, unos panfletos que no leyó. En cuanto al cuchillo carnicero señaló haberlo lanzado a un estero, detrás del liceo. Lo anterior fue en presencia del Teniente Adriazola Azocar. Comunica, posteriormente en el furgón policial en compañía del Cabo Almendra, Carabinero Hormazabal y el detenido, fueron al lugar donde había tirado el cuchillo sustraído, que se encontraba junto a un formón, el cual fue reconocido por el detenido y que lo había sido utilizado para forzar la puerta y cajón de la panadería. Regresaron al cuartel con las especies y el detenido, procediendo hacer la minuta con los detalles, remitiendo el cuchillo, el formón y la suma de \$ 6.385 en dinero efectivo, haciendo presente que había gastado dinero en alojamiento y cigarros. Lo anterior, fue entregado al Suboficial de guardia para efectuar el parte correspondiente y remitir el detenido a la cárcel. Barbulla, a las 15:00 horas los cuatro funcionarios aprehensores, entregaron el turno y se retiraron a sus domicilios. Tomando conocimiento al día siguiente, a eso de las 14:25 horas, que el detenido Marcos Quezada Yáñez, se suicidó. Colige, el detenido en ningún momento fue presionado para confesar su delito, otorgándose un trato paternalista, porque al aclarar el problema, le dieron un cigarrillo, y conversó que tenía muchos problemas en su vida, por no tener calor familiar y ser criado por la abuela. Lo anterior en atención a que sus padres no vivían juntos y su madre era alcohólica. Además se veía preocupado por su llegada a la cárcel, quería terminar el problema en la Comisaría, solicitándole a la afectada que retirará la denuncia, respondiéndole que eso era imposible y debía culminarse en Tribunales.

Declaración extrajudicial de fecha 26 de junio de 1989, a fs. 294 (Tomo I), cuenta el 24 de junio pasado se encontraba de servicio de primer turno, acompañado del Carabineros Erwin Hormazabal Aedo, y aproximadamente a las 10:00 horas, el Subcomisario de los servicios, les ordenó verbalmente que procediera a efectuar las diligencias tendientes a esclarecer un delito de robo que había ocurrido en horas de la madrugada del mismo día, en la panadería Suiza, ubicada en calle Gregorio Urrutia N° 240, diligencia que cumplieron

inmediatamente. Continúa, de acuerdo a los antecedentes obtenidos durante la investigación, logramos detener a Marcos Quezada Yáñez, quien era el principal sospechoso del delito en comento, trasladándolo hasta el cuartel. Detalla que en la unidad lo interrogaron en presencia del Subcomisario de los Servicios y personal de guardia, manifestando en forma espontánea, ser el autor del delito aludido, entregando en el acto, parte del dinero sustraído. Invoca, al detenido en ningún momento se le agredió, ni de palabra ni físicamente, además cooperó en todo momento diciendo la verdad, manifestando que lo hacía por problemas familiares.

Declaración judicial de fecha 26 de julio de 2012, de fs. 584 a 585 (Tomo II), manifiesta que ingresó a Carabineros de Chile el 1 de septiembre de 1978, siendo su primera destinación la 5° Comisaría de Panguipulli. En 1983 es destinado a la 1° Comisaría de Valdivia. No recuerda en qué fecha llegó a Curacautín, pero estuvo cuatro años en esa ciudad y tres años en Lonquimay. Ratifica íntegramente la declaración prestada ante la Fiscalía Militar de Malleco, rolante de fs. 580 a fs. 583. Puntualiza, no es poco común que algunas personas se ahorquen utilizando sus chalecos, ha sucedido con anterioridad. Relata, al revisar los lugares que el detenido intentó robar apreció cables de electricidad cortados, por lo que presume que si el occiso presenta muestras de haber recibido alguna descarga eléctrica, esta debió haber ocurrido en esa oportunidad. Sin embargo, cuando entregó al detenido en la guardia no recuerda que él haya presentado signos de haber sido maltratado o de tener huellas de esta naturaleza. Interpreta que quiénes formaban parte de la Comisión Civil en aquel tiempo. Comunica, los calabozos estaban afuera de la Comisaría, eran de madera. En general esta unidad era muy antigua. Utiliza, el detenido siempre se mostró colaborador, pero muy nervioso ya que no quería ir a la cárcel porque según él allá tenía problemas. Además, cuando lo allanaron se le encontraron gran cantidad de panfletos del PPD.

Declaración judicial de fecha 30 de marzo de 2015 de fs. 1212 a fs. 1214 (Tomo IV), depone a fin de exponer la situación que lo aqueja. Señala, que con fecha 18 de marzo de 2015, fue notificado del auto de procesamiento en la presente causa. Ese día se le indicó que designaban como abogado de turno a don Aldo Rodríguez Zambrano, ya que en ese momento no tenía abogado que asumiera su defensa. Prefiere, lo condujeron hasta la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco y no recuerda si el mismo día o el día siguiente, llegó el abogado Rodríguez Zambrano hasta la Comisaría a verlo junto con Marcos Aguirre, quien ya estaba detenido en ese lugar y según lo que supo, lo representaba como abogado de turno. Cuando el abogado llegó hasta la Comisaría, le indicó haber sido ingresado ahí por la misma causa de Aguirre y que en el Tribunal indicó que

él debía representarlo como Abogado de turno en lo criminal, pues en ese momento no tenía dinero para que alguien lo defendiera. Narra, ese día, el abogado Rodríguez se presentó como abogado de turno en lo criminal, comentándole haber sido designado por la Corte de Apelaciones y que también había sido designado para la defensa de Marco Antonio Aguirre. Además, como era la primera vez que le correspondía realizar el turno en lo criminal, fue hasta la Corte de Apelaciones a conversar con el Presidente de este Tribunal, a fin de saber los derechos y deberes que le correspondían como abogado del turno, manifestándole el Ministro Presidente que a los únicos que no podía cobrarles era a las personas de extrema pobreza, es decir, los indigentes, situación en la que él no estaba, por ser jubilado de Carabineros. Por lo anterior, le indicó que si quería contratarlo para sus servicios tenía que depositarle \$1.000.000 (un millón de pesos) y cinco cuotas de \$300.000 (trescientos mil pesos) y que esto correspondía a su defensa de todo el proceso. Anexa, que él como Abogado, solo le correspondía pedir su libertad por el mes de marzo, ya que el turno debía entregarlo en abril, fecha donde le designarían otro abogado de turno, y así sucesivamente, ofreciendo sus servicios profesionales y pidiendo el depósito de \$1.000.000 (un millón de pesos) para solicitar la libertad y además estudiar su defensa. Musita, en su aflicción, se reunió junto al Abogado y su familia en el casino de la 2° Comisaria. Habla, El punto es que el abogado sabía que era abogado de turno, porque se presentó como tal cuando lo fue a ver y a pesar de eso le cobró por sus servicios profesionales. Como se encontraba afligido, es primera vez que se ve envuelto en una situación como esta, es decir, con un procesamiento en causas. Los primeros días estaba muy contrariado y no sabía qué hacer, por eso accedió a contratarlo como abogado particular, pero eso no corresponde porque él estaba designado por el Tribunal, aprovechando de la situación para cobrar, sabía que estaba acongojado por lo sucedido. Incluso, sabe que a Marcos Aguirre también le intentó cobrar días antes, pero éste se negó porque sabía que era abogado de turno y en el Tribunal le informaron que no debía pagar nada por la defensa. Colige, solo presente que el abogado Rodríguez Zambrano le devuelva el dinero que le transfirió, que por lo demás es prestado y pueda asumir su defensa un profesional más idóneo. El dinero que le transfirió se lo prestó su cuñado, él mismo hizo la transferencia electrónica por \$1.000.000 (un millón de pesos). El deponente exhibe al Tribunal copia de contrato de prestación de servicios celebrado el día 20 de marzo de 2015 entre él y el abogado Aldo Rodríguez Zambrano y copia de comprobante de transferencia electrónica a Aldo Rodríguez Zambrano desde cuenta de Carlos Solís Báez por la suma de \$1.000.000 (un millón de pesos). El Tribunal ordena dejar copia de los

documentos en el proceso. Puntualiza, que hace nueve días el abogado no toma contacto con él, no contesta el teléfono ni nada por el estilo.

Declaración judicial de fecha 09 de abril de 2015, de fs. 1269(Tomo IV), comparece a fin de solicitar su libertad bajo fianza, o en subsidio arresto domiciliario total o parcial, según estime Usía. Lo anterior debido a que lleva 3 semanas aproximadamente, detenido en la 2° Comisaría de Carabineros de Temuco, no sé considera un peligro para la seguridad de la sociedad ni para el éxito de la investigación. Suma, padece de diabetes mellitus II e hipertensión arterial, lo que le genera preocupación, ante una eventual descompensación, que puede ocurrir en cualquier momento. De hecho, las ocasiones en que anteriormente se ha solicitado su libertad, se acompañaron certificados médicos que avalan dicha situación. Apunta, está siendo tratado por un médico endocrinólogo y la medida cautelar de prisión preventiva ha significado que pierda las horas a los distintos especialistas a los que se le ha derivado en la ciudad de Valdivia. Prefiere, que todo lo que padece está siendo tratado a través del plan AUGE, por lo que es muy difícil conseguir horas al médico y no debe perderlas. Anexa, acompaña un certificado extendido por el médico de Carabineros Guillermo Garrido, donde da cuenta de su situación de salud y de la úlcera varicosa que tiene en su pierna izquierda, la cual está siendo tratada diariamente por temor a que se extienda y pueda perder su extremidad. Por todo lo que expongo pide a Usía que se le conceda la libertad bajo fianza o en subsidio se decrete arresto domiciliario total o parcial.

Declaración judicial de fecha 21 de septiembre de 2016, de fs. 1666 a 1667 (Tomo V), explana el 24 de junio de 1989, detuvo a Marcos Quezada Yáñez, cerca de la plaza de Curacautín, alrededor de las 12:30 horas, por haber sido denunciado por sospechas de un robo a un local donde él trabajó. Por lo anterior, concurrió junto al Cabo Segundo Nelson Almendra Illesca, Carabinero Erwin Hormazábal Aedo y Marco Aguirre Guajardo, a detenerlo, sin presentar resistencia a la misma, se encontraba en buenas condiciones de salud, siendo trasladado a pie y sin esposas a la Comisaría de Curacautín, que se emplazaba a tres cuadras de la plaza antes señalada. Al llegar al Cuartel Policial, se encontraba en un pasillo del cuartel policial, el Teniente Cesar Adiazola Azocar, quien le informó del procedimiento puesto que él lo había enviado a realizar la diligencia. El detenido había reconocido en el trayecto hacia la Comisaría que era el autor del delito que denunciaba la afectada. Posteriormente se procedió a revisar al detenido, frente a la guardia, al Oficial y resto de funcionarios, encontrando entre sus ropas, rollos de monedas y monedas sueltas, no recuerda la cantidad, especies que entregó al personal de guardia, en ese

momento el funcionario José Cádiz Parada, lo cual quedo consignado en el parte policial. El detenido al ser entregado al personal de guardia se encontraba en buenas condiciones físicas y sin lesiones, según consta en el libro de novedades de la guardia del Cuartel policial. Blasona, a las 13: 10 horas aproximadamente terminó el procedimiento. Hace presente que cuando el joven se encontraba en la guardia, estaba nervioso, porque no se quería ir preso a la cárcel de Curacautín, ya la conocía y tenía miedo. Invoca, haberle manifestado dicha situación al funcionario de guardia, José Cádiz, que realizara luego los trámites de su traslado, porque lo encontraba nervioso y ansioso. Anexa, el detenido le pidió permiso para fumar a lo que lo autorizó causando la molestia del funcionario de guardia José Cádiz. Soslaya, no haber conducido el detenido al calabozo, su función termina cuando lo entrega al Suboficial José Cádiz Parada. Narra, el servicio que cumplía el día 24 de junio de 1989, era el de primer turno, que comenzaba a las 06:25 horas de presentación, con salida a la población a las 07:00, con término a las 15 horas del mismo día, siendo despachado por el jefe de turno, Sargento Primero Fernando Vásquez López. Dice, que regresó al día siguiente a las 14:25 horas, enterándose por el funcionario que estaba de centinela, no recuerda nombre, que el detenido del día anterior, se había ahorcado. Anexa que nadie fue a informarle a su domicilio de lo ocurrido, sólo se enteró al día siguiente. Estimula que no regresó al cuartel policial, sino hasta el otro día. Recalca que el detenido Marcos Quezada Yáñez, al ser entregado a la guardia estaba sin lesiones y en buenas condiciones físicas, además, desea hacer presente que el detenido antes de ser aprehendido tiró en un estero que está cerca de un liceo unos elementos que ocupó para poder cometer el ilícito que fue, forzar un cajón del negocio de la denunciante y posteriormente lograron encontrar al parecer, era un cuchillo o formón no lo recuerda bien, estas especies fueron también entregadas en la guardia al momento de ser entregado el detenido.-

Declaración judicial de fecha 12 de octubre de 2018 de fs. 2452 (Tomo VII), afinca el día de los hechos llegó a la Comisaría acompañado del Carabinero Hormazábal porque estaban de servicio en la población. Refiere que su turno comenzó a las 06:25 horas, la salida a la población era a las 7.00 horas, regresando a la Unidad Policial alrededor de las 11.00 horas aproximadamente. Estando allí, al llegar el Teniente Cesar Adiazola Azocar, les ordenó que investigaran un robo que había ocurrido en una panadería, frente a lo cual se fueron caminando por la calle principal, dándose cuenta que un kiosco que se ubicaba en una esquina de la calle principal, estaba descerrajada, la protección de la ventana sacada, y además unos cables de luz cortados con fuerza "al parecer los tiraron" estos cables alimentaban de luz al kiosco, y en su interior se apreciaba

que estaba todo desordenado. Decanta, informando inmediatamente por radio a la Unidad Policial, no vieron a nadie cerca y tampoco estaba el afectado (dueño de dicho kiosco), así que continuaron al procedimiento que les había ordenado el Teniente. Precisa que no tomaron el procedimiento del kiosco y no recuerda quien fue a constatar el hecho.

18°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **JOEL ERWIN PEREZ ISLA**, quien fue sometido a proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VI)**, con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **autor** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto de los anteriores acusados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 2.- María Angélica Augsburguer Estay. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 12 Roberto René Cáceres Acuña. |
| 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. | 13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco |
| 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. | |

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin**

embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el

interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Soflana, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaria de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en

dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles.** Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflame que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se apreciaba en ellas.**

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflame ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y

en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), exploya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene

definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del

hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las**

especies con las que podría atentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia. Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito. Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños. Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimiento, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaría de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8. PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, José Fernández Cofré haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad. Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un

cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explica que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de intentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas.** Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la

calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los **gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente.** Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbullá, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o**

combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflama, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos. Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas

193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se apreciaba en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se apreciaba en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

- | | |
|---|---|
| 1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney. | 6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017. |
| 2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía. | 7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 3. Informes de Carabineros de Chile. | 8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago. | 9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín. |
| 5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017. | 10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco. |

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica,*

aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.” Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: “la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez**, de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ **a)** La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; **b)** Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; **c)** La existencia de lesiones en “espejo” son resultado de la ejecución de la maniobra de “pinza” que se evidencian como lesiones de la misma

naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d) Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e) La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f) Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g) Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h) La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: “a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible

determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: “a) Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quezada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio

de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en este parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero Jose Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado N° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a) Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83,** toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana

que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; **b)** Declárase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; **c)** Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; **d)** Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”

19°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de

homicidio calificado en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **JOEL ERWIN PEREZ ISLA**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR.-

20°) Que prestando declaración indagatoria CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR (32 años a la época de los hechos), quién declaró de fs. 78 a 80 (Tomo I); 136 (Tomo I); 653 a 654 (Tomo II); 1122 a 1124(Tomo IV); y fs. 1631 (Tomo V).

Declaración judicial de fecha 19 de julio de 1989, de fs. 78 a fs. 80 (Tomo I), adopta el 24 de junio de 1989 se encontraba de servicio de fin de semana, en calidad de Sub Comisario. Cuenta, a eso de las 10:00 cuando estaba en la guardia, llegó una señora a efectuar una denuncia por robo a un dinero que se habría efectuado en su panadería. Así las cosas, se le tomaron los datos y manifestaba tener sospechas de una persona apellido Quezada, aportando la dirección de la misma. Le informó que se realizaría la investigación pertinente y de existir resultados positivos, se le efectuaría el denuncia. En ese momento, llegó el dueño de un pequeño quiosco, alegando le habían intentado de forzar un candado. Instruyéndole al Cabo Pérez que indagará ambas situaciones. A eso de las 12:30 horas, llegó el Cabo Pérez y sus acompañantes junto a Marcos Quezada Yáñez detenido, pasándolo de inmediato a una sala contigua a la guardia, y que se utilizaba para jugar pin pong. Decanta, en ese lugar fue interrogado, sin embargo reconoció inmediatamente ser el autor del delito a la panadería sacando entre sus ropas, las monedas envueltas en papel y unos billetes. Le preguntaron por un cuchillo y él manifestó haberlo tirado al estero manzanoco, junto al formón que utilizó para abrir la caja. Cuenta, cuando supo que el delito estaba aclarado, se fue a su domicilio. Volvió a las 17:30 aproximadamente al cuartel donde le informaron que a las 15:00 horas, había pasado el señor Comisario, quien dio instrucciones de enviar al detenido a la cárcel y confeccionar el respectivo parte. Por ende, reiteró la orden dada por el Mayor. Delibera, a las 19:30 horas, más o menos, lo llamaron a su domicilio, para dar cuenta que el detenido por robo se ahorcó, ordenando no hacer nada, mientras no llegará a la Comisaria. Evidencia, al llegar, había un funcionario de punto fijo en el calabozo ordenando que nadie pasara. Detalla, abrió la puerta para verificar el estado del calabozo y que nadie

tocara nada. Posteriormente fue hasta el domicilio del Comisario a dar cuenta de lo sucedido. Señala que cuando observo el cuerpo, estaba colgando desde una viga del calabozo, con una chomba atada al cuello. El cuerpo no pendulaba. Agrega, no tenía signos vitales el ahorcado, y por ello no ordenó bajarlo. El detenido estaba muerto. Colige, estuvo presente cuando se interrogó al detenido, el cual reitera inmediatamente reconoció ser el autor del delito, entregando el dinero que había sustraído. Asegura que en ningún momento se apremió físicamente al detenido, más aun el detenido colaboró en todo momento. Especula que cuando él se fue con dirección a su casa, fueron a recuperar las especies sustraídas con el mismo detenido. Blasona que en la investigación instruida se le ha insistido en la posibilidad de haber empleado algún tipo de violencia. Sin embargo no existe dicha posibilidad. Relata que no vio cuando llevaron al detenido al calabozo, porque ahí ya no estaba en la Comisaria. Pero no presentaba lesiones visibles, ni manifestó molestia en alguna de sus manos. Atestigua, efectivamente estaba presente cuando se apersonó en el lugar el Juez del Crimen de Curacautín, quien entró al calabozo y ratificó que el detenido estaba ahorcado. Sostiene la fotografía que se le exhibe corresponde a la chomba que tenía el occiso en el cuello.

Declaración extrajudicial de fecha 27 de julio de 1989, de fs.

136(Tomo I), comunica que es Oficial de Carabineros de Chile ostenta el grado de Teniente y se desempeña como Subcomisario de los servicios. Atina que el 24 de junio pasado se encontraba en la Comisaria y alrededor de las 10:00 horas llegó una señora a efectuar un denuncia por el delito de robo, en su local de Panadería, ubicada en calle Urrutia n° 240 de Curacautín, quien le comento que tenía sospechas de Marcos Quezada por haber trabajado con ella por unos días. Como tenían conocimiento que se trataba de un delincuente habitual de la ciudad, dio la orden de ubicarlo. Barbullá, llegó a la Comisaria un señor de apellido Ruiz, a dar cuenta que desconocidos habían ingresado a robar a su quiosco de confites, ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique, informando dicha situación al Cabo Pérez, para que iniciara las diligencias en el lugar. Explana, a las 12:45 aproximadamente, llegó el personal de servicio con el detenido Marcos Quezada Yáñez, ubicándolo en una sala emplazada frente a la sala de guardia y en su presencia, luego de unas breves preguntas, confesó su participación en el delito y saco de entre sus ropas, unas monedas y tres billetes de mil pesos, que sustrajo de la panadería, además de unos panfletos, que tiraron a la estufa de la guardia. Soflana, el individuo manifestó haber lanzado al estero cercano a la unidad, un cuchillo carnicero y un formón. Esclarecido el delito se retiró a su hogar. Glosa, como ese día estaba de servicio, efectuó una

ronda a las 17:00 horas aproximadamente, tomando conocimiento que a las 15:00 pasó el jefe de la Unidad, Mayor Mauricio Catalán, quien ordeno apurar el trámite para enviarlo al detenido a la cárcel, reiteró al Suboficial de guardia, la instrucción del Mayor, y regresó a su domicilio. Invoca, a las 19:20 horas, le informaron vía telefónica desde la unidad, que el detenido por robo, Marcos Quezada, se suicidó y colgándose con un chaleco en el calabozo. Concurrió de forma inmediata a la Comisaría, constatando la efectividad de lo comunicado. Se le dio cuenta a la Jefatura local, Fiscalía Militar y al Juez del Crimen de Curacautín, quien fue a la unidad, específicamente al calabozo n°1, presenciando que el detenido se encontraba colgado. La Fiscalía Militar de Angol, en forma radial, otorgó la orden de levantar el cadáver y remitirlo a la morgue. Evidencia que al detenido Marcos Quezada en ningún momento se le flageló ni fue víctima de apremio o castigo.

Declaración judicial del 28 de noviembre de 2012, de fs. 653 a fs. 654 (Tomo II), ratifica las declaraciones que rolan de fojas 136 y 78 a 79. Estima, apenas se tomó el procedimiento dio la orden a la guardia que trasladaran al detenido a la cárcel. Lamentablemente los subalternos eran muy lentos para efectuar el procedimiento y no acataron la orden de que todo se hiciera rápido. No recuerda si dio la orden de llevar de inmediato el detenido al calabozo. Justifica, a ese joven lo conocía, porque Curacautín era un pueblo chico y todos se conocían. Era una persona sana. Propone, no dio la orden de llevar al detenido fuera de la Comisaría. En todo caso, los procedimientos habitualmente se efectuaban de esa forma. Esgrime, la última vez que vio al detenido fue cuando lo interrogó en la guardia. No le consta que después se haya efectuado algún castigo físico. El detenido no tenía ninguna lesión visible cuando lo interrogó. Musita, en Curacautín era conocido como "El Cura", porque conversaba con los detenidos. En ningún momento fue sometido a apremios físicos durante el interrogatorio. Dice que cuando supo de la muerte instruyó no mover nada. El Mayor Mauricio Catalán fue el encargado de llamar al Juez Viñuela para comunicarle lo sucedido. Apoya que en su experiencia policial levantó muchos cadáveres, pero jamás ha cuestionado la posición del cuerpo de la persona ahorcada en la Comisaría de Curacautín en junio del año 1989.

Diligencia de careo, del 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco y don César Octavio Adriazola Azocar, de fs. 1122 a 1124 (Tomo IV), funda no reconoce a la persona que está a su lado, pero es totalmente desconocido lo que relata Maldonado. Asevera, se fue de la unidad, como las 13:30 a 14:30. Se enteró de lo ocurrido con Quezada como las 20:00 horas. Justifica, cuando lo llamaron concurrió hasta la unidad verificando

que el detenido estaba muerto. Expone que espero que llegara el Comisario y luego se tomó el procedimiento como ya declaró. Nunca supo sobre lo que relata Maldonado respecto a las supuestas torturas cometidas por Fernández o algún funcionario. Lo único extraño fue cuando llegó el informe de la autopsia que indicaba que había shock eléctrico en el cuerpo del detenido.

Declaración judicial de fecha 28 de septiembre de 2016, rolante de fs. 1631 (Tomo V), el Tribunal le lee las preguntas indicadas en la presentación que rola de fojas 1.534 y siguientes, el deponente señala la pregunta a) que lo vio cuando llegó, lo entrevistó y le entregó el dinero sustraído de una panadería durante la noche. Marcos Quezada estaba en buenas condiciones físicas. Él sacó el dinero de sus bolsillos y lo dejó sobre la mesa, sin ninguna dificultad. En relación a la pregunta b), refiere que no lo vio ingresar al calabozo porque al ser día sábado y como eran alrededor de las 13:00, lo interrogó y ordenó que confeccionar el parte u oficio para ser trasladado a la cárcel y se fue a su casa. Inquire, a la pregunta c, se le decía patrullaje o primer turno al efectuado desde las 07:00 hasta las 15:00 horas de cada día. Ese día Joel Pérez, estaba en primer turno. En cuanto a la pregunta d), declara que estaba en su domicilio por lo que no le consta si apenas terminó su turno, Joel Pérez, se retiró del cuartel. En todo caso lo más probable es que se haya ido, pero no lo vio, porque estaba en su domicilio en ese horario. En tanto la pregunta d), reitera interrogó al detenido y ordenó que lo ingresaran al calabozo e hicieran de inmediato el oficio para enviarlo a la cárcel, luego se fue a su casa, por lo cual no estuvo presente en el cambio de turno de los funcionarios a las 15:00 horas.

21°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR**, quien fue sometido a proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VI)**, con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **autor** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos

relacionados y aquilatados respecto de los anteriores acusados, puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).-

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 2.- María Angélica Augsburguer Estay. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 12 Roberto René Cáceres Acuña. |
| 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. | 13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco |
| 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. | |

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no

recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Sofloma, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa **que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para**

que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaria de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido, tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles**. Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflame que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se apreciaba en ellas**.

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido

alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), exploya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a

Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría intentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito.** Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y **sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños.** Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimentita, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la

unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaría de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8 PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que **no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.**

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, **José Fernández Cofré** haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primeros auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de

la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad.** Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explica que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de atentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para**

trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas. Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado

superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente. Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba.** **Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández.** Barbulla, pudo sentir que **en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflama, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

1 Documentos acompañados a la querrela Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney.
2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía.
3. Informes de Carabineros de Chile.
4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago.

5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017.
6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017.
7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.
8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.

9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín.

10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del*

pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado"

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ **a)** *La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b)* *Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c)* *La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d)* *Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e)* *La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f)* *Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g)* *Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h)* *La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un*

calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: “a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo

VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: “a) *Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.*”

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quezada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en este parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el

cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero Jose Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado N° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** *Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b)* *Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c)* *Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución*

del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°;

d) *Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”*

22°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **autor** en los términos del artículo 15 N°1 del Código Penal al acusado **CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA.-

23°) Que prestando declaración indagatoria **BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA** (21 años a la época de los hechos), quién declaró de **fs. 33 a 35(Tomo I); 134 (Tomo I); 289 a 290 (Tomo I); 711 a 712 (Tomo III); 1122 a 1124(Tomo IV); 1686 (Tomo V) y de fs. 2482 (Tomo VIII).**

Declaración judicial de fecha 03 de julio de 1989, rolante de fs. 33 a fs. 35 (Tomo I), descarga que el 24 de junio pasado se encontraba de

cuartelero, en el servicio de guardia en la 5° Comisaria de Carabineros de Curacautín, el servicio se extiende por 24 horas. Fuera de dicho servicio, es vigilante exterior junto con el cabo de guardia, con quien se turnan la función a ciertas horas, por orden del Suboficial de guardia. No puede precisar la hora, pero después del mediodía llegó en calidad de detenido Marcos Quezada Yáñez por el delito de robo. El detenido lo traía el Cabo Nelson Almendras Illesca, Joel Pérez Isla y los Carabineros Marcos Aguirre Cerda y Erwin Hormazabal Aedo. Decanta que posterior a ser interrogado por sus aprehensores en la sala de entretenimiento, colindante a la guardia, fue llevado a ésta y ahí procedió allanarlo en presencia del Suboficial de guardia, no encontrando nada anormal entre sus pertenencias, salvo un tallador y un ganchillo de metal que llevaba en la parka. Anexa, el detenido vestía zapatillas blancas, un pantalón al parecer color azul, no recuerda bien, una parca azul y dos chombas de lana. Explica, quedo sentado en una banca de la guardia. Explaya, más tarde llegó el Teniente Adriazola, quien le preguntó por la detención, respondiendo libre y espontáneamente que había robado. Sugiere, a las 15:00 horas el Suboficial de guardia, le ordenó trasladar al detenido al calabozo N°1 en compañía del carabinero Marcos Aguirre Cerda. Urde, el calabozo estaba vacío por lo que antes de ingresarlo, bajó la tarima y dejó al detenido en su interior. **Sofloma, en la tarde efectuó algunas rondas a los calabozos comprobando que el detenido estaba sin novedad.** Dice que a las 18:00 horas entregó su servicio de vigilante exterior, previo allanar a otro detenido, por ebriedad y conducirlo al calabozo N°2, acompañado del Carabinero Eric Vásquez Ordenes, observando que el detenido Quezada, miraba por la ventana de la puerta del calabozo afirmado en los barrotes, consultándole inclusive si necesitaba algo, pero manifestó que nada. Cimienta, transcurridos unos treinta minutos, realizó otra ronda encontrándose en la misma posición. Estima que a las 19:20 horas, el Suboficial de guardia, le ordenó que fuera a buscar al detenido Quezada para darle comida que le llevaron unos familiares junto a frazadas. Narra, como era de noche y los calabozos tienen iluminación exterior, alumbró con su linterna al interior del calabozo, pensando que estaba en el suelo. Adopta, se sorprendió al ver que había un espacio entre los pies del detenido y el suelo, enfocando inmediatamente hacia arriba, comprobando que estaba colgado de la viga con una chomba al cuello, de espalda a la puerta del calabozo. Espeta, inmediatamente dio aviso al Suboficial de guardia, quien luego de verificar la situación, le ordenó quedarse vigilando el calabozo mientras él llamaba al Comisario. Propone, no recuerda bien lo ocurrido con posterioridad pues se produjo una gran confusión. Habla, llegó al lugar el Juez de Crimen de Curacautín, quien ingresó al calabozo, dando la orden de levantar el cadáver en

presencia de él. Funda, relevo al Cabo de guardia, David Manríquez Toledo como vigilante exterior. Evidencia, al parecer se llevaron el cadáver en el furgón, pero no le consta, pues no lo vio. Lo anterior, en razón a que él estaba en el frontis de la Comisaria y el cadáver lo sacaron por otro lado. **Ensaya que cuando vio al detenido, no apreció que tuviera lesiones visibles**, tampoco en sus manos. Suma, el detenido no le dijo en ningún momento que fue maltratado. Es más, el Cabo Pérez le ordenó que le diera un cigarrillo, el cual se lo fumó en la guardia. Puntualiza, ignorar porque el Suboficial de guardia no estuvo en el interrogatorio. Precisa, cuando vio al detenido colgado, la casaca la tenía puesta. Atina, el detenido estaba sano, se mostraba de forma natural. Soslaya, no está encubriendo un hecho ilícito, solo declara la verdad. La tarima de madera estaba en la posición del cadáver en el suelo, afirmada en una de las murallas. Describe el calabozo, es de concreto, en el techo tiene dos vigas a la vista. Los detenidos por ebriedad estaban en el calabozo del lado, que es más grande. Urde, no vio que se le hiciera algo al detenido.

Declaración extrajudicial de fecha 12 de julio de 1989, rolante de fs. 134 (Tomo I), añade hace dos años pertenece a Carabineros de Chile, tiene el grado de Carabinero y la Comisaria de Curacautín ha sido su única destinación. Inquiere el 24 de junio pasado, se desempeñaba como cuartelero, turno que inició a las 08:00 horas siendo su principal función cuidar a los detenidos, vigilante exterior y cooperar al Suboficial de guardia, en el caso sublite Cabo Cádiz. Adosa que a las 12:45 horas, llegaron unos funcionarios con el detenido Marcos Quezada Yáñez hasta la unidad, en momentos que se encontraba almorzando. Agrega que cuando retomó sus funciones, las diligencias se habían cumplido a cabalidad prácticamente pues el detenido había confesado su participación, se recuperaron las especies productos del mismo, al igual que un formón que utilizó en la comisión del hecho, por tanto ignora mayores antecedentes de esta causa. Ostenta que a las 14:30 horas aproximadamente le ordenaron dejar a Quezada Yáñez en el calabozo, allanándolo en forma minuciosa; los funcionarios más antiguos continuaron sus funciones administrativas. Proclama, su función de cuartelero continuó en forma normal, turnándose con el Carabinero José Manríquez Toledo, en la labor de vigilante exterior y labores internas de cuartel, entre ellas las rondas periódicas a los calabozos, a objeto de verificar el estado a los detenidos. Espeta que a las 19:00 horas, pasó una ronda en los calabozos, observando que el detenido Quezada miraba hacia el exterior por la rejilla, inclusive le preguntó cómo se encontraba. Estimula, unos 20 minutos después llegaron familiares del detenido Quezada, con alimentos y frazadas, por cual el

Cabo Cádiz, le ordenó llevar al detenido, empero tras alumbrar con su linterna al interior del calabozo, vio al detenido colgado del cuello con un chaleco, informando de forma inmediata al Cabo Cádiz, quien a su vez comunicó a la Jefatura e iniciaron los trámites legales, hasta que llegó la orden del Fiscal, para proceder a descolgar el cadáver y trasladarlo a la morgue del Hospital local. Cimienta, cuando trasladó al detenido al calabozo y en las rondas posteriores, siempre lo vio en buenas condiciones físicas, por lo que considera imposible se le haya castigado o dado un mal trato en su permanencia en el cuartel. Desconoce los motivos que tuvo para suicidarse.

Declaración extrajudicial de fecha 25 de julio de 1989, rolante de fs. 289 a 290 (Tomo I), adopta el 24 de junio pasado, se encontraba de servicio de guardia (Cuartelero) y aproximadamente a las 19:20 horas, el Cabo **Cádiz** que se desempeñaba de Suboficial de guardia, le ordenó que fuese a buscar al calabozo al detenido Marcos Quezada Yáñez, que se encontraba ingresado por el delito de robo, para que procediera a comer, a raíz que minutos antes familiares le llevaron alimentación. Al dar cumplimiento a dicha orden y acercarse a la ventanilla del calabozo se percató que Quezada Yáñez, colgaba desde el cuello con una chomba, que ató a una viga del techo del calabozo, ante lo cual corrió a dar cuenta al Cabo Cádiz. Afirma, desde las 18:00 horas comenzó a desempeñarse como cuartelero, previamente estaba de vigilante exterior de cuartel. Musita, recuerda que realizó una ronda a las 18:15 horas, cuando fue a dejar al detenido por ebriedad al calabozo n° 2, acompañado del Carabinero Vásquez Ordenes, evidenciando que el detenido Quezada Yáñez, observaba hacia el exterior por una ventana de la dependencia, sin apreciar ninguna anomalía. Explana que media hora después, y por orden del Suboficial de guardia, concurrió al calabozo con la finalidad de ver a los detenidos, encontrándose en la misma posición dicho detenido, entregando las novedades de ronda al Suboficial de guardia. En cada ronda, daba las novedades al Suboficial de guardia, es decir sin novedad.

Declaración judicial de fecha 05 de enero de 2013, de fs. 711 a 712 (Tomo III), musita que ingresó a Carabineros de Chile en 1987, siendo su primera destinación la 5° Comisaría de Carabineros de Curacautín. Estuvo dos o tres años en ese lugar y posteriormente pidió su traslado a Villarrica para acompañar a su madre, que vivía en ese lugar y era viuda. Señala, para el año 1989 estaba en la base de la 5° Comisaría de Curacautín. Ratifica su declaración prestada ante la Fiscalía Militar de Angol rolante de fs. 33 a 35 de autos y la extrajudicial de fs. 134. Asevera, no se le hizo nada irregular al detenido Marcos

Quezada Yáñez mientras éste estuvo detenido en la Comisaría de Curacautín. Además, los dormitorios de los Carabineros solteros estaban al lado de los calabozos, por lo que era un lugar era muy transitado durante el día, sin que hubiese oportunidad para que algún funcionario aplicara tormentos a los detenidos, sin ser visto por el resto de los Carabineros. Decanta, ignora el motivo por el cual el detenido fue interrogado por los funcionarios aprehensores. Algunos de estos eran funcionarios de la Comisión Civil y siempre llevaban detenidos. Adopta, cuando estuvo en Curacautín, y en todos los otros destacamentos, jamás vio o supo que aun detenido se le aplicara electricidad. **Delibera que no le vio lesiones visibles al detenido mientras estuvo en la Comisaría. Él lo fue a dejar al calabozo y no se percató de que tuviera alguna lesión.** Explana, no vio que el detenido Marcos Quezada Yáñez haya sido sacado del calabozo por algún motivo mientras estuvo en la Comisaría. Sin embargo, hubo momentos en que él estuvo de guardia exterior. Aquilata, al darse cuenta que el detenido estaba colgado corrió a la guardia a darle aviso al Cabo Cádiz, quien inmediatamente le dio a conocer los hechos al Comisario. Después, todo sucedió muy rápido. De los funcionarios de ese día en funciones, solo recuerda al Cabo Cádiz. El Tribunal le exhibe las fotografías de fs. 37 a 39 de la causa rol 119-89 de la Fiscalía Militar de Malleco. El deponente reconoce el calabozo y el cadáver que allí se han retratado. Esa es la posición en la encontró al detenido. Suma, es la única vez que vio a una persona ahorcada. Respecto de los dichos de Erik Vásquez Órdenes de fs. 103 de la causa rol 119-89 de la Fiscalía Militar de Malleco, detalla que efectivamente quedo de centinela del calabozo recibiendo la orden de no moverse del lugar, a fin de resguardar el sitio del suceso y no fuese alterado hasta que llegaran las autoridades

Diligencia de careo de fecha 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco, César Octavio Adriazola Azocar, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Erwin Fernando Hormazábal Aedo, José Domingo Cádiz Parada, Bernardo Iván Aedo Leiva y Joel Pérez Isla, de fs. 1122 a 1124 (Tomo IV), arguye no reconoce a la persona que esta su lado, el relato que hace Maldonado, es primera vez que lo escucha. No recuerda si Fernández estaba en la Comisaria, cuando encontró al detenido en su calabozo. Se mantiene en sus dichos.

Declaración judicial de fecha 30 de septiembre de 2016, de fs. 1686 (Tomo V), decanta el detenido Marco Quezada Yáñez, al momento de ser recibido por el cuerpo de guardia, se encontraba en buena condición física y normal. Esto lo recuerda por cuanto, ese día se encontraba cumpliendo las funciones de cuartelero, es decir encargado de aseo y vigilante exterior de la

Comisaría y además de turnarse con el cabo de guardia. Soslaya, físicamente no encontró nada anormal en el detenido Marco Quezada, respecto a su condición física, de hecho le correspondió revisarlo delante del cuerpo de guardia, antes de ingresarlo al calabozo, no presentaba ninguna lesión visible que pudiera observar en ese momento. Respecto a la pregunta c) depone, éste estaba de personal de turno en jornada de la mañana. En relación a la pregunta, entiende que al terminar su turno se debe haber retirado, porque no lo vio en horas de la tarde.-

Declaración judicial de fecha 30 de octubre de 2018, de fs. 2482 (Tomo VIII), adopta el día en que falleció el señor Quezada, estaba el Suboficial de guardia el Cabo Cádiz, no recuerda su nombre ni apellido materno. En cuanto a quienes tenían acceso a los calabozos eran los tres funcionarios de guardia, además de él, el Suboficial Cádiz, quien estaba de jefe de guardia, después estaba el Cabo de guardia, cuyo apellido es Manríquez. Puntualiza, respecto a la responsabilidad de los detenidos que estaban en la tenencia, debiera ser por orden jerárquico sub Oficial de guardia y cabo de guardia. Adopta que Fernández estuvo dentro de la guardia, recuerda haberlo visto cooperándole al Suboficial en algún procedimiento, pero no tiene más antecedentes, porque él debía hacer el aseo y se turnaba con el vigilante exterior.-

24°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **BERNARDO IVÁN AEDO LEIVA**, quien fue sometido a proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VIII)**, con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, como **cómplice** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989. Que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto de los anteriores acusados puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar.

2.- María Angélica Augsburguer Estay.

3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada.
4.- Hernán Segundo Briones San Martín.
5.- Oscar Luis Viñuela Aller.
6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger.
7 Mauricio Avelino Andrés Catalán
Devlahovich.

8 Pedro Roberto Rey.
9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo.
10 Johny Alex Concha Salazar.
11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa.
12 Roberto René Cáceres Acuña.
13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a 4 vta. (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Sofloma, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continua, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaría de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquire, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles.** Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emano de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Soflama que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se aprecia en ellas.**

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías

tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son

sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), exploya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal.

Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedó asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió

nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría intentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito. Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños.** Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimiento, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel,

atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaria de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8. PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, José Fernández Cofré haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo,

porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad.** Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos par time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explana que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de atentar contra su vida por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se**

ocupaban para el aseo de las caballerizas. Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaría.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy

declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los **gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente.** Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba.** **Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández.** Barbullá, pudo sentir que **en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflama, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos, porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió

alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

- | | |
|---|---|
| 1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney. | 6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017. |
| 2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía. | 7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 3. Informes de Carabineros de Chile. | 8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989. |
| 4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago. | 9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín. |
| 5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017. | 10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco. |

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotanológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez,**

de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ a) La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b) Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c) La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d) Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e) La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f) Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g) Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h) La muerte de la víctima es, por lo todo lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: *“a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”*

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. Sostiene que si esas lesiones fueron vistas

al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: “a) *Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.*”

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quedada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Pérez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989. *Puntualizando este Tribunal que en este parte no hay constancia alguna que el occiso Marcos Quezada Yáñez hubiera tenido lesiones, en alguna parte del cuerpo y en específico en las manos.*

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo. *Aquilatando nuevamente este Tribunal que dos veces (el parte y novedades en el libro de guardia) el personal de Carabineros*

de la Comisaria de Curacautín afirmó que el occiso Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero José Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, **Carabinero Bernardo Aedo Leiva,** Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; **b)** Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; **c)** Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; **d)** Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la

primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.”

25°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados, relacionados y aquilatados llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **CÓMPLICE** en los términos del artículo N° 16 del Código Penal al acusado **BERNARDO AEDO LEIVA**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

Respecto al acusado JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA.-

26°) Que prestando declaración indagatoria **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA** (30 años a la época de los hechos), quién declaró de **fs. 30 a 32 (Tomo I); 140 a 141 (Tomo I); 175 a 176 (Tomo I); 290 a 292 (Tomo I); 403 a 404 (Tomo II); 606 a 607 (Tomo II); 1098 a 1099(Tomo IV); 1122 a 1124 (Tomo IV) y de fs. 2441 a 2441 vta. (Tomo VII).**

Declaración judicial de fecha 03 de julio de 1989, de fs. 30 a 32 (Tomo I), aproxima el 24 del mes pasado se encontraba de Suboficial de guardia en la 5° Comisaria de Carabineros de Curacautín, servicio que duró 24 horas. En horas de la mañana se presentó al cuerpo de guardia, la señora María Angélica

acompañada de su esposo, con domicilio en la comuna, dando cuenta que habían ingresado a la panadería suiza, en horas de la noche a robar, al consultarle si tenía sospechas en determinadas personas, expresó que sus sospechas radicaban en Marcos Quezada Yáñez, porque había estado trabajando en forma ocasional y lo conocía. De ahí, dio cuenta al jefe de turno, el Sargento Vásquez para ubicar al sujeto, como asimismo se avisó al personal que estaba de servicio de primer turno en la población. Alrededor de las 12:45 horas fue detenido Quezada, en calle O'Higgins esquina serrano, por el Cabo Joel Pérez Isla, Cabo 2° Nelson Almendras Illesca y los Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, quienes lo trasladaron al cuartel, donde fue consultado respecto al delito confesando de inmediato su autoría sin mayores problemas. Después fue ingresado al libro de novedades de la guardia como detenido por robo. Posteriormente, a las 14:30 horas, es ingresado al calabozo n° 1, por el Carabinero Bernardo Aedo Leiva y Marco Aguirre Guajardo. Las rondas se hacían cada media hora. A eso de las 17:45 horas, el Carabinero Manríquez lo sacó a orinar, para retornarlo al calabozo. En tanto, a las 18:15 horas el Carabinero Aedo y Eric Vásquez, ingresaron un detenido por ebriedad al calabozo N°2, verificando por la rejilla del calabozo, que Quezada se encontraba bien. Entre las 18:45 y 19:00 horas, el Carabinero Aedo Leiva, fue a pasar ronda a los detenidos, regresando sin novedades. Musita, a las 19:20 horas se presentaron familiares del detenido Quezada, para entregarle alimentos y frazadas, por tal motivo se le ordenó al Carabinero Aedo, que concurriera al calabozo y trajera al detenido al cuerpo de guardia, en paralelo le manifestó al Carabinero Manríquez, vigilante exterior, que corriera la puerta principal para evitar una posible fuga del detenido, además colocó una silla en la sala donde hay una mesa de pin pon para que comiera sus alimentos. Los familiares esperaban sentados en una banca. Aquilata, aparece corriendo el Carabinero Aedo de punto fijo, con el objeto de evitar que no ingresara nadie. En la guardia, llamo al Teniente Adriazola, para darle cuenta del hecho, quien se constituyó en el cuartel, y comprobó el hecho, informándole al Mayor Catalán en compañía del Primero Fernández hasta su domicilio. Ya en el lugar el Mayor y posterior inspección, llamó al Prefecto de Malleco y Santiago. No sabe si fue el Mayor o Teniente, que llamó al Juez de Crimen de Curacautín, quien se hizo presente en el cuartel, pasando al calabozo donde se encontraba el detenido colgado. Indica, por orden del Fiscal Militar, se levantó el cadáver y remitió a la morgue del hospital local, con su respectivo oficio. Narra, el detenido utilizó un chaleco de lana, color azul, con franjas blancas en las mangas, y como a 30 centímetros del nivel del suelo. Le parece que la altura total son 2,77 metros. Comunica, el Teniente Adriazola, revisó el cuerpo, manifestando que no tenía

lesiones visibles atribuibles a terceras personas. Alrededor de su cuello tenía una franja morada. Inquieta, el detenido para alcanzar la viga utilizó una tarima de madera, que se encontraba afirmada a una pared. Incluso en la pared había huellas de las zapatillas del detenido. **Destaca, ingresó al detenido en el libro como sin lesiones corporales visibles.** Relata, el detenido confesó su autoría en el robo a la panadería sin ningún tipo de apremio físico. Propone, el aprehendido llegó vestido con dos chombas de lana, una de color azul y otra roja, bluejeans negro, casaca azul marino, zapatillas nirs star, camisa y slips. Barbullá, este manifestó no haber sido maltratado de ninguna manera. Arguye, el Cabo Pérez Isla y parece los Carabineros Aguirre Guajardo y Hormazabal Aedo, interrogaron al detenido en una pieza frente a la guardia. Descarga, la chomba que se le exhibe es la empleada por el detenido para ahorcarse.

Declaración extrajudicial de fecha 12 de julio de 1989, de fs. 140 a 141 (Tomo I), el sábado 24 de junio de 1989 se desempeñaba como Suboficial de guardia, junto a los Carabineros José Manríquez Toledo y Bernardo Aedo Leiva, desde las 08:00 horas. Luego de una hora, llegó a la sala de guardia la señora María Angélica Augsburguer Estay, a dar cuenta que durante la noche le entraron a robar a su negocio de panadería y que tenía sospechas de Marcos Quezada Yáñez, domiciliado en angosturas n°860 de Curacautín, y que trabajó algunos días en su negocio, pero lo despidió al tomar conocimiento de sus malos antecedentes. Ordenando que todo el personal saliera a encontrar al sospechoso. Momentos después, se aproximó a la guardia otra persona, cuyo nombre no recuerda, manifestando ser propietario de un kiosco de venta de confites, ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique, y al parecer ingresaron a robar, por evidentes muestras de palanqueo en el cerradura y la llave no entraba en el candado. Prefiere, la pareja del Cabo Pérez y el Carabinero Hormazábal, se fueron junto a ese señor a verificar los hechos y ubicar al sospechoso. Comunica, a las 12:45 horas llegaron a la unidad junto al detenido Marcos Quezada Yáñez, el Cabo Pérez, Almendras, y los Carabineros Hormazábal y Aguirre, como él se encontraba con público, el Teniente Adiazola, les ordeno pasarlo a la sala frente a la guardia. Siendo interrogado y el sujeto confesó el delito, y salieron a recuperar las especies con el detenido, los Cabos Pérez y Almendras, regresando a los 10 minutos aproximadamente, confeccionaron una minuta con los hechos y se la entregaron junto al detenido, y especies recuperadas, a saber la suma de \$6.385, el formón que empleo para comer el ilícito y un cuchillo carnicero. Anexa, mientras ingresaba la información, el detenido permaneció sentado en una banca de la guardia. Musita, a las 14:30 horas en presencia de los aprehensores, ordenó al Carabinero Bernardo Aedo Leiva, que trasladará al detenido Quezada Yáñez, al

calabozo n°1, con apoyo del Carabinero Aguirre. A las 15:00 horas, colige el personal aprehensor terminó su turno y se retiraron de la unidad. A los 30 minutos aproximadamente, pasó el Mayor Catalán, jefe de unidad, a quien le dio cuenta de los hechos y ordenó confeccionar el parte, para remitir al detenido a la cárcel, sin embargo a consecuencia del movimiento de la guardia, se atrasó. Justifica, ordenó al Carabinero Aedo y Manríquez, realizar rondas permanentes a los detenidos, esto es cada media hora, informándole cada vez que lo hacían. Divulga, a las 19:00 horas, el Carabinero Aedo al dar la ronda, el detenido Quezada, le habló. Expresa, a los 20 minutos se presentaron dos familiares de Quezada Yáñez, quienes traían comida y frazada. Continúa, el Carabinero Aedo Leiva, fue a buscar al detenido, pero regresó solo y nervioso, manifestándole que al parecer estaba colgando. Así la situación, fue al calabozo n°1, constatando con ayuda de una linterna y por medio de la ventanilla, que Quezada Yáñez, se encontraba colgado por el cuello, con una chomba azul, con franjas blancas en sus mangas, atada a una viga del calabozo. Comunicó el hecho a la Jefatura y despacho a los familiares que se encontraban en la guardia. Cuenta, a los cinco minutos, llegó el Teniente Adiazola, a los minutos llegó el Mayor Catalán, dando cuenta al Juez del Crimen de Curacautín. Ensaya, al Juez se le iluminó correctamente el calabozo para que pueda constatar los hechos y ver al detenido Quezada Yáñez, además se le tomaron fotografías. El Fiscal Militar de Angol, dio la orden por radio, de descolgar el cadáver, procediendo a su revisión y confeccionar los documentos correspondientes, remitiendo el cadáver a la morgue del hospital local. Recalca, el detenido no fue maltratado, no se le aplicó ningún apremio, ni corriente, porque inmediatamente, casi de forma espontánea confesó el delito. Suma, el comportamiento del detenido fue correcto, incluso cuando confesó el delito, lo hizo en una conversación normal, ya que ubicaba a algunos funcionarios por cuanto había sido detenido en dos oportunidades por el delito de hurto, como Suboficial de guardia, en relación a los detenidos, tomó todas las medidas de seguridad ordenada por la Jefatura, pero por el frío de la época, no estimo necesario quitarle el chaleco al detenido, por tratarse una prenda de vestir habitual.

Declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, de fs. 175 a 176 (Tomo I), ratifica íntegramente su declaración de fs.1819. Agrega, que una vez interrogado y confeso del hecho, dijo haber hurtado la suma de \$ 8.000 y un cuchillo carnicero de una hoja de 20 centímetros con empañadura de madera. Además, de un formón que utilizó para comer el ilícito. Cuenta, ambas especies dijo haberlas arrojadas a una orilla del estero manzanoco. Apoya, del dinero, gastó en la pensión Dante, donde pernoctó, fueron \$ 1000, según su decir, y el resto en cigarrillos. En sus bolsillos mantenía la suma de \$6.385 aproximadamente, las

monedas estaban en envoltorios de papel. Posteriormente, el personal aprehensor se trasladó con el detenido al lugar indicado por éste, recuperando el cuchillo y formón. Esto se produjo en un espacio de tiempo, relativamente corto. Espeta, su declaración corresponde a la verdad de ocurrieron los hechos. Explana, al llegar los aprehensores con el detenido, no recuerda bien, si en la guardia estaba con gente, pero pasaron al detenido a la sala contigua de entretención, separada por un pasillo. Sugiere, el Cabo Pérez, con los Carabineros Aguirre y Hormazabal. El Teniente Adriazola, ingresó a los pocos minutos. Narra, pasó por fuera de la habitación en dirección a su armerillo, apreciando que entre sus ropas sacaba el dinero y entregaba a los funcionarios. Apunta que en ni un momento se le apremió físicamente. Lo anterior lo asegura porque desde la guardia se escucha todo y las puertas estaban abiertas.-

Declaración extrajudicial de fecha 25 junio de 1989, de fs. 290 fs. 291 (Tomo I), que el sábado 24 de junio, se encontraba de servicio de Guardia, acompañado de dos Carabineros, y a eso de las 13:00 horas, llegó a la unidad el Cabos 2° Nelson Almendras junto a Joel Pérez Isla, y los Carabineros Erwin Hormazabal y Marcos Aguirre Cerda, funcionarios de servicio del primer turno, trasladando a un detenido por el delito de robo, resultando ser Marcos Quezada Yáñez, siendo allanado y registrado en presencia del personal aprehensor e ingresado al calabozo n°1. Cuenta, a las 19:20 horas, ordenó al Carabinero Aedo Leiva, que cumplía funciones de cuartelero, ir a buscar a Quezada Yáñez, con el fin de que comiera alimentos, que sus familiares le trajeron. Invoca, al momento después llegó el citado funcionario corriendo al cuerpo de guardia, manifestándole que el detenido se encontraba colgando por el cuello, amarrado a una chomba, en una viga del techo del calabozo, trasladándose de inmediato al lugar, donde verificó lo expuesto por el Carabinero Aedo. Detalla, fue inmediatamente al calabozo a constatar lo narrado por el funcionario, y le indicó que se mantuviera en el lugar, con el objetivo de aislarlo y prohibir la entrada al resto del personal, dando cuenta vía telefónica al Subcomisaria, quien se constituyó en el lugar y adoptó las medidas correspondientes, entre ellas avisar al Comisario. Atina, realizaron rondas permanentes por los calabozos, tanto el personal de guardia, como el deponente, verificando que el detenido se encontraba sin novedad. Distingue, de las rondas efectuadas no se dejó constancia en el libro de novedades de la guardia. Conjetura, por regla general cuando hay detenidos las constancias de rondas pasadas a los calabozos, se estampan desde las 20:00 horas en adelante. Barbulla, el detenido sería enviado al centro de detención preventiva de la ciudad, pero rehízo en dos oportunidades el parte, además demoro debido que durante la tarde, llegaron procedimientos con detenidos por

ebriedad y constancias dejadas por particulares. Difunde, a las 15:00 horas fue a la unidad el Mayor, dándole cuenta del detenido por robo, instruyéndole confeccionar el parte lo más rápido posible para enviar al detenido a la cárcel, lo cual fue reiterado el Subcomisario a las 17:30 horas. Proclama, no se hizo uso de la violencia, él cooperó en todo momento en la investigación del delito. Recalca, confesó sin apremios, ser autor del delito de robo en la panadería suiza, ubicada en calle Gregorio Urrutia n° 240.

Declaración judicial de fecha 14 de marzo de 2011, de fs. 403 a 404 (Tomo II), señala que en relación a lo sucedido el 24 de junio de 1989, la muerte de Marcos Quezada Yáñez, de 17 años de edad en ese entonces. Recuerda se desempeñaba como Suboficial de Guardia, a cargo del Cuartel junto a dos funcionarios. Continúa, en horas de la mañana se presentó en la unidad una Sra. que tenía una panadería de calle Urrutia dando cuenta de un robo, anexando que tenía sospecha de Marcos Quezada Yáñez, que ocasionalmente ayudaba a los panaderos de su local. Alrededor del medio día el personal de guardia llegó con este joven detenido y confeso. Por tanto, se tomó el procedimiento que correspondía. Blasona, el Mayor Mauricio Abelino Catalán Devlahovich, que llegó a ser General de Carabineros, era el Jefe en ese momento, en ese instante que se le detuvo estaba en el cuartel y se confeccionó el parte, él rechazó el parte y tuvo que volver a redactar. Además debía atender a los detenidos por Infracción a la Ley de alcoholes. Lo anterior lo retrasó, este joven permaneció solo en el calabozo. El Mayor Catalán era muy minucioso con el comportamiento de los funcionarios, les consultaba a los detenidos como los trataban personalmente, inclusive en la noche efectuaba 3 rondas. Expone, que eso de la 6 de la tarde lo vio y le preguntó como estaba, porque hacía frío. Alrededor de las 19:00 o 19:15 horas llegaron familiares, y le trajeron frazadas y comida, entonces ordenó al Carabinero Aedo Leiva que fuera a los calabozos y trajera al detenido a la guardia para darle su alimentación, mientras tanto trasladaba una silla a la sala del frente para que éste comiera, al ver que se demoraba en llegar, fue a ver lo que pasaba y éste le informó con gestos y nervioso que el detenido Quezada estaba colgado. Atestigua, abrieron el calabozo, alumbraron con la linterna para tomarle los signos vitales, dándose cuenta que estaba muerto. De inmediato dieron cuenta al Teniente César Adriazola Azocar, y este a la vez dio cuenta al Mayor, quien llamó al Magistrado de ese tiempo, de ese entonces el señor Viñuela, al fotógrafo y se realizó la toma del procedimiento. Recuerda que se ahorcó con un chaleco de lana que vestía, atado a la viga, el cuerpo estaba a unos 30 centímetros del piso y la altura del calabozo era de 2,77. No estaba morado estaba mojado, se realizó el peritaje tenía muestra de semen y fecas, por lo que supo, ya que no estaba

presente. No se percató si el detenido presentaba quemaduras en las manos, empero la revisión del detenido se hace en presencia del Oficial de guardia, quien preguntaba como los han tratado, él siempre se vio tranquilo. Soslaya, el calabozo no tenía las condiciones de seguridad, las vigas estaban a la vista y barrotes, fue una cosa de segundos. Musita, el detenido anteriormente fue detenido por hurto. Tiene conocimiento que en esos años había una sede donde el sr. Weisse, que pertenecía al partido político PPD, tenía una mesa de ping pong para jugar, pero no sabe si era militante de ese partido político, llegaban los jóvenes a divertirse. El trato que se les daba a los detenidos era bueno, mientras se desempeñó en esa unidad, nunca fue observado por el mando por dar maltrato a los detenidos. Conjetura, no tiene sospecha de quien de sus compañeros o personas que estuvieron en contacto con el occiso pudo causarle daño. Las llaves siempre las tuvo él. Anexa, los que tenían contacto directo con el detenido eran los cuarteros. Cuenta, Bernardo Aedo Leiva, pidió a los años, su baja voluntaria. Sabe que es de Villarrica. Adosa el funcionario José Manríquez Toledo, es casado con una hija del sr. Araneda de Curacautín. Aquilata, los funcionarios aprehensores y quienes tuvieron el primer contacto con el detenido, fueron el Cabo Segundo José Pérez Isla, Nelson Almendras Illesca, el Carabinero Marco Aguirre Guajardo. Puntualiza, con el tiempo después, este último pidió su baja, se casó con la hija del bazar "El baratillo", el sr. Opazo. En tanto el Carabinero Erwin Hormazábal Aedo, está en Curicó, en servicio activo. No cree que ellos le hayan causado las lesiones que dice el certificado de defunción, porque fue detenido en la vía pública, lo conducen al cuartel, para entregarle al detenido y después ellos deben confeccionar la minuta. Basa que también tiene respaldo del parte que el Mayor le rechazó, ya que él tenía un archivador personal que aún conserva. Decanta que los colegas tomaron al detenido y supo por dichos de él, que lo dirigieron al canal Manzanoco, ubicado en la calle chorillos, con el objetivo de ubicar el cuchillo y formón. Objetos con los que confesó haber forzado la puerta de la panadería y el mesón, que tenía un cajón donde se guardaba el dinero. Descarga, el funcionario a cargo de la recogida, de su labor de alcoholes, era el Sargento primero José Fernández Cofré, que vive en calle Manuel Rodríguez. Dice, que cuando llegó el informe del Doctor del Servicio Médico Legal, fue a la Fiscalía y se le tuvo comunicado en la Primera Comisaria de Angol, por la muerte de Marcos Quezada Yáñez, siendo constantemente interrogado para esclarecer su muerte. Inclusive, fue sancionado con 2 días de arresto, como sanción administrativa y no haber dispuesto un cuartero que vigilara al detenido. Decanta, es la situación más grave que tuvo y desde esa vez se dispuso un vigilante de calabozo. Acompaña fotocopias de Minuta que entregada por los

funcionarios aprehensores, el parte que confeccionó y fue rechazado por el Comisario y el Oficio remisor de las especie personales que portaba el occiso. Recalca, en la muerte de Marcos Quezada Yáñez, no hubo intervención de terceros. Todos conocían a las personas de la ciudad, y no fue por represalias políticas, él no participaba en actos políticos. Llegó a trabajar muy joven a esa ciudad, su señora es de la comuna, y ha formado una familia con valores cristianos y respeto a los derechos humanos.

Declaración judicial de fecha 11 de septiembre de 2012, de fs. 606 a 607 (Tomo II), refiere que ingresó a Carabineros de Chile el 16 de julio de 1979, su primera destinación fue a la 5° Comisaría de Curacautín, hasta 1989. Ratifica las declaraciones que rola de fojas 30 a 32, 140 a 141, 175, 290 a 291 y 403 a 404. Asevera, que han transcurrido 23 años de la muerte de Marco Quezada Yáñez, y asegura que no hubo intervención de terceros en la muerte de esta persona, anexa que la demora en el parte fue por inexperiencia en la confección de este y por error en la redacción que le corrigió su superior. Dice, las rondas se dejaban después de las 20 horas, pero no hay constancia de ellas. Alega, no dejó ningún tipo de constancia. Barbulla, cuando llegó el detenido no se inspeccionó, lo pasaron a la sala contigua de la guardia. Ente quienes revisaron al detenido estaba el Teniente, el personal aprehensor y el Carabinero Aedo. Esta persona llegó en forma normal a la Comisaría. Arguye, el detenido regresó bien del río, en ese momento lo revisó, no le vio lesiones. Quienes detuvieron a Quezada Yáñez fueron Pérez Isla, Almendras Illesca, Erwin Hormazabal Aedo y Marco Aguirre Guajardo. Divulga, los cuatro aprehensores y el conductor, Cabo Jaime Muñoz Candía, fueron con el detenido al río. Explana, que en el interrogatorio estuvo el Teniente Adriazola, Cabo Pérez Isla, Nelson Almendras Illesca, los Carabineros Erwin Hormazábal Aedo, Marco Aguirre Gajardo y el Carabinero cuartelero Bernardo Aedo Leiva. Soslaya, que estuvo 28 años en Carabineros, y le correspondió levantar cadáveres de personas que se suicidaron por ahorcamiento. El Tribunal le exhibe la fotografía de fojas 37 a 39 de la causa rol N° 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. Depone, en relación al cadáver y la forma en que está colgado, evidencia que en otras ocasiones el nudo del vínculo ha estado atrás. En todo caso, urde la fotografía que se le muestra es el reflejo de cómo se encontraba al detenido ese día. Según su experiencia el primer paso que se debe dar cuando un detenido llega a la guardia, es que el aprehensor de cuenta al Suboficial de guardia, quien debe recibir al detenido, revisarlo físicamente e interrogarlo, posteriormente trasladarlo al calabozo. Desarrolla, en el caso sub lite, primero se interrogó y luego se revisó, por los aprehensores, no obstante, no le consta que efectivamente se haya efectuado la revisión. Según lo

que supo, el Teniente hizo una revisión superficial. El cadáver, desde que fue descubierto colgado, estuvo 1 hora y media a dos horas en esa posición. Urde, el Teniente Adriazola estuvo a cargo de sacar el cadáver de la viga. Desconoce quien más estuvo en ese lugar, él estaba "choqueado", adopta se fue a la guardia.

En declaración judicial de fecha 17 de marzo de 2015, rolante de fs. 1098 a 1099 (Tomo IV), cuenta que en esa época los calabozos tenían sus paredes y piso de concreto, el cielo era de madera, con vigas a la vista, quedando una abertura entre el techo y éstas de 5 cm. aproximadamente. También recuerda que había una mirilla en la puerta y una ventana con barrotes en la misma pared de la puerta, pudiendo mirar por ellas desde fuera o dentro del calabozo. Detalla, la tarima de madera era para que los detenidos se pudieran acostar y no tuvieran contacto con el piso. Esta medía entre 15 a 20 cm. de grosor, 1.50 m. de largo y 1 metro de ancho. Anexa, ese día el jefe del Retén de Manzanares, de apellido Fernández, llegó junto a 2 funcionarios de esa misma dotación, de nombres Erick Vásquez y Claudio Contreras Valencia, para cumplir labores en la comisión de alcoholes. Cuenta, ese día Fernández, se dedicó a hacer su servicio en la población. Especula, tiene entendido que Fernández conocía a Quezada Yáñez, ya que sus casas estaban cercanas. Al parecer Quezada vivía en calle Angostura y Fernández en calle Manuel Rodríguez, y estas calles son paralelas. Delibera, cuando ocurrió la muerte de Quezada, había 2 o 3 detenidos en el calabozo contiguo, todos por estar en estado de ebriedad. Estos eran dejados en libertad a medida de que fueran recuperando su lucidez. Al momento de llegar Quezada hasta la unidad, fue interrogado en la sala de entretenciones, esto por alrededor de media hora o veinte minutos, estando presente en la vía pública. En esos momentos yo estaba de suboficial de guardia y efectuaba algunos trámites propios de su labor, no participando en el interrogatorio. Todo esto se realizó en la sala de entretenciones de la comisaría contigua a la guardia. Señala, luego que Quezada confesó, faltaban algunas especies, como un formón y un cuchillo, por lo que el Teniente dio la orden de que fueran a buscarlo al lugar donde los había tirado, esto es, el estero Manzanoco. Aquilata, Fernández y su grupo no tuvo contacto con el detenido Quezada, ya que él era el único que tenía las llaves de los calabozos y el cuartelero de apellido Aedo. Por su parte, los acompañantes de Fernández ese día ayudaron a ingresar detenidos al calabozo, pero no se les pasaban las llaves, sino que el cuartelero abría y cerraba la puerta. No recuerda si Fernández ayudó a ingresar detenidos hasta los calabozos.-

Diligencia de careo, de fecha 18 de marzo de 2015, entre don Juan Nolberto Maldonado Pacheco, César Octavio Adriazola Azocar; Marco Antonio Aguirre Guajardo, Erwin Fernando Hormazábal Aedo, José

Domingo Cádiz Parada, Bernardo Iván Aedo Leiva y Joel Pérez Isla, rolante de fs. 1122 a 1124 (Tomo IV), depone que no reconoce a la persona que está a su lado, y jamás ha escuchado el relato que le da a conocer Maldonado. Anexa, él era Suboficial de guardia, pero no vio nada de eso. Utiliza, los detenidos en el calabozo contiguo al de Quezada estaban bastante ebrios, porque cuando llegó el Comisario, abrió la puerta y se percató de ello. Se mantiene en sus dichos.

Declaración judicial de 10 de octubre de 2018, rolante de fs. 2441 a 2441 vta. (Tomo VII), ratifica la declaración extrajudicial prestada ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que se le da lectura en este acto, a lo que puedo agregar que se encontraba redactando su documentación (partes), mientras que el Suboficial Fernández Jofré se encontraba de servicio extraordinario en la Comisaría de Curacautín, vestido de civil en comisión de alcoholes con su vehículo particular, posteriormente el Sr. Fernández se quedó confeccionando los partes de alcoholes que el mismo había sacado en las poblaciones de Curacautín, mientras que los funcionarios que se encontraban a su cargo fueron a tomar once. Acto seguido, llegaron a la Comisaria los familiares del detenido con víveres y una frazada, por lo que le ordenó al Carabinero Bernardo Aedo, que trajera al detenido a la guardia, quien se dirigió hasta el calabozo en donde se encontraba el detenido Marcos Quezada Yáñez y al llegar al lugar, se percató que la puerta se encontraba trancada por dentro por lo que fue a buscar una linterna a una de las dependencias de la Comisaria, para posterior volver al calabozo y al momento de abrir la puerta vio al detenido Marcos Quezada Yáñez colgando de una viga, procediendo a informarle que el detenido se encontraba colgado de una viga. Señala que posteriormente Fernández fue al domicilio del señor Comisario para comunicarle lo acontecido en la Comisaria, quien se constituyó minutos más tarde para constatar lo sucedido.

27°) Que haciéndonos cargo de las declaraciones indagatorias del acusado, **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA,** quien fue sometido a proceso a **fs. 2.300 a 2.308 (Tomo VII),** con fecha 25 de enero de 2018. **Acusado** según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII),** con fecha 30 de diciembre de 2019, como **cómplice** del delito de **homicidio calificado** en su carácter de lesa humanidad en la persona de Marcos Quezada Yáñez, perpetrados en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989; que si bien el acusado se ubica en la fecha, lugar y sitio del suceso, según sus propios dichos, agrega factores que podrían eximirlo de responsabilidad en los hechos. No obstante lo anterior, según el mérito del proceso, las pruebas rendidas y ponderadas en conformidad a la ley, obran en su contra los siguientes elementos de convicción.

Desde ya, por síntesis y economía procesal se dan por reproducidos todos los elementos probatorios generales antes ponderados y los específicos relacionados y aquilatados respecto a los anteriores acusados , puntualizando lo siguiente:

a. DECLARACIONES (13).

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1.- Roberto Eduardo Ruiz Aguilar. | 8 Pedro Roberto Rey. |
| 2.- María Angélica Augsburguer Estay. | 9 Erwin Fernando Hormazábal Aedo. |
| 3.- Haydee Del Pilar Yáñez Quezada. | 10 Johny Alex Concha Salazar. |
| 4.- Hernán Segundo Briones San Martín. | 11 Gustavo Antonio Weisse Abarzúa. |
| 5.- Oscar Luis Viñuela Aller. | 12 Roberto René Cáceres Acuña. |
| 6. Wolfgang Hulmuth Gunther Reuter Berger. | 13 Juan Nolberto Maldonado Pacheco |
| 7 Mauricio Avelino Andrés Catalán Devlahovich. | |

1.- ROBERTO EDUARDO RUIZ AGUILAR.

En declaración extrajudicial de fecha 17 de julio de 1989 rolante de fs. 147 (Tomo I), relata ser propietario de un kiosco ubicado en calle O'Higgins esquina Iquique de la comuna de Curacautín. Precisa que el 24 de junio de 1989, a eso de las 09:00 se percató de un intento de robo a su local. Luego que Carabineros se va del lugar, **vio el alargador de corriente colgando en un árbol. Soslaya no tener sospechas de la identidad del responsable, sin embargo sostiene que es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.**

2.- MARIA ANGÉLICA AUGSBURGER ESTAY.

Declaración judicial de fecha 24 de noviembre de 2016, de fs. 1748 a fs. 1749 (Tomo VI), respecto la declaración que rola de fojas 4 a fojas 4 vta (no consta en esta causa), manifiesta no recordar que haya hecho una denuncia en contra de Marcos Quezada, ni decir que sospechaba de él. Descarga, posterior a la denuncia, llegó Carabineros a decir que habían encontrado el cuchillo y a Marcos Quezada con unos panfletos. Ignora qué decían esos panfletos porque no le mostraron nada. Utiliza que en el Juzgado le mostraron el cuchillo y las monedas sustraídas, pero no el formón. Estima que todas las tardes o noches cuando se retiraban del local se preocupaban de llevarse los billetes recaudados en las ventas diarias, con la salvedad de las monedas que eran dejadas en una caja envuelta en bolsas. En relación a la declaración que rola de fojas 13 (no consta en la causa) ratificada, reitera que no recuerda haber efectuado una denuncia en contra de Quezada Yáñez. Suma, no recordar que esa persona haya sustraído dinero a los trabajadores de la panadería. Entre los trabajadores de la

panadería recuerda a Leiva de Curacautín. Muy honrado. Se le lee declaración rolante a fs. 272 y siguientes, la deponente ratifica su declaración. Barbulla, no recuerda haber perdido un formón o haber recuperado esa herramienta, solo el cuchillo y las monedas. Tampoco haber acusado directamente al joven, tal vez le preguntaron por las personas que trabajaban ahí. En el local no había ninguna falla eléctrica, solo el forzamiento de la puerta y el robo. **Insiste que Marcos Quezada era un chico alegre, juguetón y siempre se reía con el maestro de la panadería de apellido Leiva.**

3.- HAYDEE DEL PILAR YÁÑEZ QUEZADA.

Declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, a fs. 221 a fs. 222 (Tomo I), señala que el sábado 24 de junio estaba en la casa de su tía Nélida Yáñez en Curacautín, ya que hubo una comida por el día de San Juan. Por terceras persona supieron que su primo Marcos estaba detenido. Cuenta que como las 16:00 horas junto a una cuñada de su tía, de nombre María Yáñez, fueron a Carabineros para preguntar por su primo, información que les confirman en el lugar. Sin embargo no se podía conversar con él, y tendrían que esperar hasta el lunes lo que el Juzgado ordenará. Pero si querían le llevara comida y frazadas. A las 19:15 horas junto a la cuñada de su tía, volvió a la Comisaría, para dejarle la comida y frazadas. Luego de entregar las cosas al funcionario de Carabinero, se sentaron a esperar en la guardia, se apreciaba movimiento en el interior, incluso el funcionario que estaba de guardia junto a otro de civil fueron hacia el interior también. En un momento determinado un Carabinero les pregunto si eran familiares del detenido, sin entregar mayor información. Poco más tarde, otro funcionario de civil, le manifestó que dejaran las cosas y se retiraran del lugar. Sofloma, al pararse para irse, en una pieza del frente, encima de una mesa de ping pong estaban las frazadas y comidas que le habían llevado a su primo. Continúa, estaba durmiendo en su casa, alrededor de las 01.00, momento en que le fueron avisar que su primo se había ahorcado en la Comisaría, de acorde a lo expresado por Carabineros. Atina que mientras esperaban en la Comisaria, nada le llamó la atención, incluso cuando escuchó que un carabinero de civil, después de sacar un libro, preguntó cómo arreglarían aquello, sin saber a qué se referían.

4.- HERNÁN SEGUNDO BRIONES SAN MARTÍN.

En declaración extrajudicial de fecha 04 de octubre de 2012, rolante de fs. 642 a fs. 643(Tomo II), glosa que Marcos Quezada Yáñez era un joven tranquilo, sano, y que no generaba mayores problemas en su familia como a la

comunidad, no obstante siempre ha sido cuestionada las circunstancias de su muerte, ya que no era una persona que sufriera algún tipo de depresión para que tomara la determinación de ahorcarse, sindicándose como únicos responsables de este hecho, a los funcionarios de Carabineros de Curacautín.

5.- OSCAR LUIS VIÑUELA ALLER.

En declaración por informe del 05 de julio de 1989, rolante de fs. 168 a fs. 169 (Tomo I), refiere que siendo las 20:15 horas del 24 de junio último, fue comunicado telefónicamente por el señor Comisario de la 5° Comisaría de Carabineros, Mayor Mauricio Catalán Devlahovich, quien le manifestó que en uno de los calabozos del cuartel, se había encontrado colgado de una viga el detenido Marcos Quezada Yáñez y al parecer el conocimiento de los hechos correspondería a la justicia militar, empero de todas maneras podría concurrir al lugar para que constatará los mismos. Que en tales circunstancias fue inmediatamente al recinto de la Comisaría ingresando junto al Comisario y otros funcionarios de Carabineros al patio de ella, y dentro de uno de los calabozos, pudo constatar que pendía de una viga de éste el cuerpo de una persona de sexo masculino. Al ingresar al calabozo alumbrado por una pequeña linterna facilitada por Carabineros, ya que el lugar carecía de energía eléctrica, pudo apreciar que se trataba del cuerpo de Marcos Quezada Yáñez, a quien ubicada, puesto que en dos oportunidades había sido procesado en su Tribunal. Precisa que la primera vez fue por estafa, declarado sin discernimiento; en la segunda oportunidad fue condenado por hurto y notificado, con fecha 26 de mayo de 1989. Inquieta, aunque no estuvo más de un minuto en el interior del calabozo, aprecio que el cuerpo se encontraba vestido y tenía puesta una parca y pendía de una viga con un objeto de lana, al parecer una chomba, además constato que no habían muestras visibles de haberse orinado, lo que es frecuente en ese tipo de muertes, **pero por la brevedad del tiempo y escasa luminosidad no pudo apreciar otros detalles.** Suma, en ese instante se comunicó la orden verbal de levantamiento de cadáver emana de la Fiscalía Militar, lo que hacía inoficioso continuar con la inspección. Sofloma que mientras permanecía en el recinto de Carabineros, concurrió el fotógrafo de la ciudad, Pedro Rey, quien por orden del Comisario procedió a sacar algunas fotos del lugar y al cadáver, aún colgado dentro del calabozo.

En declaración judicial de fecha 23 de diciembre de 2016, rolante de fs. 1830 a fs. 1831 (Tomo VI), ratifica declaración por informe que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia. En lo

pertinente soslaya que esos eran los calabozos, **aunque no recuerda la tarima que se aprecia en ellas.**

6.- WOLFGANG HULMUTH GUNTHER REUTER BERGER.

En declaración judicial de fecha 07 de julio de 1989, rolante de fs. 173 a fs. 174 (Tomo I), copia rolante de fs. 235 a fs. 236 (Tomo I), soflama ratifica lo dicho en protocolo de autopsia. Prosigue, posterior a observar las fotografías tomadas por un fotógrafo de la localidad de Curacautín por disposición del Juez del Crimen, y en conexión con ellos, se le ha presentado el vínculo que supuestamente habría servido como medio de ahorcadura al occiso. Sobre esto, estima que efectivamente es probable que el occiso haya procedido a ahorcarse en atención a las circunstancias en que se muestran los hechos así lo permiten. Espeta, el vínculo en referencia corresponde al sweater de lana que se estima ató el occiso al cuello fijando el extremo opuesto a una viga del recinto de su detención, suspendiéndose seguidamente de esa atadura. Adosa, las lesiones ocasionadas en la región cervical y fundamentalmente en la nuca del occiso, son algo atípicas e irregulares, y han dejado una huella pericervical horizontal que hizo estimar las posibilidades del posible estrangulamiento. Colige, muy probablemente por la naturaleza del vínculo, que es blanco y de lana, alguna de las impresiones erosivas cervicales fue poco notoria o simplemente apergaminada, predominando un surco de contricción en la región suboccipital y en general con escasa infiltración hemorrágica local. Atestigua, a favor de la posible ahorcadura que el surco cervical en referencia ocupaba, la parte ala del cuello, y que las dimensiones del lugar del suceso daban las posibilidades dimensionales para que el detenido pudiera suicidarse. Musita, las livideces cadavéricas encontradas en el cadáver, solamente en la región dorsal de éste y no en los miembros inferiores, podría haber pensar que el occiso fue desligado de su atadura de la suspensión en forma relativamente rápida y como el estado sanguíneo del occiso era líquido, estas livideces no presentaban una impregnación fija en los tejidos cambiando postulamente hacia la región dorsal del cadáver. Acota, el estado de shock advertido en el cadáver y configurado especialmente por la congestión visceral y alteraciones congestivas en la zona medular de ambos riñones. Esta alteración desde luego absolutamente posible de encontrar en el ambiente de ahorcadura como en un estrangulamiento y en otras circunstancias como el caso que hizo suponer por marcas en los dedos y pliegos interdigitales en las manos del occiso que estos fueron la consecuencia de una acción de corriente eléctrica, sobre este particular deja constancia que ha tenido la precaución de extraer muestra de la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho y

se hizo cortes histológicos del tejido que serán informados para la Fiscalía en informe aparte. Refiriéndose, a la existencia o ausencia de flujo seminal o defecación del cadáver en su fase de agonía manifiesta que no ha advertido alteraciones en el presente caso, aunque es de su perfecto conocimiento que suelen observarse, aunque no en forma constante en las ahorcaduras pero en ningún caso estas alteraciones son diacríticas para una muerte por ahorcamiento ya que se observan en muchas otras modalidades de muerte, y en general no son sino un reflejo de origen medular espinal por lo cual estima que no tiene mayor transcendencia para definir las circunstancias de la muerte.

En declaración judicial de fecha 02 de agosto de 1989, de fs. 237 a fs. 238 (Tomo I), explaya que las lesiones son de recién; de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar. Especula que la autopsia ha sido un planteamiento en base a las alteraciones cadavéricas observadas y en ausencia como se dejó establecido de toda información previa y por lo tanto no le es posible hacer afirmaciones tajantes de tipo testimonial de lo ocurrido. Suma, la alteración de orden biológico carece desgraciadamente para los fines que se estima de una estrictez matemática por lo cual tiene necesariamente que subentenderse un margen de probabilidades y es eso lo que se dejó constancia también en el protocolo de autopsia. Si las lesiones encontradas en la piel de las manos fueron realmente ocasionadas por corriente eléctrica o por acción calórica simple, también es un problema que no tiene definición absoluta. Urde, hay cierta discordancia entre las características del vínculo supuestamente causa de una ahorcadura si se le compara con las marcas y hundimiento en las partes blandas de la nuca en circunstancias que la lana del vínculo y el simple nudo era amplio y de consistencia blanda. Las alteraciones irregulares en las marcas del cuello son otras situaciones un tanto difíciles de armonizar con una ahorcadura practicada con un vínculo bastante corto. Sin embargo, la posibilidad de asfixia fue considerada en la autopsia, suponiéndose que el occiso pudo haber sido estrangulado ya que el surco de constricción era incompleto, irregular y atípico, con respecto a otras lesiones similares y finalmente es natural que también existan ahorcaduras homicidas que debería considerarse en la investigación y cuyas huellas son muy similares a lo que se ha encontrada. Por todo ello, no le es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que se indican. Cuenta, las lesiones encontradas en la región cervical del occiso presentan algunas características de alteración intravital y ello cualquiera que sea la conclusión terminal a que la investigación llegue igual tiene significado para una ahorcadura como para un estrangulamiento. Señala que desde el punto de vista estrictamente científico los resultados de una segunda autopsia no pueden ser ni

lejanamente de la eficacia y precisión de la primera autopsia ya que el organismo del fallecido ha sido alterado y por otra parte debe considerarse el deterioro natural del cadáver.

En declaración judicial de fecha 05 de julio de 1989, rolante de fs. 308 a fs. 309 (Tomo I), decanta que el cadáver no presentaba ningún otro tipo de lesión, que la descritas en el informe de necropsia que remitió al Tribunal. Efectivamente no consideró en su informe la eyaculación y defecación, por no ser signos exclusivos de la muerte por ahorcamiento, pero normalmente esto se da en este tipo de muertes. Deduce en su informe que la lesión que presentaba el occiso en el cuello era por estrangulamiento y no ahorcadura, ya que de acuerdo a las huellas encontradas en el cuello son diferentes a las de un ahorcado, ya que estos presentan una forma ascendente. No obstante, en la nuca del occiso existen huellas que se asemejan a las de un ahorcamiento lo que no se pudo determinar por desconocer el objeto (vínculo) utilizado para este caso. Aquilata, para determinar la intensidad de electricidad utilizada contra el occiso, es variante, depende del ambiente donde se aplique. Para lo anterior, habría que hacer un examen de laboratorio avanzada, el cual no posee. Soslaya, cuando se utiliza electricidad deben quedar partículas metálicas del conductor eléctrico impregnadas en la piel, por se estableció como “posible acción eléctrica”, porque no se puede determinar con exactitud. Arguye, si hubiese tenido los antecedentes como el vínculo utilizado, la fotografía del sitio del suceso y la explicación del hecho mismo, lo habría consignado como un posible ahorcamiento, por ser elementos indispensables para precisar la relación causa – efecto.

a.7 MAURICIO AVELINO ANDRÉS CATALÁN DEVLAHOVICH.

En declaración judicial de fecha 30 de julio de 2015, rolante de fs. 1497 a fs. 1499 (Tomo V), ratifica la declaración que rola de fojas 223 a fs. 224. Ostenta, eran dos Oficiales en la Comisaria de Curacautín, y se turnaban para efectuar el servicio de fin de semana. El fin de semana de los hechos que se investigan, estaba franco, en su casa junto a su señora e hijos. En ese tiempo vivía en la esquina siguiente, muy cerca de la Comisaría. Inquieta, fue el Teniente **Adriazola**, quien le comunicó de un detenido fallecido, razón por la cual se constituyó inmediatamente en la unidad. Puntualiza, no recuerda cuanto tiempo estuvo suspendido el cuerpo en la viga del calabozo, pudo haber sido un par de horas. Tampoco recuerda que **Adriazola** le haya informado cuanto tiempo estuvo el cuerpo suspendido. Cuenta, los calabozos eran muy precarios no habían medidas de seguridad adecuadas. Inclusive, al Cabo **Cádiz**, le dijo que enviará luego a los detenidos a la cárcel. También estaba **Aedo**, era muy nuevo, quedo

asustado luego de ver al detenido ahorcado. Delibera, que fue personalmente como Fiscal de Carabineros al Servicio Médico Legal de Temuco y se entrevistó con el Médico Legista de apellido Reuter, mostrándole las fotos tomadas a Marcos Quezada mientras estaba suspendido en la viga. Esa diligencia fue verbal, fue una diligencia de Fiscalía, no recuerda que él haya prestado declaración por escrito al respecto. No se le tomó declaración a Reuter. Después de eso él envió nuevamente un protocolo de autopsia o una aclaración al que inicialmente había efectuado, aclarando varios de los puntos descritos en el informe preliminar. Atestigua, la comisión de alcoholes se formaba esporádicamente con dos funcionarios, generalmente un Suboficial y su acompañante. Manifiesta, los funcionarios de la unidad que se desempeñaban en la comisión de alcoholes el trabajo no eran muy eficientes, por lo que decidió designar para el cometido a funcionarios de destacamentos. En todo caso siempre eran dos o tres los funcionarios. Ese día el Sargento **Fernández**, estaba a cargo de la comisión de Alcoholes. La comisión de alcoholes se movilizaba a pie, porque en la unidad había un solo vehículo, de color blanco con negro, colores institucionales en esa época. En todo caso, el personal de alcoholes podría haberse movilizado en su vehículo particular, por la escasez de automóviles. Descarga, la comisión de alcoholes se vestía de civil, no de uniforme institucional. Aduce, **el protocolo que se adopta al efectuar una aprehensión consiste, al llegar a la guardia, el detenido debe ser registrado, revisar su condición física, se le quitan las especies con las que podría intentar contra su vida y posteriormente se le lleva al calabozo. Incluso, debía haber un vigilante de calabozo, que debe estar permanentemente en custodiando las celdas. Probablemente en este caso el guardia de calabozo abandonó su puesto y no cumplió con su deber de custodia.** Dice, la interrogación del detenido debe ser efectuada en la guardia. **En este caso, tal vez pudo haber sido interrogado en la sala de entretenimientos u otra dependencia aledaña, porque tal vez en la guardia había más personas. Blasona, una vez el detenido es ingresado en los libros de guardia, no puede ser conducido fuera de la unidad, pero si aún era ingresado, podía hacerse para aclarar efectuar diligencias conducentes aclarar el delito.** Invoca, recuerda que había vigas a la vista en el calabozo y sobre estas, **tapas de madera, que con el tiempo, al secarse la madera, quedaron espacios, pequeños.** Detalla, había una tarima en el calabozo, que es la que ocupó Marcos Quezada para acercarse al techo del calabozo, usándola como escalera para poder amarrar el vínculo con el que después de colgó. Cimentita, él cree que el vigilante del calabozo se ausentó de su función durante un periodo determinado de tiempo, de lo contrario el detenido no habría atentado

contra su vida. El detenido estuvo mucho tiempo en los calabozos, esto es, desde las 12:00 aproximadamente, según lo que se le informó ya las 20:00 ya debía haber estado en la cárcel. No era necesario que hubiese estado tanto tiempo en la unidad, debía ser conducido rápidamente a la cárcel. Hacer un parte no involucra mucho tiempo. Se había conversado con el Juez de Curacautín para que antes de pasar por el Tribunal los detenidos fueran enviados directamente a la cárcel, atendido las precarias condiciones que había en los calabozos de la Comisaría. De esa forma el personal de Gendarmería ponía los detenidos a disposición del Tribunal. Sugiere, no recuerda que haya un funcionario en la Comisaria de Curacautín, con un tic en la cara, solo al Suboficial Araneda, que tenía un problema facial, en realidad en la boca. Esta persona, era el jefe de la dotación de la Malalcahuello, quien estuvo en la unidad, pero no recuerda los años. Al parecer su señora e hijos vivían en Curacautín o Lautaro y viajaba permanentemente hasta allí. **Espeta, los calabozos, cuando hay detenidos en ellos, y por instrucciones reglamentarias o superiores, deben estar siempre cerrados con llave y éstas están en poder del Suboficial de guardia o en su defecto el vigilante de calabozo para poder llevar a los detenidos al baño, por ejemplo, si el calabozo fue abierto deben ser estos funcionarios los que deben saber quién lo abrió.**

a.8. PEDRO ROBERTO REY.

En declaración judicial de fecha 09 de agosto de 1989, rolante de fs. 225 (Tomo I), en lo pertinente adopta que **no apreció detalles, porque solo efectuó su trabajo y se fue, sin perjuicio de la escasa luminosidad del lugar.**

a.9 ERWIN FERNANDO HORMAZÁBAL AEDO.

Declaración judicial de fecha 13 de marzo de 2015, rolante de fs. 1067 a 1068 (Tomo IV), en lo pertinente señalar que cuando el Tribunal le mostró las fotos que constan en el proceso, vio que uso un chaleco de vinculo, lo que cual provoca extrañeza, de cómo puedo pasar la chomba por alrededor de la viga, por estar apegada al techo, no había mucho espacio entre estas.

a.10 JOHNY ALEX CONCHA SALAZAR.

Declaración judicial de fecha 24 de octubre de 2017, rolante de fs. 2126 a 2128 (Tomo VII), en lo pertinente arguye que desconoce las razones por las cuales, según se le expresa, **José Fernández Cofré** haya integrado la comisión civil de la Comisaría de Curacautín. Atestigua, en una dependencia habilitada para la atención del práctico en primero auxilios, había un Suboficial a cargo, y ahí al

parecer había una camilla, pero no recuerda bien. Si es que la había tiene que haber sido fija. Esta oficina del práctico estaba ubicada a unos 8 o 9 metros de los calabozos. El declarante hace un croquis a manos alzadas de la parte posterior de la Comisaría de Carabineros de Curacautín para el año 1989. El tribunal ordena agregarlo al proceso. En relación a los calabozos, tenían vigas a la vista, había una tarima para que los detenidos estuvieran sobre ellas y no sobre el suelo, porque era muy húmedo. **Esas vigas, las del techo, eran antiguas, creo que estaban desde que se construyó la unidad.** Detalla, al lado de los calabozos estaba el garaje y una bodega, luego la enfermería donde estaba el practicante. Le parece, además, que en la bodega se efectuaban cambios de aceites de los vehículos, había una persona que estaba encargado de eso, que al parecer era el chofer del Comisario.

a.11 GUSTAVO ANTONIO WEISSE ABARZÚA.

Declaración judicial a fecha 28 de agosto de 2017, rolante de fs. 1983 a 1986 (Tomo VI), en lo pertinente atina que conoció desde niño a Marcos Quezada Yáñez, porque hacía trabajos part time. Dichos trabajos consistían en ir a los campos a hacer las mensuras a los topógrafos para poder hacer las parcelaciones de los predios que compra y vende. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquieta, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven era muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente. Respecto a la situación procesal de Marcos Quezada explana que los Carabineros en esa época buscaban a cualquier persona para poder culparlo de delitos. Le provocó sorpresa, que se dijera que Marcos Quezada se suicidara, pues era un joven deportista futbolista, alegre, extrovertido no había razones para que tomara esa decisión. Los carabineros lo acosaban permanentemente. Incluso en una oportunidad lo acusaron de haber robado una carne y resulta que la carne estaba en la misma carnicería. Según su recuerdo, Marcos Quezada tampoco tenía problemas económicos, era nieto regalón de un empresario transportista maderero. Lo conoció desde pequeño y nunca tuvo un episodio de intentar contra su vida, por eso llama la atención que se diga que se había ahorcado en la celda.

a.12 ROBERTO RENÉ CÁCERES ACUÑA.

Declaración extrajudicial de fecha 03 de noviembre de 2017 rolante de fs. 2186 a fs. 2187 (Tomo VII), en lo pertinente deduce, el lugar donde se

ubicaban los vehículos estaba ubicado frente a los calabozos, a una distancia de 4 o 5 metros. Al lado de los calabozos, había una sala donde dejaban los repuestos, el aceite y esas cosas, que siempre se mantenía con llave. **Espeta, para trasladar cosas se ocupaban las típicas carretillas de construcción, las cuales se mantenían porque antiguamente en la unidad había caballos, y se ocupaban para el aseo de las caballerizas.** Puntualiza, las carretillas eran guardadas en una especie de pérgola que había atrás en el patio.

a.13 JUAN NOLBERTO MALDONADO PACHECO

En declaración judicial de fecha 16 de marzo de 2015, rolante de fs. 1087 a fs. 1088 (Tomo IV), el deponente ratifica informe policial de fecha 22 de diciembre de 2011. Igual forma, ratifica las declaraciones de fs. 160 y fs. 312. Sin embargo, según su recuerdo los hechos ocurrieron el día 23 de junio de 1989, no el día 24, ya que este último día no trabajaban. **Desarrolla, por temor a Carabineros, y a lo que pudiera sucederle después, no quiso declarar en la Fiscalía Militar lo que él había visto en su permanencia en la Comisaria.** En ese tiempo había bastante temor a los Carabineros. Difunde, el Carabinero Fernández, fue quien lo detuvo la tarde del 23 de junio de 1989. Él iba de copiloto en el vehículo que lo traslado a la comisaría. Tiene entendido que ese funcionario era de la dotación permanente de la Comisaría ya que siempre hacía patrullajes en la población. Era conocido. Incluso esta persona aún vive en Curacautín, en la calle Manuel Rodríguez. **Recuerda, los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a cuatro o cinco metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a éstos, por el frente. Describe, el calabozo donde los ubicaron, era de concreto, no había vigas a la vista y el piso de madera. Soslaya, no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera. Las puertas del calabozo, igual eran de madera, y tenían una pequeña abertura de 50 por 30 centímetros, como una especie de ventana, para mirar hacia afuera o dentro de los calabozos, la cual estaba a una altura de 1.60 m de la puerta.** Recuerda que unos de los carabineros que participo en la maniobra dentro del calabozo, vio que ayudaba a entrar el cuerpo del joven Quezada Yáñez a ese lugar, tenía una especie de "Tic" nervioso en su rostro. Posteriormente supo que lo trasladaron a Lonquimay. Desarrolla, a la medianoche del 23 de junio, lo dejaron en libertad, y luego de haber oído bastante movimiento en la unidad, pero él Carabinero que lo entrego sus pertenencias en la guardia no participó en los hechos indicados. Asegura, que José Lagos no se dio cuenta de nada de lo que sucedía, ya que dormía en el suelo mientras las maniobras que ha relatado se

efectuaban. Dice, en la Comisaría sólo había dos calabozos, uno donde estaba junto a Lagos y el otro en el que colocaron al joven fallecido. No había más detenidos. Conjetura, cuando declaraba ante el Fiscal Militar, un Oficial de grado superior comenzó a retar a los Carabineros presente, diciéndoles que los detenidos no debían estar más de una hora en las unidades. Todo lo que estoy declarando fue lo que vio y sintió, y no había declarado por temor de lo que me podía suceder, hasta que fue entrevistado por los Oficiales de la PDI.

En declaración judicial de fecha 19 de octubre de 2016, rolante de fs. 1710 a fs. 1711(Tomo V), ratifica declaración de fs. 1.073 a 1.079. El deponente señala que según su recuerdo los gritos de dolor que escuchó se efectuaron a unos cinco o seis metros aproximadamente de los calabozos, en una dependencia ajena a estos, por el frente. Afirma, estar completamente seguro de lo que expuesto. Agrega que el día que lo detuvieron había bebido pero no mucho, por lo que a la hora en que sucedieron los hechos estaba completamente sobrio y sano. **Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbulla, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflame, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.** Poco rato después de que todo terminó, fue dejado en libertad. Como a las seis de la madrugada aparecieron familiares de la víctima de autos para preguntarle si había visto algo, pero en ese tiempo no pudo decir nada, por temor. Arguye, a los después fue a su casa personal de Carabineros para citarlo a la Fiscalía Militar. Posteriormente, Carabineros de Curacautín lo citó para que fuera a conversar con el Mayor, a lo cual no concurrió. Arguye, está completamente seguro de lo que vio aquella noche. El Tribunal le da a conocer las conclusiones contendidas en el informe de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones de Chile, de fs. 1693 y siguientes. El deponente señala que es imposible que eso sucediera así, porque la persona venía desmayada en el carrito, que era traído por tres carabineros, e ingresaron al calabozo. El Tribunal le da a conocer la ampliación del Informe Pericial Documental Médico Forense de fs. 1.599 y siguientes, realizado por el Dr. Germán Tapia Coppa del Servicio Médico Legal de Santiago. Se mantiene en sus dichos,

porque está seguro que esta persona no se colgó por sus propios medios sino que intervino Carabineros en esa maniobra.

En declaración judicial de fecha 21 de diciembre del 2016, rolante de fs. 1821 a fs. 1822 (Tomo VI), atestigua que ese día, estando en el calabozo, sintió alboroto afuera de él. Al mirar por la ventana vio que traían a un joven en un carrito, es decir, en una camilla que tenía ruedas. Inquiere, a la hora después de haber ingresado al calabozo, escuchó los gritos de dolor que ha descrito. Invoca, alrededor de la media noche fue dejado en libertad, tal como consta en el documento que rola de fojas 148 y siguientes de la causa rol 119-89 del ingreso del IV Juzgado del Crimen de Valdivia. Expone, si conoce al pepe rey, fotógrafo de la ciudad, pero ese día después de haber visto a Quezada, no recuerda que él haya estado en la Comisaria, del mismo modo, no le consta o recuerda que se hayan constituido otras personas en el calabozo. Puntualiza a ver visto cuando ingresaron a Quezada al calabozo, pero no que lo hayan sacado del lugar. Especula, los Carabineros no se percataron que él estaba mirando por la mirilla, por no dijeron nada y pudo observar lo que ocurría. El Tribunal le lee la declaración por informe del Juez Oscar Viñuela Allier que rola de fojas 47 y siguientes de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia, que se tiene a la vista. El deponente no recuerda haber visto al juez constituirse en el lugar. De lo que él tiene memoria, en relación a Quezada, musita no haber visto nada, siendo dejado en libertad posteriormente. El Tribunal le exhibe las fotografías de fojas 193 a 196, a raíz del cual expresa, él estaba en el calabozo del lado, mirando por la ventana que se aprecia en la primera fotografía de fojas 193. Asegura, los calabozos eran como se aprecia en las fotografías, tenían techo de madera con vigas. En el caso del calabozo donde él se encontraba, no había una tarima de madera de las dimensiones que se ven en las fotografías, era un entramado de palo que cubría todo el piso. Narra, el “tic” que mencionó del otro Carabinero que participó, era moviendo la boca, como hacia el lado, al parecer sus apellidos son Araneda Pulgar.

B. DOCUMENTOS (10).-

- | | |
|--|---|
| 1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney. | 4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago. |
| 2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía. | 5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017. |
| 3. Informes de Carabineros de Chile. | |

6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017.

7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.

8. Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989.

9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín.

10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco.

b.1 Documentos acompañados a la querella Criminal presentada por Rodrigo Ubilla Mackenney de fs. 471 a 481 (Tomo II), que se desglosan de la siguiente forma:

a) A fs. 449 (Tomo II), copia que se encuentra a fs. 369, 415, 495 (Tomo II), **contiene certificado médico de defunción y estadística mortalidad fetal tardía de Marcos Quezada Yáñez,** consta que falleció a las 19:24 horas, con fecha 24 de junio 1989, que en lo pertinente establece causa inmediata de muerte shock. Causas originarias, muy probable acción eléctrica, debido a intentos de estrangulamiento, por autopsia realizada a la víctima.

b) A fs. 450 (Tomo II), copia del cual se encuentra de fs. 27 a 29 (Tomo I), fs. 484 a fs. 487 y de fs. 505 a fs. 507 (Tomo II), **contiene fotocopia del Protocolo de Autopsia N° 181/89 emitido por el Servicio Médico Legal de Marcos Quezada Yáñez,** de fecha 28 junio de 1989, en el consta su fallecimiento con fecha 24 junio de 1989 a las 19:23 horas y concluye que: *“a) la causa precisa y necesaria de muerte de Marcos Quezada Yáñez, fue el shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica, aplicada en alguno de sus dedos de ambas manos. B) Se registró además marcas equimóticas y apergaminadas cervicales superiores propias de un estrangulamiento con algún vínculo irregular, muy probablemente de algún género. C) La autopsia viscoral demostró fundamentalmente una amplia atelectasia pulmonar bilateral, en parte con petequias subpleurales, sangre en estado líquido, congestión visceral y generalizada; tumefacción encefálica; congestión de la mucosa gástrica; riñones de shock e hipertrofia moderada de las amígdalas y del bazo.”* Sin perjuicio de indicar en su letra h) sostiene: *“la mano derecha presenta marcas deprimidas apergaminadas de un centímetro de longitud a nivel de pulpejo de dedo pulgar y de disposición transversal. Otra marca similar menos manifiesta pero igualmente erosiva de un centímetro de un centímetro se encuentra en el borde externo de la segunda falange de la piel del dedo de índice derecho.”*

c) A fs. 453 (Tomo II), copia del cual se encuentra a fs. 74 a 76 (Tomo I), fs. 488 y fs. 508 (Tomo II), **contiene examen histotanológico piel pulpejo dedo pulgar derecho, del servicio médico legal causa n° 352 de la Fiscalía**

Militar Malleco-Angol de Marcos Quezada Yáñez, de fecha 11 de julio de 1989, en lo pertinente sostiene que: *“las lesiones observadas en la piel del pulpejo del dedo pulgar derecho son histológicamente compatibles con quemaduras de primero o segundo grado”*

d) De fs. 463 a 464 (Tomo II), contiene Informe de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el que consta que **Marcos Quezada Yáñez**, de 17 años, estudiante y militante del Partido por la Democracia. Fue detenido en la vía pública por Carabineros, y trasladado al Retén, en Curacautín. Con fecha 24 de junio de 1989 falleció a consecuencia de las torturas aplicadas por agentes del Estado.

b.2 Oficio del Servicio Médico legal de la Araucanía, que se desglosa de la siguiente manera:

a) De fs. 2596 a fs. 2611 (Tomo VIII), contiene segunda ampliación de informe pericial documental médico forense, del Servicio Médico legal, de fecha 14 de junio de 2019, concluye: “ **a)** *La causa de muerte de Marcos Quezada Yáñez corresponde a una Asfixia mecánica por compresión cervical compatible con el tipo ahorcamiento; b)* *Las quemaduras presentes en las manos de la víctima son compatibles con quemaduras eléctricas; c)* *La existencia de lesiones en "espejo" son resultado de la ejecución de la maniobra de "pinza" que se evidencian como lesiones de la misma naturaleza en cara palmar del pulgar y cara externa de la falange distal del dedo índice; es decir, el afectado habría tomado con sus dedos pulgar e índice derecho -a modo de pinza- un objeto delgado y cargado de corriente eléctrica; d)* *Las lesiones eléctricas en los dedos fueron producidas estando el afectado con vida, lo que encuentra más fundamento si se considera que el afectado, previo a su detención el día de los hechos habría participado en un robo a un local comercial en el que, según declaraciones del propietario del signado local, fue encontrado colgando de una rama un cable eléctrico; e)* *La ubicación topográfica de estas lesiones NO comparte un patrón de ubicación topográfica de lesiones por corriente eléctrico característico de ver en casos de aplicación de electricidad por terceros; f)* *Las lesiones eran todas visibles a simple vista (dado que fueron descritas en el protocolo de autopsia); g)* *Las lesiones eléctricas en las manos del afectado, habida cuenta de su superficialidad NO lo incapacitaban para ejecutar acciones como maniobrar una prenda de ropa, por lo que la suspensión cervical pudo ser ejecutada por la propia persona; h)* *La muerte de la víctima es, por lo todo*

lo consignado, compatible con una muerte violenta del tipo suicida que se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal clasifica como una muerte en custodia.”

b.3. Informes de Carabineros de Chile, que se desglosan de la siguiente manera:

a) A fs. 525 a 530 (Tomo II), contiene Oficio n° 349 de fecha 01 de marzo de 2012, de la Secretaria General de Carabineros, que adjunta el listado con la dotación del personal, entre enero y septiembre de 1989, que se desempeñaba en la Comisaría de Curacautín, entre ellos el Cabo 2° Joel Erwin Pérez Isla, el Carabinero Marco Antonio Aguirre Guajardo, el Cabo 2° Nelson Adalberto Almendras Illesca, Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada y el Carabinero Bernardo Iván Aedo Leiva.

b.4. Informes periciales documentales médico Forense del Servicio Médico Legal de Santiago, que se desglosan de la siguiente manera:

a) De fs. 1599 a 1602 (Tomo V), ampliación informe pericial documental médico de forense, de fecha 12 de julio de 2016, de Marcos Quezada Yáñez, en lo pertinente concluye que: *“a) Debido a que no existe una adecuada descripción de los fenómenos cadavéricos en el cuerpo del afectado, no es posible determinar el horario de muerte de Marco Quezada Yáñez; b) La posición de la cabeza y la disposición del vínculo (posición del nudo) no significan impedimentos para que el afectado pudiera haber realizado por sí solo las maniobras conducentes a un ahorcamiento; c) No obstante lo expuesto en el punto anterior, la dinámica de una asfixia por compresión cervical no permite descartar la participación de terceros en el hecho, ya que todo ahorcamiento puede responder a una forma médico legal de muerte tanto del tipo suicida como del tipo homicida; d) La presencia de lesiones de etiología presuntamente eléctrica en las manos del afectado no significan un impedimento físico a la víctima para realizar por sí solo maniobras conducentes a un ahorcamiento; e) Independiente de lo anterior, la muerte de la víctima se produce encontrándose éste en calidad de detenido y al interior de un calabozo de una comisaría de Carabineros, por lo que desde un punto de vista médico-legal califica como una muerte en custodia; f) Como se consignará en el primer informe, si se existiera la placa histológica de la muestra de piel de la mano derecha de Marcos Quezada Yáñez podría ser re-evaluada por un anatómo patólogo experimentado en medicina forense, con el fin de dilucidar tanto la naturaleza de la lesión como su vitalidad.”*

b.5. Informe de la unidad de Tanatología del Servicio Médico legal Araucanía, Temuco, de fecha 27 de enero de 2017, de fs. 1870 a 1872 (Tomo VI), refiere desconocer el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina, pero considerando los antecedentes, las lesiones serían las graficadas en las imágenes del presente informe. **Sostiene que si esas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser consignadas, ojalá fotografiadas.**

b.6. Informe pericial Psiquiátrico n° 269-2017, del Departamento de salud mental, de fecha 30 de junio de 2017, de fs. 2046 a fs. 2049 bis (Tomo VI) de Juan Nolberto Maldonado Pacheco, en lo pertinente concluye que: *“a) Se trata de un hombre sin alteración del juicio de realidad; b) con un nivel intelectual en rasgos normales; c) Con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; d) Reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; e) Tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”*

b.7. Parte N° 176 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, de fs. 399 a 402 (Tomo II), en lo pertinente hace referencia a la detención de Marcos Quedada Yáñez, efectuada por los Cabos 2° Joel Perez Isla, Nelson Almendras Illesca y Carabineros Marco Aguirre Guajardo y Erwin Hormazabal Aedo, por ser autor confeso del delito de robo ocurrido el 24 de junio de 1989.

b.8. A fs. 13 (Tomo I), contiene Parte N° 5 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fecha 24 de junio de 1989, en lo pertinente da cuenta del suicidio del detenido por robo, Marcos Quezada Yáñez, señalando que no se observaron lesiones o contusiones visibles atribuibles a terceras personas.

b.9. Oficio N° 421, de fecha 30 de junio de 1989 de la 5ta Comisaria de Curacautín, de fs. 43 a 48 (Tomo I), que se desglosa de la siguiente manera:

a) A fs. 46 (Tomo I), copia de constancia estampada en el libro de novedades de la guardia, del día sábado 24 de junio de 1989, párrafo N°11, folio N°105, en lo pertinente refiere que interrogado en el cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, sobre el delito que se le imputa manifiesta libre y espontáneamente, y sin apremio alguno, ser el autor del delito en comento y que su declaración está acorde a lo expuesto precedentemente. Que registrado en el

cuerpo de guardia, en presencia del personal aprehensor, no presenta lesiones ni contusión visible y pasa al calabozo.

b) A fs. 49 (Tomo I), contiene relacional nominal de personal de Carabineros que el día 24 de junio de 1989 se encontraban en el cuartel de la 5ta Comisaria de Curacautín, al momento de encontrar el cadáver de Marcos Quezada Yáñez, consta que los funcionarios Sargento Primero José Fernández Cofré, Cabo 2° José Cádiz Parada, Carabinero Bernardo Aedo Leiva, Carabinero José Manríquez Toledo, Carabinero Erik Vásquez Ordenes y Carabinero Claudio Contreras Valencia.

b.10. Dictamen reservado n° 13, de fecha 25 de octubre de 1989, de la Prefectura de Malleco, de fs. 342 a 349 (Tomo I), en lo pertinente dictamina: “ **a)** *Aceptase en parte la vista fiscal que rola a fs. 72/77, y en todas sus partes su ampliación de fs. 82/83, toda vez que en dichos documentos se ha establecido plenamente que el detenido Marcos Quezada Yáñez, el día sábado 24 de junio de 1989, en el interior del calabozo n°1 , de la 5ta Comisaria Curacautín, de esta dependencia, sin cooperación de persona alguna y por motivos que se desconocen, determinó “suicidarse”, para cuyo efecto utilizó una chomba de lana que usaba como vestimenta amarrando una de las mangas a la viga existente en el calabozo y la otra al cuello, para lo cual se ayudó para alcanzar el madero colocando la tarima de la dependencia apoyada en la pared y de esta forma consumir su propósito. Considerandos 1°, 2°, 7°, 8°, 13° y 14°; b)* *Declarase que los medios de prueba que rolan en autos, aportados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros de Chile, dejan de ver manera clara en sus conclusiones, que la causa precisa y necesaria de la muerte del detenido por robo Marco Quezada Yáñez, es una asfixia por ahorcamiento con vínculo blando, aportando además otros antecedentes que avalan dicha apreciación, lo que altera incuestionablemente la evaluación del Protocolo de Autopsia Médico Legal. Considerandos 3°, 4°, 6°, 7° y 8°; c)* *Expresase que por este hecho, la Fiscalía Militar letrada del Ejército y Carabineros Malleco/Angol, instruye sumario, no obstante las diligencias se encuentran agotadas, esperándose el sobreseimiento definitivo por tratarse de un suicidio sin responsabilidad para el personal de carabineros, circunstancia que es impedimento para emitir un pronunciamiento sobre la materia, por cuanto la jurisdicción penal y civil es independiente de la administrativa y el fallo que pueda emitir dicho tribunal, no influirá en la resolución del presente dictamen, conforme lo constituido en el inciso 2° del artículo 13° del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n° 11. Considerandos 4° y 5°; d)* *Sancionase al Cabo 2° José Domingo Cádiz Parada, de actual dotación de la*

primera Comisaria “Angol”, de esta dependencia, con una sanción consistente en “dos días de arresto” con servicios, porque el día sábado 24 de junio de 1989, mientras se desempeñaba como Suboficial de guardia en la 5ta Comisaria Curacautín, no designó vigilante de calabozo ni dejó la debida constancia de la visitas efectuadas para cerciorarse del estado de los detenidos que se encontraban en el interior de los mismos, obligaciones contempladas en las letras b) y c) de la Circular 0.5.3. n° 7/30440, de fecha 25 de julio de 1977, en vigencia, que imparte instrucciones relacionadas con muerte de detenidos en los cuarteles de Carabineros, infringiendo lo estipulado en el artículo 22°, n°2, letra a) y n° 3, letra) del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, n°11, con las agravantes señales en el artículo 33°, letras a) y c) del mismo texto reglamentario. Considerandos 9°, 10°, 11° y 12°.

28°) Que del conjunto de elementos probatorios antes detallados y relacionados generales y específicos. Ponderados, consistentes en testigos, documentos y pericias antes señaladas como además se indica en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, con fecha 30 de diciembre de 2019, permiten al Tribunal a través de los medios de prueba legal que se han detallados y relacionados, llegar a la convicción: primero que ha existido el delito de **homicidio calificado** en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, ilícito en su carácter de **lesa humanidad**. Segundo que en ese ilícito le ha correspondido la participación en calidad de **CÓMPLICE** en los términos del artículo N° 16 del Código Penal al acusado **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA**, ello sin perjuicio de otras reflexiones que puedan hacerse al analizar los escritos de los querellantes y las defensas.

D. EN CUANTO A LAS DEFENSAS.-

Respecto a los acusados CÉSAR ADRIAZOLA AZÓCAR, NELSON ALMENDRAS ILLESCA Y JOSÉ FERNÁNDEZ COFRÉ.

29 °) Que a **fs. 3287 a fs. 3297 (Tomo IX)**, la abogada María Graciela Carrillo Fuentes, en representación de **César Adriazola Azócar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré**, en lo principal de su escrito contesta acusación de oficio y acusaciones particulares, alegando la inexistencia del delito, y se absuelva a sus representados por no haber tenido participación alguna en los hechos investigados en estos autos; en subsidio, acoger las aminorantes contempladas en los numerales 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. Solicita, se les otorgue beneficios alternativos contemplados en la ley 18.216, atendido la edad y enfermedad de sus representados.-

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.

B. Contestación acusaciones particulares.

i. Los antecedentes de cargo

ii. Derecho.

C. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.-

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN: la defensa acota que no existe prueba de ninguna especie en contra de sus representados que lo relacionen en base a lo que a continuación se expresa:

a) Que efectivamente el sr Quezada fue detenido por su presunta participación en un robo a una panadería y kiosco, de la comuna de Curacautín, siendo sindicado como el único sospechoso, sumado a su expresa manifestación de no querer regresar a la cárcel. Esgrime la defensa, que si bien fue detenido por su representado, Nelson Almendras Illesca junto a otros funcionarios, lo condujeron a la Comisaria, siendo interrogado por los aprehensores, y su representado el Teniente César Adriazola. Lo anterior, a criterio de la defensa objetivamente ocurrió.

b) Imprecisión del auto de procesamiento y una interpretación incorrecta de antecedentes allegados a la causa, que la acusación fiscal, no acredita cual podría haber sido la motivación de sus representados, para dar muerte a un muchacho de 17 años, considerando que su representado José Fernández Cofré, no pertenecía al grupo de la Comisaria de Curacautín, formando parte de la comisión civil, encargada de la fiscalización de alcoholes de la comuna. Anexa, que si bien Maldonado, estuvo en el lugar de los hechos, no se puede obviar más de 50 declaraciones y ratificaciones, sumado a las contradicciones y en demasía detallista sus declaraciones. La defensa fundamenta, que el libro de novedades es prueba irrefutable que tanto el Señor Almendras como Adriazola, no se encontraban en la Comisaría al momento de fallecer Quezada. Sostiene, la acusación que Cádiz comunicó lo sucedido a sus superiores, entre ellos el Teniente Adriazola, por tanto sus representados no tendrían responsabilidad alguna en los hechos acaecidos. Que el Tribunal, ignora los dos informes realizados por el Dr. Germán Tapia Copa, de fecha 14 de septiembre de 2015 y 12 de julio de 2016, concluyendo que las lesiones en los dedos de Quezada, no le impedían realizar el acto suicida por sus propios medios. No siendo atribuible necesariamente a terceros. Hace referencia al informe de la Brigada de homicidios metropolitana de la Policía de

Investigaciones, recepcionado el 11 de octubre de 2016. Suma, la prueba científica coincide con lo relatado por todos los testigos Carabineros, que estuvieron de guardia el día de la muerte de Quezada. La defensa basa que de los documentos que constan en el proceso, tales como el libro de novedades de la época, su representado Nelson Almendras Illesca, se retiró a las 15:00 horas, suscrito por el Sargento primero Fideromo Vásquez López, sumado a la constancia efectuada por el Suboficial de guardia, que estampa la recogida del primer turno. Continúa, el libro de novedades, a fs. 196 da cuenta que su representado Cesar Adriazola Azocar, no se encontraba en la Comisaria cuando se suicidó el señor Quezada. Que el mismo libro a fs. 193, estampa que el Sargento Primero José Fernández Cofré, pasa agregado a dicha unidad, del Reten Manzanar, quien sale a la población en comisión de alcoholes. Agrega, a fs. 195 del libro precitado, consta que Juan Maldonado Pacheco estaba ebrio, lo cual se manifestaba por su fuerte hálito alcohólico, inestabilidad al caminar, incoherencia al hablar y rostro congestionado.

B. CONTESTACIÓN ACUSACIONES PARTICULARES.

i) **Antecedes de cargo**, la defensa colige que tanto la acusación fiscal como particular, toman en consideración, la supuesta aplicación de shock eléctrico por parte de Almendras, Adriazola y otros, lo que provocó que el sr. Quezada, quedará inhabilitado hasta las 19:00 horas, para posteriormente un grupo indeterminado de Carabineros, martillaran una viga en el techo y lo colgaran con un chaleco, simulando un suicidio, lo anterior avalado en la declaración de Maldonado, quien estaba ebrio, con sus facultades mentales en malas condiciones. Agregar, que el informe médico legista dice que las lesiones de Quezada, en sus dedos de primero segundo grado, no lo inhabilitaba para maniobrar su chaleco y efectuar maniobras de ahorcamiento.

ii) **Derecho**, la defensa esgrime como fundamento el artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo al cual deben darse tres requisitos:

a) **Primer requisito**, en este sentido afirma que si bien la persona murió encontrándose en custodia, no existe un hecho punible atribuible a sus representados, ni siquiera prueba concluyente que determinante si hubo o no intervención de terceras personas, sumado las contradicciones en las declaraciones del único testigo en el cual se fundamenta la acusación.

b) **Segundo requisito**, la defensa discrepa con el Tribunal, como con los acusadores particulares, por cuanto solo existe la declaración de un testigo que se encontraba ebrio y un informe del médico, apellido Reuter, que fue modificado por ser incompleto e inconsistente, desvirtuado además por los informes médicos legales del 2015 y 2016, fecha en la que existen técnicas

científicas, las cuales concluyen que Quezada murió ahorcado, suicidándose, y que ninguno de sus representado tuvo participación, ni estaba cerca o a cargo del difunto.

c) Tercer requisito, fundamenta la defensa, que el obligación del Tribunal, valorar la prueba que perjudica como la que beneficie a los acusados, requisito que no se ha cumplido, al no considerar la prueba científica, que consta en autos ni la prueba documental, como el libro de novedades, y que no da pie a interpretaciones.

C. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD

PENAL: Para el eventual caso de que sus representados resulten condenados, solicita que se le favorezca con el reconocimiento de la circunstancia atenuante, tomada como muy calificadas, estas son las contempladas en el artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal. Además solicita otorgarle los beneficios alternativos de la ley 18.216, tomando en consideración sus edades y enfermedades.

Respecto al acusado JOEL ERWIN PÉREZ ISLA.

30°) De fs. 3302 a 3325 (Tomo IX) el abogado Guillermo Cáceres Silva, en representación de **Joel Erwin Pérez Isla**, en lo principal de su escrito **interpone excepción de previo y especial pronunciamiento** (prescripción), la que **fue rechazada por este Tribunal** de fs. 3447 a 3450 (Tomo X), el 09 de noviembre de 2021. En el primer otrosí y en subsidio de dichas excepciones, **contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares** solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos. Y en subsidio, en caso de ser condenado, le favorezcan las atenuantes del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal. Sin perjuicio de los beneficios de la ley 18.216.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.

i. Inexistencia del delito por el cual se acusa a su defendido.

ii. Falta de participación de su defendido en el delito que se le imputa.-

B. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.-

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN: Reproduce los hechos contenidos en el auto acusatorio fiscal.

i) Inexistencia del delito por el cual se acusa a su representado, de acuerdo a los antecedentes arribados en la causa, no es posible acreditar la

existencia del delito de homicidio en Marcos Quezada Yáñez porque los antecedentes considerados por el Tribunal, a criterio de la defensa, resultan contradictorios con otras piezas del sumario. Hace referencia a la autopsia, a fs. 27, que alega deja en evidencia la falta de rigor técnico en su informe, lo cual queda de manifiesto a fs. 308. Menciona prueba pericial que consta en autos y que a criterio de la defensa respalda sus planteamientos, toda vez que no se encuentra establecida la causa de muerte de Marcos Quezada, en el informe de Reuter. No obstante, el informe de fs. 758 si da cuenta que Marcos Quezada se encontraba vivo al momento del ahorcamiento. Lo anterior contradice lo concluido por Reuter, quien habría presumido que la causa de muerte fue producto de la exposición a la electricidad, y por ende incapacitado para realizar maniobras conducentes a su ahorcamiento. A criterio de la defensa los informes médicos legales y las diligencias policiales establecen que se trataría de un ahorcamiento, tipo suicida. Alega, es de vital importancia para acreditar la participación de terceros, establecer si las lesiones de sus manos podría haberle impedido de anudar el vínculo en la viga y luego en el cuello para colgarse. En relación al punto anterior, la defensa utiliza el informe del Servicio Médico legal N° 1689 -2016, que sostiene que las lesiones de las manos, no eran apreciables a simple vista. Conjetura, a fs. 2596 se incorporó una segunda ampliación del Informe pericial Médico forense, el cual descarta la hipótesis de tortura por aplicación de electricidad en sus manos, previo a su muerte. Que existe armonía a juicio de la defensa, entre el informe del Servicio Médico legal, en su punto n° 15 de fs. 1546 y el que rola a fs. 1601 en el punto n° 4, no así el informe del médico Reuter, que adolece de graves fallas metodológicos que omite información y evidencia importante. La defensa analiza el artículo 108 del Código de Procedimiento Penal, considerando que no se cumplen los presupuestos de dicha norma, toda vez que ha quedado de manifiesto a lo largo del sumario, la existencia de un suicidio por ahorcamiento, y no un homicidio por aplicación de corriente eléctrica. Conjetura, que no existe en el proceso evidencia testimonial o científica que avale la hipótesis de un homicidio, dado que las lesiones que presentaba el occiso eran quemaduras de primer y segundo grado, y las propias del ahorcamiento. Reflexiona, en relación al artículo 109 del Código de Procedimiento Penal, que no tendría asidero alguno en el proceso, obviar el cúmulo de informes policiales, periciales y científicos que acreditan con claridad la dinámica de los hechos. Soslaya, el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal, en el caso sublite, diferentes peritos han concluido sin contradicciones que la causa de muerte de Quezada, fue por ahorcamiento de tipo suicida. De igual forma hace referencia al artículo 408 del

mismo cuerpo normativo a fin de solicitar se decrete el sobreseimiento total y definitivo de su representado por no ser un hecho constitutivo de delito.-

ii) Falta de participación de su representado en el delito que se le imputa.

Sin perjuicio de lo esgrimido, la defensa solicita la absolución de su defendido por no existir antecedentes objetivos que acrediten la participación de su representado. A propósito de la prueba allegadas a la causa, es efectivo que su representado efectuó las primeras diligencias en el contexto de una investigación por robo, deteniendo a quien sindicaban como sospechoso, a saber Marcos Quezada Yáñez, posteriormente fue interrogado por su defendido y otros funcionarios públicos, que el detenido reconoció su participación e indicó el lugar donde arrojó los elementos ocupados para cometer el ilícito, siendo trasladado hasta dicho lugar a fin de recuperar las especies. Urde, siendo entregado a la guardia, sin ningún tipo de lesiones, lo que demuestra que el detenido no fue objeto de maltrato mientras estuvo bajo el cuidado de su representado, de acuerdo a lo estampado en el libro de guardia, que además certifica a las 14:30 horas los Carabineros Leiva y Aguirre, lo ingresaron al calabozo. A las 15:00 horas su representado se retira del cuartel hacia su domicilio. Que la hora de muerte del sr Quezada, debe haber ocurrido entre las 17:45 horas, cuando el Carabinero Márquez lo sacó a orinar y las 19:30 horas. Lo anterior, se encuentra acreditado en diversos antecedentes que obra en el proceso, como por ejemplo el libro de guardia que rola a fs. 192, y que además da cuenta su representado no regreso al cuartel, hasta el día siguiente. Agrega, las declaraciones otorgadas de fs. 1632, 1639, 1659 y 1686. Sin perjuicio que el testigo Maldonado, en ninguna de sus declaraciones, ni siquiera en el careo que tuvo con su representado, declara haberlo visto en la unidad policial. Concluye es físicamente imposible que su defendido hubiese participado en las supuestas torturas efectuadas a Quezada y posterior ahorcamiento. Esgrime como fundamento jurídico los artículos 456 del Código de Procedimiento Penal, no siendo posible de los antecedentes del sumario, establecer la participación de su defendido en los hechos, ni siquiera a título de presunción. Utiliza, la hipótesis N° 3 del artículo 408 del cuerpo normativo mencionado.

B. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD

PENAL: Para el eventual caso de que su representado resulten condenados, solicita que se le favorezca con el reconocimiento de atenuantes contempladas en el N° 6 y 9 del artículo 11 del Código Penal. La defensa pide tomar en consideración los beneficios contemplados en la ley 18.216.-

Respecto al acusado MARCOS AGUIRRE GUAJARDO

31°) De fs. 3328 a 3329 (Tomo IX) el abogado César Antonio Villagrán Carvallo, en representación de **Marcos Aguirre Guajardo**, en lo principal de su escrito contestación acusación fiscal con declaración y acusación particular, solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos, en subsidio se tomen en consideración las circunstancias atenuantes contempladas en el artículo 11 N° 6,8 y 9 del Código Penal. **A fs. 3331 (Tomo IX)**, solicita hacer extensivo la contestación de la acusación fiscal; a las acusaciones particulares.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.**B. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.-**

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN: Solicita se proceda a dictar sentencia absolutoria en favor de su defendido, porque su representado efectivamente formaba parte del personal de servicio de Carabineros de la Comisaria de Curacautín, pero no tuvo participación en las agresiones proferidas y torturas que supuestamente fue objeto la víctima Marcos Quezada Yáñez por parte del personal, y mucho menos participación, en el homicidio calificado de la misma, ni en calidad de autor, encubridor o cómplice. Por tanto, no existen pruebas contundentes que acrediten su participación en los hechos investigados.-

B. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL:

Para el eventual caso de que su representado resulte condenado, solicita se le favorezca con las circunstancias atenuantes, estipuladas en el artículo 11 N° 6,8 y 9 del Código Penal.

Respecto al acusado BERNARDO AEDO LEIVA.

32°) A fs. 3379 a 3388 (Tomo X), el abogado Gaspar Calderón Araneda, en representación de **Bernardo Aedo Leiva**, en lo principal de su escrito **contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares**, solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los hechos.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.

i. No hay hecho punible.

ii. Falta de pruebas de cargo de conformidad con el Código de Procedimiento Penal.

iii. Defensa de Bernardo Aedo.

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN:

i) **NO HAY HECHO PUNIBLE**, la defensa sintetiza los hechos de la acusación, para analizarla en conformidad con el artículo 424 del Código de Procedimiento. En efecto, el auto acusatorio carece -como auto motivado que debe ser- de las razones por las que el Tribunal concluye que el hecho es típico (el que mate a otro) sin referir como cinco autores y dos cómplices habrían dado muerte al detenido Marcos Quezada, y no puede ser de otro modo porque la acción, como categoría del delito, constituye su más importante elemento a partir de una conducta, que en este caso no ha sido descrita. Lo anterior es de vital importancia porque tampoco el auto acusatorio ha establecido si el occiso murió por ahorcamiento o electrocución como consecuencia de intervención de terceros, cuando en la letra G del auto acusatorio se plantea una conjetura compuesta de apremios con electricidad, posterior desmayo, falta de conciencia e imposibilidad física de colgarse en el calabozo. En otras palabras, no se sabe si los acusados electrocutaron o ahorcaron a la presunta víctima, si muere por lo primero o por lo segundo, y qué operaciones desplegaron los acusados para conseguir este resultado y con estos antecedentes en una concatenación de presunciones, la acusación infiere que el detenido habría sido ahorcado por sus custodios porque también presume que se le había aplicado tormentos con electricidad en sus manos, lo que a su vez reconduce sobre la imposibilidad de colgarse por sí mismo. En esa dinámica, a criterio de la defensa los acusados están en la más absoluta indefensión porque carecen de una acusación idónea que les permita controvertirla.

ii. **FALTA DE PRUEBAS DE CARGO DE CONFORMIDAD CON EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL**, lo anterior se ve corroborado porque los únicos testigos de cargo son Juan Maldonado Pacheco, Juan Yáñez Aedo y Gustavo Weisse Abarzúa los cuales no tienen sustento alguno con otros testimonios, con los que están absolutamente opuestos y por lo que sus atestados no cumplen con los requisitos del artículo N° 459 del Código del Procedimiento Penal. Se refiere a los dichos de Juan Yáñez Aedo, desmentidos por el testimonio de Hernán Segundo Briones San Martín. También hace referencia a los testimonios de diversos testigos. Bajo estas circunstancias no se distingue de cómo se acusa al personal de la Comisaría de Curacautín de un homicidio que no tiene causa de muerte determinada con intervención de terceros ni hechos concretos que acrediten

la participación de cada uno de los acusados con acciones específicas, y que en lo particular se sustentan sobre una única declaración de cargo de un sujeto ebrio que se contradice específicamente con expertos profesionales y científicos que señalan que efectivamente habían vigas en las celdas, que no había carrito donde transportar el cuerpo y que en definitiva fue el único que escuchó gritos de dolor percibiendo además la aplicación de corriente en el cuerpo del occiso. Suma, resulta necesario para acusar de homicidio a la mitad de los funcionarios en una unidad policial establecer en la acusación la causa de muerte de la presunta víctima. Ello no ocurre porque los informes periciales que obran en el expediente sin mucho margen de duda, conducen a la hipótesis del suicidio. Lo anterior de acuerdo a los informes evacuados por diversos profesionales médicos que dan cuenta de la hipótesis de la defensa.-

iii) **DEFENSA DE BERNARDO AEDO**, con lo expuesto, y al no haber hecho ni acción punible de su parte bajo la tipificación de homicidio y mucho menos calificado, se deberá absolver al acusado, por no ser efectivos los hechos que fundamentan la acusación a su respecto, aun cuando en realidad no hay ninguno. Ahora bien, ninguno de los relatos de los testigos sitúa a su representado al momento de producirse la supuesta electrocución de la presunta víctima, ni que se encontrara presente en el interrogatorio que se sostiene se le habría practicado a Quezada, como tampoco hay referencias a que Bernardo Aedo conociera del hecho ocurrido en el calabozo N° 1. Todos los testimonios sólo ubican a Bernardo Aedo Leiva como cuartelero y vigilante exterior, o bien después de la muerte, como punto fijo para proteger el sitio del suceso. La única participación que se encuentra acreditada a su respecto es que resulta ser el que encuentra al occiso en la celda colgado, un hallazgo que está absolutamente dentro de sus deberes funcionarios dando cuenta de inmediato a sus superiores, por lo que ningún reproche administrativo ni mucho menos penal puede dirigirse en su contra. En cuanto a su calidad de cómplice, el auto acusatorio no menciona en que consistió su cooperación a la ejecución del hecho ni el momento en que esa colaboración fue prestada antes o simultáneamente con el ilícito materia de la acusación, de manera que ni aún en esta parte el imputado puede defenderse de acciones que se le asignan en calidad de partícipe para ser encuadrada esta conducta en el artículo 16 del Código Penal.

Respecto al acusado JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA.

33°) A fs. 3402 a fs. 3410 (Tomo X), el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de **José Domingo Cádiz Parada**, en lo principal de su escrito **contesta la acusación fiscal y acusaciones particulares**, solicitando la absolución de su defendido por no tener participación ni responsabilidad en los

hechos. En caso de dictarse sentencia condenatoria se le favorezca con las atenuantes del artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal, y beneficios de la ley 18.216.

Para un mejor entendimiento del escrito presentado por ésta defensa, se estructura su presentación de la siguiente manera:

A. Solicitud de absolución.

i. Inexistencia del hecho punible.

ii. No se encuentra acreditada la participación

B. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.-

A. SOLICITUD DE ABSOLUCIÓN: la defensa se refiere a la dinámica de los hechos.-

i) INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE, la defensa esgrime como fundamento, que el médico legista Wolfgang Reuter Berger, determinó que la causa precisa y necesaria de la muerte de Marcos Quezada Yáñez era atribuida a un "shock determinado muy probablemente por acción de corriente eléctrica aplicado en algunos de los dedos de ambas manos", sin embargo dicho informe fue refutado en muchas ocasiones, incluso por el mismo Dr. Reuter, quien con fecha 07 de julio de 1989, declaró qué teniendo en consideración los nuevos antecedentes aportados por el Tribunal, es probable que el occiso haya procedido ahorcarse. Posteriormente, con fecha 02 de agosto de 1989, el propio Dr. Reuter expone que las lesiones son recientes, de ser quemaduras pudieron ser ocasionadas por algún alambre caliente u objeto similar lo que coincide con la teoría de que don Marcos Quezada pudo haberse quemado los dedos al ingresar al kiosco propiedad de don Roberto Ruiz Aguijar. En la misma declaración, finalmente señala, que: "no me es posible descartar una ahorcadura con las consideraciones que le se indican." Así también lo determino el Departamento de medicina Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, en el informe n° 4 de fecha 08 de agosto de 1989. Cita el informe pericial de análisis evacuado por el Laboratorio de Criminalística de la Escuela de Carabineros de Chile, con fecha 9 de septiembre de 1989; informe del Servicio Médico Legal de Santiago, de fs. 1539, con fecha 14 de septiembre de 2015, informe complementario del Servicio Médico Legal del 02 de julio de 2016. Asimismo, el informe del médico legista Germán Tapia Coppa, y el informe de la Unidad de Criminalística de la Policía de Investigaciones de Santiago de fecha 6 de octubre de 2016. Así pues, existen variados informes periciales que descartan la posibilidad de que, en primer lugar, Marcos Quezada haya

sufrido torturas, específicamente la-aplicación de corriente o electro shock en sus manos, ya que estas quemaduras pudieron ser consecuencia directa del ingreso al kiosco de don Roberto Ruiz, de acorde a sus dichos de fecha 17 de julio de 1989 que consta a fojas 103, y en segundo lugar, de los mismos informes, se puede desprender claramente que la muerte del occiso es coincidente con ahorcamiento, tal como fue encontrado por los funcionarios de Carabineros en las dependencias del calabozo de la Quinta Comisaría de Curacautín, siendo perfectamente posible para él realizar las maniobras destinadas a ejecutar el suicidio y descartando, de ésta manera, la acción de terceros. Es decir, todos esos informes periciales contradicen la hipótesis formulada en las acusaciones, ya que las; supuestas lesiones en las manos no lo imposibilitan de ejecutar maniobras como amarrar el sweater a la viga de madera, realizar nudos, por lo cual su muerte debe considerarse de custodia, compatible con el tipo suicida que se produce encontrándose el occiso en calidad detenido y al interior de un calabozo en la Comisaría. Lo anterior, adquiere relevancia para efectos de lo establecido en el artículo 472 del Código del Procedimiento Penal, por lo que el peso probatorio de los informes señalados anteriormente cobra gran relevancia jurídica. Así las cosas, a criterio de la defensa, no existe conducta típica, porque la acción la ejecutó el propio Marcos Quezada Yáñez, sin intervención de terceros.

ii) NO SE ENCUENTRA ACREDITADA LA PARTICIPACIÓN, refiere la acusación judicial como las acusaciones particulares, se basan en las declaraciones de Juan Maldonado, detenido por estado de ebriedad, según la parte acusadora, ha tenido un relato coherente y similar cada vez que ha comparecido en el proceso, lo que no es cierto, ya que según su declaración que consta a fojas 160, discrepa totalmente con el ofrecido hace más de 20 años después, ya que en este último entrega detalles específicos y minuciosos, que, sospechosamente no supo otorgar cuando los hechos eran recientes por lo queda en dudas la veracidad del relato. Sumado a la inexistencia del carrito al interior de la 5° Comisaria de Curacautín, donde supuestamente trasladaron al detenido o la instalación de vigas de maderas. Lo anterior resulta más raro para la defensa aun, teniendo en cuenta la declaración de Daniel Lagos Pulgar, también detenido por estado de ebriedad el día 24 de junio de 1989, y con quien compartieron celda, sin embargo no se percató de nada. En consecuencia, no se encuentra acreditada la participación en el supuesto hecho ilícito, ya que, si bien su representado se desempeñaba como Suboficial de Guardia en la Quinta

Comisaría de Curacautín el día 24 de junio, no consta que haya tenido participación en los hechos que imaginariamente señala el testigo. Señala, que su representado tampoco ha sido mencionado en las declaraciones aportadas por los testigos, por lo que no se aplica la hipótesis de que haya colaborado en la ejecución del supuesto hecho ilícito, descartando, de esta forma, su complicidad en ellos. Por el contrario, las únicas faltas que pueden imputarse a su representado, establecidas en la Circular N° 7/30440 de fecha 25 de julio de 1977, fue no haber designado vigilante de calabozo ni tampoco haber dejado debida constancia de las visitas efectuadas, lo que sólo conlleva responsabilidad administrativa, sancionada con una medida disciplinaria que se aplicó en aquella época. Es menester señalar que en las acusaciones no señala en qué consistió la cooperación que su representado realizó en la ejecución del supuesto hecho ilícito, ni tampoco en qué momento fue prestada, sino que sólo se le está acusando por estar presente en el lugar de los hechos realizando su labor de guardia, por lo que su conducta no se encuadra en lo establecido en el artículo 16 del Código Penal. En consecuencia, la acusación judicial como las acusaciones particulares carecen de mérito para calificar jurídicamente el hecho como homicidio calificado, toda vez que de los antecedentes de la investigación consta que en la muerte de Marcos Quezada Yáñez no se encuentra acreditada la participación de terceros, basándose la hipótesis del homicidio, única y exclusivamente en la declaración testimonial de Juan Maldonado, la que por lo demás carece de veracidad y peso probatorio.

2. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD

PENAL: Para el eventual caso de que sus representados resulten condenados, solicita que se le favorezca con el reconocimiento de las atenuantes contempladas en el 11 N° 6 y 9, sin perjuicio de lo establecido en la ley 18.216.-

E. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS.-

34°) CONSIDERACIONES PREVIAS AL ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS:

Que previo al análisis de la defensa específica es necesario tener en consideración los antecedentes y reflexiones que seguidamente se detallarán:

A. Obligación de investigar:

Cabe hacer presente que para la ponderación y aquilatación de los medios de pruebas del proceso en materia de violación a los derechos humanos (delitos de Lesa Humanidad) debe estarse al contexto de la época y lo que significa la obligación de investigar como a continuación se indica:

a. Los estándares normativos e interpretativos en materia de graves violaciones a los de derechos humanos (delitos de lesa humanidad) en relación a la obligación de investigar. Partamos expresando que un estándar normativo en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5° inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (García Pino, Gonzalo: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Tribunal que a partir de la normativa aludida, está debe ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo. En este caso sobre la **Obligación de investigar**.

b. Que sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 124, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c. Que esta institución denominada **control de convencionalidad** puede ser definida, en términos simples, como el mecanismo que utiliza la Corte IDH tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo, como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia de la Corte Interamericana (García, Gonzalo (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: Nogueira, Humberto (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. pp. 356-357).

d. Que para aplicar entonces el control de convencionalidad hay que observar por supuesto la Convención Americana- ya citada- en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado, su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e. Que del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un estándar normativo en materia de derechos humanos. En este caso (obligación de investigar) en relación a cómo se deben desarrollar las investigaciones cuando han ocurrido graves violaciones a los DDHH (delitos de lesa humanidad). En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

f. Que siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

Sentencia en caso Velásquez Rodríguez versus Honduras de 29 de julio de 1988. Párrafos 176 y 177, afirma en el **176** que (...)el Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa

de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos humanos reconocidos en la Convención. Por su lado en el **177** acota que (...) la de investigar es, como la de prevenir, una obligación de medio o comportamiento que no es incumplida por el solo hecho de que la investigación no produzca un resultado satisfactorio. Sin embargo, debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad. Esta apreciación es válida cualquiera sea el agente al cual pueda eventualmente atribuirse la violación, aun los particulares, pues, si sus hechos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, auxiliados por el poder público, lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Villagrán Morales y otros versus Guatemala de 19 de noviembre de 1999. Párrafo **225**, añade que del artículo 1.1 se desprende claramente la obligación de investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos en la Convención como medio para garantizar tales derechos.

Sentencia caso Barrios Altos versus Perú de fecha 14 de marzo de 2001. Párrafo **41** asevera que esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Sentencia caso Las Palmeras versus Colombia de 6 de diciembre de 2001, en su párrafo **42** anexa que (...) La Corte estima que es posible que, en un caso determinado, se pueda interpretar la omisión de investigación como una forma de encubrir a los autores de un delito contra la vida, pero no puede erigirse este razonamiento en una norma válida para todos los casos. Independientemente de la cuestión de la validez de la pretendida norma, es de señalar que ella sería aplicable en ausencia de una investigación seria (...).

Sentencia caso Juan Humberto Sánchez versus Honduras de 7 de junio de 2003. Párrafo 184 expresa que (...) el Estado parte de la Convención Americana tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y sancionar a los autores y a quienes encubran dichas violaciones. Y toda persona que se considere víctima de éstas o bien sus familiares tienen derecho de acceder a la justicia para conseguir que se cumpla, en su beneficio y en el del conjunto de la sociedad, ese deber del Estado.

Sentencia caso Bulacio versus Argentina de 18 septiembre de 2003. En el párrafo 115 explícita que (...) el derecho a la tutela judicial efectiva exige entonces a los jueces que dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos.

Sentencia caso Myrna Mack Chang versus Guatemala de 25 de noviembre de 2003. Párrafo 277 expresa que (...) asimismo, en el cumplimiento de esta obligación, el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y derecho que mantienen la impunidad en el presente caso; otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de justicia y a los familiares de Myrna Mack Chang y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso.

Sentencia caso Tibi versus Ecuador de 7 septiembre de 2004. Párrafo 159 acota que (...) la Corte entiende que, a la luz de la obligación general de los Estados partes de respetar y garantizar los derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción, contenida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Estado tiene el deber de iniciar de oficio e inmediatamente una investigación efectiva que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables, cuando existe denuncia o razón fundada para creer que se ha cometido un acto de tortura en violación del artículo 5 de la Convención Americana.

Sentencia caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador de 1 de marzo de 2005. Párrafo 83 añade que (...) la Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.

Sentencia caso Comunidad Moiwana versus Suriname de 15 de junio 2005. Párrafo 145 anexa que (...) está expresamente reconocido por Suriname, que agentes estatales estuvieron involucrados en el ataque del 29 de noviembre de 1986 en el que murieron al menos 39 residentes indefensos de la aldea de Moiwana – entre los cuales había niños, mujeres y ancianos – y muchos

otros resultaron heridos. De esta manera, los hechos muestran múltiples ejecuciones extrajudiciales; en tal situación, la jurisprudencia del Tribunal es inequívoca: el Estado tiene el deber de iniciar ex officio, sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva.

Sentencia caso de la Masacre de Mapiripán versus Colombia de 15 de septiembre de 2005. En sus párrafos 137, 233 y 299. Afirma en el **137** (...) Tal como se desarrolla en las consideraciones sobre los artículos 8 y 25 de la Convención una de las condiciones para garantizar efectivamente el derecho a la vida se refleja necesariamente en el deber de investigar las afectaciones a ese derecho. De tal manera, la obligación de investigar los casos de violaciones al derecho a la vida constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal en el presente caso. **233** (...) Este deber de investigar deriva de la obligación general que tienen los Estados partes en la Convención de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en ella, es decir, de la obligación establecida en el artículo 1.1 de dicho tratado en conjunto con el derecho sustantivo que debió ser amparado, protegido o garantizado. De tal manera, en casos de violaciones al derecho a la vida, el cumplimiento de la obligación de investigar constituye un elemento central al momento de determinar la responsabilidad estatal por la inobservancia de las debidas garantías judiciales y protección judiciales; **299** (...) Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, Colombia debe: **a)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **b)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **c)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia, así como a los ex pobladores y actuales pobladores de Mapiripán.

Sentencia caso de la Masacre de Pueblo Bello versus Colombia de 31 de enero de 2006. Párrafo **143** afirma que en particular, por constituir el goce pleno del derecho a la vida la condición previa para la realización de los demás derechos una de esas condiciones para garantizar efectivamente este derecho está constituida por el deber de investigar las afectaciones al mismo. De tal manera, en casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene el deber de iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación,

persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.

Sentencia caso Goiburú y otros versus Paraguay de 22 de septiembre de 2006. Párrafos 117, 129 y 130. Asevera que **117 (...)** Además, es preciso reiterar que esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Durante la investigación y el trámite judicial las víctimas o sus familiares deben tener amplias oportunidades para participar y ser escuchados, tanto en el esclarecimiento de los hechos y la sanción de los responsables, como en la búsqueda de una justa compensación, de acuerdo con la ley interna y la Convención Americana. No obstante, la investigación y el proceso deben tener un propósito y ser asumidos por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. **129 (...)** una vez establecido el amplio alcance de las obligaciones internacionales erga omnes contra la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos, la Corte reitera que en los términos del artículo 1.1 de la Convención Americana los Estados están obligados a investigar las violaciones de derechos humanos y a juzgar y sancionar a los responsables. **130 (...)** Por ende, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1 de la Convención Americana, el Paraguay debe adoptar todas las medidas necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, inclusive impulsando por todos los medios a su alcance las solicitudes de extradición que correspondan. La inexistencia de tratados de extradición no constituye una base o justificación suficiente para dejar de impulsar una solicitud en ese sentido.

Sentencia caso Almonacid Arellano y otros versus Chile de 26 de septiembre de 2006. Párrafos 111 y 114. Expresa **111 (...)** Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención

Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. **114 (...)** Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

Sentencia caso del penal Miguel Castro versus Perú de 25 de noviembre de 2006. Párrafo **387.** (...) Explicita que en primer término, esta Corte considera que el tiempo transcurrido entre el momento de los hechos y el inicio del proceso penal por la investigación de éstos sobrepasa por mucho un plazo razonable para que el Estado realice las primeras diligencias probatorias e investigativas para contar con los elementos necesarios para formular una acusación penal, máxime que a ese tiempo habrá que sumar el que tome la realización del proceso penal, con sus distintas etapas, hasta la sentencia firme. Esta falta de investigación durante tan largo período configura una violación al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y sus familiares, por cuanto el Estado ha incumplido su obligación de adoptar todas las medidas necesarias para investigar las violaciones, sancionar a los eventuales responsables y reparar a las víctimas y sus familiares.

Sentencia caso de la Masacre de La Rochela versus Colombia de 11 de mayo de 2007. Párrafos 155, 156 y 171. Explaya que, **155 (...)** La Corte estima que la ineffectividad de tales procesos penales queda claramente evidenciada al analizar la falta de debida diligencia en la conducción de las acciones oficiales de investigación. Esta falta de debida diligencia se manifiesta en la irrazonabilidad del plazo transcurrido en las investigaciones, la falta de adopción de las medidas necesarias de protección ante las amenazas que se presentaron durante las investigaciones, las demoras, obstáculos y obstrucciones en la realización de actuaciones procesales y graves omisiones en el seguimiento de líneas lógicas de investigación. **156 (...)** el eje central del análisis de la efectividad de los procesos en este caso es el cumplimiento de la obligación de investigar con debida diligencia. Según esta obligación, el órgano que investiga una violación de derechos humanos debe utilizar todos los medios disponibles para llevar a cabo, dentro de un plazo razonable, todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. Esta

obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos. **171** (...) este Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismo.

Sentencia caso Escué Zapata versus Colombia de 4 de julio de 2007. Párrafo **106** indica que (...) Una debida diligencia en los procesos investigativos requiere que éstos tomen en cuenta la complejidad de los hechos, el contexto y las circunstancias en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, en seguimiento de todas las líneas lógicas de investigación. Las autoridades judiciales deben intentar como mínimo, inter alia: **a)** identificar a la víctima; **b)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con los hechos; **c)** identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones; **d)** determinar la causa, forma, lugar y momento en que se produjo el ilícito, así como cualquier patrón o práctica que lo pueda haber causado; y **e)** en caso de fallecimientos, distinguir entre muerte natural, accidental, suicidio y homicidio.

Sentencia caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú de 10 de julio de 2007. Párrafo **131** manifiesta que (...) el Tribunal reitera que la obligación de investigar es una obligación de medio, no de resultados. Lo anterior no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como “una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos.

Sentencia caso García Prieto y otros versus El Salvador de 20 de noviembre de 2007. Párrafos 104, 112 y 115. Menciona en **104**, (...) que cabe señalar que la obligación de investigar no sólo se desprende de las normas convencionales de Derecho Internacional imperativas para los Estados Parte; sino que además se deriva de la legislación interna que haga referencia al deber de investigar de oficio ciertas conductas ilícitas y a las normas que permiten que las víctimas o sus familiares denuncien o presenten querellas, con la finalidad de

participar procesalmente en la investigación penal con la pretensión de establecer la verdad de los hechos. **112** (...) la obligación a cargo del Estado de actuar con debida diligencia en la práctica de una investigación implica que todas las autoridades estatales están obligadas a colaborar en la recaudación de la prueba para que sea posible alcanzar los objetivos de una investigación. La autoridad encargada de la investigación debe velar para que se realicen las diligencias requeridas y, en el evento de que esto no ocurra, debe adoptar las medidas pertinentes conforme a la legislación interna. A su vez, las otras autoridades deben brindar al juez instructor la colaboración que éste les requiera y abstenerse de actos que impliquen obstrucciones para la marcha del proceso investigativo. En el presente caso se presentaron actos de esta naturaleza en lo que toca a la investigación relativa a la inspección de los libros de “entradas y salidas” del personal del Batallón San Benito de la extinta Policía Nacional. **115** (...) Para la Corte la falta de respuesta estatal es un elemento determinante al valorar si se ha dado un incumplimiento del contenido de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues tiene relación directa con el principio de efectividad que debe irradiar el desarrollo de tales investigaciones. De tal forma el Estado al recibir una denuncia penal, debe realizar una investigación seria e imparcial, pero también debe brindar en un plazo razonable una resolución que resuelva el fondo de las circunstancias que le fueron planteadas.

Sentencia caso Heliodoro Portugal versus Panamá de 12 de agosto de 2008. Párrafo **142** narra que (...) la obligación de investigar violaciones de derechos humanos se encuentra dentro de las medidas positivas que deben adoptar los Estados para garantizar los derechos reconocidos en la Convención. La Corte ha sostenido que, para cumplir con esta obligación de garantizar derechos, los Estados deben no sólo prevenir, sino también investigar las violaciones a los derechos humanos reconocidos en la Convención, como las alegadas en el presente caso, y procurar además, si es posible, el restablecimiento del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por las violaciones de los derechos humanos.

Sentencia caso Tiu Tojín versus Guatemala de 26 de noviembre de 2008. Párrafo **77** acota que (...) en base en lo anterior, el Estado deberá asegurar, como una forma de garantizar que la investigación iniciada ante la justicia ordinaria sea conducida con la debida diligencia que las autoridades encargadas de la investigación tengan a su alcance y utilicen todos los medios necesarios para llevar a cabo con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado garantizará

que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con los recursos logísticos y científicos necesarios para la recaudación y procesamiento de pruebas y, en particular, tengan las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y puedan obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. En este sentido, cabe reiterar que en caso de violaciones de derechos humanos, las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o proceso pendientes.

Sentencia caso Ríos y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. Párrafo **283** añade (...) que la investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados” incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *Ius Cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación *ex officio*, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Perozo y otros versus Venezuela de 28 de enero de 2009. En su párrafo **298** apunta que (...) la obligación general de garantizar los derechos humanos reconocidos en la Convención, contenida en el artículo 1.1 de la misma, puede ser cumplida de diferentes maneras, en función del derecho específico que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Por ello, corresponde determinar si en este caso, y en el contexto en que ocurrieron los hechos alegados, la obligación general de garantía imponía al Estado el deber de investigarlos efectivamente, como medio para garantizar el

derecho a la libertad de expresión y a la integridad personal, y evitar que continuaran ocurriendo. La investigación de la violación de determinado derecho sustantivo puede ser un medio para amparar, proteger o garantizar ese derecho. La obligación de investigar “adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”, incluso hasta alcanzar esa obligación, en algunos casos, el carácter de *ius cogens*. En casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos, el Tribunal ha considerado que la realización de una investigación ex officio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad personal y la vida. Se considera que en esos casos la impunidad no será erradicada sin la determinación de las responsabilidades generales –del Estado- e individuales –penales y de otra índole de sus agentes o de particulares-, complementarias entre sí. Por la naturaleza y gravedad de los hechos, más aún si existe un contexto de violación sistemática de derechos humanos, los Estados se hallan obligados a realizar una investigación con las características señaladas, de acuerdo con los requerimientos del debido proceso. El incumplimiento genera, en tales supuestos, responsabilidad internacional del Estado.

Sentencia caso Anzualdo Castro versus Perú de 22 de septiembre de 2009. Párrafo 135 apoya que (...) este Tribunal ha establecido que para que una investigación de desaparición forzada sea llevada adelante eficazmente y con la debida diligencia, las autoridades encargadas de la investigación deben utilizar todos los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones y averiguaciones esenciales y oportunas para esclarecer la suerte de las víctimas e identificar a los responsables de su desaparición forzada. Para ello, el Estado debe dotar a las correspondientes autoridades de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas y, en particular, de las facultades para acceder a la documentación e información pertinente para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de la ubicación de las víctimas. Asimismo, es fundamental que las autoridades a cargo de la investigación puedan tener acceso ilimitado a los lugares de detención, respecto a la documentación así como a las personas. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación –y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades

penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación.

Sentencia caso Manuel Cepeda Vargas versus Colombia de 26 de mayo de 2010. Párrafo 118 aproxima que (...) en casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

Sentencia caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña versus Bolivia de 1 de septiembre de 2010. Párrafo 158 arguye que (...) la Corte considera pertinente reiterar, como lo ha hecho en otros casos, que la “verdad histórica” documentada en informes especiales, o las tareas, actividades o recomendaciones generadas por comisiones especiales, como la del presente caso, no completan o sustituyen la obligación del Estado de establecer la verdad e investigar delitos a través de procesos judiciales.

Sentencia caso Gelman versus Uruguay de 24 febrero de 2011. Párrafo 194 asevera que (...) la Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

g. Síntesis de estos estándares normativos citados. Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia sólida y robusta ha sostenido un estándar en relación a la **Obligación de Investigar** en materia de derechos humanos, en cuanto tratándose de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad) los Estados deben realizar determinadas actividades. En concreto realizando un resumen de la Jurisprudencia anterior y apoyándonos además en Eduardo Ferrer Mac-Gregor- (Las siete principales líneas jurisprudenciales de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos aplicable a la justicia penal. Revista IIDH v. 59 pp.45-48). Autor además que es Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:

- i. Investigar efectivamente los hechos. En casos de ejecuciones extrajudiciales es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida y castiguen a todos los responsables, especialmente cuando están involucrados agentes estatales, ya que de no ser así se estarían creando, dentro de un ambiente de impunidad, las condiciones para que se repitan estos hechos, lo que es contrario al deber de respetar y garantizar el derecho a la vida.
- ii. Si los hechos violatorios a los derechos humanos no son investigados con seriedad, resultarían, en cierto modo, favorecidos por el poder público, lo que compromete la responsabilidad internacional del Estado. En este sentido, la Corte IDH ha establecido que en casos de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, las autoridades de un Estado deben iniciar ex officio y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, una vez que tengan conocimiento del hecho.
- iii. El deber de investigar es una obligación de medios, no de resultados, la investigación de este tipo de casos debe ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa o como una mera gestión de intereses particulares que dependa de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares, o de la aportación privada de elementos probatorios. Esto último no se contrapone con el derecho que tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus familiares a ser escuchados durante el proceso de investigación y al trámite judicial, así como a participar ampliamente de los mismos.
- iv. Cabe destacar que cualquier carencia o defecto a los responsables materiales o intelectuales, implicará que no se cumpla con la obligación de proteger el derecho a la vida.
- v. La Corte ya ha señalado que la debida diligencia exige que el órgano que investiga lleve a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones que sean necesarias con el fin de intentar obtener el resultado que se persigue. De otro modo, la investigación no es efectiva en los términos de la Convención.
- vi. Para cumplir la obligación de investigar y sancionar a los responsables en el presente caso, se debe: **1)** remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad; **2)** utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita la investigación y el proceso judicial; y **3)** otorgar las garantías de seguridad adecuadas a las víctimas, investigadores, testigos, defensores de

derechos humanos, empleados judiciales, fiscales y otros operadores de justicia.

- vii. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales.
- viii. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”.
- ix. Esta obligación de debida diligencia, adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados. En este sentido, tienen que adoptarse todas las medidas necesarias para visibilizar los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de graves violaciones de los derechos humanos.
- x. El Tribunal considera que, para cumplir con la obligación de investigar en el marco de las garantías del debido proceso, el Estado debe facilitar todos los medios necesarios para proteger a los operadores de justicia, investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso, evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos.
- i. La Corte reitera que el paso del tiempo guarda una relación directamente proporcional con la limitación y en algunos casos, la imposibilidad- para obtener las pruebas y/o testimonios, dificultando y aún tornando nugatoria o ineficaz, la práctica de diligencias probatorias a fin de esclarecer los hechos materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes, y determinar las eventuales responsabilidades penales. Cabe precisar que estos recursos y elementos coadyuvan a la efectiva investigación, pero la ausencia de los mismos no exime a las autoridades nacionales de realizar todos los esfuerzos necesarios en cumplimiento de esta obligación
- ii. En casos complejos, la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones, sus causas, sus beneficiarios y sus consecuencias, y no sólo descubrir, enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. Es decir, la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. De tal forma, la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial sólo

puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos, que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación.

iii. La Justicia, para ser tal, debe ser oportuna y lograr el efecto útil que se desea o se espera con su accionar y, particularmente tratándose de un caso de graves violaciones de derechos humanos, debe primar un principio de efectividad en la investigación de los hechos y determinación y en su caso sanción de los responsables.

iv. La Corte IDH ha establecido ciertos Principios Rectores, con base en el Manual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias de Naciones Unidas, para las investigaciones cuando se considera que una muerte pudo deberse a una ejecución extrajudicial. Las autoridades estatales que conducen una investigación deben: **1)** Identificar a la víctima; **2)** recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte con el fin de ayudar en cualquier investigación; **3)** Identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones con relación a la muerte que se investiga; **4)** determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y **5)** distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen; se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados.

h. Que tal como se ha señalado latamente en los párrafos precedentes, estos son los estándares normativos e interpretativos que se deben ponderar tanto al momento de investigar, como al momento de valorar la prueba del proceso. El Tribunal debe considerar las dificultades de la época, el contexto para reunir la prueba y ver los patrones de conducta de los Agentes del Estado. **Tal como, lo que se ha realizado en esta sentencia** y que determinadas defensas nada expresan. Así del estudio de sus argumentos sucede que no hay un cotejo y ponderación adecuado de todos los testigos, documentos y peritajes, sino que se refieren a eventos parciales de su propio interés. Ocurre que estas defensas deben situarse en la sede del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y lo que significa la violación de los Derechos Humanos y el delito de lesa humanidad.

B. Jurisprudencia Internacional Sobre Graves Violaciones a los Derechos Humanos (Delitos de Lesa Humanidad) Pronunciada por el Tribunal Constitucional Federal Alemán.

a. Que en todo caso a propósito de delitos de Lesa humanidad y la estructura legal y normativa que debe ponderarse en la sentencia (debe considerarse- con los ajustes hecho y derecho al contexto chileno- pues también los hechos investigados son graves violaciones a los derechos humanos, en este caso delitos de lesa humanidad y haremos los ajustes precisos y detallados al caso chileno, esto es, Centros de Detención, Regimientos, Destacamentos, Retenes, Tenencias, Comisaría, Bases Navales, Bases Aéreas, Cuarteles, Cárceles, Calabozos y todo otro lugar legal o ilegal que sirvió para detención, tortura o ejecución en la realidad chilena de la época) es muy significativo lo razonado en derecho comparado en los **casos de Iwan Nikolai de Demjanjuk** (condenado el 12 de mayo 2011) y **Oskar Gröning** (condenado 15 de julio de 2015), quienes tenían 91 y 94 años de edad , respectivamente, al ser condenados por Tribunales Alemanes. A continuación se realiza un síntesis en lo pertinente de los artículos de Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín sobre el caso Demjanjuk y de Claus Roxin sobre el caso Oskar Gröning.

b. Que el primer artículo versa sobre la complicidad en matanzas ocurridas en campos de exterminio nacionalsocialistas (el caso Demjanjuk en el contexto de la jurisprudencia de la República Federal Alemana). Gerhard Werle y Boris Burghardt-Universidad Humboldt- Berlín. Revista Penal México. N°9 septiembre 2015- febrero 2016, pp.181-193. Corresponde al análisis de la sentencia recaída contra Iwan Nikolai Demjanjuk, quien fue considerado cómplice en el exterminio masivo de personas. El 12 de mayo de 2011, el segundo Landgericht (LG, Tribunal Estatal) de Múnich condenó a Iwan Nikolai Demjanjuk, quien se había dado como nombre John para su segunda vida en Estados Unidos, a una pena única de cinco años por complicidad en 16 casos de homicidio calificado, de los que resultaron un total de 28060 muertes. Antes de la revisión de los recursos pendientes, que habían presentado tanto el condenado como la Fiscalía, Demjanjuk murió el 20 de marzo de 2012, a los 91 años. Lo que se razona es que antes de esta sentencia habría valido, conforme a la jurisprudencia de la República Federal Alemana, que una condena requeriría de la prueba de un hecho delictivo concreto (konkreten Einzeltatnachweis) imputable a cada acusado. Pero lo cierto es que los querellantes alegaron que la fundamentación de la responsabilidad como **cómplice** de Demjanjuk no se fundaría en un novum jurídico, sino que se vincularía con una jurisprudencia que habría sido olvidada solamente por razones de oportunidad política. El caso Demjanjuk implicaría una vuelta a la valoración correcta de acuerdo a la dogmática jurídico-penal. En efecto el segundo Landgericht de Múnich comprobó que Demjanjuk llegó a Sobibór como

Trawniki (Se conocía como Trawniki a prisioneros de guerra y personas sometidas a trabajos forzados que recibieron entrenamiento por parte de las SS (Escuadras de Defensa) para colaborar en los campos de concentración y en llevar a cabo el genocidio. En su mayoría se trataba de ucranianos y los así llamados alemanes étnicos (Volksdeutsche) de la Unión Soviética. La denominación tiene su origen en el campo de Trawniki –donde tenía lugar el entrenamiento– que se ubicaba aproximadamente a 40 kilómetros al este de Lublin) el día 27 de marzo de 1943, permaneciendo allí hasta mediados de septiembre del mismo año. El tribunal señaló que si bien no fue posible comprobar las actividades desarrolladas por Demjanjuk dentro del campo de concentración, se consideró el hecho de que **el campo de Sobibór se habría dedicado exclusivamente a la matanza de judíos deportados**. Los Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habrían colaborado en todas las fases del exterminio bajo las órdenes del personal alemán del campo. Se habrían repartido en tres turnos: uno de ellos habría estado dedicado a la seguridad externa del campo, otro habría vigilado las labores en el campo y el tercero habría permanecido de guardia. Los turnos habrían durado ocho horas y habrían rotado entre tres días de turnos de vigilancia y tres días de turnos de guardia. Al arribo de un transporte, los Trawniki se habrían ocupado de vigilar a los judíos que llegaban y a los prisioneros que estaban sometidos a trabajos forzados, que consistían en descargar a los deportados, hacerlos pasar a las cámaras de gas, someterlos a gases letales, y luego el examen y la remoción de los cadáveres. **Cada Trawniki –y por lo mismo también Demjanjuk– habría sabido que formaba parte de un aparato que no buscaba otra cosa que la manera más eficiente de matar al mayor número posible de personas**. Además, todos los Trawniki habrían tenido conciencia de la manera en que los judíos eran exterminados, y de que esto acontecía exclusivamente por motivos de odio racial. Durante el periodo de tiempo en el que Demjanjuk cumplió labores como Trawniki en Sobibór habrían arribado comprobadamente 16 transportes con 29779 personas deportadas. De ellos, un total de 28060 fueron asesinadas inmediatamente tras su llegada, ya sea en las cámaras de gas o a tiros. En esa línea el homicidio de todas las personas que compartieron un transporte fue valorado por la sala como una unidad de acción desde el punto de vista jurídico. En cada uno de estos actos habría colaborado Demjanjuk como cómplice.

c. Que los principales hallazgos de la sentencia son, en este punto, que todos quienes formaban parte de la cadena de mando –comenzando con los miembros de la RSHA (Agencia Central de Seguridad Imperial) encargados de llevar adelante el exterminio de los judíos, pasando por los empleados ferroviarios, las personas en la administración del gobierno general, los directores de campos

de concentración, los Oficiales de la SS (Schutzstaffel, fuerzas especiales nazis), los Oficiales de Policía en los campos de concentración individualmente considerados y el personal de vigilancia directamente comandado por ellos—tenían, cada uno, una tarea asignada en la expulsión de ciudadanos judíos de Alemania, planeada y organizada desde Berlín, hacia los países ocupados y controlados por el ejército alemán; en su transporte en los campos de exterminio y —siempre que no fueran seleccionados para ser forzados a trabajar, lo que ocurría con un pequeño grupo de ellos— en su homicidio inmediato y organizado en las cámaras de gas, como en una línea de producción. Sostiene la sentencia que los tres campos de exterminio de Treblinka, Belzec y Sobibór sirvieron al solo propósito del asesinato masivo de la población judía de Europa, y que con ello toda actividad del imputado y de las demás personas que tenían a su cargo tareas de vigilancia era una promoción de la tarea principal del campo de exterminio. En ese contexto, daba lo mismo si debían vigilar los andenes de arribo del tren, guiar a los prisioneros hasta las cámaras de gas, vigilar a los judíos que debían incinerar los cadáveres de los muertos, vigilar a los prisioneros sujetos a trabajos forzados para mantener el funcionamiento del campo y apropiarse de las pertenencias de los difuntos, controlar desde la torre de vigilancia para contrarrestar sublevaciones desde el interior o defenderse ante eventuales ataques de partisanos o realizar el servicio de guardia de reserva para el caso de alguno de estos eventos. Sostiene el tribunal que el peso del actuar individual para el plan común no es relevante para satisfacer la tipicidad de la complicidad, sino que adquiere relevancia solamente para la determinación de la pena, y que, en particular, no es relevante una relación causal, en el sentido de que la contribución del cómplice deba originar la consumación del hecho principal.

d. Que asimismo la resolución con otros procesos seguidos por la justicia de la República Federal Alemana por matanzas en los campos de concentración exclusivamente dedicados al exterminio, la Jurisprudencia había seguido la misma posición que luego fue olvidada. Así es posible observarlo, ya en la **sentencia de la sala especial del Landgericht de 1950 contra Hubert Gomerski y Johann Klier** se dice con claridad ejemplar: “El campo Sobibór fue creado con el solo fin de dar muerte a un gran número de judíos”. La sala sigue: “Todos quienes trabajaban en ese campo —alemanes, ucranianos y judíos— tenían su tarea particular, sea que hayan participado inmediatamente de los homicidios o que hayan apoyado indirectamente las tareas del campo. Todas estas actividades fueron en último término causales para el resultado —la muerte de los judíos—, pues sólo por haber existido este conjunto de actividades fue posible el resultado”. Esta argumentación la mantuvo la sala especial del Landgericht incluso para el

Klier, quien hizo valer irrefutablemente que el solamente había trabajado en la panadería del campo y luego habría dirigido el comando de los zapatos (Schuhkommando), que se dedicaba a recolectar, seleccionar y almacenar los zapatos de los asesinados en las cámaras de gas. La sala especial del Landgericht hizo nuevamente hincapié en que **“todas las personas que trabajaban en el campo de Sobibór eran engranajes de un sistema que tenía por única finalidad matar a judíos. Toda acción que se llevó a cabo en ese campo servía directa o indirectamente a ese fin. Todas esas acciones fueron necesarias para la operación del campo.** De este modo, tanto la actividad del acusado Klier en la panadería como la actividad que tuvo a cargo de los zapatos fueron causales para el resultado”.

e. Que del mismo modo dieciséis años después, en el gran proceso de Sobibór, la sala especial del Landgericht tampoco dudó en clasificar como colaboraciones promotoras del resultado a aquellas que no estaban directamente vinculadas con la operación de exterminio, como por ejemplo el trabajo como tesorero o administrador del campo, o como responsable del abastecimiento de víveres y vestuario del personal del campo. La sentencia dijo sobre este punto: “Allí donde ellos [los acusados] formaban parte de la organización de los campos, [...] todos contribuyeron a hacer posible, por su colaboración funcional, los asesinatos masivos contra los judíos, siendo su causa y promoviéndolos en inmediata cercanía al hecho”. El Tribunal Federal alemán confirmó esa argumentación en cuanto conoció de la revisión de esas sentencias. Particularmente destacable resulta en ese contexto lo dicho respecto de la **sentencia de primera instancia de hechos en el proceso Kulmhof**, que se llevó adelante durante los años 1962 y 1963 ante el Landgericht de Bonn contra 12 acusados. Ante la **alegación por parte de algunos acusados de que se los habría condenado como cómplices mediando un error jurídico**, porque ellos solamente habrían llevado a cabo acciones “que [...] se enmarcaban dentro de las tareas entonces asignadas a la policía de protección [Schutzpolizei]”, y por lo mismo habrían sido “valorativamente neutrales” y no podrían ser valoradas como fundamento de complicidad en un asesinato, el Tribunal Federal Alemán respondió claramente: “Conforme a lo constatado [...] ya por su pertenencia al comando especial que fue creado para el sólo fin de aniquilar a la población judía de Polonia y ciertos otros grupos de personas cuya vida era considerada útil, **los acusados han colaborado en el asesinato de las víctimas.** La naturaleza de las tareas que les correspondió realizar a cada uno en la ejecución de acciones individuales deviene en razón de ello –por lo menos en este contexto– irrelevante”. Tampoco en los procesos posteriores tuvieron éxito las revisiones fundadas en alegaciones

contra la calificación del trabajo en campos de exterminio como complicidad en el asesinato masivo, que se llevó a cabo en esos campos de exterminio.

f. El caso Demjanjuk ha demostrado que el segundo Landgericht de Múnich en ningún caso ha penetrado en nuevo terreno jurídico en lo tocante a las valoraciones jurídicas centrales, sino que ha continuado con un camino que ya había sido trazado. La justicia de la República Federal alemana ha constatado desde siempre que **toda función desempeñada en el funcionamiento de los campos de concentración de Treblinka, Belzec, Sobibór y Chelmno era complicidad en el asesinato masivo**. La declaración principal podía resumirse diciendo que **allí no había actividades neutrales**. Es decir esta valoración fundamental fue confirmada en el proceso contra Demjanjuk. Ella es correcta y resulta de la aplicación de los fundamentos de la complicidad que desde hace tiempo están fijados por la jurisprudencia. Según ellos, se presta una colaboración por medio de cada comportamiento que promueve la comisión del hecho principal objetivamente de cualquier manera. En el caso de formas de comportamiento que, miradas en sí mismas son cotidianas y permitidas, **según la jurisprudencia la situación dependerá del conocimiento que tengan los partícipes: si saben que su actuar promueve la comisión del hecho principal, su acción pierde en todo caso su carácter de acción cotidiana**. Luego el caso Demjanjuk no creó una nueva construcción de la punibilidad a título de complicidad. El proceso se deja entender más bien como una reactivación de principios reconocidos de la complicidad en relación con homicidios masivos en la época nacionalsocialista. El caso llevó la atención a que estos principios fueron pasados por alto en muchos procesos por largo tiempo.

g. Que el segundo artículo versa sobre la **sentencia en el asesinato por medio del servicio en el campo de concentración de Auschwitz**. Sentencia del BGH y comentario de Claus Roxin (Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano. CEDPAL, Editores Kai Ambos John Zuluaga, volumen 2, 2018, pp. 189-209). Se resumen en lo pertinente el análisis de la sentencia de la Tercera Sala Penal del Tribunal Supremo Federal, la que con fecha 20 de septiembre de 2016 decidió por unanimidad rechazar el recurso de revisión solicitado por el acusado (Oskar Gröning) en contra de la sentencia del Tribunal Regional de Luneburgo del 15 de julio de 2015.

h. Que el Tribunal Regional (Landgericht) sentenció al acusado a una pena de cuatro años de prisión en **calidad de cómplice** de asesinato en 300.000 casos, todos los casos legalmente coincidentes. Contra su condena, el acusado promovió recurso de revisión basado en la invocación de la violación al derecho formal y sustantivo. El recurso deviene infructuoso. El sentenciado murió a los 94

años antes de empezar a cumplir la sentencia condenatoria. Los fundamentos son: **a)** Una vez trasladado al campo de concentración de Auschwitz, el acusado fue asignado a un puesto en el área de Administración del dinero de los prisioneros. Entretanto había sido promovido al grado de Sargento Segundo de las SS (SSUnterscharführer) y asignado a la Operación Hungría, de igual manera que en la Operación Reinhard. De tal modo que en el transcurso de la Operación Hungría, el acusado, uniformado y armado con una pistola, desempeñó durante al menos tres días -no mayormente precisables-, las funciones de servicio de rampa en la denominada nueva rampa. En primer lugar, tenía la tarea de custodiar en el campo de concentración de Auschwitz el equipaje allí depositado durante la descarga de los trenes que llegaban a Auschwitz y, de esta manera, evitar el robo. Aunque en Auschwitz el robo por parte de los miembros de la SS estaba a la orden del día, la mayoría de estos hechos no fueron perseguidos ya que los autores cedían subrepticamente una parte del botín, a fin de mantener la moral de las tropas. En la rampa, sin embargo, debía impedirse en todo momento que los equipajes fueran abiertos, inspeccionados y saqueados a la vista de los deportados, para no levantar sospechas y evitar revueltas, que pudieran poner en riesgo el procedimiento ulterior de selección y gaseado. Al mismo tiempo y mediante sus funciones en el servicio de rampa, el acusado formó parte del contexto de intimidación usado para sofocar, ya desde el origen, cualquier idea de resistencia o huida. Además, del servicio de rampa, el acusado estaba encargado, conforme a su función en la sección de administración del dinero de los prisioneros, de la clasificación monetaria, la contabilidad, la administración y el transporte hacia Berlín del dinero de los deportados. Allí, lo entregaba en intervalos irregulares a la Dirección General de Administración Financiera de las SS (SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt) o lo depositaba directamente en una cuenta de las SS en el Reichsbank. Asimismo, incumbía en todo momento a las funciones de servicio del acusado, la supervisión de los deportados y, en caso necesario, el impedir por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga; **b)** Desde su participación en la Operación Reinhard, el acusado conocía todos los detalles de los procedimientos empleados en el campo de concentración de Auschwitz. En particular, él sabía que los judíos deportados en forma masiva a Auschwitz eran masacrados aprovechándose deliberadamente de su calma e indefensión. Asimismo, él era consciente de que con sus actividades apoyaba la maquinaria de muerte que operaba en Auschwitz. Él fue -al menos- condescendiente con tal proceder, para evitar ser transferido a las unidades de las SS que combatían en el frente de batalla.

i. Que el profesor **Roxin** expresa que la afirmación de la Sala Penal según la cual el acusado ha prestado asistencia a todos estos hechos, no resulta objetable por motivos legales. Además, continúa que esto se aplica en primer lugar con relación a las víctimas frente a cuyo arribo en Auschwitz-Birkenau el acusado se encontraba cumpliendo con el servicio de rampa. No exige mayores discusiones el hecho de que, con su accionar, el acusado prestaba asistencia a los miembros de las SS, los que a su vez cometían asesinatos mediante la previa selección en la rampa y la inmediata ejecución a través del rociamiento del Zyklon B en las cámaras de gas. Añade que el acusado prestó asistencia entonces en el sentido del Art. 27 inciso 1 del Código Penal, por un lado –mediante la vigilancia del equipaje-, a conservar la calma de quienes llegaban y, por el otro -como una parte del contexto de intimidación-, a sofocar toda idea de resistencia o fuga. Ahora bien, razona que también resulta punible el acusado por complicidad en el asesinato respecto de las víctimas que arribaron y a las cuales él no prestó el servicio de rampa. En efecto, aunque no pueda aseverarse que con su accionar el acusado haya prestado asistencia física o psicológica directa a los médicos que participaron en la selección o a los miembros de las SS que realizaron la matanza, el Tribunal Regional no obstante tomó acertadamente como punto de partida que el acusado por medio del ejercicio general de su servicio en Auschwitz, ya había prestado asistencia a los dirigentes estatales y a las SS, quienes a principios de 1944 ordenaron la Operación Hungría, la que subsecuentemente desde una posición de liderazgo, implementaron o dejaron implementar (para la autoría mediata en el marco de los aparatos de poder estatales).

j. Que desde esa perspectiva cavila el autor, que **el acusado tuvo participación en esta facilitación de los hechos**. Era parte del aparato de personal que ya estaba cumpliendo funciones al momento de la orden para llevar a cabo la Operación Hungría en Auschwitz. Él estaba vinculado a la organización de los asesinatos masivos, e independientemente de esto, le incumbía supervisar y vigilar la llegada de los deportados a la rampa y evitar por medio de las armas cualquier resistencia o intento de fuga. Finalmente, más allá de esto, también estuvo involucrado en el aprovechamiento de los bienes de las víctimas, lo que hizo que las SS se beneficiaran incluso luego de la muerte de las víctimas. El hecho de que estas funciones fueran ejercidas en el campo de concentración de Auschwitz por miembros de las SS que eran activos allí, era bien conocido por los responsables cuando se ordenó la Operación Hungría y fue de fundamental importancia para su resolución de actuar y emitir las respectivas órdenes y mandatos. El hecho de que ellos no conocieran personalmente al acusado es jurídicamente irrelevante. Bastaba con que ellos sepan que todas las tareas a

desarrollarse para poner en marcha esa mortífera maquinaria, serían cumplidas por subordinados confiables y obedientes, lo que garantizaba una implementación sin obstáculos de la Operación Hungría.

k. Que todo según el contexto general de los fundamentos del veredicto, era también conocido por el acusado, quien lo aprobó -al menos- con condescendencia. Ya estaba plenamente informado de los acontecimientos, poco después de su llegada a Auschwitz. Sin embargo, en su empeño por no ser transferido al frente, se unió a la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que se le impartieron. Él tenía en claro, por lo tanto, que a través de su servicio, en colaboración con otros, lograba asegurar en todo momento las condiciones necesarias para que las autoridades del Estado y de las SS pudieran decidir y ordenar la ejecución de una operación de exterminio en Auschwitz, ya que dependían de la ejecución a nivel local de sus órdenes criminales. Precisa Roxin que desde el punto de vista subjetivo, no se requiere más para tener por acreditada la contribución del acusado en todos los asesinatos que le fueran atribuidos en la sentencia impugnada por la Operación Hungría.

I. Que por ello Claus Roxin considera que la decisión anterior relatada, es correcta y cree que merece la relevancia que se le ha atribuido. Ella deja definitivamente en claro que **los miembros del equipo de un campo de concentración se hicieron culpables por complicidad en el asesinato**, si ellos sabían de los asesinatos cometidos durante su pertenencia al campo y apoyaron la operación del campo dirigida al exterminio a gran escala de vidas humanas.

II. Que el autor recuerda que tampoco la **Sentencia de la Segunda Sala Penal del 20.2.1969** (veinte de febrero de mil novecientos sesenta y nueve), a la que se ha remitido en la revisión del acusado y muchas órdenes de sobreseimiento de años anteriores, ha juzgado esto de un modo distinto. Allí se señala lo siguiente: “Una especificación más detallada de los hechos no era posible, pues las muertes en Auschwitz fueron tan numerosas que en su mayoría no pudieron ser identificadas por sus características específicas, como la persona del difunto o el momento exacto en que ello ocurrió... En ese sentido, si frente a asesinatos en masa uno quisiera colocar exigencias más estrictas respecto a la concretización de las ejecuciones individuales, entonces fracasaría la persecución de crímenes cometidos a escala masiva.”

m. Que precisa Roxin que **no existen causales de exculpación**. En especial, no viene en consideración el estado de necesidad como consecuencia de una orden (Befehlsnotstand). Tampoco el acusado mismo lo hizo valer para él. Tal como se dice en la sentencia de la Tercera Sala, él estaba “informado en su totalidad [sobre el suceso en el campo]. A pesar de ello, con el anhelo de no ser

enviado al frente, él se integró en la organización del campo y ejecutó todas las órdenes que le fueron impartidas.” Esto corresponde al reconocimiento general de que los miembros del campo no fueron obligados a realizar sus actos. Quien se negaba a cooperar, era enviado al frente. A los líderes les interesaba que el funcionamiento de la maquinaria de muerte no fuera impedida por la oposición de algunos. “Hasta hoy no se ha documentado ningún caso en el que un miembro de la unidad militar o policial alemana hubiere sido condenado a muerte, asesinado o por lo menos maltratado, por haberse negado a ejecutar una orden de asesinato.” Con mayor razón no se puede hablar de un error de prohibición exculpante. **Es difícilmente imaginable que quien actúa en un campo de concentración hubiera podido considerar que el asesinato de personas completamente inocentes resultaba conforme al derecho.** Pero incluso de haber sido éste el caso – por ejemplo, debido a la autoría estatal –, una semejante “ceguera jurídica” no habría merecido ninguna disminución de la pena. En el caso que aquí se discute el acusado tampoco invocó un error de prohibición.

ñ. Que trazando un razonamiento de lo anterior para el caso de Chile y en especial en esta causa podemos escrutar lo siguiente:

- i. **Al 11 de septiembre de 1973 en Chile no había Estado de Derecho.** Se había quebrado el orden institucional pues las Fuerzas Armadas y de Orden dieron un Golpe de Estado, derribando al gobierno constitucional que había ascendido al poder.
- ii. Es decir se retrocedió de inmediato 200 años, y al retroceder estos 200 años y romper el freno de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 se retrocedió por lo menos otros 2000 años, volviendo a vivir la sociedad chilena bajo autoridades despóticas y arbitrarias. Situación que en la historia abunda. Ahora bien, el Estado de Derecho al menos desde la Declaración del hombre y del Ciudadano de 1789 y la misma Constitución francesa de 1791 tiene por fin último proteger a la persona, proteger sus derechos, salvaguardar la libertad. Podemos releer los artículos 2 y 16 de la citada declaración. Artículo 2, la finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión; artículo 16, Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.
- iii. En este caso, como está documentado en forma amplia públicamente, durante 17 años de quiebre constitucional (régimen militar, dictadura militar), no hubo separación de poderes (al contrario, hubo concentración); se disolvió el poder más significativo de la representación popular como el congreso; el Poder

Judicial no tuvo la independencia necesaria para salvaguardar los derechos de las personas. Luego en esa perspectiva, la autoridad tenía un doble resguardo de los derechos fundamentales de las personas. Primero, no había Estado de Derecho, en consecuencia el cuidado hacia los derechos y libertades de las personas le exigía un estándar mayor; en segundo lugar, reuniendo el poder político y militar en sus manos, cualquier afectación a los derechos de las persona se debía tener una necesidad, proporcionalidad y mayor fundamentación, pues de otro modo era sospechosa cualquier actuación pues no se estaba bajo un Estado de Derecho.

- iv. **En este caso entonces las personas detenidas y llevadas al centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión**, como puede observarse en las causas citadas por este Ministro en la ponderación de la prueba y en el análisis de las declaraciones indagatorias.

o. En este caso, el homicidio calificado desde el inicio (como indica el mérito del proceso y el Auto Acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**), comenzó con una detención irregular e ilícita, para luego terminar con el homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez. Siendo además esa Comisaria un lugar para detener a los opositores al régimen militar y como se describe en el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**. Las múltiples pruebas, directa e indirecta generales y específicas que se ha detallado y ponderado precedentemente dan cuenta de lo razonado, lo que demuestra que los acusados José Domingo Cádiz Parada, José Dolorindo Fernández Cofré, Nelson Adalberto Almendras Illesca, Marco Antonio Aguirre Guajardo, Joel Erwin Pérez Isla, Cesar Adriazola Azocar y Bernardo Aedo Leiva actuaron en los hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII). Luego se dan todos los elementos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los delitos de lesa humanidad para formularles a los acusados el reproche penal que se ha señalado. Ello sin perjuicio del análisis de las defensas.

C. Estado De Derecho:

a. Estado Autoritario: Un Estado autoritario, es aquel donde **el poder se encuentra concentrado en una persona o grupo de personas**. Hay una estructuración estatal, existe autoridad, pero las leyes no obedecen a órganos que tengan origen democrático y por lo general no hay subordinación ni respeto a ella. (Roberto Ruiz Díaz Labrano: El Estado de Derecho algunos elementos y condicionamientos para su efectiva vigencia, p. 3. Disponible en: www.tprmercosur.org/es/doc). La historia nos muestra demasiados casos de Estados autoritarios. Al hombre contemporáneo le resultan insoportables e indignos esos Estados autoritarios. Del mismo modo, el Estado autoritario- poder arbitrario- es la

antítesis del Estado de Derecho. Las diversas perspectivas políticas que apoyan el Estado de Derecho comparten su aversión hacia el uso arbitrario del poder. En una sociedad abierta y pluralista, que ofrece espacio para hacer competir ideales del bien público, la noción del Estado de Derecho se torna una protección común contra el poder arbitrario. (Oscar Vilhena Vieira (2007): La desigualdad y la subversión del Estado de Derecho. Sur – Revista Internacional de Derechos Humanos. Número 6, Año 4. p.33). En esa línea el concepto de Estado de Derecho **es una respuesta al Estado absolutista**, caracterizado por la ausencia de libertades, la concentración del poder y la irresponsabilidad de los titulares de los órganos del poder. De ahí que la garantía jurídica del Estado de Derecho corresponda al constitucionalismo moderno. (Dante Jaime Haro Reyes: Estado de Derecho, Derechos Humanos y Democracia. www.juridicas.unam.mx. p. 123). Puede sostenerse entonces, que **su búsqueda va dirigida a limitar y restringir el poder del Estado en favor de la libertad de los individuos**. Es decir, permite entender al Estado de Derecho como contraposición al estado de fuerza o de fuerza política. (Pablo Marshall Barberán (2010): El Estado de Derecho como principio y su consagración en la Constitución Política. Revista de Derecho Universidad Católica del Norte sección ensayos, año 17 - N° 2, pp. 185-204).

b. Origen: El Estado de Derecho nace como como un Estado respetuoso de la ley y de las libertades del ciudadano frente al poder despótico del Estado Absolutista. Luego su tarea es el aseguramiento de la libertad y propiedad del ciudadano, su objeto la promoción del bienestar del individuo. Se trata de un orden estatal justo expresado a través de una constitución escrita, el reconocimiento de los derechos del hombre, la separación de poderes y garantizado por leyes producidas y promulgadas conforme a procedimientos debidamente establecidos (Luis Villar Borda (2007): Estado de Derecho y Estado Social de Derecho. Revista de Derecho del Estado N° 20, p. 74). En todo caso, el Estado de Derecho surge como el servidor, rigurosamente controlado, de la sociedad; queda sometido a un sistema cerrado de normas jurídicas o, sencillamente, identificado con ese sistema de normas, así que se convierte en solo norma o procedimiento (Haro, p. 118).

c. Fundamento: El fundamento del Estado de Derecho se encuentra en la doctrina del Derecho Natural Racional. En realidad, la explicación del término no debe entenderse, en su origen, como la sujeción del Estado al Derecho estatal, sino al Derecho Suprapositivo, permanente y universal que emana de la razón. Así, **su fundamento se encuentra en la naturaleza del individuo**: en la libertad y la igualdad de las personas que se reúnen en una comunidad y que se desarrollan en la autonomía moral, la igualdad jurídica y la posibilidad de lograr el

bienestar económico a través de la adquisición de la propiedad y el ejercicio libre de la empresa. Es decir, el Estado de Derecho proyecta así, un criterio de legitimidad para el dominio del Estado, en la garantía de la libertad y la propiedad de los individuos. En Alemania, el argumento del Derecho Natural ha revivido en la forma de un Derecho de rango superior, frente al cual el Derecho estatal tiene que ceder (Marshall, pp. 187-188).

d. Concepto: El Estado de Derecho es aquel Estado en el que autoridades e individuos se rigen por el derecho, y éste incorpora los derechos y las libertades fundamentales, y es aplicado por instituciones imparciales y accesibles que generan certidumbre (Haro, p. 124). Del mismo modo, como expresa Guastini en primer sentido el Estado de Derecho es aquel en el que están garantizados los derechos de libertad de los ciudadanos, en un segundo sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual el poder político está limitado por el derecho, en un tercer sentido, Estado de Derecho es aquel Estado en el cual todo acto de ejercicio del poder político está sujeto al principio de legalidad (Haro, p.123). Resumiendo, para nuestro objetivo el Estado de Derecho alude a un particular diseño institucional que, con el objeto de proteger y garantizar los derechos fundamentales de las personas, intenta guiar, controlar y limitar el ejercicio del poder público a través de normas de carácter general, que conformen un sistema claro y conocido por todos (Haro, p. 126).

e. Elementos: Marshall siguiendo Böckenförde, expresa que las características originales del Estado de Derecho es la siguiente: **a)** el Estado es una creación de la comunidad política y está a su servicio, no es una creación de, ni está encomendado a, ningún orden superior o divino; **b)** los objetivos del Estado quedan restringidos a la garantía de la libertad, la seguridad y la propiedad de los individuos; y **c)** la organización y regulación de la actividad del Estado debe realizarse de acuerdo a principios racionales, incluyendo entre estos los siguientes: el reconocimiento de los derechos básicos de la ciudadanía (libertad, igualdad y propiedad), la independencia de los jueces, la responsabilidad del gobierno, el dominio de la ley, la representación del pueblo y la separación de funciones (Marshall, p.191). En esa línea Benda considera que el Estado de Derecho **involucra:** **a)** seguridad jurídica y justicia; **b)** que la Constitución sea la norma suprema; **c)** la vinculación de los poderes públicos a la ley y al Derecho; **d)** vinculación de los poderes públicos por la primacía y reserva de ley; **e)** división de poderes; **f)** protección de los derechos fundamentales; **g)** tutela judicial; **h)** protección de la confianza jurídica. (Marshall, p.191). Sobre lo anterior Villar Borda (p. 74-81) realiza una buena síntesis de los elementos del Estado de Derecho- principios racionales dirá Böckenförde-. En realidad, en Estado de

Derecho hay una acumulación de ideas de **muchas fuentes y distintas épocas**, así: **a)** sometimiento del poder al derecho; **b)** el gobierno de la razón; **c)** El gobierno de la leyes y no de los hombres; **d)** La Obligación del gobernante de proteger el derecho, la separación del poder, las libertades de los ciudadanos, los derechos del hombre y Estado Constitucional.

f. Chile y el Estado de Derecho: Chile siempre mantuvo una disposición a proteger los derechos fundamentales. La conciencia jurídica ya estaba instalada. Así, se aprecia en los albores de la república, se verifica esto en el Mensaje para la promulgación de la Constitución Política de 1828, que dentro de sus párrafos expresaba, que ha llegado el día solemne de la consolidación de nuestras libertades, cesaron para nosotros los tiempos en que la suerte nos condenada a la ciega obediencia de una autoridad sin límites. Los depositarios de la autoridad se convierten en verdaderos servidores de la causa pública. Del pueblo mismo. Depositarios de su seguridad. Barreras ante las cuales deben detenerse todas las usurpaciones y todas las injusticias. **La Constitución establece la más formidable garantía contra los abusos de toda especie de autoridad, de todo exceso de poder.** La libertad, la igualdad, la facultad de publicar vuestras opiniones, de presentar reclamaciones y quejas a los diferentes órganos de la soberanía nacional, están al abrigo de todo ataque. La constitución es un tesoro que no podemos perder, ni menoscabar, sin degradarnos, ni envilecernos. En esa perspectiva la Constitución de 1925 mantuvo el mismo temple jurídico. En efecto, se presenta como un Estado de Derecho toda vez que al analizar las normas esta Constitución - vigentes al 11 de septiembre de 1973- Había Constitución escrita, **Separación de Poderes, Principio de la legalidad, Principio de garantía de los Derechos Fundamentales, Seguridad jurídica y protección de la confianza y Principio de proporcionalidad.** Lo anterior, de inicio es comprobable por la práctica democrática desde 1932 hasta 1973 en la denominada Cuarta República o bien la República democrática (**Renato Cristi y Pablo Ruiz- Tagle** (2006): La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano. Ediciones LOM. pp. 114- 130). Además de la lectura de la Constitución de 1925 esta consagra, además, **el principio constitucional del Estado de Derecho como un principio normativo.** Así es verificable en sus artículos 1 a 4 que consagra el gobierno republicano y democrático (1) la soberanía reside en la nación (2). Ninguna magistratura, ni reunión de personas puede atribuirse ni aún pretexto de circunstancias extraordinarias otra autoridad o derechos que lo que expresamente le haya conferido por la leyes (4). Del mismo modo, el capítulo III está consagrado a las

garantías Constitucionales, que el capítulo IV está dedicado al Congreso Nacional; el capítulo V al Presidente de la República; el capítulo VII al Poder Judicial.

Por su lado la Constitución de 1980 (con todas sus precariedades, limitaciones e infinitas críticas) con las reformas realizadas desde 1980 en forma incipiente nos anuncia en su artículo 4 que Chile es una República democrática. En su artículo 5 que la soberanía reside en la nación. El capítulo III prescribe De los Derechos y Deberes Constitucionales, el capítulo IV gobierno; el capítulo V Congreso Nacional; capítulo VI Poder Judicial. **Marshall** (pp.199-202) expresa de los artículos 5 a 7 de la carta fundamental se desprenden algunos principios constitucionales que contribuyen a darle forma al Estado de Derecho en la Constitución Política: Esta disposición plantea varias cuestiones interesantes. (i) El enunciado del artículo 5 inciso 2º como consagración del principio de distribución. La afirmación de que **el Estado tiene un deber de respetar los derechos fundamentales** es la afirmación central del Estado de Derecho e implementa de esa manera el principio de distribución entre lo permitido y lo no permitido para el Estado. Por su lado el principio de Organización en supremacía constitucional (art. 6 inc. 1º), legalidad en sentido amplio (arts. 6 inc. 1º y 7 inc. 1º), garantía del orden institucional (art. 6 inc. 1º), fuerza normativa de la Constitución (art. 6 inc. 2º); responsabilidad (art. 6 inc. 3º y 7 inc. 3º), distribución de competencias-separación de poderes- (art. 7 inc. 1º y 2º), legalidad en sentido estricto (art. 7º inc. 1º).

Todas estas ideas sugieren que la idea del Estado de Derecho es la concreción institucional de las ideas de la filosofía política liberal racional. El lugar que tiene la institución de la ley para el Estado de Derecho es central para afirmar la primacía del individuo frente al Estado y va a ser el eje de continuidad sobre el cual el concepto de Estado de Derecho se va a desarrollar. (Marshall, pp. 191-192).

En la actualidad la idea del Estado de Derecho se lo considera **uno de los pilares principales de un régimen democrático** Sería difícil encontrar otro ideal político encomiado por un público tan diverso. (Vilhena, p.30).

35º) Que como se aprecia, complementado e iluminando lo que se ha expresado con anterioridad hay que tener presente que las autoridades que tomaron el Poder tras el 11 de septiembre de 1973 tenían una mayor exigencia de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de todas las personas. En especial, porque si desde ya hay un quiebre constitucional significa que las personas no pueden recurrir en forma normal a las instituciones que pueden resguardar sus derechos, por ello cualquier actuación de la autoridad debe ser con

la mayor exigencia y cuidado respecto de los derechos de las personas, ya que, está actuando sin un mandato constitucional, legal y democrático. En este caso entonces las personas detenidas y llevadas a un centro o lugar de detención estaban en una alta indefensión. El homicidio calificado (como indica el mérito del proceso) de **Marcos Quezada Yáñez** fue al margen de todo derecho. En consecuencia, tanto el mando superior como los subordinados respectivos y grupos especiales para detener a personas por motivos políticos, se encuentran en condiciones como se ha cavilado, de realizarles un **reproche penal** como se ha hecho en esta sentencia. Ello sin perjuicio del estudio de las defensas.

D. En cuanto a la complicidad:

Que como ya se analizó en la causa 114.001 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, 1-2013 del Juzgado de Letras de Pucón y 113.969 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, en cuanto a la complicidad, que se ha invocado en el auto acusatorio de fojas 2.671 y siguientes. Tanto la doctrina Española como la Chilena, y tomando en cuenta la consagración legal que tiene la figura de la complicidad, esta tiene un carácter residual en el ámbito de la aplicabilidad. Es decir es una contribución a la realización del delito con actos anteriores o simultáneos a la misma, que no pueden en ningún caso ser considerados como de autoría. La complicidad según definición del artículo 16 del Código Penal, tiene una caracterización negativa; es decir, es cómplice aquel cuya contribución al delito no pueda calificarse, ni de autoría, ni de inducción, ni de cooperación necesaria. Francisco Muñoz Conde y otra (Derecho Penal, Parte General. Quinta edición. Editorial Tirant Lo Blanch, año 2002, páginas 357 a 413), expresa en síntesis que la conducta habrá de tener alguna eficacia causal, aunque sea mínima en el comportamiento del autor y reunir además una cierta peligrosidad. Precisa dicho autor que la conducta del cómplice ha de ser peligrosa de manera que, desde una perspectiva ex -ante represente un incremento relevante de las posibilidades de éxito del autor y con ello la de puesta en peligro o lesión del bien jurídico. Ello ocurrirá cuando, en el momento previo a la acción del cómplice, sea previsible que, con su aportación, la comisión del delito sea más rápida, más segura o más fácil o el resultado lesivo más intenso que sin ella. Se distingue entonces: 1.-Naturaleza de la cooperación. Dolosa, pero basta la idea que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. 2.-Momento de la cooperación. Actos anteriores o simultáneos. 3.- Aprovechamiento de la cooperación por parte del autor. Que se haya servido efectivamente de ella. En el caso de autos, como se desprende del análisis de las declaraciones indagatorias analizadas precedentemente, es nítido

que la complicidad es suficiente para que el auxilio facilite o haga más expedita la ejecución. Incluso el simple auxilio intelectual o moral es suficiente. De todo el mérito del proceso, como ya se ha ponderado latamente, no cabe duda que los encausados como cómplices reúnen esta situación, la que fue aprovechada por los autores, toda vez que la finalidad de la complicidad es que el autor alcance su designio criminal.-

E. En cuanto a la alevosía:

A. Que en cuanto a las alegaciones de las defensas, en relación las circunstancias calificadoras del delito de homicidio, esto es, alevosía, sobre esta materia el Tribunal ya se ha pronunciado acogiendo la alevosía (causas roles 27.525, caso Cayul Tranamil, rol 27.526, caso Palma Arévalo y Saravia Fritz y rol 45.345, caso Tralcal) en fallos que se encuentran ejecutoriados. En estos autos sí concurre la calificante primera del artículo 391 del Código Penal, esto es, la alevosía.

B. En efecto, según el profesor Mario Garrido Montt (Ibídem. Página 154 y siguientes) es claro que actuar a traición corresponde a la maquinación tendiente a engañar o aparentar ante la víctima una situación diversa a la verdadera, pues la cautela importa reserva, astucia o maña para engañar (no es el caso de autos). Asimismo, importa aprovecharse de la confianza o lealtad que la víctima ha depositado en el victimario. Es decir, corresponde a simulación, doblez. Por otro lado obrar sobreseguro, que es la figura que concurre en esta causa, significa crear o aprovechar condiciones fácticas que permiten al agente evitar todo riesgo de su persona, como en cuanto a la realización del acto al momento de la comisión del hecho. Ahora bien, es preciso indicar que en el actuar sobreseguro, puede ser que la situación de seguridad sea absolutamente indiferente para el hechor o deberse a mera casualidad, sin que las condiciones en que obre el hechor – haya o no sido provocadas por él – sean determinantes de la perpetración del homicidio, de modo que si no hubieran concurrido, el autor a su vez se hubiera abstenido de obrar. En este caso, a diferencia de lo que expone las defensas y como está probado con el mérito del proceso, funcionarios de Carabineros detuvieron a la víctima Marcos Quezada Yáñez, lo trasladaron hasta la Comisaría de Curacautín para luego causarle la muerte. En consecuencia, si no se hubieran reunido estas condiciones que es obrar sobreseguro y atendido además el contexto de la época, claramente no se hubiera atentado contra la vida de Marcos Quezada Yáñez.

F.- Reflexiones sobre los elementos probatorios.-

A. En conformidad al mérito del proceso, a la relación y valoración de los medios probatorios que se ha hecho con anterioridad, es posible deducir lo que a continuación se expone:

a.1. El auto acusatorio de fs. 2.671 del 30 de diciembre de 2019, realiza una relación de los hechos precisa y detallada, de lo cual se lee en sus letras A-G. En este auto acusatorio y lo mismo en el establecimiento de los hechos de esta sentencia se anota lugar de los hechos, fecha, hora, aprehensores de Marcos Quezada Yáñez. Lugar donde fue conducido luego de la detención, esto es la Comisaría de Curacautín, la interrogación que se le hizo a Marcos Quezada Yáñez en la Comisaria. Que asimismo con el occiso se trasladaron hasta un determinado lugar. Que en la letra B del establecimiento de los hechos, tanto en el auto acusatorio como en esta sentencia parte final se precisa que Marcos Quezada Yáñez posteriormente fue conducido hasta el recinto policial entregándose al cuerpo de guardia, siendo interrogado nuevamente.-

a.2.- Que ese mismo día 24 de junio, como se señala en la letra C, tanto en el auto acusatorio como en esta sentencia, los Carabineros José Fernández Cofré, Claudio Contreras Valencia y Erick Vásquez Ordenes como comisión civil encargados de la comisión de alcoholes, procedieron a la detención de dos personas, esto es José Lagos y Juan Maldonado Pacheco, quienes fueron conducidas a la Comisión de alcoholes entre las 16:20 y 17:40 horas respectivamente. Según da cuenta el libro de novedades de ese cuartel.-

a.3.- Que como es posible aquilatar todas las declaraciones de los Carabineros tanto los aprehensores como los que interrogaron a la víctima Marcos Quezada Yáñez dan cuenta que no presentaba lesiones ni contusiones visibles y que este tampoco se quejó de ningún dolor en sus manos. Lo que es ratificado además por la propia institución de Carabineros, quien en fs. 140 y siguientes (causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar de Valdivia) deja constancia que Marcos Quezada Yáñez no tenía lesiones visibles.-

B.- En relación a las alegaciones que plantean las defensas respecto al auto acusatorio van en varios sentidos:

b.1. Que las lesiones que tenía en las manos el occiso Quezada Yáñez se las realizó al momento de efectuar el robo, ya sea en el kiosco, panadería u otra acción. En este primer punto las defensas en modo alguno han presentado alguna prueba que logre derribar lo señalado en el auto acusatorio de fs. 2.671 y siguientes aludido ni los hechos precedentemente establecidos en esta sentencia. Los Carabineros aprehensores e interrogadores, personas que estuvieron con el occiso Marcos Quezada Yáñez, no observaron ninguna lesión en las manos, ni

que este se hubiera quejado de algún dolor. Como se ha reiterado a través de esta sentencia, es un hecho acreditado que al ingresar a la Comisaria de Curacautín, Marcos Quezada Yáñez, no tenía ninguna lesión en sus manos. Ahora bien desde este punto de vista se refuta cualquier alegación o afirmación que Marcos Quezada Yáñez se hubiera causado las lesiones en sus manos, al entrar al kiosco o panadería, tomando en consideración al propio dueño del kiosco, que expresó a fs. 147 *“es difícil le haya dado la corriente con los cables por estar forrados.”* En la misma línea anterior y a diferencia de lo que arguyen las defensas la doctora Nubia Riquelme a fs. 1.870 y siguientes expresa que: *“Si dichas lesiones debieron haberse constatado al momento del registro policial a una persona”*. No habla de ninguna forma de análisis específicos de torturas, olvidando la defensa lo que dijo el dueño del Kiosco Roberto Ruiz Aguilar en el sentido de que los cables estaban reforzados, y a esto agregarle lo que precedentemente se ha ponderado, es decir que no existió ningún funcionario en la investigación interna de Carabineros de Chile, que mencionara que el occiso tuviera lesiones en sus manos. En esa línea la pregunta que cabe realizar es ¿Cómo se causaron esas lesiones una vez ingresado a la Comisaría Marcos Quezada Yáñez? En este punto tanto el médico Wolfgang Reuter como la doctora Nubia Riquelme a fs. 1870, especialistas en la materia indican que es acción de una corriente eléctrica. En consecuencia no es efectivo en conformidad al mérito del proceso y ponderación de las pruebas, que las defensas hayan acreditado que el occiso Marcos Quezada Yáñez ingresó con lesiones en las manos a la Comisaria y menos que esas lesiones fueron por acción de corriente eléctrica se efectuaron en el kiosco, según denuncia efectuada por don Ruiz Aguilar, haciendo presente además que la investigación, en esa época no se dirigió al supuesto robo del kiosco, sino que estuvieran dirigidas al supuesto robo en la panadería. (Sobre lo expuesto por el perito German Tapia el tribunal se hará cargo de eso con posterioridad.)

b.2. Que el testigo Juan Maldonado Pacheco estaba en condiciones de ebriedad por lo que no es posible que haya observado lo relatado. Ahora bien sobre las condiciones en que se encontraba Juan Maldonado Pacheco, tampoco las defensas han logrado acreditar que este estuviera en una condición tal, que no pudiera hacer uso de sus sentidos, por lo que en este punto el tribunal estará a la aquilatación de las pruebas antes detalladas. Un punto importante es lo siguiente, vamos a suponer que fueran atendibles las razones de las defensas, en cuanto Marcos Quezada Yáñez habría muerto por un acto suicida de ahorcamiento. Sobre esta materia están los siguientes elementos que refutan esas afirmaciones de las defensas, en efecto:

i) En primer lugar están las declaraciones del Mayor Mauricio Catalán quién expresa que los Carabineros encargados de los calabozos no cumplieron con dicha labor de visitas periódicas ni tampoco anotaron en los libros cuales eran las observaciones de esas rondas periódicas, por lo que todos los dichos de aquellos Carabineros que se encontraban en la Comisaria en ese periodo, no tienen garantizada su argumentación, están solo sus dichos y en contra de ellos están los dichos del Mayor Catalán, el informe de Carabineros y la sanción aplicada a Cádiz Parada.

ii) Los dichos del testigo Maldonado sino hubiera estado en condiciones de relatar algo, quizás habría sido del siguiente tenor: “escuche unos ruidos, vi una sombra, apareció algún Carabinero”. Lo cierto es que por el detalle de sus declaraciones no resulta posible que una persona que eventualmente no se encontrará con todos sus sentidos normales pudiera relatar o describir lo observado. Y lo que observo fue: *“sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbulla, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflama, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos”*. Nos vamos a detener aquí, porque se podría pensar que el testigo Maldonado Pacheco está confundido en cuanto a lo que observó, pudiendo ser cuando se constituyó el Mayor de Carabineros, el Juez del crimen de la época Oscar Viñuela y el fotógrafo Pepe Rey. Observando las pruebas y razonamientos realizados, esto no resulta posible porque primero él siente gritos de dolor y luego no que sacan a una persona del calabozo, sino que viene una persona desmayada con carabineros hacia el calabozo. En consecuencia hay que descartar que el testigo Maldonado Pacheco, no se encontrara con sus sentidos vigentes y normales al momento de los hechos. Un punto importante es que las defensas pudieron haberlo hecho, no han dado ninguna razón seria y de peso, del porque debemos desechar el testimonio del testigo Juan Maldonado Pacheco y tampoco han acompañado una prueba que pueda refutar sus dichos y credibilidad.

iii) En relación al testigo Maldonado Pacheco, no objetado de ninguna forma por las defensas para que este tribunal lo deseche, quien se ha mantenido desde el inicio de su relato, ha insistido que los sucesos se dieron de esta forma:

a) Escucho unos gritos de dolor; b) observan que vienen carabineros con una persona desmayada en un carrito; c) que ingresan al calabozo, esto es importante porque la inspección del juez del crimen de la época, don Oscar Viñuela indica que el calabozo, era oscuro y había que alumbrarlo; d) efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar; y e) ve que salen los carabineros. Es dable agregar que se le hizo un examen de facultades mentales al testigo Maldonado, por si de alguna manera estuviera fabulando o inventando una historia, y lo cierto es que ese informe pericial resulto normal, de acorde a lo indicado a fs. 2.046 y siguientes.-

iv) En otro orden de ideas aún si la persona de Marcos Quezada Yáñez se hubiera causado las lesiones al tocar un cable eléctrico no es posible entender como una persona que ya estaba desmayada, que venía en una camilla o carrito pueda en el calabozo realizar una maniobra de ahorcamiento. Esta maniobra de ahorcamiento resulta muy difícil de realizar por varias razones: el calabozo como lo han expresado los Carabineros y el propio Juez Viñuela, no tenía luz, era oscuro, la tarima era difícil de colocar, realizar el lazo por la viga también era un acto complejo y de mucho equilibrio, tanto es así que cuando tuvo que bajarse y utilizar la tarima el Carabinero Fernández en su declaración de fs. 1896 a 1898 (Tomo VI) detalla: *“Se subió a la tarima para bajar el cuerpo, sin embargo se cayó sobre el Comisario. Como no puedo la primera vez, el Comisario lo sujeto, para poder con sus manos desatar el nudo de la viga, y bajar el cuerpo, el cual tendieron en el patio para revisarlo.”* Anexando a sus dichos que no fue una acción ruidosa.

b.3. Que existen diferentes informes periciales que rebaten lo señalado por el médico Reuter. Ahora bien, el Tribunal en conformidad al artículo 472 del Código de Procedimiento Penal: *“El dictamen de dos peritos perfectamente acordes, que afirmen con seguridad la existencia de un hecho que han observado o deducido con arreglo a los principios de la ciencia, arte u oficio que profesan, **podrá** ser considerado como prueba suficiente de la existencia de aquel hecho, si dicho dictamen no estuviere contradicho por el de otro u otros peritos.”*. Tal como indica el artículo 472 del código citado, el único informe pericial válido en conformidad al Código de Procedimiento Penal respecto de la **autopsia** es el del doctor Wolfgang Reuter, es decir no hay dos informes periciales idénticos, con la misma descripción y objetivos respecto de la autopsia, luego a diferencia de lo que exponen las defensas no se puede equiparar ni sumar otros informes diferentes para calzar con la hipótesis del artículo 472, el informe del Médico legista de Wolfgang Reuter, porque no hubo

otra autopsia sobre la materia. Cabe recordar lo que describe los artículos 221 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. En especial el artículo 237 del mismo cuerpo normativo que sostiene: *“El informe pericial se presentará por escrito y contendrá: 1° La descripción de la persona o cosa que sea objeto de él, del estado y del modo en que se hallare; 2° La relación circunstanciada de todas las operaciones practicadas y de su resultado; y 3° Las conclusiones que, en vista de tales datos, formulen los peritos conforme a los principios o reglas de su ciencia, arte u oficio. Si las circunstancias lo exigieren, y sin perjuicio del informe definitivo, el juez podrá pedir a los peritos un preinforme provisorio, del que se dejará constancia en autos en la forma de una declaración”*. En consecuencia ninguno de los otros peritos mencionados en esta causa, tuvo de primera mano a su vista, al occiso Marcos Quezada Yáñez, por lo que no es efectivo lo que plantean las defensas. Ello sin perjuicio de hacer la ponderación correspondiente de dichos informes periciales, como además se ha hecho en esta sentencia.-

b.4 El informe pericial documental de fs. 1.539 a 1.549 (Tomo V), en su punto N°15 blasona: *“Por lo anterior y porque no se habría realizado la constatación de lesiones en el afectado, no puede estimarse el estado de conciencia de Marcos Quezada Yáñez al momento de ser detenido por Carabineros ni al momento de ser ingresado al calabozo de la unidad”*; en tanto el punto N° VII 2 explaya: *“Debido a la escasa información disponible en el protocolo de autopsia no puede descartarse que el cuerpo del afectado haya presentado otras lesiones que no fueron descubiertas en el procedimiento, **así como tampoco se puede confirmar ni descartar** que las lesiones descritas en ambas manos corresponden a la aplicación de corriente eléctrica”* Esta metapericia no puede equipararse con el informe de autopsia de Wolfgang Reuter que tuvo a la vista al occiso. De la misma forma tal como se indica en el auto acusatorio por muy detallado en sus reflexiones, este informe del perito German Tapia Coppa, por un asunto científico y material no nos va a indicar cuál fue la intervención de terceros. Como se desprende de su informe, la muerte de Quezada Yáñez es compatible a una muerte violenta de tipo suicida, este informe del perito y también puede agregarse de otros peritos, nada van a expresar de la dinámica como Marcos Quezada Yáñez, logra colgarse de una viga en los calabozos de la Comisaria de Curacautin. Podemos tener muchos informes y pericias, pero respecto de la muerte, lo que se describe en el auto acusatorio es que Carabineros, en la letra C y en los hechos descritos en esta sentencia que Maldonado Pacheco señala: *“Descarga, sintió los gritos de dolor que provenían de una dependencia que estaba por el frente del calabozo, donde él estaba. Motivado por los gritos, miro por la ventana, apreciando que tres Carabineros en un carrito*

traían a una persona, que a lo menos estaba desmayada, evidencia que uno de los funcionarios policiales era Fernández. Barbullá, pudo sentir que en el calabozo del lado trabajaban con madera los Carabineros, efectuando golpes con algo contundente, como un martillo o combo, el carrito no lo pudieron ingresar, quedo afuera. Continúa, en ese calabozo no había nadie, solo ingresaron a la persona que traían en el carrito. Soflana, entre los gritos que escuchó y el momento en que trajeron a la persona en carrito, pasaron alrededor de 15 minutos.” Del mismo cabe hacer que **en este informe pericial se hacen apreciaciones no comprobadas en el proceso**, según se ha razonado en esta sentencia, en cuanto no puede indicarse que Marcos Quezada Yáñez ingresó al calabozo, ello porque en los libros de carabineros nada consta. Tanto es así que el Carabinero Cádiz fue sancionado por la institución por no tener algún carabinero que cumpliera las funciones de vigilante de calabozo.

b.5 Respecto a la ampliación del informe pericial documental del perito German Tapia Coppa a fs. 1.599 y siguientes (Tomo V) el Tribunal reitera lo anterior, el perito con todos los antecedentes de la causa, nada dice respecto al testimonio de Maldonado, por lo que todas las conclusiones y afirmaciones respecto a la muerte violenta suicida caen porque una persona desmayada con lesiones en las manos, en un calabozo oscuro, con una tarima difícil de colocar, con una viga apegada al cielo de la habitación, no resulta posible que por sí solo realice un acto suicida, y en modo alguno se ha descartado que las lesiones sean por corriente eléctrica.-

b.6 A mayor ahondamiento señalar que lo aquilatado por el perito German Tapia se puede refutar con lo que dijo el legista Reuter, **que incluso una segunda pericia no puede ser tan eficiente como la primera**. Es decir el perito German Tapia no ha tenido el occiso frente a sus ojos para realizar la pericia, y eso le resta valor a lo que puede apreciar. En segundo lugar lo mismo que el doctor Reuter, el método científico no puede ir más allá, lo que va a determinar si fue ahorcamiento o estrangulamiento, eso no resuelve el problema que se ha investigado y se ha ponderado en esta sentencia, que es si es posible que Quezada Yáñez en las condiciones materiales y de salud, que se ha logrado demostrar, haya sido posible que realizara un acto suicida de ahorcamiento o estrangulamiento. Lo cierto es que del mérito del proceso, la realidad material nos indica que ello es imposible.

C. Que en dichos del propio encartado César Adriazola describe a la víctima Marcos Quezada Yáñez a fs. 652: *“Justifica, a ese joven lo conocía, porque Curacautín era un pueblo chico y todos se conocían. Era una persona sana”*.-

D. Reiterar que el primer examen es valioso, libre, espontaneo y sin presión alguna, en el cual determinó las lesiones en sus manos, producto de alguna acción de corriente eléctrica y marcas equimóticas propias de un estrangulamiento. En las declaraciones posteriores el médico legista Wolfgang Reuter de fs. **173 a 174 (Tomo I); 235 a 236 (Tomo I); 237 a 238 (Tomo I) y de fs. 308 a 309(Tomo I)**, viene a ratificar la primera impresión que siempre hubo en sus conclusiones la idea de corriente eléctrica, y hay un margen de probabilidades ya sea para el ahorcamiento o estrangulamiento, como se indicará a continuación. Este médico legista por un asunto material y científico no puede indicarnos, pues no le corresponde, como fue la dinámica de los hechos. La autopsia no nos dice nada, porque es parte de la investigación y sentencia, empero sí, nos ilumina de las conclusiones científicas, donde hubo sin duda en las manos del occiso Marcos Quezada Yáñez una acción de corriente eléctrica. De la misma forma hay un margen de probabilidades, que finalmente la persona fallece por estrangulamiento o ahorcamiento, pero la investigación realizada, ha tendido a esclarecer cómo se realiza esa dinámica, para que una persona en las condiciones de Marcos Quezada Yáñez pueda haber realizado ese lazo y colgarse en ese calabozo oscuro.-

E. Esta ausencia de lesiones visibles la ratifica el carabinero Fideromo Vásquez López que a fs. 125 refiere: *“El detenido no tenía lesiones corporales visibles ni indicios de haber sido maltratado o castigado”*. En el mismo sentido lo indica en el parte policial de fs. 46 (Tomo I).-

F.- Desde el punto de vista de dinámica de los hechos material y científico no resulta posible que una persona en esas condiciones desmayada, con lesiones en las manos, en un calabozo oscuro, hubiera realizado un lazo con un sweater amarrarla a una viga y luego colgarse. Agregando que el juez de la época, don Oscar Viñuela, duda que haya habido alguna tarima. Incluso en dichos del testigo Maldonado arguye: *“no había banca para sentarse, ni cama o algo similar para acostarse, si querían dormir, estaba el piso, que como dijo era de madera”*.

G.- De fs. 1870 y siguientes la doctora Nubia Riquelme Zornow emite un informe respecto a las lesiones presentadas en las manos del occiso Marcos Quezada Yáñez y en sus conclusiones refiere: *“ La suscrita desconoce el manual de procedimientos de una revisión policial de rutina pero, considerando la descripción macroscópica que se hace en los antecedentes que se adjuntan, en relación a ubicación y longitud de dichas lesiones, (hago presente no se informa el ancho de estas ni hay fotografías) las lesiones serían las que se dibujaron y se grafican en las siguientes fotografías.”* Y luego añade: *“Si dichas lesiones fueron vistas al momento del registro policial, por mínimas que estas sean, deben ser*

consignadas, ojalá fotografiadas.” Cabe hacer presente que la Doctora Nubia Riquelme, en momento alguno hace un estudio de si aquellas lesiones corresponden a actos de tortura o no.

H. Respecto al informe de fs. 1.693 y siguientes de la Policía de Investigaciones que describe las formas de ahorcamiento como estaba colgado el occiso Quezada Yáñez en el calabozo, ratifica lo que por primera vez indico el médico legista Wolfgang Reuter en el sentido de que en las manos tenían lesiones. Del mismo se desprende que Marcos Quezada Yáñez se encontraba vivo al momento del ahorcamiento, es decir previo a su fallecimiento sufrió quemaduras de acuerdo al punto N° 3 de dicho informe, el cual sostiene: “ *El occiso, previo a su fallecimiento, sufrió quemaduras del tipo eléctricas en dedo pulgar e índice, de ambas manos.*”

I.- Por tanto las quemaduras necesariamente fueron provocadas por un tercero ya que el occiso se encontraba en la Comisaría, si bien la conclusión dice que se trataría de un ahorcamiento de tipo suicida, lo que mantiene la línea de los anteriores informes, lo cierto es que nada aporta en este caso, a la investigación de la causa, puesto que existe un testigo privilegiado, a saber Maldonado Pacheco, de quien ya se reflexionó anteriormente. En consecuencia tanto esta explicación como las anteriores de otros informes son derrotados porque se centran en el ahorcamiento y el punto esencial no es el acto de ahorcamiento, sino que, si una persona desmayada sumándole que había sido objeto, como explica este informe, de acción de terceros por quemaduras, ya que estaba en la Comisaria, no es posible material ni científicamente que hubiera realizado un acto suicida de ahorcamiento por sí mismo.-

J. Que el informe pericial de análisis rolante de fs. 243 de la causa rol 119-89 del IV Juzgado Militar, en relación a este informe hay que tener presente que el informe es de fecha 9 de septiembre de 1989, fecha a la cual no había declarado a la justicia ordinaria el testigo Maldonado Pacheco respecto a cómo ocurrió la muerte de Marcos Quezada Yáñez. En segundo lugar no es un informe de autopsia, es un mal llamado “peritaje de análisis”, es decir un estudio documental, no un análisis del occiso Marcos Quezada Yáñez. El informe como se ha reiterado por este Ministro en relación a otros profesionales, se va a centrar en la situación del ahorcamiento y lo importante es que esta investigación ha centrado principalmente su análisis, no en el ahorcamiento propiamente tal, sino en la colaboración de terceros y como el occiso pudo haber realizado ese acto. Por lo que este informe respecto a la participación de terceros, desde un punto de vista científico y del análisis de los hechos, muy poco puede aportar. También en el punto n°1.1 realiza apreciaciones profesionales que no corresponden de un

médico legista a otro como es: *“que es un informe de baja calidad técnica”*, eso le quita validez a un informe de análisis que no es autopsia. En cuanto al estudio de las quemaduras eléctricas realiza una apreciación muy general y no muy detallado, a diferencia de la profesional Nubia Riquelme. Incluso el informe de análisis tiene falencias como el punto 1.4 cuando dice: *“en relación al sitio del suceso, son pocos los antecedentes que se tienen del mismo, lo que no permite emitir una opinión más precisa al respecto”*. Respecto al punto N° 1.3 que refiere: *“la causa de muerte enunciada en dicho informe surge como emitida a priori y con escaso fundamento científico y médico legal”*, es una apreciación general. En relación al punto N° 2.6 sobre lo difícil de realizar esa actuación de ahorcamiento, indica lo precario del equilibrio de la tarima. En sus conclusiones, específicamente en el punto N° 2.2 “el informe de análisis” hace apreciaciones generales carentes de todo valor científico, cuando indica: *“el autopsiador mal interpreto los hallazgos y elaboro una causal de muerte carente de todo fundamento”*, se debe reflexionar en este punto que como se ha manifestado precedentemente el occiso ingresó a la comisaria sin lesiones visibles en las manos. Entonces desde un punto de vista científico, racional y de argumentación no resulta posible que un perito que no estuvo con el occiso ni práctico la autopsia haga este tipo de reflexiones, ni menos teniendo las propias declaraciones de los carabineros, a esa fecha, nada señale sobre cómo se le ocasionaron las lesiones.-

K. El informe pericial fs. 2.596 y siguientes, el Tribunal mantiene el razonamiento y ponderación que ha dado para los otros informes según se detalla en forma precedente. Así podemos reflexionar lo siguiente:

K.i. Este informe pericial nos va a informar en forma lo más científica posible que la muerte de Marcos Quezada Yáñez **“se sugiere”** como un ahorcamiento y en términos médicos legales habría sido una muerte violenta en custodia. Que el fallecimiento del occiso Marcos Quezada Yáñez corresponde a un ahorcamiento.

K.ii. Al igual que en los últimos informes tanto de la Policía de Investigaciones como del Servicio Médico Legal el occiso Marcos Quezada Yáñez tenía lesiones en las manos y que estas lesiones de acuerdo a este informe serían del tipo pinza manual (alambres) o las determinadas lesiones espejos. Lo que confirma desde el inicio con la autopsia de Wolfgang Reuter que el occiso tenía efectivamente lesiones en las manos.

K.iii No resulta en este informe y en los otros, un rigor científico en la explicación de la acción de corriente eléctrica, ello porque la denuncia del robo del kiosco al señor Ruiz Aguilar no fue lo que se investigó, Carabineros lo que investigo fue la denuncia a la panadería de la señora María Angélica Augsburguer

Estay. Luego a partir de suposiciones y comentarios generales de los Carabineros, respecto a los cables eléctricos, el informe hace una afirmación que no se adecua al mérito del proceso ni al rigor científico. Otro aspecto que también no se adecua al método científico en este informe y en los demás analizados, es la afirmación de que el occiso Marcos Quezada Yáñez no obstante las lesiones en las manos, no tendría inconveniente de haber realizado la actuación para el ahorcamiento. ¿Cómo sabemos eso, si estos informes no vieron directamente las lesiones? No pudieron, porque no estaba materialmente para consultarle a Marcos Quezada Yáñez sobre las lesiones y no lo sabemos, porque no hay ningún método científico para indicar que las lesiones causadas en sus manos le impedían o no maniobrar o manipular alguna prenda y hacer un nudo. Todo lo que puedan informar los informes son intuiciones a partir de otras intuiciones que NO da el dueño del Kiosco, sino carabineros. Incluso habría que preguntarse ¿si este informe y los demás no tuvieran el relato del presunto robo al kiosco, cómo habrían concluido que tipo de lesiones habrían sido? A criterio de este Ministro hay una predisposición para engarzar las lesiones en las manos de Marcos Quezada Yáñez con el robo del Kiosco. Todo esto le resta valor científico al informe en estas apreciaciones

M. En consecuencia el Tribunal pondera en su mérito y en conformidad a la ley este informe y los demás informes antes analizados, en cuanto lo único que permiten concluir es que el occiso Marcos Quezada Yáñez estaba vivo y tenía lesiones en las manos antes de la maniobra de ahorcamiento y que su muerte finalmente se produjo por un ahorcamiento, pero no un ahorcamiento de tipo suicida, eso es lo que se puede concluir.

F. ANÁLISIS DE LAS DEFENSAS ESPECÍFICAS

Respecto a los acusados CÉSAR ADRIAZOLA AZÓCAR, NELSON ALMENDRAS ILLESCA Y JOSÉ FERNÁNDEZ COFRÉ.

35 °) Que a **fs. 3287 a fs. 3297 (Tomo IX)**, la abogada María Graciela Carrillo Fuentes, en representación de **César Adriazola Azócar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré**, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a las declaraciones indagatorias de los acusados **César Adriazola Azócar, José Fernández Cofré**, y todos los fundamentos pertinentes que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo. A excepción del acusado **Nelson Almendras Illesca**, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa no interpuso excepciones de previo y especial pronunciamiento.

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Solicitud de absolución. En conformidad al mérito del proceso y de las pruebas antes ponderadas y relacionadas no es posible dar lugar a la absolución, respecto de José Fernández Cofre y Cesar Adriazola Azocar- salvo respecto a Nelson Almendras Illesca según se dirá- por lo antes ya analizado y en especial porque de la lectura del auto acusatorio de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII) podemos aseverar que:

1.- Para derribar el auto acusatorio se debe hacer un estudio de la prueba total y no parcial. No es posible dar lugar a la petición de absolución por cuanto en conformidad al mérito del proceso, las pruebas detalladas y ponderadas en su integralidad, no hay fundamento alguno que permita llegar a la convicción de absolución. Ahora bien, la defensa respecto del testigo Juan Maldonado Pacheco solo realiza afirmaciones especulativas de carácter general, pudiendo haberlo hecho en conformidad a la ley, no tacho a este testigo ni realiza ninguna argumentación, teoría alternativa o paralela, para que el Tribunal en conformidad a la ley y al mérito del proceso, pueda desechar a este testigo.

2.- Es dable agregar que de acuerdo a los dichos del testigo Juan Maldonado Pacheco, eran varios Carabineros que actuaron en los hechos investigados, pero dicha actuación no pudo ser de propia iniciativa, sino de un superior y en este caso quien se encontraba era el Teniente César Adriazola Azocar en la Comisaría desde las 17:30 horas.-

3.- Que en relación al libro de novedades de fs. 143 y siguientes solo es posible observar apreciaciones generales.

4.- Sobre la acusación el tribunal se remite a lo establecido en esta sentencia y a los hechos descritos en el auto acusatorio de fs. 2671 y siguientes, la Abogada nuevamente vuelve a incurrir en apreciaciones de carácter general.

5.- En cuanto a la letra F) del auto acusatorio el Tribunal estará a lo ampliamente aquilatado y relacionado respecto a los informes de los diferentes profesionales, a las conclusiones y a las lesiones causadas en el occiso Marcos Quezada Yáñez, que en definitiva esos informes en especial el del Doctor German Tapia Coppa nada nos aportan respecto a la colaboración de terceros en la muerte de Marcos Quezada Yáñez, lo que hacen esos informes es describir

técnica y científicamente un ahorcamiento, pero no la participación de terceros en ese acto.

6.- El punto central que se debe analizar si la declaración de Juan Maldonado Pacheco permite establecer la participación de terceros y lo cierto es que como se ha explicado, por la hora detención de Juan Maldonado Pacheco, los detalles de su declaración, por la luz que había en el calabozo y lo complejo y difícil que resulta realizar el ahorcamiento en ese lugar oscuro y teniendo en cuenta además que Juan Maldonado Pacheco vio a una persona desmayada e inconsciente ingresar al calabozo. En consecuencia todos los informes periciales y “análisis” describen lo que es un ahorcamiento y eso es parte del proceso, pero lo que señala el auto acusatorio de fs. 2.671 y siguientes en la letra G) es que en las circunstancias en que fue observado- el occiso tenía lesiones producto de uso de corriente eléctrica - por el testigo Juan Maldonado Pacheco no hacia posible que él por sí solo realizará el acto suicida del ahorcamiento. Cabe hacer presente además que el propio acusado Adriazola en sus dichos lo describe como una persona sana, de la misma forma la ficha clínica de Marcos Quezada Yáñez nos expresa que no tuvo ni se encontraba en ningún tratamiento por algún trastorno mental. Además no existe en autos ni la defensa aportó algún antecedente que Marcos Quezada Yáñez estuviera en un tratamiento psiquiátrico.

7.- Tal como se aquilató anteriormente se puntualiza a la defensa que hubo una sanción administrativa para el señor Cádiz por no tener un vigilante de calabozo, por lo que todo lo expresado por los imputados, respecto a lo sucedido una vez que Quezada Yáñez llegó a la Comisaría no consta en ningún libro.

8.- En relación a la alevosía alegada por la defensa el Tribunal estará a lo antes razonado en las consideraciones generales, haciendo presente que sin duda el occiso Marcos Quezada Yáñez se encontraba en total indefensión antes de su muerte y los imputados actuaron sobreseguero.

9.- En relación al libro de novedades que relata la defensa, solo existe la anotación de Hormazabal.-

10.- En relación a la detención de Juan Maldonado Pacheco la frase sacramental de *“la ebriedad se manifiesta por su fuerte halito alcohólico, inestabilidad al caminar, incoherencia al hablar”* es una fórmula rutinaria y sacramental establecida en los partes y que se viene realizando por décadas en la confección de la detención, pero nada indican respecto del estado de consciencia en que realmente se encontraba el testigo Juan Maldonado Pacheco.

11.- De esta forma nos hemos hecho cargo de la defensa, insistiendo que la abogada no ha incorporado ninguna prueba o aportado algún antecedente para desvirtuar que las lesiones causadas al occiso Marcos Quezada Yáñez fueran

realizadas, no con anterioridad a su entrada a la Comisaría, sino que dentro de esta. Y que no hay forma en conformidad al mérito del proceso y de la ley, desechar el testimonio testigo Juan Maldonado Pacheco. Todo lo que dicen los profesionales respecto de la muerte es un aspecto técnico y científico del ahorcamiento, pero esos informes nada nos van aportar respecto a la participación de terceros, tal como se ha razonado precedentemente.-

12.- Cabe hacer presente que el testigo Juan Maldonado Pacheco se realizó un informe de sus facultades mentales de fs. 2.046 y siguientes concluye que: *“se trata de un hombre sin alteración de juicio de la realidad; con un nivel intelectual en rangos normales; con antecedentes de hipertensión arterial en tratamiento; reconoce haber estado detenido en la misma fecha en que sucedieron los hechos que motivan la presente causa judicial; tiene todas sus funciones corticales superiores conservadas, por lo cual desde el punto de vista psiquiátrico se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial.”*

13.- Que si bien provisoriamente en el auto de procesamiento de fs. 2300 y siguientes, de la misma forma los elementos probatorios se acusa a **Nelson Almendras Illesca** de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII), con mayor reflexión se puede ponderar que:

a.- Si bien el acusado tuvo en el lugar de los hechos el día de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, el Tribunal no ha podido llegar a la convicción a través de los medios de prueba legal en conformidad al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal de su participación.-

b.- En efecto si bien revisada la documentación oficial, tanto el expediente militar como el libro de guardia que existen en el proceso, no es posible encontrar una anotación que indique si el acusado Nelson Almendras Illesca, se hubiera retirado a determinada hora, el día 24 de junio de 1989 de la Comisaría, para una condena de homicidio calificado se requieren otras pruebas e indicios que den mayor convicción y seguridad al sentenciador. Que en esta sentencia no se ha podido arribar.-

c.- De la misma forma si bien en el auto de procesamiento y acusación se tuvo en consideración las declaraciones del testigo Juan Maldonado Pacheco, que es detallada, coherente y persistente en el tiempo, no es posible a criterio de este Ministro posicionar al acusado Nelson Almendras Illesca en la dinámica de los hechos investigados en esta causa, que significo la muerte de Marcos Quezada Yáñez.-

d.- Si bien es cierto que el Tribunal puede hacer deducciones e inferencias de la prueba reunida, y puede determinar que este acusado en principio se encontraba en la Comisaría, aquella para una condena penal no resulta suficiente.

Sumado a lo anterior, de varios testimonios que si bien son de sus propios compañeros carabineros y puede restarle valor por existir un pacto de silencio o algún otra metodología de defensa, el Tribunal lo pondera adecuadamente y llega a la conclusión que no existen medios probatorios convincentes y suficientes previstos por la ley para llegar a la convicción de condena. **En consecuencia como lo ha pedido la defensa, se dará lugar sólo a la absolución de Nelson Almendras Illesca.-**

e.- Teniendo presente que respecto a la alegación que la defensa hace respecto a los informes periciales y de análisis se estará a lo latamente aquilatado. Ahora bien puntualizar que la absolución de **Nelson Almendras Illesca**, no tiene que ver con los informes, que como se ha indicado nada dicen respecto a la intervención de terceros, solo indica que hubo un ahorcamiento. De esta forma nos hemos hecho cargo de la defensa a cabalidad.-

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se razonaran en los considerandos posteriores.-

E.- En relación a los documentos acompañados en el tercer otrosí de su presentación en nada desvirtúan los razonamientos realizados por el Tribunal, toda vez que son informe psicológico de don César Adriazola Azocar y la ficha clínica de José Fernández Cofré.

Respecto al acusado JOEL ERWIN PÉREZ ISLA.

36°) De fs. 3302 a 3325 (Tomo IX) el abogado Guillermo Cáceres Silva, en representación de **Joel Erwin Pérez Isla**. Sin perjuicio de lo que el Tribunal razonó precedentemente, con un mayor estudio de los antecedentes se puede precisar que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa interpuso excepción de previo y especial pronunciamiento, la cual fue rechazada de fs.3.447 a 3.449 (Tomo X).

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Solicitud de absolución. Que si bien provisoriamente en el auto de procesamiento de fs. 2.300 y siguientes y de la misma forma los elementos probatorios se acusa a **Joel Pérez Isla** de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII), con mayor reflexión se puede ponderar que:

1.- Si bien el acusado tuvo en el lugar de los hechos el día de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, el Tribunal no ha podido llegar a la convicción a través de los medios de prueba legal en conformidad al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, de su participación.-

2.-En efecto si bien revisada la documentación oficial, tanto el expediente militar como el libro de guardia que existen en el proceso, no es posible encontrar una anotación que indique si el acusado Joel Pérez Isla, se hubiera retirado a determinada hora, el día 24 de junio de 1989 de la Comisaría. Para una condena de homicidio calificado se requieren otras pruebas e indicios que den mayor convicción y seguridad al sentenciador. Que en esta sentencia no se ha podido arribar.-

3.- De la misma forma si bien en el auto de procesamiento y acusación se tuvo en consideración las declaraciones del testigo Juan Maldonado Pacheco, que es detallada, coherente y persistente en el tiempo, no es posible a criterio de este Ministro posicionar al acusado Joel Pérez Isla en la dinámica de los hechos investigados en esta causa, que causaron la muerte de Marcos Quezada Yáñez.-

4.- Si bien es cierto que el Tribunal puede hacer deducciones e inferencias de la prueba reunida, y puede determinar que este acusado en principio se encontraba en la Comisaría, aquella para una condena penal no resulta suficiente. Sumado a lo anterior, de varios testimonios que si bien son de sus propios compañeros carabineros y puede restarle valor por existir un pacto de silencio o algún otra metodología de defensa, el Tribunal lo pondera adecuadamente y llega a la conclusión que no existen medios probatorios convincentes y suficientes previstos por la ley para llegar a la convicción de condena. **En consecuencia como lo ha pedido la defensa, se dará lugar a la absolución de Joel Pérez Isla.-**

5.- Puntualizando que respecto a la alegación que la defensa hace respecto a los informes periciales y de análisis se estará a lo latamente aquilatado. Ahora bien puntualizar que la absolución de **Joel Pérez Isla**, no tiene que ver con los informes que como se ha indicado nada dicen respecto a la intervención de terceros y solo indica que hubo un ahorcamiento.-

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se razonará en los considerandos posteriores.-

Respecto al acusado MARCOS ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO.

37°) De fs. 3328 a 3329 (Tomo IX) el abogado César Antonio Villagrán Carvallo, en representación de **Marcos Aguirre Guajardo**. Sin perjuicio de lo que el Tribunal razonó precedentemente, con un mayor estudio de los antecedentes se puede precisar que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa no interpuso excepción de previo y especial pronunciamiento.-

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Solicitud de absolución. Que si bien provisoriamente en el auto de procesamiento de fs. 2.300 y siguientes y de la misma forma los elementos probatorios se acusa a **Marcos Antonio Aguirre Guajardo** de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII), con mayor reflexión se puede ponderar que:

1.- Si bien el acusado tuvo en el lugar de los hechos el día de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, el Tribunal no ha podido llegar a la convicción a través de los medios de prueba legal en conformidad al artículo 456 bis del Código de Procedimiento Penal, de su participación.-

2. -En efecto si bien revisada la documentación oficial, tanto el expediente militar como el libro de guardia que existen en el proceso, no es posible encontrar una anotación que indique si el acusado Marcos Antonio Aguirre Guajardo, se hubiera retirado a determinada hora, el día 24 de junio de 1989 de la Comisaría. Para una condena de homicidio calificado se requieren otras pruebas e indicios que den mayor convicción y seguridad al sentenciador. Que en esta sentencia no se ha podido arribar.-

3.- De la misma forma si bien en el auto de procesamiento y acusación se tuvo en consideración las declaraciones del testigo Juan Maldonado Pacheco, que es detallada, coherente y persistente en el tiempo, no es posible a criterio de este Ministro posicionar al acusado **Marco Antonio Aguirre Guajardo** en la dinámica de los hechos investigados en este causa, que causaron la muerte de Marcos Quezada Yáñez.-

4.- Si bien es cierto que el Tribunal puede hacer deducciones e inferencias de la prueba reunida, y puede determinar que este acusado en principio se

encontraba en la Comisaría, aquella para una condena penal no resulta suficiente. Sumado a lo anterior, de varios testimonios que si bien son de sus propios compañeros carabineros y puede restarle valor por existir un pacto de silencio o algún otra metodología de defensa, el Tribunal lo pondera adecuadamente y llega a la conclusión que no existen medios probatorios convincentes y suficientes previstos por la ley para llegar a la convicción de condena. **En consecuencia como lo ha pedido la defensa, se dará lugar a la absolución de Marco Antonio Aguirre Guajardo.-**

5.- Expresando que respecto a la alegación que la defensa hace respecto a los informes periciales y de análisis se estará a lo latamente aquilatado. Ahora bien puntualizar que la absolución de **Marco Antonio Aguirre Guajardo**, no tiene que ver con los informes que como se ha indicado nada dicen respecto a la intervención de terceros y solo indica que hubo un ahorcamiento.-

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se razonará en los considerandos posteriores.-

Respecto al acusado BERNARDO AEDO LEIVA.

38°) A fs. 3379 a 3388 (Tomo X), el abogado Gaspar Calderón Araneda, en representación de **Bernardo Aedo Leiva**, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a las declaraciones indagatorias del acusado Bernardo Aedo Leiva, y todos los fundamentos pertinente que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa no interpuso excepción de previo y especial pronunciamiento.-

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Solicitud de absolución. En conformidad al mérito del proceso y de las pruebas antes ponderadas y relacionadas **no es posible** dar lugar a la absolución por lo antes ya analizado y en especial porque de la lectura del auto acusatorio de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII), el Tribunal razonará de la siguiente manera:

1.- Respecto a la inexistencia de un hecho punible el Tribunal estará a diferencia de lo que expone la defensa, la relación de las pruebas y sus ponderaciones extensamente aquilatadas permiten llegar a la convicción a este Tribunal como el descrito en el auto acusatorio de fs. 2671 y siguientes.-

2.- El auto acusatorio a diferencia de lo que expone la defensa es preciso y claro en la dinámica como ocurrieron los hechos y la participación de Bernardo Aedo Leiva.

3.- En cuanto a la falta de prueba de cargos, la defensa analiza las declaraciones de Juan Yáñez Aedo y Gustavo Weisse que si bien son por parte de los elementos probatorios, en nada refutan las conclusiones a las que ha llegado el Tribunal. Si se analiza el auto acusatorio y sus letras un testigo importante es Juan Maldonado Pacheco, en cambio Juan Yáñez Aedo y Gustavo Weisse son testigos que complementan el relato histórico de los hechos, pero en una supresión mental e hipotética, si sacáramos a ambos testigos en nada disminuyen la acusación fiscal.

4.- Ahora bien en cuanto al análisis de las declaraciones que hace de Juan Maldonado Pacheco (no fue objeto de tacha pudiendo haberlo hecho) no existe ningún fundamento importante o sustancial que logre desvirtuar el testimonio de Juan Maldonado Pacheco. Recordando que el testigo Roberto Ruiz Aguilar señaló que los cables que estaban ahí se encontraban forrados. Ahora bien la defensa insiste que el testigo Maldonado es un fabulador, ello se refuta con el informe pericial del Servicio Médico Legal de fs. 2.046 que establece se trata de una persona normal y sin alteración del juicio de la realidad.

5.- Hay que hacer presente una vez más, que la dinámica de los hechos se hace por presunciones en base al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal.

6.- La versión que luego en la justicia ordinaria realiza el testigo Juan Maldonado Pacheco aparece plenamente plausible, su declaración anterior fue en la justicia militar en plena dictadura militar. No obstante en la justicia ordinaria declara libre y espontáneamente y manteniendo su relato. Habría que preguntarse ¿por qué una persona como Juan Maldonado Pacheco quisiera gastar su tiempo, energía y lidiar con Carabineros de Chile e inventar un hecho? Podría perfectamente haberse quedado en su domicilio y seguir una vida tranquila. Lo cierto es que no declaró una vez, sino varias veces ante este Tribunal y realizó careos con funcionarios de Carabineros, manteniendo siempre su versión.

7.- En cuanto al análisis de las pericias del doctor Wolfgang Reuter, del médico legista German Tapia y de la médico Nubia Riquelme, el Tribunal estará a

lo ampliamente detallado y razonado respecto a los profesionales, no concordando con la defensa en sus apreciaciones.-

8.- Cabe hacer presente que el Carabinero Cádiz fue sancionado en esa oportunidad, por lo que todos los dichos de Bernardo Aedo Leiva desde que el occiso entró a la Comisaria no constan en ninguna parte, ni siquiera en los libros donde debió consignarse de la vigilancia de los calabozos.-

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se razonará en los considerandos posteriores.-

Respecto al acusado JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA.

39°) A fs. 3402 a fs. 3410 (Tomo X), el abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de **José Domingo Cádiz Parada**, el Tribunal estará a lo antes razonado respecto a las declaraciones indagatorias del acusado José Domingo Cádiz Parada y todos los fundamentos pertinente que atingen a esta defensa en el análisis que se hizo, precisando que:

A. Excepciones de previo y especial pronunciamiento: La defensa no interpuso excepción de previo y especial pronunciamiento.-

B. Sobre las tachas de testigos y objeciones de documentos: Que de la misma manera, la defensa pudiendo haberlo hecho no presentó ninguna tacha a los testigos, en los términos que exige el artículo 492 y siguientes del Código de Procedimiento Penal. De igual forma, no objetó ningún documento en particular.

C. Solicitud de absolución. En conformidad al mérito del proceso y de las pruebas antes ponderadas y relacionadas **no es posible** dar lugar a la absolución por lo antes ya analizado y en especial porque de la lectura del auto acusatorio de fojas 2.671 a 2.676 (Tomo VIII), el tribunal aquilatara lo siguiente:

1.- En cuanto a la inexistencia del hecho punible en este punto a diferencia de lo que expone la defensa, por el mérito del proceso y como se establecieron los hechos tanto en el auto acusatorio como sentencia, permiten al tribunal llegar a la convicción que si existió un hecho punible.

2.- Respecto de las críticas al doctor Reuter el tribunal estará a lo razonado previamente en sus considerados anteriores. En el mismo sentido en relación al informe de análisis de la Prefectura de Carabineros. Como de los informes que constan a fs. 1.539 del Servicio Médico Legal y su Segundo informe del 12 de julio de 2016, el informe al departamento de Medicina Criminalista de la Policía de Investigaciones de Chile del 6 de octubre de 2016. Como se desprende la defensa enfoca su argumentación e informes de profesionales y médicos legistas; y como

se ha reiterado en esta sentencia todos estos informes nos van a describir que, hubo lesiones en las manos de Marcos Quezada Yáñez, que estaba vivo y que su muerte se produce por un ahorcamiento; empero no pueden científica ni materialmente informar otra cosa.

3.- El punto central es como la defensa puede desvirtuar el testimonio de Juan Maldonado Pacheco y en ese sentido no objeto al testigo, no aporte nueva prueba ni esbozo un relato paralelo. Se hace presente que como se dijo con la anterior defensa del Abogado Gaspar Calderón, que Juan Maldonado Pacheco en la fiscalía militar durante la dictadura militar no informó lo que había visto por temor, pero a la justicia ordinaria manifestó lo que por sus sentidos pudo observar, así que su cambio no tiene nada de extraordinario ni irregular y es totalmente plausible.

4.- La versión que luego en la justicia ordinaria realiza el testigo Juan Maldonado Pacheco aparece plenamente atendible, pues su declaración anterior fue en la justicia militar en plena dictadura militar. Aquí en la justicia ordinaria declara libre y espontáneamente manteniendo su relato, habría que preguntarse ¿por qué una persona como Juan Maldonado Pacheco quisiera gastar su tiempo, energía y lidiar con Carabineros de Chile e inventar un hecho? Podría perfectamente haberse quedado en su domicilio y seguir una vida tranquila. Lo cierto es que no declaró una vez, sino varias veces ante este Tribunal y realizó careos con funcionarios de Carabineros, manteniendo siempre su versión.

5.- El argumento que Juan Maldonado si observó y que por su lado José Lagos que estaba en el mismo calabozo, no haya observado lo mismo, no es ningún fundamento para desvirtuar los dichos de Juan Maldonado Pacheco. Se hace presente además que el tribunal ha establecido los hechos en base al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal

6.- Respecto a la complicidad estará a lo razonado en los considerados anteriores.

D. Circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, se razonará en los considerandos posteriores.-

F.- REFLEXIONES Y PONDERACIONES FINALES.-

De acuerdo a lo estudiado y ponderado de las pruebas y mérito del proceso en conformidad a la ley cabe hacer presente lo siguiente:

1. Todos los carabineros de la comisaría de Curacautín, ya sea los acusados o los que estuvieron el día de los hechos han guardado un estricto pacto de silencio sobre estos. Ello porque no resulta sostenible que ante los diferentes medios probatorios y en especial las declaraciones sin tacha ni objeciones del

testigo Juan Maldonado Pacheco, dichos integrantes se hayan mantenido en un silencio absoluto sobre la dinámica de los hechos ocurridos.

2. De las declaraciones del testigo Juan Maldonado Pacheco en su desglose pormenorizado cabe hacer presente que él estaba en un calabozo a cierta distancia de la sala de guardia y de entretenimiento donde fue interrogado el occiso Marcos Quezada Yáñez. Luego si él escuchó diferentes sonidos y ruidos como es, risas, aplicación de corriente eléctrica, entre otros, con mayor razón dichos ruidos y sonidos deben haber sido escuchados por los que estaban de guardia, en la sala de entretenimiento u otras dependencias. Resulta desde un punto de vista material y científico imposible que no hubieran tomado conocimiento de esta situación.

3. Como ya se ha analizado y aquilatado en esta sentencia, los dichos de los Carabineros Cádiz y Aedo Leiva sobre la vigilancia de los calabozos no puede tomarse seriamente ni ser atendible. Ello porque la propia institución sancionó al carabinero Cádiz por no haber colocado un vigilante para los efectos de la observancia de los calabozos.

4. Derivado de lo anterior y atendido que el testigo Juan Maldonado Pacheco ingresó aproximadamente a las 18:00 horas a la Comisaría y luego a los calabozos y minutos más tarde relató lo sucedido al occiso Marcos Quezada Yáñez, la conclusión a la que arriba el tribunal es que la persona de Marcos Quezada Yáñez nunca ingresó a los calabozos y se mantuvo en la sala de entretenimiento donde fue interrogado permanentemente. De esta forma se explica plausiblemente el relato de Juan Maldonado Pacheco.

5. Que asimismo como se ha indicado y tomando en consideración la dinámica de los hechos para la muerte de Marcos Quezada Yáñez y los dichos del testigo Juan Maldonado Pacheco no es posible que un Carabinero de propia iniciativa hubiera realizado lo narrado por el testigo Maldonado Pacheco, sin las instrucciones de un superior

G. ACUSACIONES PARTICULARES

40°) La abogada **Carolina Contreras Rivera** en representación de la Unidad Programa de Derechos Humanos de la Subsecretaría del ramo, de fs. **2.763 a 2.769 (Tomo VIII)**, formula acusación particular en contra de Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azócar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré, como Autores; a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, como cómplices del delito de homicidio calificado en carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez, de acuerdo a lo tipificado y sancionado en el

artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos, solicitándose se les condene a Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azócar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré, como Autores del homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo a cada uno de los ellos, y conjuntamente se condene a José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, en calidad de cómplices del delito de homicidio calificado cometido en contra de Marcos Quezada Yáñez, a la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio. Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento de ésta presentación, se estructurarán de la siguiente forma:

- A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular:** reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio dictada 2.671 a 2.677 (Tomo VIII), con fecha 30 de diciembre de 2019. Del mismo modo comparte la calificación jurídica del ilícito.
- B. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas:** Solicita considerar para los AUTORES la concurrencia de la circunstancia N° 8 del artículo 12 del Código Penal, toda vez, que a su juicio se desprende de lo obrado en autos que quienes llevaron adelante la comisión de este hecho ostentaba la calidad de funcionarios públicos y lo realizaron con el auxilio de gente armada, que además, debido a la conformación de la organización que integraban les aseguraban la impunidad en la ejecución de los mismos, citando doctrina al respecto. De acorde a lo estipulado en el artículo 260 y 69 del Código Penal, y tomando en consideración la calidad por la cual se les acuse.-
- C. En cuanto al quantum de la pena:** Solicita la aplicación de las penas de 20 años a los procesados para quienes se les acusa en calidad de autores del delito consumado de homicidio calificado y la pena de 10 años de presidio mayor en su grado medio a los procesados en calidad de cómplices del delito de homicidio calificado.

41°) El abogado **Sebastián Saavedra Cea** en representación de la parte querellante y demandante civil, **de fs.2814 a 2852 (Tomo VIII)** formula acusación particular en contra de Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azócar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré, como Autores; y en calidad de cómplices a

José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, solicitando tomar en consideración las circunstancias agravantes contempladas en el artículo 12 N°8 y 11 del Código Penal, solicitando al respecto la misma pena, esto es, 20 años de presidio mayor en su grado máximo, a quienes ostentan la calidad de autores; y de 10 años de presidio mayor en su grado medio, a quienes actuaron en calidad de cómplices, en el delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, en la persona de Marcos Quezada Yáñez.

Fundando su presentación en los siguientes antecedentes, los cuales para un mejor entendimiento se estructuran de la siguiente forma:

A. Establecimiento de los hechos constitutivos del delito que motiva la acusación particular. Comparte en su integridad y reproduce los hechos que se tienen por establecidos en la acusación de oficio, la calificación jurídica y la participación de los acusados.

B. Calificación jurídica del ilícito. Esta parte considera que con lo razonado por el Tribunal, se desprenden cargos fundados para estimar que a **Joel Erwin Pérez Isla, Marco Antonio Aguirre Guajardo, César Octavio Adriazola Azócar, Nelson Adalberto Almendras Illesca y José Dolorindo Fernández Cofré** le ha cabido participación en calidad de **AUTORES**, y a **José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva** en calidad de **CÓMPLICES** del delito de **homicidio calificado**, en su carácter de lesa humanidad de Marcos Quezada Yáñez.-

C. Circunstancias que deben influir en la aplicación de las penas: El querellante aquilata tomar en consideración para los AUTORES las agravantes establecidas en el N°8 y 11 del artículo 12 del Código Penal, cita al tratadista Enrique Cury.-

D. Quantum de la Pena. Solicita al tribunal que se le aplique la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo a los acusados en calidad de autores y 10 años de presidio mayor en su grado mínimo a los acusados en calidad de cómplice por el delito de homicidio calificado en su carácter de lesa humanidad.-

42°) Que las acusaciones particulares en los hechos y el derecho concuerdan con la acusación fiscal, por lo que en este aspecto el Tribunal nada tiene que razonar. Ahora bien lo diferente de la acusación del Tribunal es la petición de los querellantes en sus acusaciones particulares, la aplicación de circunstancias agravantes para los acusados. En esta materia el Tribunal se pronunciará en los considerandos posteriores.-

H.- Reflexiones Sobre Lesa Humanidad

43°) Que profundizando el origen y concepto del delito de lesa humanidad para un adecuado análisis de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal y determinación de la pena, cabe citar la sentencia Almonacid Arellano y otros versus Chile, de fecha 26 de septiembre de 2006 puntualizando lo siguiente:

Párrafo 94. El desarrollo de la noción de crimen de lesa humanidad se produjo en los inicios del siglo pasado. En el preámbulo del Convenio de la Haya sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre de 1907. Asimismo, el término “crímenes contra la humanidad y la civilización” fue usado por los gobiernos de Francia, Reino Unido y Rusia el 28 de mayo de 1915 para denunciar la masacre de armenios en Turquía.

Párrafo 95. El asesinato como crimen de lesa humanidad fue codificado por primera vez en el artículo 6.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Núremberg. Poco después, el 20 de diciembre de 1945, la Ley del Consejo de Control No. 10 también consagró al asesinato como un crimen de lesa humanidad en su artículo II.c. De forma similar, el delito de asesinato fue codificado en el artículo 5.c del Estatuto del Tribunal Militar Internacional para el juzgamiento de los principales criminales de guerra del Lejano Oriente (Estatuto de Tokyo), adoptada el 19 de enero de 1946.

Párrafo 96. Estatuto de Nuremberg jugó un papel significativo en el establecimiento de los elementos que caracterizan a un crimen como de lesa humanidad. Así constituyen actos inhumanos, como el asesinato, cometidos en un contexto de ataque generalizado o sistemático contra una población civil. Basta que un solo acto ilícito como los antes mencionados sea cometido dentro del contexto descrito, para que se produzca un crimen de lesa humanidad. En este sentido se pronunció el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia en el caso Prosecutor v. Dusko Tadic, al considerar que “un solo acto cometido por un perpetrador en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil trae consigo responsabilidad penal individual, y el perpetrador no necesita cometer numerosas ofensas para ser considerado responsable. **Todos estos elementos ya estaban definidos jurídicamente cuando el señor Almonacid Arellano fue ejecutado.**

Párrafo 98. La prohibición de crímenes contra la humanidad, incluido el asesinato, fue además corroborada por las Naciones Unidas. El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General confirmó “los principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal.

A. Que como ya se ha dicho, por tratarse de un delito de lesa humanidad y no común, sobre esta materia el Tribunal tiene presente lo que en forma reiterada la Excma. Corte Suprema ha manifestado que hechos, como los investigados en esta causa y por los cuales se ha dictado acusación, que corresponden a **un homicidio califica**, delito de tal magnitud que debe ser **imprescriptible**. Asimismo, dicho ilícito es de aquellos que la doctrina reconoce como de **lesa humanidad** y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 N°1 y 15 N°2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1, 2, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por Chile, tienen plena vigencia en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que son imprescriptibles e inamnistiables.

B. Que a modo de ilustración, el máximo Tribunal así se ha pronunciado en las causas roles 31.030 – 1994; 469 – 1998; 517 – 2004; 288 – 2012 y 1.260 – 2013, 40.168-2017, 4.080-2018, entre muchas otras. Y de la misma forma, como se ha fallado reiteradamente por este Tribunal en las causas roles: 27.525; 27.526; 45.345; 113.990; 113.989; 18.780; 29.877; 45.344; 45.371; 45.342; 29.869; 27.527; 114.001; 113.986; 63.541; 45.363; 114.048; 10.868-P; 114.003; 10.851; 10.854; 45.359; 54.035; 63.535; 45.343; 57.071; 113.997; 45.354; 45.361; 114.000; 4-2010; 45.362; 114.007; 114.042; 113.996; 29.879; 45.365; 45.367; 44.305.

C. Cabe también hacer presente, que el mismo fallo Almonacid Arellano y otros vs Chile dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 26 de septiembre de 2006, en su párrafo 119, al analizar el Decreto Ley de Amnistía 2.191 y en lo pertinente manifiesta que: “las leyes de amnistía con las características descritas (es decir, como la chilena) conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crimines de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana e indudablemente afectan derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la Convención y genera responsabilidad internacional del Estado. En consecuencia, dada su naturaleza, el Decreto Ley N°2.191 carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para la investigación de los hechos, que constituyen este caso, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile”.

a. Sobre la misma materia del delito de lesa humanidad, cabe recordar lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ya

señalado, **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”**, en que reitera, a propósito de las leyes de amnistía, entre otros aspectos la doctrina centrada en la sentencia caso **“Barrios Altos versus Perú”** de 14 de marzo de 2001, en cuanto la incompatibilidad de las leyes de amnistía con la Convención Americana de Derechos Humanos. En lo pertinente, el fallo **“Almonacid Arellano y otros versus Chile”** afirma lo anterior en los siguientes párrafos: 82.5, 82.6, 82.7, 111 y en especial en el párrafo 119 donde la Corte expresa que las leyes de amnistía, como la chilena, conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana y afectan los derechos consagrados en ella. Ello constituye per se una violación de la convención y genera responsabilidad general del Estado, agregando que el Decreto Ley 2.191, carece de efectos jurídicos y no puede seguir representando un obstáculo para las investigaciones de los hechos, ni para la identificación y el castigo de los responsables, ni puede tener igual o similar impacto respecto de otros casos de violación de los derechos consagrados en la Convención Americana acontecidos en Chile. En la misma línea, para sostener como lo ha hecho la Excm. Corte Suprema y este Tribunal, la Corte Interamericana en el fallo aludido manifestó lo siguiente:

82.5. La época más violenta de todo el período represivo corresponde a los primeros meses del gobierno de facto. De las 3.197 víctimas identificadas de ejecuciones y desapariciones forzadas que ocurrieron en todo el gobierno militar, 1.823 se produjeron en el año 1973. Por su parte, “el 61% de las 33.221 detenciones que fueron calificadas por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, corresponde a detenciones efectuadas en 1973”. Esta misma Comisión señaló que “más del 94% de las personas que sufrieron prisión política” dijeron haber sido torturadas por agentes estatales.

82.6. Las víctimas de todas estas violaciones fueron funcionarios destacados del régimen depuesto y connotadas figuras de izquierda, así como sus militantes comunes y corrientes; jefes y dirigentes políticos, sindicales, vecinales, estudiantiles (de enseñanza superior y media) e indígenas; representantes de organizaciones de base con participación en movimientos de reivindicaciones sociales. “Muchas veces [las] relaciones políticas se deducían de la conducta conflictiva” de la víctima en huelgas, paros, tomas de terrenos o de predios, manifestaciones callejeras, etc.” Las ejecuciones de estas personas “se insertan dentro del clima reinante [...] de hacer una “limpieza” de elementos juzgados perniciosos por sus doctrinas y actuaciones, y de atemorizar a sus compañeros que podían constituir una eventual “amenaza”. No obstante, en la época inicial de

la represión existió un amplio margen de arbitrariedad a la hora de seleccionar a las víctimas.

82.7. En lo que se refiere a las ejecuciones extrajudiciales –crimen cometido en el presente caso, por lo general, las muertes fueron de personas detenidas y se practicaban en lugares apartados y de noche. Algunos de los fusilamientos al margen de todo proceso fueron, sin embargo, fulminantes y se efectuaron al momento de la detención. [...] En las regiones del sur [del país] la persona, sometida ya al control de sus captores, [era] ejecutada en presencia de su familia”.

b. En el mismo sentido cabe también hacer presente, que el **fallo pronunciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con fecha 15 de noviembre de 2021, en caso Maidanik y Otros Vs. Uruguay**, mediante la cual declaró la responsabilidad internacional de la República Oriental del Uruguay (en adelante “el Estado” o “Uruguay”) por las violaciones a distintos derechos humanos, en perjuicio de Luis Eduardo González González y Óscar Tassino Asteazu, víctimas de desapariciones forzadas que principiaron durante la dictadura que sufrió Uruguay entre 1973 y 1985, así como de sus familiares, desatándose los siguientes párrafos:

Párrafo 206: ...“en relación tanto con actos de desaparición forzada como respecto a otras graves violaciones a derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, en la misma oportunidad este Tribunal señaló que “es incompatible con las obligaciones internacionales de un Estado Parte en la Convención que éste deje de investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos que por su naturaleza sean **imprescriptibles**, en perjuicio del derecho de las víctimas de acceso a la justicia, amparándose en una situación de impunidad que sus propios poderes y órganos hayan propiciado”...

Párrafo 211: “El Estado debe asegurar que las autoridades competentes realicen las investigaciones correspondientes ex officio, contando, para ese cometido, con las facultades y recursos necesarios²³⁹, inclusive logísticos y científicos, para recabar y procesar las pruebas, así como para acceder plenamente a la documentación e información pertinente y para llevar a cabo las actuaciones y averiguaciones esenciales para esclarecer lo sucedido a las personas desaparecidas y a las víctimas de ejecución extrajudicial”.

Párrafo 246: “La **Corte** recuerda que, al decidir sobre el caso Gelman Vs. Uruguay determinó que “la Ley de Caducidad carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la

investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos”. Por ello, dispuso que “el Estado deberá asegurar que [dicha ley] no vuelva a representar un obstáculo [...] para la identificación y, si procede, sanción de los responsables de [...] graves violaciones de derechos humanos [...] acontecidas en Uruguay”.

Párrafo 251: “Considerando lo anterior, la Corte entiende necesario recordar al Estado que: cuando un Estado es Parte en un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, también están sometidos al tratado, lo cual les obliga a velar para que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, de modo que decisiones judiciales o administrativas no hagan ilusorio el cumplimiento total o parcial de las obligaciones internacionales. Es decir, todas las autoridades estatales, están en la obligación de ejercer ex officio un “control de convencionalidad” entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. [...]. Por el solo hecho de ser Parte en la Convención Americana, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos, incluidas las instancias democráticas, jueces y demás órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, están obligados por el tratado, por lo cual deben ejercer, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas, en cuanto a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación, juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos, teniendo en cuenta el propio tratado y, según corresponda, los precedentes o lineamientos jurisprudenciales de la Corte Interamericana”.

c. En consecuencia, cabe reflexionar lo siguiente:

- i. La lesa humanidad nos remite a lo más profundo de la mujer y del hombre, puesto que sostiene todos nuestros valores. Además es una verdadera exigencia social y civilizadora.
- ii. La lesa humanidad modela nuestro habitar. Sensibiliza nuestro marco de acción.

- iii. La lesa humanidad insufla, canaliza, transforma y dinamiza nuestro Derecho. Dotándolo de nuevas herramientas y concepciones. Le fija los límites infranqueables ante los cuales mujeres y hombres deben actuar y detenerse.
- iv. La lesa humanidad como un muro invencible, rechaza con toda fuerza la irracionalidad y arbitrariedad.
- v. La lesa humanidad vence, derrota a la prescripción (en el más amplio sentido), a las simples legalidades del Derecho penal liberal (prescripción, tipos, participación, penas), puesto que, no tienen la capacidad de resolver esos dilemas jurídicos y sociales.
- vi. La Lesa humanidad es la conciencia robusta de la humanidad. Nos muestra el ideal de mujer y hombre, de humanidad.
- vii. La lesa humanidad, con una resonancia infinita, atraviesa todo el universo jurídico y nos sitúa en lugar correcto y verdadero. Esto es, como honestamente debe funcionar nuestra convivencia en la sociedad.

d. Que también es relevante para esta causa, lo que señala dicha Corte Interamericana en relación a la jurisdicción militar, **párrafo 131**, donde la Corte indica que: “El Tribunal ha establecido que en un Estado democrático de derecho la jurisdicción penal militar ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de intereses jurídicos especiales, vinculados con las funciones que la ley asigna a las fuerzas Militares. Por ello, sólo se debe juzgar a Militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Al respecto, la Corte ha dicho que cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y, a fortiori, el debido proceso”, el cual, a su vez, se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. Se hace presente que en ese proceso no consta además, que la Justicia Militar hubiere siquiera iniciado alguna investigación sobre estos hechos, lo que revela la actitud del Estado de mantener la impunidad sobre el delito investigado en esta causa.

e. Cabe puntualizar que en el caso de “**Hilario Barrios Varas**” (**causa rol 25.657-14 de la Excma. Corte Suprema**), en los considerandos cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno se dan todos los elementos que ha descrito la Excma. Corte Suprema, esto es, en síntesis, una represión generalizada del régimen de la época, una hiperseguridad al margen de toda condición de la persona humana, una conformidad con la impunidad de los actos cometidos por los agentes estatales, además, con el amedrentamiento a la población civil. Lo cierto es que los hechos calzan con lo que la Corte interamericana de Derechos

Humanos, en el caso citado, lo que ha fallado en forma robusta la Excma. Corte Suprema y éste Ministro Visitador corresponde sin duda a un delito de lesa humanidad. **Delitos que son imprescriptibles.**

f.- A mayor ahondamiento cabe reflexionar acerca de los diferentes documentos (sentencias e informes) que dan cuenta de las actuaciones de los agentes del Estado producido el quiebre constitucional, según lo consigna la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe Rettig” (entregado el 9 de febrero de 1991)

Que en su volumen I, tomo I, acápite sobre violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado o personas a su servicio, señala en relación al control del orden público que ocurrido el 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y de Orden lograron el objetivo más inmediato – control efectivo del país, sin focos de acciones armadas de los partidarios del régimen depuesto – en muy pocos días. Señala, además, en relación a la detención y reclusión, que las detenciones asumieron numerosísimas formas. Algunas fueron producto de ser requeridos los afectados, por bando, a presentarse ante la autoridad militar en general, o específicamente a un lugar preciso; al cumplir los requeridos con este llamado, se les detenía. Hubo también detenciones por búsqueda particular de una persona, en su casa o lugar de trabajo; frecuentemente- para los pueblos o ciudades pequeñas- en la vía pública. Efectuaban corrientemente las detenciones patrullas de Carabineros, a veces ayudadas por efectivos de Investigaciones y civiles. Cuando estas eran masivas, como en los allanamientos o redadas, las practicaron los efectivos de las otras ramas de la Fuerzas Armadas y de Orden. Estas detenciones se efectuaron a lo largo y ancho del país. Cuando se hacían en los domicilios, ellas iban habitualmente acompañadas de allanamiento violentos a los hogares, normalmente en busca de armas. En estos allanamientos o detenciones selectivas no se opuso resistencia.

Sobre los recintos de detención, fueron los regimientos, las comisarías de Carabineros, cárceles, cuarteles de Investigaciones. Estos y las comisarías, en las ciudades más pobladas, eran generalmente lugares de tránsito. Desde allí se pasaba al regimiento para una reclusión más prolongada, pues constituía el lugar donde se interrogaba, fuere formalmente (Fiscalía Militares y su personal), fuere irregularmente. Agotado el interrogatorio previo, de cualquiera de estos tipos, lo detenidos podían ser dejados en libertad; mantenidos en reclusión o, si se decidía someterlos a Consejos de Guerra, se les enviaba, para aguardarlo, principalmente a las cárceles.

Salvo por lo que toca las comisarías, y a un solo campo de prisioneros, los restantes no eran lugares habilitados para recibir prisioneros. El alto número de

detenidos obligó a improvisar lugares de detención. En estos lugares los detenidos estaban sometidos a un régimen absoluto de incomunicación con el exterior, no existía regularidad de vida, y el nivel de incertidumbre que sufrían respecto a la suerte que correrían era absoluto. No se sabía cuándo serían trasladados a otros lugares, sometidos a proceso o dejados en libertad. En las afueras de estos recintos esperan sus familias. Ellas saben, o les han dicho que han sido detenidos, que están aquí o allá.

En relación a los maltratos y torturas, el informe ya citado acota que casi universalmente se presentaron en estos meses, los malos tratos y las torturas, en distintos grados y formas. Las golpizas y vejaciones al ser detenida una persona en el vehículo de su traslado, en las comisarías y al ingresar al lugar definitivo de reclusión, fueron usuales. También fue usual la tortura en los interrogatorios. Numerosos testimonios relacionan éstos con la tortura. Cuando el detenido se mostraba “duro” para confesar, lo interrogaban bajo apremio. Los métodos de tortura fueron variadísimos. Los golpes violentos y continuados hasta producir fracturas y derramamiento de sangre se usaron casi universalmente. También el agravar, hasta constituir tortura, la rigurosidad de la detención.

Continúa el informe de la Comisión indicando, respecto a las muertes y desapariciones, que el grueso de las muertes y detenciones seguidas de desaparición durante el periodo, fue fruto de actos que se enderezaron contra funcionarios destacados del régimen depuesto, especialmente de sus más altas autoridades y de los “mandos medios” en áreas sensibles de la anterior agitación social, como ser CORA, INDAP, Salud, de la habitación, de las Intendencias y Gobernaciones, regidores y alcaldes municipales, comunicadores sociales, etc. Asimismo, sobre los procedimientos empleados, señala que múltiples formas presentaron las muertes descritas en el mismo informe. Algunas revisten la apariencia de legalidad que no existe o es discutible. Otras intentan explicarse como aplicación de la llamada “Ley de fuga” o publicitando que se trataba de extremistas que habían intentado atacar alguna unidad o recinto policial o militar. En otras, se certificó la muerte sin dar explicación alguna. Otras víctimas permanecen hasta las fechas como desaparecidas. Algunas de estas ejecuciones se publicitaron e intentaron justificarse como aplicaciones de la llamada “ley de fuga”, es decir, la muerte de los detenidos – según las autoridades- intentaron huir y no obedecieron las intimaciones previas a no hacerlo, formuladas mediante la voz, disparos, advertencias al aire, etc. Una variante común, a veces individualizada como “ley de fuga”, a veces no, es que la víctima, según las autoridades- hubiera agredido a sus captores o interrogadores, o hubiese intentado quitarles sus armas de servicio.

g.- Como se aprecia hay que aquilatar adecuadamente el concepto de delito de lesa humanidad para los efectos de esta sentencia. En el caso de Chile como se ha descrito anteriormente, hay que comprender el contexto y ese contexto es que se estaba ante una dictadura militar. Las personas de todo ámbito, tanto político como no político estaban expuestas a una alta indefensión, puesto que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de Carabineros podían disponer de su vida e integridad personal, pues no se estaba bajo un régimen democrático. Una de las formas habituales de esta política sistemática era deshacerse de personas perniciosas, peligrosas o no beneficiosas para la sociedad, era respecto a ciento de detenciones de delincuentes habituales, cuatrereros y también de colaboradores con la actividad política, como repartir panfletos o comunicar reuniones clandestinas. Entonces frente a una detención, como en el caso de Marcos Quezada Yáñez y según las declaraciones de los Carabineros y del parte policial, en sus registros se encontraron panfletos y de acuerdo a la declaración del testigo Weisse a fs. 1983 quien soslaya que: *“Cuenta, en Curacautín, era referente político de izquierda desde los 15 años, ayudando a la formación del Partido por la Democracia en aquella época, es decir, año 1989 aproximadamente. Marcos Quezada Yáñez era un muchacho de unos 16 años, muy alto, fornido, y él era quien repartía las invitaciones a reuniones clandestinas, porque no eran permitidas. Ostenta, se reunían cuando había un cumpleaños de alguien o algún santo. Inquierte, las reuniones que se realizaban por motivos políticos, Marcos Quezada Yáñez era su ayudante. Este joven eran muy respetuoso, extrovertido y querido por la gente”*.

Luego esta persona se encontraba totalmente desprotegida, respecto a lo que pudiera ser la autoridad.- En esa línea la familia de Marcos Quezada Yáñez respecto a la posibilidad de obtener justicia o acceder a un debido proceso, estaba limitada en ese aspecto. Solo en el sistema democrático y muchos años después de lo ocurrido pudo realizarse una investigación en conformidad al debido proceso. Entonces la impunidad se traduce en: 1) No tengo acceso a la justicia y debido proceso porque hay un régimen de dictadura militar; 2) la forma en que fallece Marcos Quezada Yáñez favorece al conjunto de funcionarios de Carabineros, porque ellos saben que la justicia militar en definitiva va a sustraer del acceso a la justicia a los responsables del hecho, y en definitiva sobreseer la causa, como ocurrió; 3) la represión en dictadura militar y la vendetta respecto a personas que participaban en política y aquellos que habían cometido actos ilícitos, delincuentes, se mantuvo hasta el término de la dictadura militar. En este caso entonces se cumple la política del gobierno militar, un ataque sistemática a la población civil y generalizado disponiendo de la integridad personal y la vida de

aquellos que no estaban de acuerdo con el régimen militar. Aprovechándose de una común “detención” se practicaba la represión, aplicación de apremios y muerte, era una forma de maquillar la labor policial, sabiendo en definitiva que en la justicia militar se les iba a sustraer de la responsabilidad penal a los responsables.-

En definitiva la muerte de Marcos Quezada Yáñez es parte de la política descrita por la **Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “Informe Rettig”** destinada a eliminar, no solo a los opositores al régimen sino también a elementos perniciosos “para la autoridad de la época”, luego cualquier muerte en una Comisaría como en caso sublite o en una actividad policial que reúna estas características, los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros sabían que sus causas iban hacer sobreseídas. Así además le consta a este Ministro en todas las causas que le ha tocado fallar y que han tenido tramitación en la justicia militar. En consecuencia el delito como ya se ha reiterado debe ser calificado de lesa humanidad, porque reúne esas características y porque de no calificarlo así, como ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se sustrae de la justicia a los responsables, se amplía la impunidad y no se logra acceder a la justicia para los familiares, ni saber la verdad sobre los hechos ocurridos. El único momento histórico para hacerlo es al momento del regreso al régimen democrático, no hay otro.

I. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE RESPONSABILIDAD PENAL.-

44°) Atenuante de Responsabilidad Penal:

a) La abogada María Graciela Carrillo Fuentes, en representación de **César Adriazola Azócar, Nelson Almendras Illesca y José Fernández Cofré** a fs. 3287 a fs. 3297 (Tomo IX), alega como atenuantes de responsabilidad penal la prevista en el **artículo 11 N°6 y N° 9 del Código Penal**. Puntualizar que respecto a **Nelson Almendras Illesca, el Tribunal no se pronunciará por haber sido absuelto.-**

b) El abogado Guillermo Cáceres Silva, en representación de **Joel Erwin Pérez Isla, de fs. 3302 a 3325 (Tomo IX)** alega como atenuantes de responsabilidad penal la prevista en el **artículo 11 N°6 y 9 del Código Penal, habiendo sido absuelto no es necesario pronunciarse respecto a estas.-**

c) El abogado César Antonio Villagrán Carvallo, en representación de **Marcos Aguirre Guajardo, de fs. 3328 a 3329 (Tomo IX)** alega como atenuantes de responsabilidad penal la prevista en el **artículo 11 N°6,8 y 9 del**

Código Penal, habiendo sido absuelto no es necesario pronunciarse respecto a estas.-

d) El abogado Rodrigo Cortés Carrasco, en representación de **José Domingo Cádiz Parada**, de fs. 3402 a fs. 3410 (Tomo X), alega como atenuantes de responsabilidad penal la prevista en el artículo 11 N° 6 y 9 del Código Penal.-

El tribunal razonará de la siguiente manera:

A. Que en relación a la minorante del artículo 11 N°6 del Código Penal, solicitada por los acusados **César Adriazola Azócar, José Domingo Cádiz Parada y José Fernández Cofré**. Ahora bien el Abogado Gaspar Calderón en su contestación de la acusación no solicita la aplicación de esta atenuante respecto a su representando **Bernardo Aedo Leiva**. No obstante lo anterior como lo ha hecho el Tribunal en sus fallos anteriores respecto de esta, igualmente la ponderará. El Tribunal **dará lugar** a esta minorante, en **calidad de simple, por no existir mérito para otra calificación**. A los acusados les favorece esta circunstancia minorante, en razón de sus extractos de filiación y antecedentes de fs. 1.521 a 1.522 (Tomo V), 1.537 (Tomo V), 1.566 a 1.567 (Tomo V), 2.291 a 2.292 (Tomo VII), 2.296 a 2.297 (Tomo VII) y de fs. 2.636 a 2.637 (Tomo VII).- Se califica de simple porque razonar de otra manera en relación a cualquier persona que reside en Chile, se incurriría en una discriminación arbitraria, puesto que solo los que pueden acceder a educación, formación y perfeccionamiento se les califica; pero los que no puede hacer eso (que hay muchas personas en Chile) no se les podría calificar, lo que sin duda constituye una discriminación sobre la materia.

B. Que en relación a la **atenuante 11 N°9** del Código Penal, solicitada por los acusados **César Adriazola Azócar, José Domingo Cádiz Parada y José Fernández Cofré**. Atendido el mérito del proceso y tomando en consideración que los hechos ocurrieron en junio de 1989 y del conjunto de la investigación, se pudo determinar por otros medios el homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, como además se ha razonado en esta sentencia. **Además en conformidad al mérito del proceso y según esta aminorante, los acusados en modo alguno han colaborado sustancialmente al esclarecimiento de los hechos. En consecuencia no se acogerá la petición de las defensas.**

C.- Que en relación a la atenuante 11 N°1 del Código Penal, analizando el informe del Servicio Médico Legal de facultades mentales emitido el acusado **Cesar Adriazola Azócar**, que en sus conclusiones no establece que el encartado o el periciado se encuentre en un cuadro de enajenación mental para

los efectos del artículo 10 N°1 del Código Penal y el 682 del Código de Procedimiento Penal. Lo que dictamina el perito es que el acusado César Adriazola Azocar se encuentra en un proceso de depresión que le hace imposible enfrentar el juicio. Bajo esa circunstancia y no reuniéndose las hipótesis del artículo 10 N°1 del Código Penal ni del artículo 682 del Código de Procedimiento Penal, procede que el Tribunal aplique la atenuante del artículo 11N°1 del código ya citado, en atención a lo informado por el Servicio Médico Legal en este informe, ya que si bien no se encuentra el encausado en una situación de enajenación mental si presenta aspectos de depresión que por ahora (hasta un nuevo informe) le impiden enfrentar el juicio.-

45°) Institución de la Media Prescripción o Prescripción Gradual:

En relación al artículo 103 del Código penal, el Tribunal reflexiona lo siguiente:

a. En síntesis podemos expresar que sobre esta materia este Tribunal se remitirá a los razonamientos dados respecto a la imprescriptibilidad del delito de lesa humanidad. Luego, siendo el delito de autos catalogado como de lesa humanidad, no es posible aplicar en todo su espectro algún instituto de prescripción. De no ser así, resulta muy difícil sostener la categoría de lesa humanidad. Si los hechos han sido calificados de esa forma debe sostenerse dicha afirmación tanto en la calificación del delito como en la determinación de la pena. Además, en relación a esta materia, el autor **Óscar López** (Derecho Internacional y Crímenes contra la Humanidad, Editorial Fundación de Cultura Universitaria. Uruguay, 2008. Pág. 235 y siguientes) menciona el **caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cantoral Huamaní y García Santa Cruz versus Perú” de 10 de julio de 2007**, que en su párrafo **190**, señala que la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía ni disposiciones de prescripción ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables. Además, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en sus “Observaciones finales sobre el sexto informe periódico de Chile” del mes de julio del año 2014, señaló que le preocupa la aplicación de la “prescripción gradual” o “media prescripción” contenida en el artículo 103 del Código Penal, a violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante la dictadura, lo cual determina la disminución o atenuación de las penas aplicables. Además, en esa materia la **Excma. Corte Suprema, en sentencia en causa rol 28.581-2016 de 24 de octubre de 2016 (causa rol 29.877 del ingreso criminal del Juzgado de Letras de Pitrufquén, caso “Nicanor Moyano Valdés”)** ha manifestado sobre esta materia, en su motivo

quinto, que resulta conveniente recordar que el artículo 103 del Código Penal no sólo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquella, lo que revela la estrecha vinculación entre ambos institutos. Sin embargo, como en el caso se trata de un delito de lesa humanidad, circunstancia que el fallo declaró expresamente, lo que condujo a proclamar la imprescriptibilidad de la acción persecutoria, cabe sostener que por aplicación de las normas del Derecho Internacional y dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, dado que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como el de la especie.

b. Ahondando en esta institución de la prescripción gradual, el último estudio actualizado sobre la aplicación de ésta por los Tribunales y la Excm. Corte Suprema corresponde a la tesista de magister de la Universidad de Chile **Karina Fernández Neira**, en su trabajo “La aplicación de la prescripción gradual del delito en las causas sobre violaciones de derechos humanos” (página 192) quien después de estudiar detalladamente aspectos dogmáticos y legales tanto nacionales como de derecho comparado, concluye “que la aplicación de la prescripción gradual en casos de violaciones a los derechos humanos debe ser rechazada. En los casos antes referidos, la Corte Suprema no motiva correctamente sus sentencias, descuida aspectos dogmáticos y procesales, e incurre en incongruencias argumentativas en el afán de aplicar una institución cuyo diseño histórico-legislativo fue pensado para otras realidades, y cuya aplicación en casos de derechos humanos resulta forzada. Además, aunque la jurisprudencia citada evidencia la evolución de nuestro Tribunal superior, pues éste reconoce explícitamente que el Derecho internacional es una fuente directa de obligaciones internacionales para el Estado de Chile en lo referido al respeto de los derechos humanos, dicha evolución ha sufrido serios tropiezos y contradicciones a causa de los fallos del último bienio. Al aplicar la prescripción gradual a delitos de lesa humanidad, la Corte Suprema, finalmente, compromete la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, particularmente respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.”

c. Recientemente la Iltrma. **Corte de apelaciones de Temuco en la causa rol penal N°359-2019, de fecha 24 de septiembre de 2019**, pronunciándose sobre la no aplicación del artículo 103 del Código Penal, en su **considerando tercero** señala: “Finalmente, se tiene además en consideración, que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de Agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó. En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de "La Masacre de la Rochela vs Colombia", señaló de manera expresa: "que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia" (Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo "La Masacre de la Rochela vs Colombia", Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191).

d. Del mismo modo, **Excelentísima Corte de Suprema en causa rol N°8914-2018, seguida por el delito de Homicidio calificado en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero**, acoge el recurso de casación en el fondo, deducido por la Unidad Programa Derechos Humanos, de la Subsecretaría de Derechos Humanos contra la sentencia dictada por la Iltrma. Corte de Apelaciones de Valdivia, de fecha 05 de abril de 2018, en su aspecto penal, declarando su nulidad y dictando sentencia de reemplazo con fecha 15 de junio de 2020. En dicha sentencia expresa lo siguiente: “**Noveno:** Que, conviene dejar asentado que, aun cuando el reconocimiento de la prescripción gradual, regulada en el artículo 103 del código punitivo, carece de influencia en lo dispositivo del fallo en estudio, la jurisprudencia constante de esta Sala Penal ha señalado reiteradamente que, la calificación de delito de lesa humanidad dada al hecho ilícito cometido, obliga a considerar la normativa del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que excluye la aplicación tanto de la prescripción total como de la llamada media prescripción, por entender tales institutos estrechamente vinculados en sus fundamentos y, consecuentemente, contrarios a las regulaciones de los Cogens provenientes de esa órbita del Derecho Penal Internacional, que rechazan la impunidad y la imposición de penas no proporcionadas a la gravedad intrínseca de los delitos, fundadas en el transcurso del tiempo”.

46°) Agravantes de Responsabilidad Penal.

La abogada **Carolina Contreras Rivera**, en su escrito de fs. 2.763 a 2.769 (Tomo VIII) invoca como circunstancia agravante la prevista en el artículo 12 N° 8 para todos los acusados en calidad de autores. En tanto el abogado **Sebastián Saavedra Cea** en su escrito de fs. 2.814 a 2.852 (Tomo VIII), invoca como circunstancias agravantes las previstas en el artículo 12 N°8 y 11 del Código Penal, respecto a los autores.-

A.- Que en relación a la agravante del **artículo 12 N°8 del Código Penal**, tal como este Tribunal lo ha dicho en la causa 114.000, homicidio de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, en causa rol 44.305, homicidios calificados de Abraham Oliva Espinoza y Luis Espinoza Villalobos, con un mayor estudio de los antecedentes y así lo ha resuelto en numerosas causas condenatorias, ya ejecutoriadas este Tribunal acogerá la agravante pedida del artículo 12 N°8 del texto punitivo para los acusados. En este punto hay que hacer una distinción importante. En efecto los delitos de lesa humanidad, como ya se han descrito, no es efectivo, que solo puedan ser cometidos por agentes del Estado, es decir, delito de lesa humanidad, no es igual a que se comentan por agentes del Estado. Los delitos de lesa humanidad, también pueden ser cometidos por particulares. En la jurisprudencia nacional hay varios casos en que se ha condenado a particulares, por ejemplo en la causa rol N° 2.182-98, denominado “Episodio Liquiñe”, instruida por el señor Ministro en Visita Extraordinaria Alejandro Solís Muñoz. En ese sentido si bien el auto acusatorio en la descripción de los hechos por la facticidad misma describe a agentes del Estado, el hecho de ser funcionario público no implica automáticamente que la persona se prevalezca de su condición, por ello, lo especial de esta agravante, es decir, si el acusado no hubiera sido agente del Estado, no habría tenido la posibilidad de actuar con el resguardo para su impunidad, como lo hizo, y eso es lo importante, el hecho de ser funcionarios públicos no es parte de los requisitos de los crímenes de lesa humanidad, como ya se describió en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sólo se requiere ser detenido por una política contra determinada población, no siendo necesario que sean agentes públicos. Además, el artículo 63 no es tajante en esta materia, puesto que la persona siendo funcionario público, podría no haberse aprovechado de esa calidad y ejecutar el delito por otros factores o circunstancias que es lo que se viene explicando, por ejemplo, por relaciones de amistad, por relaciones de trabajo o por otras situaciones, pero en este caso se aprovecha de la condición de la calidad de funcionario público. El delito de homicidio calificado no tiene en el tipo el factor funcionario público, otros delitos tienen la calidad de ser cometidos por funcionarios públicos, pero este no es el

caso. **Por ello esta agravante será acogida respecto a los acusados José Dolorindo Fernández Cofré y Cesar Octavio Adriazola Azócar. Respecto de Nelson Almendras Illesca, Marco Antonio Aguirre Guajardo y Joel Pérez Isla, atendida a que fueron absueltos el Tribunal no se pronunciará.-**

B.- Que en relación a la agravante **del artículo 12 N°11 del Código Penal**, para este tribunal no resulta aplicable, pues del auto acusatorio se desprende que en este caso los funcionarios de Carabineros, por su práctica y patrullajes en el contexto de aquella época, son personas que habitualmente portan armas para el ejercicio de sus labores. Además como se ha razonado en la agravante anterior ya se ha considerado el concepto impunidad. **En consecuencia, de acuerdo al mérito del proceso y del auto acusatorio, como se describen los hechos y a lo expuesto por el querellante, este Tribunal rechazará la aplicación de la agravante solicitada.-**

47°) Determinación de la Pena. En la determinación de la pena se conjugan varios factores que el sentenciador debe evaluar, entre ellos, como esenciales son:

A. En primer lugar, la concurrencia de circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, establecidas en los **artículos 11 y 12** del Código Penal y otras normas del ordenamiento.

B. En segundo lugar, la determinación de la pena regida por los **artículos 50** y siguientes del mismo texto.

C. En tercer lugar, tratándose en este caso de delitos que su penalidad consta de dos o más grados, se deberá aplicar el **artículo 68** del texto punitivo, y si no es así el **artículo 67** del texto citado.

D. En cuarto lugar, tratándose en este caso de delitos de lesa humanidad como se explicará con posterioridad, atendida su gravedad y en consideración a la proporcionalidad de las penas, no procede que los encartados, aparte por la extensión de la pena, obtengan algún beneficio de la ley 18.216, atendido a los estándares normativos e interpretativos existentes en la materia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.-

E. En quinto lugar, dentro de otros elementos, debe considerarse el **artículo 69** del Código Penal.

F. En sexto lugar, el equilibrio adecuado entre el **artículo 74** del Código Penal y el **artículo 509** del Código de Procedimiento Penal (si fuera pertinente). Que de igual forma que se ha razonado debe estarse a los estándares normativos e interpretativos sobre Derechos Humanos de la Corte Interamericana sobre esta materia, en especial el sentenciador tiene que considerar la gravedad de los

hechos y la proporcionalidad de la pena, pues se trata de delitos de lesa humanidad.-

48°) Que conforme a la calificación jurídica precedente y sus razonamientos posteriores, los hechos materia de la causa corresponden a la figura típica del delito de: **HOMICIDIO CALIFICADO DE MARCOS QUEZADA YÁÑEZ**, perpetrado en la comuna de Curacautín, el 24 de junio de 1989. Delito previsto y sancionado en el **artículo 391 N°1 del Código Penal**, en su carácter de lesa humanidad, vigente a la época de los hechos, que establece la pena de **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO A PRESIDIO PERPETUO.-**

49°) Cabe hacer presente, que según el auto acusatorio de **fs. 2.671 a 2.676 (Tomo VIII)**, de 30 de diciembre de 2019, los encartados José Dolorindo Fernández Cofré y César Adriazola Azócar están calidad de autores; y Bernardo Aedo Leiva y José Domingo Cádiz Parada están en calidad de cómplices en la acusación del delito de homicidio calificado en la persona de **Marcos Quezada Yáñez**, perpetrado el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín. Ahora bien, es necesario razonar lo siguiente:

a) Que en cuanto a **NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA, MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO y JOEL ERWIN PEREZ ISLA**, atendido a lo arribado y aquilatado en el proceso no es necesario pronunciarse, ya que los encausados mencionados han sido absueltos y así se dirá en lo resolutivo de esta sentencia.-

b) En cuanto a la pena a imponer para al acusado **JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ**, a este le beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto y atendido a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, haciendo la compensación racional de las circunstancias indicadas, el Tribunal puede recorrer toda la extensión de la pena al aplicarla. Por el **delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez**, en calidad de **AUTOR** se les aplicara la pena de **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales.

b) En cuanto a la pena a imponer para al acusado **CESAR ADRIAZOLA AZOCAR**, a este le beneficia dos atenuantes, estas son las contempladas en el artículo 11 N° 1 y 6 del Código Penal en calidad de simple y le perjudica la agravante del artículo 12 N°8 del mismo cuerpo normativo. Por lo tanto quedaría con el favorecimiento de una sola atenuante, por el **delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez**, en calidad de **AUTOR** se le

aplicara la pena de **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO**, más las accesorias legales.

c) En cuanto a la pena a imponer a los acusados **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA** y **BERNARDO AEDO LEIVA**, a estos les beneficia una atenuante, esto es, la contemplada en el artículo 11 N°6 del Código Penal en calidad de simple. Por lo tanto y atendido a lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, habiendo solo en consecuencia una sola circunstancia atenuante no se aplicara la pena en el grado máximo. Ahora bien como estos encartados tienen la calidad de cómplices debe aplicarse el artículo 51 del Código citado que establece que a los cómplices de crimen o simple delito consumado se impondrá la pena inmediatamente inferior en grado a la señalada por la ley para el crimen o simple delito. En ese sentido corresponde rebajar la pena a **PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MÍNIMO** más las accesorias legales, en calidad de **CÓMPLICES** por el **delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez**, en su calidad de lesa humanidad.-

50°) Beneficios de la Ley 18.216 y sus Modificaciones Posteriores.

a. Respecto a los acusados **Nelson Adalberto Almendras Illesca**, **Marco Antonio Aguirre Guajardo** y **Joel Erwin Pérez Isla**, atendido a lo aquilatado en los considerandos anteriores, en relación a que fueron absueltos, resulta innecesario pronunciarse respecto a estos.-

b. Respecto al acusado **José Dolorindo Fernández Cofré** atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. En este caso se tiene en consideración, primero el **informe del Centro de Reinserción Social** del 04 de diciembre de 2019 a **fs. 2664 a 2667 (Tomo VIII)**, en lo pertinente concluye que: *“sugiere la pena sustitutiva de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, ya que el sujeto cuenta con disposición a someterse a la figura de autoridad y orientación de un Delegado como agente normativo”*. Por su parte, el **Servicio Médico legal N° 37-2020** de fecha 05 de enero de 2020, **de fs. 2758 a (Tomo VIII)**, en lo pertinente concluye que: *“el suscrito no presenta enfermedades psiquiátricas. Médico legalmente no presenta sintomatología psiquiátrica que pudiera desde el punto de vista de su salud mental contravenir su capacidad para cumplir una pena con privación de libertad al tenor del artículo 349 del Código de Procedimiento Penal.”*

c. Respecto al acusado **César Adriazola Azócar**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. En este caso se tiene en

consideración, primero el Informe para la libertad vigilada del 09 de octubre de 2020, rolante de **fs. 3064 a 3067 (Tomo IX)**, en lo pertinente sostiene que: *“bajo remordimiento y sentimiento de culpa. En este contexto, su ingreso a una pena sustitutiva de libertad vigilada, no se estima pertinente por su baja permeabilidad a una intervención, ya que mantiene un estado precontemplativo, además presenta una escasa motivación, lo que dificultaría su adherencia a los programas de intervención.”* En segundo lugar de fs. 3.412 a 3.415 (Tomo X), Informe pericial psiquiátrico N° 64-2020 del 24 de marzo de 2020, concluye en lo pertinente: *“Se trata de un hombre sin alteración de juicio de realidad: con un nivel intelectual normal; con alteraciones significativas a nivel de memoria reciente y de evocación; se constata alteración de la esfera del ánimo, angustia, labilidad emocional, desesperanza y alteración del sueño; lo cual configura un trastorno depresivo. Debe incorporarse a un tratamiento psiquiátrico con indicación farmacológica. Su patología está incluida en el programa auge. Se debe monitorear riesgo suicida. Es importante diferenciar si el deterioro cognitivo que presenta es secundario al cuadro depresivo o si es un proceso demencial independiente de la depresión. Por lo anterior se debe evaluar nuevamente una vez que la depresión haya sido tratada. Se necesita contar con las fichas clínicas para tener mayor conocimiento de las secuelas del ACV que sufrió. **En las condiciones actuales no se encuentra en condiciones de enfrentar un proceso judicial ni sus consecuencias.**”* Sobre esta materia en conformidad a los artículos 682 y siguientes del Código de Procedimiento Penal el Servicio Médico Legal no informa si el acusado se encuentra en una situación médico legal de enajenación mental, solo informa que se encuentra en un estado de trastorno depresivo. Luego no es aplicable la hipótesis de la enajenación mental. Ello sin perjuicio que en las instancias posteriores realice una nueva evaluación de sus facultades mentales para los efectos de los artículos citados.

d. Respecto al acusado **Bernardo Aedo Leiva**, atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado.** En este caso se tiene en consideración, primero el **informe del Centro de Reinserción Social N° 4** de fecha 10 de diciembre de 2019 de **fs. 2654 a 2656 (Tomo VIII)**, en lo pertinente concluye que: *“en consideración a los antecedentes antes expuestos, si bien se constatan necesidades de intervención, se estima que sería ineficiente e ineficaz de abordar mediante el eventual cumplimiento de una pena en libertad Vigilada o libertad vigilada intensiva, debido a su estructura cognitiva rígida, nula motivación al cambio y red de apoyo deficiente, resulta improbable que logre un cambio actitudinal en lo ya descrito. Dicho lo anterior, el Consejo técnico de esta unidad*

especial, considera no recomendable al proceso para la pena sustitutiva de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva.” El informe psiquiátrico del Servicio Médico legal n° 11-COY-PQA- 003-20 del 08 de abril de 2020, de fs. 3034 a 3042 (Tomo VIII), concluye que el peritado no tiene un trastorno mental, según criterio del DSM-5. Respecto de indicar su imputabilidad: a) el peritado, al momento de los hechos investigados, era capaz de comprender la licitud e ilicitud de sus actos; b) el peritado, al momento de los hechos investigados, era capaz de dirigir su conducta conforme a este conocimiento. El peritado es capaz de enfrentar juicio y de colaborar con su defensa.

e. Respecto al acusado **José Domingo Cádiz Parada** atendida las razones que se van a exponer (en especial la extensión de la pena) **no procede ningún beneficio de la ley 18.216 aplicable al acusado**. En este caso se tiene en consideración, primero el **informe del Centro de Reinserción Social** de fs. **2723 a 2726 (Tomo VIII)**, en lo pertinente sugiere la pena sustitutiva a la reclusión de libertad vigilada, contemplada en la ley 18.216, modificada por la ley 20.603. En segundo lugar el **informe pericial psiquiátrico del Servicio Médico legal** N° 76-2020 del 07 de abril de 2020, de fs. **3044 a 3048 (Tomo VIII)**, concluye que: “se trata de un hombre sin alteración de juicio de la realidad. Con un nivel intelectual normal. No se constata alteración en la esfera de ánimo. Niega participación en los hechos que se le imputan. Mantiene indemne sus funciones corticales superiores. Juicio crítico conservado. No presenta desde el punto de vista psiquiátrico ninguna alteración que le impida enfrentar un proceso legal ni sus consecuencias.”

51°) Sobre esta materia y aun en el caso que posteriormente los acusados César Adriazola Azócar, José Fernández Cofré, José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva, tuvieran una pena inferior de igual forma **no puede acceder a cumplir la pena en libertad**, en efecto con un mejor estudio y ponderación actualizada de los estándares normativos e interpretativos en materia de derechos humanos es necesario hacer las siguientes reflexiones, como el Tribunal lo ha realizado últimamente en causa rol causa rol 2-2013-V de la Ilma. Corte de Apelaciones de Valdivia, causa rol 45.361 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.051 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.357 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.103 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 45.367 del Juzgado de Letras de Lautaro, causa rol 114.017 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa ro 2-2012 del Juzgado de Letras de Pucón, causa rol 114.034 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, causa rol 10.914-P del Juzgado del Crimen de Puerto Montt.

a) Un **estándar** en derechos humanos corresponde a la idea de descubrir mediante un razonamiento judicial una nueva regla que inspire la

solución de un caso que puede ser perfectamente aplicable a casos similares. Un estándar importa alcanzar un determinado nivel, puesto que todas las herramientas interpretativas apuntan a una mayor realización de los derechos fundamentales. En este caso la interpretación debe ser plausible conforme al artículo 5 inciso 2° de nuestra Constitución que impele a reconocer y promover tales derechos fundamentales (**García Pino, Gonzalo**: “La consideración de los estándares sobre derechos fundamentales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Tribunal Constitucional”. En Actas XI Jornadas Constitucionales. Temuco 2015, pp. 27 -53). Agregando este Ministro que a partir de la normativa aludida, esta deber ser aplicada e interpretada en conformidad con lo que ha decidido la jurisprudencia de la Corte Interamericana de derechos humanos (Corte IDH) sobre determinado estándar normativo.

b) Sobre la normativa interna y las prácticas judiciales de los Estados y en este caso del Poder Judicial, ya la Corte IDH en el **fallo Almonacid Arellano y otros versus Chile**, de 26 de septiembre de 2006, en su **párrafo 124**, señaló: “La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana”.

c) Esta institución denominada control de convencionalidad puede ser definida en término simples como el mecanismo que utiliza la Corte Interamericana de Derechos Humanos tanto en sede contenciosa como consultiva para determinar la compatibilidad o no del derecho interno o los actos de los agentes de un Estado, con las disposiciones de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Asimismo como el ejercicio que realizan los jueces domésticos para realizar el mismo cotejo entre las normas internas, las que dispone la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y la Jurisprudencia

de la Corte Interamericana (**García, Gonzalo** (2014): “Preguntas esenciales sobre el control de convencionalidad difuso aplicables a Chile”, en: **Nogueira, Humberto** (coord.) La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Santiago de Chile, Librotecnia. Pp.356-357).

d) Para aplicar entonces el control de convencionalidad, hay que observar por su puesto la Convención Americana (ya citada) en especial los artículos 1.1 y 2. Ello por cuanto los Estados tienen la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna (1.1). Por su lado su artículo 2 nos expresa, que si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.

e) Del mismo modo, debemos analizar ahora si la Corte IDH en su jurisprudencia contenciosa o consultiva ha dictado al menos una sentencia o ha emitido alguna Opinión Consultiva sobre la materia, que permita al Juez respectivo aquilatar que se encuentra en presencia de un **estándar normativo y/o interpretativo** en materia de derechos humanos. En este caso en relación a la aplicación de sanciones y posibles beneficios respecto a los delitos que consistan en graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito de lesa humanidad. En esta materia podemos observar que sí ha existido por parte de la Corte IDH un estándar y jurisprudencia robusta y contundente sobre la materia.

Siguiendo el razonamiento anterior observamos lo siguiente:

i. Caso Barrios Altos versus Perú, de 14 de marzo de 2001, en el párrafo 41, expuso que considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

ii. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, de 26 de septiembre de 2006, párrafos 111 a 114, la Corte IDH ha señalado: Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. En reiteradas oportunidades el Tribunal ha señalado que el Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Este Tribunal ya había señalado en el Caso Barrios Altos que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Resulta útil destacar también que el propio Estado en el presente caso reconoció que en “principio, las leyes de amnistía o auto amnistía son contrarias a las normas de derecho internacional de los derechos humanos”. Por las consideraciones anteriores, la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía.

iii. Caso la Masacre de la Rochela vs Colombia, Sentencia de fecha 11 de mayo de 2007, párrafo N° 191, señaló de manera expresa: que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia.

iv. Caso Cantoral Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs.

Perú, de 10 de julio de 2007, en su párrafo 190, puntualiza: La Corte recuerda que en cumplimiento de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar a los responsables de los hechos, el Estado debe remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que impidan la debida investigación de los hechos, y utilizar todos los medios disponibles para hacer expedita dicha investigación y los procedimientos respectivos, a fin de evitar la repetición de hechos tan graves como los presentes. El Estado no podrá argüir ninguna ley ni disposición de derecho interno para eximirse de su obligación de investigar y, en su caso, sancionar penalmente a los responsables de los hechos cometidos en perjuicio de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. En particular, la Corte recuerda que el Estado no podrá aplicar leyes de amnistía, ni disposiciones de prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad que impidan investigar y sancionar a los responsables.

v. Caso Masacre de las Dos Erres versus Guatemala de 24 de

noviembre de 2009, en el párrafo 129, señala que ante esta situación, la Corte reitera su jurisprudencia constante sobre la incompatibilidad de figuras como la prescripción y la amnistía en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, que de manera clara ha establecido que: El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el Tribunal ya ha señalado que [...]son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos” [...] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derechos humanos[...]. En particular, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de su deber.

vi. Caso Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) vs. Brasil

de 24 de noviembre de 2010 en el párrafo 155, indica: Adicionalmente, el mismo Grupo de Trabajo manifestó su preocupación que en situaciones post-conflicto se promulguen leyes de amnistía o se adopten otras medidas que tengan por efecto la impunidad, y recordó a los Estados que: es fundamental adoptar medidas efectivas de prevención para que no haya desapariciones. Entre ellas, destaca [...] el procesamiento de todas las personas acusadas de cometer actos de desaparición forzada, la garantía de que sean enjuiciadas ante Tribunales civiles competentes y que no se acojan a ninguna ley especial de amnistía o medidas análogas que puedan eximir las de acciones o sanciones penales, y la concesión de reparación e indemnización adecuada a las víctimas y sus familiares.

f) Como se puede verificar al observar los fallos citados, la Corte IDH a través de su jurisprudencia ha sostenido este estándar en materia de derechos humanos en cuanto tratándose de delitos de graves violaciones a los derechos humanos (entre otros el delito lesa humanidad), los responsables deben ser sancionados, la pena debe ser proporcional a la gravedad de los hechos perpetrados por la intervención de Agentes del Estado. Del mismo modo, se debe evitar cualquier práctica o aplicación de normativa interna que restrinja los efectos de la sentencia u otorgue algún beneficio de cualquier tipo para el cumplimiento de la sentencia. Del mismo modo que las penas resulten ilusorias. Todo ello por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por Agentes del Estado. Lo anterior, es totalmente diferente al tratamiento penal y procesal penal de la delincuencia común.

g) Sobre esta materia, esto es, de los beneficios que pueden otorgarse a los responsables de los ilícitos penales (tratándose de la delincuencia común) el legislador chileno ya avanzó sobre la materia en la **Ley 18.216**. En efecto en esta ley, si bien el **artículo 33** permite al Tribunal, previo informe favorable de Gendarmería, disponer la interrupción de la pena privativa de libertad reemplazándola por el régimen de libertad vigilada intensiva, previo los requisitos legales, este artículo debe relacionarse con el artículo 1 y siguientes de la citada ley. En efecto el **artículo 1** de la señalada ley indicada, en forma categórica y expresa, prescribe “No procederá la facultad establecida en el inciso precedente (otorgamiento de los beneficios de Remisión condicional, Reclusión parcial, Libertad vigilada, Libertad vigilada intensiva, Expulsión, en el caso señalado en el artículo 34 y Prestación de servicios en beneficio de la comunidad) ni la del artículo 33 de esta ley, tratándose de los autores de los delitos consumados

previstos en los artículos 141, incisos tercero, cuarto y quinto; 142, 150 A, 150 B, 361, 362, 372 bis, 390 y 391 del Código Penal”.

h) En esa idea de razonamiento, si bien la Ley 18.216, se refiere a los ilícitos penales de la delincuencia común. Manifiesta la voluntad del Estado de Chile de negar cualquier tipo de beneficios (en forma acotada) para los responsables de determinados delitos, en este caso **homicidio calificado**. En todo caso si ello no estuviera consagrado en la legislación chilena para todos los responsables de los delitos de lesa humanidad (en la época de los hechos investigados) debemos observar la jurisprudencia de la Corte IDH antes citada, según se ha relacionado. En todo caso- como expone Nogueira, debe aplicarse el control de convencionalidad cuando el derecho interno se encuentra por debajo del estándar mínimo asegurado convencionalmente. Considerando los artículos 1, 2 y 29 de la Convención Americana citada. Además los artículos 26, 31.1 y 27 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados de 1969. (**Nogueira, Humberto** (2014): “Sistema interamericano de protección de derechos humanos, control de convencionalidad y aplicación por parte de las jurisdicciones nacionales” en: Nogueira, Humberto (“coord.”). La protección de los Derechos Humanos y fundamentales de acuerdo a la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Santiago de Chile, Librotecnia, pp. 395-420).

52°) En consecuencia, aplicando el control de convencionalidad, según lo dispuesto por la Corte IDH, en relación a los **estándares normativos e interpretativos** sobre derechos humanos para los efectos de la sanción y cumplimiento de las penas, en relación a los ilícitos de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el delito lesa humanidad (como es el caso en estudio) **no es posible** (además de lo razonado y de los estándares normativos) **otorgarles algún beneficio de la ley 18.216 a los acusados** en esta causa y así se dirá en lo resolutivo. De esta forma el control de convencionalidad se manifiesta como una obligación de garantía, es decir, este control se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. Este control es una expresión de la obligación de garantía y de disponer medidas en el ámbito interno. Esto implica que el control de convencionalidad cristaliza estas obligaciones para toda autoridad pública. Más aun, dicho control desde una mirada más amplia se enmarca dentro de un instituto que es el control internacional. Esto es, aquel conjunto de procedimientos y técnicas creadas y

destinadas a verificar si el comportamiento de los Estados se adecua o no a lo exigido por normas de conducta internacionales. (**Núñez, Constanza** (2017): El control de convencionalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argentina, ARA, Editores. p. 36). Lo anterior ha sido además ratificado por la **IIItma. Corte de Apelaciones de Temuco, el 04 de marzo de 2020, en causa rol 1.052-2019**, en cuanto la no concesión de beneficios de la ley 18.216 a aquellas personas que hubieran participado en graves violaciones a derechos Humanos (lesa humanidad). En consecuencia **no es posible otorgarles a los acusados José Fernández Cofré, Cesar Adriazola Azocar, José Domingo Cádiz Parada y Bernardo Iván Aedo Leiva ningún beneficio y deberán cumplir la pena efectiva impuesta** como se dirá en lo resolutivo.

IX. EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL

53°) Que a fs. 2.814 a 2.852 (Tomo VIII), en el primer otrosí de su presentación el abogado **Sebastián Saavedra Cea** en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez deduce demanda de indemnización de perjuicios en contra del Fisco de Chile, representado por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Oscar Exss Krugmann domiciliado en calle Prat N°847, oficina 202, comuna de Temuco, solicitando tener por interpuesta la demanda de indemnización de daños y perjuicios en contra del Fisco de Chile, por la suma total de \$ **450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos)**, que se desglosan en **\$150.000.000 (ciento cincuenta millones)** para cada uno de los querellantes civiles, por concepto de daño moral, por el accionar ilícito de agentes estatales o lo que el tribunal determine en justicia, con reajustes de acuerdo al IPC, desde la fecha de notificación de esta demanda, más intereses legales; acogerla a tramitación y en definitiva condenar al demandado a pagar a los demandantes la suma señalada, con reajustes e intereses y las costas del juicio. La parte demandante se funda en lo sustantivo, esencial y pertinente:

A. LOS HECHOS. reproduce los mismos hechos ya referidos en el auto acusatorio de fs. 2.671 y siguientes (Tomo VIII) de fecha 30 de diciembre de 2019. Comenta que por el periodo en que se cometió este delito constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad por lo que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. En ese sentido, este delito constituye un crimen contra la humanidad. transgrediendo los propósitos y principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas. Es por ello que han sido calificados como crímenes de lesa humanidad y que las

consecuencias prácticas de tal calificación es que los autores y demás partícipes en el crimen deben ser buscados y perseguidos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren y no puede invocarse en su favor ni amnistía ni prescripción. Cita párrafo 105 y 114 de Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arellano y otros v/s Estado de Chile.

I. El reconocimiento del estado de Chile de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra: El 3 de diciembre de 1973 Chile concurre con su voto a aprobar la Resolución 3.074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas denominada "Principios de Cooperación Internacional para la identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad", citando en su párrafo dispositivo 1° y el numerando 8°. Los fundamentos y criterios señalados por la Resolución ya referida se encuentran contenidos también en otras de la misma índole, pronunciadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, teniendo a Chile como país concurrente, citando jurisprudencia al respecto. En consecuencia, el Estado de Chile se encuentra sujeto a obligaciones internacionales que le son exigibles directamente y ha asumido soberanamente obligaciones de investigar los hechos criminales cometidos por sus agentes, enjuiciar, sancionar a los culpables y reparar a las víctimas o a sus familiares cuando se trate de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Así resulta obvio, público y notorio que el delito cometido en perjuicio de Marcos Quezada Yáñez, es delito de carácter estatal, que en consecuencia genera responsabilidad y como tal deben considerarse para los efectos de las acciones de reparación, que mediante esta demanda se reclaman.

B. El derecho: Expresa el demandante que el artículo 10 del Código de Procedimiento Penal concede acción penal para sancionar a los culpables de un delito, y al mismo tiempo concede acción civil para obtener la reparación de los daños que son consecuencia de ese ilícito. Para esta parte, esas acciones civiles de reparación del daño se dirigen directamente en contra del Estado de Chile, porque fueron agentes estatales al servicio de ese Estado y con ocasión de sus funciones, los que infringieron el daño cuya reparación se solicita. Se trata de una nomenclatura nueva, que proviene del derecho de los derechos humanos, la cual tiene al Estado como responsable directo de las violaciones de los derechos esenciales

inferidas por sus agentes, que actúan en cuanto Estado, bajo el mandato, orientación, planificación, anuencia y consentimiento de las autoridades estatales. Así entre otros instrumentos internacionales, lo establece el artículo 63 N°1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en estrecha relación con el artículo 5 de la Constitución Política del Estado. Estos agentes actúan en el marco de funciones estatales, con potestades, recursos materiales y humanos que esa misma organización jurídica pone a su disposición para el cumplimiento de sus tareas.

- I. **La competencia de este Tribunal para conocer y fallar la demanda civil que se interpone en juicio criminal:** Una de las tesis sostenidas por el Fisco de Chile para eximirse del pago de las reparaciones en este tipo de juicios, alude a una interpretación errónea del artículo 10 del Código de Procedimiento Penal, en orden a que el Juez del Crimen, sería incompetente para conocer de estas demandas de reparación. Lo cierto es que el texto actual del artículo citado, modificado por la Ley 18.857, de 6 de diciembre de 1.989, permite en términos amplios la interposición ante el juez que conozca del proceso penal las acciones civiles que persigan la reparación de los efectos patrimoniales que las conductas de los procesados por sí mismas hayan causado o que puedan atribuírseles como consecuencias próximas o directas, de modo que el fundamento de la respectiva acción civil obligue a juzgar las mismas conductas que constituyen el hecho punible objeto del proceso penal. En tal sentido, la excepción de incompetencia absoluta intentada por el Fisco de Chile ha sido mayoritariamente rechazada por los jueces llamados a resolver el conflicto, citando jurisprudencia de la Illtma. Corte de Apelaciones de Santiago.
- II. **Fallos de la Excma. Corte Suprema que rechazan la tesis de la incompetencia del Tribunal en materia civil:** Cita al efecto la sentencia de casación rol Rol 6308-07, de fecha 8 de septiembre del 2008, sentencia de casación rol 10.666-2011 de fecha 04 de junio de 2012, entre otros fallos. Indica que los actos y hechos de los funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ella, son imputables directamente al órgano al cual pertenecen. Esta es la llamada "Teoría del Órgano". De ahí que la responsabilidad extracontractual del Estado se caracterice por ser una responsabilidad "orgánica", de lo cual deriva otra característica, el de ser una responsabilidad DIRECTA.
- III. **Lo que ha fallado la Excma. Corte Suprema, en forma unánime, sobre la responsabilidad del Estado:** Al respecto cita cuatro sentencias: de

fecha 26 de Enero del 2005 "Bustos con Fisco", Rol 3354-03 ; otra de 19 de Octubre del 2005- "Caro con Fisco", Rol 4.004-03 ; otra de 13 de Diciembre del 2005, "Albornoz con Fisco", Rol 4006-03 ; y otra de fecha 20 de Enero del 2006, "Vargas con García y Fisco", Rol 5.489-03, fallos unánimes de la Cuarta Sala del máximo Tribunal, que hace claridad acerca de la responsabilidad el Estado. Asimismo, cita a don Enrique Silva Cimma. Afirma que es importante el reconocimiento de que la responsabilidad extracontractual del Estado se trata de una responsabilidad regida por las normas del derecho público, y que ella emana de la propia naturaleza del Estado, como persona jurídica compleja que debe desarrollar su actividad teniendo presente los principios rectores de las Bases de la Institucionalidad, contenidas en el artículo 1° de la Carta fundamental. Luego, cita el Artículo 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, cuyo precepto consagra que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por el Estado podrá reclamar ante los tribunales de justicia. A su turno, cita el artículo 1 y 4 de la Ley N° 18.575, Orgánica constitucional de bases generales de la administración del estado, así como el artículo 6 y el inciso 2 del artículo 38 de nuestra carta fundamental, entre otras normas, argumentando al respecto. Finalmente indica que las normas citadas encuentran su complemento en diversas disposiciones de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado de Chile, ya sea entre otros la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, esa responsabilidad del Estado está consagrada y reconocida en ese Derecho Internacional Convencional, aún más, lo está también en el Derecho de Gentes o Derecho Internacional Consuetudinario, aplicable en Chile y en todo el mundo, que bajo la fórmula de Principios Generales del Derecho Internacional ha elevado el Derecho a la Reparación de las víctimas como una norma de **IUS COGENS**, esto es, principios obligatorios, inderogables, imprescriptibles y con efecto erga omnes. Que en ese sentido es bueno dirigir la mirada hacia la profusa y rica jurisprudencia internacional emanada de órganos regionales como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos a los que el Estado de Chile les ha reconocido competencia, siendo sus resoluciones vinculantes para todos los Estados suscriptores del Pacto de San José de Costa Rica.

IV. Referencias jurisprudenciales de nuestros Tribunales sobre la aplicación del derecho internacional de los derechos humanos en

materias de reparación: La forma en que incide el derecho Internacional en esta temática de derechos humanos, queda refrendada en: sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 18 de Enero del 2006, Recurso de apelación ingreso 37483-2004, por el Homicidio de Gabriel Marfull; fallo de la 5ta. Sala de la I. Corte de Apelaciones de fecha 10 de Julio del 2006, en causa ingreso 65-2001, "Causa Martínez con Fisco"; fallo de Primera instancia pronunciado por el Ministro del Fuero de la I. Corte de Apelaciones, Sr. Jorge Zepeda, en el denominado caso Silberman, Rol 2182-98, del 27 de Septiembre del 2005; en el mismo sentido un fallo de la I. Corte de Apelaciones de fecha 23 de marzo de 2007, especialmente en su considerando 6°; A todo lo anterior debe agregarse lo resuelto por la Excma. Corte Suprema, con fecha 23 de marzo del 2007, en casación 1325-04 por el Homicidio de Manuel Rojas Fuentes.

V. Lo que ha aprobado Chile recientemente en el seno de las naciones unidas sobre la reparación en materia de derechos humanos: Con fecha 21 de marzo del 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó la Resolución 60-147, denominada "Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones". El Estado de Chile concurrió a la suscripción de esa Resolución, unánimemente aprobada, citando los numerales 13, 15, 18, 19, 20 y 23; además del numeral IV, que hace alusión a la institución de la Prescripción.

VI. El daño provocado y el monto de la indemnización demandada: El Estado de Chile, a través de la acción de sus agentes, ha provocado un daño ostensible, público y notorio a los demandantes de autos. La lógica pura nos dice que ese Estado no podía investigarse a sí mismo, puesto que quedaría en evidencia su compromiso directo con los crímenes. De esa manera el Estado aseguró a sus agentes la impunidad necesaria. Esa es otra dimensión del daño ocasionado, impedir que los familiares de las víctimas supieran qué pasó con sus seres queridos. Con todo derecho pueden sus representados reclamar al Estado la reparación del inconmensurable daño que les ocasionó, por una acción intrínsecamente antijurídica. Se trata de un tipo de daño que es imposible soslayar, de aquellos que no se borran y que son manifiestos para cualquier persona que sufre esa circunstancia traumática. **Marcos Quezada Yáñez**, como toda persona cualquiera fuese su condición social, tenían derecho a su dignidad y al goce y disfrute de derechos esenciales por su condición de ser

humano y persona. Su homicidio, dejó a su familia en la más completa orfandad e inseguridad. Expresa que ese daño que sufrió y padece hasta hoy sus representados, es lo que constituye el daño moral que se demanda. El daño causado es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo caprichosamente. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas. Todos lo sienten por igual, precisamente por nuestra misma naturaleza humana. Finalmente, define lo que es el daño moral de conformidad a la doctrina, citando además jurisprudencia al efecto. Respecto de la prueba, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritaria coinciden en señalar que el daño moral no requiere prueba, citando jurisprudencia al respecto, con la cual coinciden plenamente y finaliza indicando que las angustias, padecimientos y dolores, sumadas a las incertidumbres, miedos, pérdidas de proyectos de vida, inseguridades, son fáciles de entender en su plenitud, y sólo cabe al sentenciador hacer una estimación fundada de su magnitud y del monto de la reparación.

54°) Que de fs. 3.078 a 3.098(Tomo IX), contesta la demanda civil el abogado Procurador Fiscal de Temuco, don Álvaro Sáez Willer, solicitando acoger las excepciones o defensas opuestas y negar lugar a la demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea en todas sus partes; y en el evento improbable que ella se acogiere, rebajar substancialmente el monto de las sumas demandadas por concepto de indemnización de perjuicios, además de acoger la excepción que atañe a los reajustes e intereses, y su forma de cómputo.

Inicia su presentación, acotando que los demandantes civiles demandan una suma total de **\$450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos), a razón de \$150.000.000 para cada uno**, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda, por concepto de indemnización de perjuicio por daño moral derivado de la muerte de Marcos Quezada Yáñez ocurrida el 24 de junio de 1989 y con **costas** de la causa. Solicita que la mencionada demanda sea íntegramente rechazada, por los siguientes fundamentos: **A.** Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Nélida Eliana Yáñez Bustos, por haber sido ya reparados conforme a las leyes de reparación. **B.** Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima directa, respectivamente. **C.** Excepción de prescripción

extintiva. **D.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas. **E.** Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada

A. Excepción de Reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Nélida Eliana Yáñez Bustos, por haber sido ya reparados conforme a las leyes de reparación, a. Marco general sobre las reparaciones ya otorgadas: arguye que, no resulta posible comprender el régimen jurídico de este tipo de reparaciones por infracciones a los Derechos Humanos si no se posicionan correctamente estas indemnizaciones en el panorama jurídico nacional e internacional. Que la comprensión solo puede efectuarse al interior - y desde- lo que ya es común considerar, el ámbito de la llamada "Justicia Transicional". Aduciendo a los valores e intereses en juego en esta disputa indemnizatoria. Que el dilema "justicia versus paz" es uno de los pilares sobre los cuales descansa la justicia transicional. Argumentos en favor de amnistías generales que porten la necesaria tranquilidad a un país, deben lidiar con la imperiosa necesidad de que una sociedad se mire a sí misma y reconozca los errores del pasado para así pronunciar aquel imperioso "nunca más". Proclama que, por otro lado, no debe olvidarse que desde la perspectiva de las víctimas, la reparación de los daños sufridos juega un rol protagónico en el reconocimiento de aquella medida de justicia por tantos años buscada. Que toda reparación existe una compleja decisión de mover recursos económicos públicos, desde la satisfacción de un tipo de necesidades públicas a la satisfacción de otras radicales en grupos humanos más específicos. Refiere a los programas propuestos por la comisiones de verdad o reconciliación.

a. Complejidad reparatoria: Comienza citando a Lira. Posteriormente señala que la llamada Comisión Verdad y Reconciliación o también llamada "Comisión Rettig", en su informe final propuso una serie de "propuestas de reparación" entre las cuales se encontraba una "pensión única de reparación para los familiares directos de las víctimas" y algunas prestaciones de salud. Dicho informe derivó en la Ley 19.123, que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Que el mensaje de dicho proyecto de ley fue claro al expresar que por él se buscaba, en términos generales, "reparar precisamente el daño moral y patrimonial que ha afectado a los familiares directos de las víctimas". Cita lo que el ejecutivo entendió por reparación. Que la compensación de daños morales y mejora patrimonial, son los dos claros objetivos de estas normas reparatorias. Refiere a la discusión de la ley 19.123 señalando como ejemplo las referencias a la reparación moral y patrimonial buscada por el proyecto. Aduce que la idea reparatoria se plasmó de manera bastante clara cuando dentro de las funciones

de la Comisión se indicó le corresponderá especialmente a ella promover “la reparación del daño moral de las víctimas” a que se refiere el artículo 18. Que, asumida esa idea reparatoria, tanto la Ley 19.123 y otras normas jurídicas conexas, han establecido diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esta compensación exhibiendo aquella síntesis que explica cómo nuestro país ha afrontado este complejo proceso de justicia transicional. Indicando que la reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos se ha realizado principalmente a través de tres tipos de compensaciones a saber: reparación mediante transferencia directa de dinero; reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicamente; y reparaciones simbólicas.

b. Reparaciones mediante transferencias directas de dinero: afínica que, diversas han sido las leyes que han establecido este tipo de reparaciones. La ley N° 19.123 ha sido la más importante. Abogando a la discusión legislativa. Cimentando los costos generales que ha significado para el Estado, este tipo de indemnizaciones a diciembre de 2019, detallando las sumas desembolsadas, lo que da un total de \$992.084.910.400. Plantea que desde una perspectiva indemnizatoria, y tal como se indicó en la historia de la ley 19.123, una pensión mensual es también una forma de reparar un perjuicio actual y, aunque ella comporte una sucesión de pagos por la vida del beneficiario, lo que no obstaría a valorizarla para poder saber cuál fue su impacto compensatorio. Que ellas son, una buena manera de concretar las medidas que la justicia transicional exige en estos casos obteniéndose con ello, compensaciones razonables que están en coherencia con las fijadas por los tribunales en casos de pérdidas culposas de familiares.

c. Reparaciones mediante la asignación de nuevos derechos: Reseña que la mayoría de los procesos de justicia transicional, la reparación no se realiza sólo mediante transferencias monetarias directas, sino que también a través de la concesión de diversos derechos a prestaciones. Exterioriza lo mencionado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en cuanto al objetivo de un programa de reparación. Invocando a las Ley 19.123, 19.980, 19.992 y 20.405. Aduciendo a los programas y beneficios que están contemplan, además de la forma de obtenerlos.

d. Reparaciones simbólicas: Apoya que, al igual que todos los demás proceso de justicia transicional, parte importante de la reparación por los daños morales causados a la víctima de DD.HH se realiza a través de actos positivos de reconocimiento y recuerdo de los hechos que dieron lugar a aquellas violaciones. Que la doctrina, en este sentido, se ha inclinado por estimar que la indemnización

del daño moral tiene precisamente un carácter satisfactivo, consistente en dar a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio, que le permita atenuar sus efectos, morigerándolos o haciéndolos más soportables. Cita a Fueyo, refiriéndose a la naturaleza de la reparación del daño extrapatrimonial. Destaca las ejecuciones de diversas obras de reparaciones simbólicas realizadas.

e. La identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas: Concluye que los esfuerzos del Estado por reparar a las víctimas de DD.HH no solo han cumplido todos los estándares internacionales de Justicia Transicional, sino que han provisto indemnizaciones razonables con la realidad financiera que efectivamente han apuntado a compensar a las víctimas por los daños, tanto morales como patrimoniales sufridos a consecuencia de los violaciones a los Derechos Humanos. Demarca que, así las cosas, tanto las indemnizaciones que se solicitan en estos autos como el cumulo de reparaciones hasta ahora indicadas pretenden compensar los mismo daños ocasionados por los mismo hechos. De esta forma, los ya referidos mecanismos de reparación han compensado precisamente aquellos daños, no pudiendo por ello ser exigidos nuevamente. Funda sus argumentos citando fallos de la Excma. Corte Suprema, la Corte Interamericana de Justicia, normativa internacional y doctrina atingente. Manifestando que la acción deducida en estos autos basada en los mismos hechos y pretendiendo ella resarcir los mismos daños que han inspirado precisamente el cúmulo de acciones reparatorias ya enunciadas, es que se opone la excepción de reparación satisfactiva por haber sido ya indemnizado el demandante en conformidad a las leyes 19.123 y 19.980 y sus modificaciones.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima directa, respectivamente, opone esta excepción respecto de los demandantes Juan Vicente Yáñez Aedo y Jorge Absalón Quezada Yáñez, quienes invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima directa, respectivamente, por haber sido preterida legalmente tal calidad. Incoa que las indemnizaciones solicitadas en autos se desenvuelven en el marco de infracciones a los Derechos Humanos, cuya comprensión se da en el ámbito de la Justicia Transaccional, tanto en el Derecho Interno como en el Internacional. Que el Estado debe satisfacer numerosas necesidades de toda la sociedad – que lo anterior no puede ser un factor que impida considerar la reparación pecuniaria de aquellos que son y fueron directamente afectados en el proceso de violación a los Derechos Humanos. Alude al esfuerzo de la ley 19.123 en esta materia y los términos y costo para el Estado lo que especifica. Que se determinó una

indemnización legal, que optó beneficiar al núcleo familiar más cercano, esto es padres, hijos y cónyuge, pretiriéndose al resto de las personas ligadas por vínculo de parentesco o de amistad y cercanía, quienes fueron excluidas, sin perjuicio de otras reparaciones satisfactivas a éstos últimos. Que ante el pretium doloris, está limitada la determinación de quienes son los sujetos de daño por repercusión o rebote para deducir acciones pecuniarias, pues la extensión de la reparación económica debe zanjarse en algún punto. Señala el Derecho Comparado, en el Common Law, donde se alude al concepto de “lass of consortion” que despliega en sus fundamentos, además de normativa interna. Sostiene que la pretensión económica demandada por la referida demandante es improcedente, porque en la especie, existe un sistema legal de reparación pecuniaria en el que se excluyó a quien ostente la calidad de hermano y padrastro de la víctima, que es la que dicha actora invoca como fundamento de su acción. a).Reparación satisfactiva: que el hecho que el demandante no tenga derecho a un pago de dinero, no significa que en la especie no haya operado otras formas de reparación mediante la entrega de importantes prestaciones, como aconteció en el caso de autos, y que vinieron a satisfacer el daño moral sufrido. Demarca normativa, doctrina, las reparaciones simbólicas y programa de reparación y atención Integral de Salud, fundamentando con jurisprudencia al respecto. Que estando la referida acción de autos basadas en los mismos hechos y pretendiendo ella indemnizar los mismos daños que han inspirado el cumulo de acciones reparatorias, es que opone formalmente la excepción de reparación satisfactiva a la acción deducida por los demandantes, por haber sido reparado el daño derivado de la muerte de Marcos Quezada Yáñez, mediante el conjunto de reparaciones de diversos orden, incluyendo las simbólicas y de beneficio de salud, a través del programa PRAIS.-

C.- Excepción de prescripción extintiva:

a. Normas de prescripción aplicables: en subsidio opone la excepción de prescripción de las acciones civiles de indemnización de perjuicios deducida con arreglo a lo dispuesto en el artículo en el artículo 2.332 del Código Civil, en relación con el artículo 2.497 del mismo Código; solicitando que, por encontrarse prescrita la demanda, se rechace en todas sus partes. Apunta que, según lo expuesto en la demanda, el fallecimiento de Marcos Quezada Yáñez se produjo el 24 de junio de 1989. Es del caso que aun entendiendo suspendida la prescripción durante el período de la dictadura militar, iniciada en septiembre de 1973, por la imposibilidad de las víctimas de ejercer las acciones legales correspondientes ante los Tribunales de justicia, hasta la restauración de la democracia, o aun, hasta la entrega pública del Informe de la Comisión de

Verdad y Reconciliación, hechos acaecidos el 11 de marzo de 1990 y el 10 de noviembre de 2004, respectivamente, a la fecha de notificación de la demanda de autos, esto es, el **15 de enero de 2021**, ha transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva que establece el citado artículo 2.332 del Código Civil. En consecuencia, oponen la excepción de prescripción establecida en el artículo 2.332 del Código Civil. En subsidio, en caso de estimarse que la norma anterior no es aplicable en autos, opone la excepción de prescripción extintiva de 5 años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2.515, en relación con el artículo 2.514 del Código Civil, ya que entre la fecha en que se habría hecho exigible el derecho a indemnización y la fecha de notificación de la demanda de autos, transcurrió con creces el plazo que establece el artículo 2.515 del Código Civil.

b. Generalidades sobre la prescripción: Aduce que por regla general, todos los derechos y acciones son prescriptibles, citando doctrina al efecto. Expresa que, la imprescriptibilidad es excepcional y requiere siempre declaración explícita, la que en este caso no existe. Que pretender que la responsabilidad del Estado sea imprescriptible, sin que exista un texto constitucional o legal expreso que lo disponga, llevaría a situaciones extremadamente graves, absurdas y perturbadoras, citando jurisprudencia nacional al efecto. Advierte que la prescripción es una institución universal y de orden público. Que las normas del Título XLII del Código Civil, que la consagra y, en especial, las de su Párrafo I, se han estimado siempre de aplicación general a todo el derecho y no solo al derecho privado. Que entre estas normas está el artículo 2.497 del citado cuerpo legal, que manda aplicar las normas de la prescripción a favor y en contra del Estado, cuyo tenor cita. Adopta que, esta última disposición consagra, con carácter obligatorio, el principio de que, al igual que tratándose de las relaciones entre particulares la prescripción afecta o favorece, sin excepciones, a las personas jurídicas de derecho público, a pesar de que éstas, como señala el artículo 547, inciso 2º, del Código Civil, se rijan por las leyes y reglamentos especiales. Insiste en que la prescripción es una institución de aplicación general en todo ámbito jurídico y de orden público. Adopta que la responsabilidad que se atribuye al Estado y la que se reclama en contra de particulares tienen la misma finalidad: resarcir un perjuicio, reponiendo en el patrimonio dañado, el menoscabo que haya sufrido. Adosa que toda acción patrimonial crediticia se extingue por prescripción, de conformidad con los artículos 2.514 y 2.515 del Código Civil.

c. Fundamento de la prescripción: comunica que, la prescripción tiene por fundamento dar fijeza y certidumbre a toda clase de derechos emanados de las

relaciones sociales y de las condiciones en que se desarrolla la vida, aun cuando éstas no se ajusten a principios de estricta equidad, que hay que subordinar, como mal menor, al que resultaría de una inestabilidad indefinida. Que, los planteamientos doctrinarios de los que se vale, le permite concluir que la prescripción, es una institución estabilizadora. Que está reconocida por el ordenamiento jurídico con una perspectiva esencialmente pragmática, en atención a que existe bien jurídico superior que se pretende alcanzar, consistente en la certeza de las relaciones jurídicas, continua sus argumentos en ese contexto. Finalmente, refiere que en la especie, el ejercicio de la acción indemnizatoria ha sido posible durante un número significativo de años, desde que los demandantes estuvieron en situación de hacerlo.

d. Jurisprudencia sobre la materia: Cita la sentencia del pleno de la Excma. Corte Suprema de 21 de enero de 2013. Reflexionando en los diferentes considerando citados, 1). Que el principio general que rige la materia es de la prescriptibilidad de la acción de responsabilidad civil, de modo que la imprescriptibilidad debe, como toda excepción, ser establecida expresamente y no construida por analogía o interpretación extensiva. Agrega que, 2). Los Tratados Internacionales invocados, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Convenio de Ginebra sobre Tratamiento de los Prisioneros de Guerra y la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, no contienen norma alguna que declare imprescriptible la responsabilidad civil; la imprescriptibilidad que algunos de ellos establece se refiere solo a la responsabilidad penal. 3). Que no existiendo una norma especial que determine el plazo de prescripción debe aplicarse en estos casos el derecho común, que en esta materia está representado por la regulación del Código Civil relativa a la responsabilidad extracontractual, y en particular por el artículo 2.332 que fija un plazo de cuatro años desde la perpetración del acto. 4). Que, no obstante la letra de dicho precepto, el plazo debe contarse no desde la desaparición del secuestrado, sino desde que los titulares de la acción indemnizatoria tuvieron conocimiento y contaron con la información necesaria y pertinente para hacer valer el derecho al resarcimiento del daño ante los tribunales de justicia. 5º) Que el inicio del plazo debe colocarse, en consecuencia, al momento de emitirse el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues desde ese momento se tuvo certidumbre de la condición de víctima de la personas desaparecida. Adiciona fallo de la Excma. Corte Suprema.

e. Contenido patrimonial de la acción indemnizatoria: ilustra que, la indemnización de perjuicios, cualquiera sea el origen o naturaleza de los mismos, no tiene un carácter sancionatorio, de modo que jamás ha de cumplir un rol punitivo para el obligado al pago y su contenido es netamente patrimonial. De allí que no ha de sorprender ni extrañar que la acción destinada a exigirla esté -como toda acción patrimonial- expuesta a extinguirse por prescripción. Arguye que debe considerarse, lo planteado por la doctrina fiscal sustentada en sus diversas defensas y lo ha recogido la jurisprudencia, que en la especie se ha ejercido una acción de contenido patrimonial que persigue hacer efectiva la responsabilidad extracontractual del Estado, por lo que no cabe sino aplicar, en materia de prescripción, las normas del Código Civil, lo que no contraria la naturaleza especial de la responsabilidad que se persigue, en atención a que la acción impetrada pertenece- como se dicho- al ámbito patrimonial. En efecto basta considerar que el derecho a indemnización puede ser y ha sido objeto de actos e disposición, tales como renuncia o transacción, por lo que no existe fundamento plausible para estimar que se trata de acciones ajenas a la prescripción liberatoria que no es sino una suerte de renuncia tacita por el no ejercicio oportuno de las acciones.

f. Normas contenidas en el Derecho Internacional: funda que, en relación con las alegaciones expuestas por los actores en cuanto a que la acción patrimonial que persigue la reparación por los daños reclamados sería imprescriptible conforme al derecho internacional de los derechos humanos, en ese sentido, se hará cargo en particular de ciertos instrumentos internacionales, adelantando desde ya que ninguno contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en esta materia. Reseña a la "Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio de Ginebra de 1949, la Resolución N° 3.074 de 3 de diciembre de 1973 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Convención Americana de Derechos Humanos. Acota que, el planteamiento de esta defensa fiscal ha sido reconocido por nuestro más alto Tribunal del país, citando al efecto el caso "Neira Rivas, Gloria con Fisco de Chile" y "Martínez Rodríguez v otra con Fisco de Chile". No habiendo, en consecuencia, norma expresa de derecho internacional de derechos humanos, debidamente incorporada a nuestro ordenamiento jurídico interno, que disponga la imprescriptibilidad de la obligación estatal de indemnizar, y no pudiendo tampoco aplicarse por analogía la imprescriptibilidad penal en materia civil, el Tribunal no puede apartarse del claro mandato de la ley interna al resolver esta

contienda y aplicar las normas contenidas en los artículos 2.332 y 2.497 del Código Civil, solicitando que con el mérito de lo expuesto se rechazase la demanda de autos, por encontrarse prescritas las acciones civiles deducida.

D. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: expone que sin perjuicio de estar ya negada la obligación misma de indemnizar con respecto a los hechos a que se refiere la demanda de autos, se hace valer acá las siguientes excepciones y defensas en cuanto a la existencia del daño reclamado, naturaleza de las indemnizaciones solicitadas y los montos pretendidos. Aduce que la acción indemnizatoria por daño moral y que se solicita por este concepto la suma \$450.000.0000.-, en total, más reajustes e intereses desde la notificación de la demanda, y costas. Anexa que respecto al Juan Yáñez Aedo no existe antecedente que acredite haber tenido tal calidad, cuya parte de la prueba en ella recae, siendo la única forma de probarlo con la respectiva partida de nacimiento o bautismo, la correspondiente inscripción o subscripción del acto de reconocimiento o del fallo judicial que determina la filiación o instrumentos auténticos mediante los cuales se haya determinado legalmente; a falta de los cuales solo puede probar en virtud al juicio de filiación, conforme a los artículos 305 y 309 del Código Civil.-

a. Fijación de la indemnización por daño moral: Alega que con relación al daño moral debe considerarse que éste consiste en la lesión o detrimento que experimenta una persona, en general, en sus atributos o cualidades morales. En términos generales refiere que la indemnización de perjuicios tiene por objeto restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgándole a la víctima un valor equivalente a la cuantía del daño sufrido. Citando la definición que ha realizado la Excma. Corte Suprema al respecto sobre el perjuicio moral. Anexa que en esa perspectiva la cifra pretendida en la demanda como compensación del daño moral de \$450.000.000, en total (a razón de \$150.000.000 para cada uno), resultan excesivas, en consideración las acciones y medidas de reparación adoptadas por el Estado de Chile en esta materia, y los montos promedios fijados por los Tribunales de justicia.

b. En subsidio de las excepciones precedentes, la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales: en subsidio de las excepciones de reparación satisfactiva y de prescripción de la acción, respectivamente, alega en todo caso que en la fijación del daño moral por los hechos de autos el Tribunal debe considerar todo los pagos recibidos a través de los años por los actores, o sus familiares, de parte del Estado conforme a las leyes de reparación y también a los beneficios extrapatrimoniales que estos

cuerpos legales contemplan, pues todos ellos tuvieron por objeto reparar el daño moral. De no accederse a esta petición subsidiaria implicaría un doble pago por un mismo hecho, lo cual contraría los principios jurídicos básicos del derecho en orden a que no es jurídicamente procedente que un daño sea indemnizado dos veces. Además es pertinente hacer presente que para la regulación y fijación del daño moral deben considerarse como un parámetro válido los montos establecidos en las sentencias de los Tribunales en esta materia.

E. Improcedencia del pago de reajustes e intereses en la forma solicitada: Que no procede condenar al pago de reajustes e intereses en tanto no exista una sentencia ejecutoriada que así lo disponga. Realiza argumentos en esa línea citando doctrina. Luego expresa que, en el hipotético caso de que se resolviera acoger la acción deducida en autos y se condene a su representado al pago de indemnizaciones de perjuicios, tales reajustes e intereses sólo podrán devengarse desde que la sentencia condenatoria se encuentre firme o ejecutoriada y su representado incurra en mora.

F. Respecto de las costas de la causa: que atendido el compromiso del Estado democrático con los Derechos Humanos, yendo más allá de lo que en derecho le era exigible, asumiendo los costos no solo de la reparación de las víctimas, sino que también de la promoción y conmemoración de los Derechos Humanos como eje estructurante de la vida en sociedad, resulta improcedente que se le condene en costas, siendo, además, evidente que a todo evento, tiene motivo plausible para litigar.

55°) Que haciéndonos cargo de la **contestación de la demanda efectuada por el Fisco de Chile**, reflexionaremos de la siguiente manera:

Para un mejor entendimiento de la contestación efectuada por el Fisco de Chile, se estructurará su presentación de la siguiente forma:

- A.** Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Nélida Yáñez Bustos, por haber sido ya reparada en conformidad a las leyes de reparación.
- B.** Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandante por quienes invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima.-
- C.** Excepción de prescripción extintiva.
- D.** En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas.

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por la actora Nélida Yáñez Bustos, por haber sido ya reparada en conformidad a las leyes de reparación. (*Respecto de la*

demanda civil de indemnización de perjuicios deducida por el abogado Sebastián Saavedra Cea). Se estará a lo ya razonado en las siguientes causas: **Causa rol 27.525** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio calificado de Segundo Cayul Tranamil, sentencia de 26 de diciembre de 2014; **Causa rol 27.526** del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el homicidio calificado de Juan Segundo Palma Arévalo y Arcenio del Carmen Saravia Fritz, sentencia de 18 de diciembre de 2014; **Causa rol 45.345** del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio calificado de Juan Tralcal Huenchumán, sentencia de 11 de diciembre de 2014; **Causa rol 113.990** del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Manuel Alberto Burgos Muñoz, sentencia de fecha 06 de noviembre de 2015; **Causa rol 113.989**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado de Segundo Enrique Candía Reyes, sentencia de fecha 18 de abril de 2016; **Causa rol 18.780** del Juzgado de Letras de Curacautín, seguida por el delito de homicidio de Jorge San Martín Lizama, sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015; **Causa rol 29.877**, del ingreso del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, seguida por el delito de homicidio calificado de Nicanor Moyano Valdés, sentencia de 25 de enero de 2016; **Causa rol 45.344**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de Homicidio calificado de Osvaldo Moreira Bustos y apremios ilegítimos de Juana Rojas Viveros, sentencia de 23 de marzo de 2016; **Causa rol 45.371**, del Juzgado de Letras de Lautaro, por el delito de apremios ilegítimos de Jorge Contreras Villagra y otros, sentencia de 17 de agosto de 2016, **Causa rol 45.342**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de homicidio en la persona de Gumerindo Gutiérrez Contreras, sentencia de 09 de octubre de 2015; **Causa rol 29.869**, del Juzgado de Letras de Pitrufrquén, por el homicidio de Guillermo Hernández Elgueta, sentencia de 29 de diciembre de 2016; **Causa rol 27.527**, del Juzgado de Letras de Carahue, seguida por el delito de homicidio de Anastasio Molina Zambrano, sentencia de 15 de septiembre de 2016; **Causa rol 114.001**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Osvaldo y Gardenio, ambos de apellido Sepúlveda Torres, sentencia de 17 de noviembre de 2016; **Causa rol 113.986**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el homicidio de Moisés Marilao Pichún, sentencia de fecha 24 de junio de 2016; **Causa rol 63.541**, del Juzgado de Letras de Angol, seguida por el homicidio de Sergio Navarro Mellado, sentencia de 27 de mayo de 2016; **Causa rol 45.363**, del ingreso del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el delito de secuestro

calificado de Gervasio Huaiquil Calviqueo, sentencia de 19 de mayo de 2017; **Causa rol 114.048**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, por el secuestro calificado de Arturo Navarrete Leiva, sentencia de 10 de febrero de 2017; **Causa rol 10.868**, del Primer Juzgado del Crimen de Puerto Montt, seguida por el delito de apremios ilegítimos o aplicación de tormentos seguida de muerte en la persona de Juan Lleucún Lleucún, sentencia de 22 de noviembre de 2017; **Causa rol 114.003**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio de Gabriel Salinas Martínez, sentencia de 10 de noviembre de 2017; **Causa rol 10.851**, de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, seguida por el homicidio simple, en carácter de reiterado de Pedro Antonio Bahamonde Rogel, José Santiago Soto Muñoz, Héctor Hugo Maldonado Ulloa y José Mañao Ampuero, sentencia de 20 de enero de 2016; **Causa rol 45.343**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el homicidio calificado en las personas de Segundo Lepín Antilaf, Juan Segundo Nahuel Huaquimil, Julio Augusto Ñiripil Paillao, Segundo Levío Llaupe, Víctor Yanquin Tropa y Heriberto Collío Naín, sentencia de 31 de agosto de 2017; **Causa rol 57.071**, del Juzgado de Letras de Victoria seguida por el Homicidio Calificado en la persona de Jorge Arturo Toy Vergara, perpetrado en la comuna de Victoria, sentencia del 12 de octubre de 2017, **Causa rol 113.997**, del Juzgado de Juzgado del Crimen de Temuco para investigar el delito de Secuestro Calificado en la persona de Segundo Elías Llancaqueo Millán, perpetrado en la comuna de Lautaro en el mes de abril de 1975, sentencia del 19 de enero de 2018; **Causa rol 45.354**, del Juzgado de Letras de Lautaro seguida por el Secuestro calificado de Samuel Huichallán Levián, Ceferino Antonio Yaufulem Mañil, Miguel Eduardo Yaufulem Mañil y Oscar Rumualdo Yaufulem Mañil, sentencia del 03 de agosto de 2020; **Causa rol 45.361**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el Secuestro Calificado de Manuel Elías Catalán Paillal, sentencia de 23 de diciembre de 2020; **Causa rol 114.000**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio simple de Waldo Enrique Rivera Concha, sentencia de 29 de abril de 2020; **Causa rol 4-2010**, de la Corte de Apelaciones de Valdivia, seguida por el homicidio calificado en la persona de Víctor Carreño Zúñiga, sentencia de 16 de abril de 2018; **Causa rol 45.362**, del Juzgado de Letras de Lautaro, seguida por el secuestro calificado en la persona de José Domingo Llabulén Pilquinao, sentencia de 16 de febrero de 2018; **Causa rol 114.007**, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de Exequiel Zigomar Contreras Plotsqui, sentencia de 23 de octubre de 2018; y

Causa rol 114.042, del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, seguida por el homicidio calificado en la persona de José Alberto Fuentes Fuentes, sentencia de 17 de agosto de 2018. Todos los anteriores fallos condenatorios y ejecutoriados, que han rechazado los argumentos reiterados en el tiempo sobre estas excepciones que ha interpuesto el Fisco de Chile.

a.1) Sobre lo anterior, **esta excepción debe ser rechazada**. En efecto, cabe hacer presente que el demandando no señala ninguna norma de las leyes que cita donde se indique que los familiares, ya sea cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas de violaciones de Derechos Humanos ocurridas durante el régimen militar año 1973 y siguientes, no puedan demandar por indemnización por daño moral. Por qué no la cita: primero porque no existe y segundo porque en el ordenamiento jurídico chileno, tratándose de violaciones a los derechos humanos y por las obligaciones generales establecidas en los artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto es, respetar, garantizar, y no discriminar en el goce y ejercicio de los derechos y libertades, no es posible obstruir a persona alguna el derecho de acceso a la justicia (artículos 8 y 25 de dicha Convención). No es óbice interponer las acciones civiles respectivas por el daño causado a las víctimas por violación a los derechos humanos y las reparaciones y prestaciones estatales de todo tipo que pueda otorgar el Estado en cumplimiento a los estándares internacionales. En este punto se seguirá la línea jurisprudencial desarrollada **en fallos por la Excma. Corte Suprema**, en especial:

a.2) El fallo de 01 de abril de 2014, **rol 1424-2013**, sentencia de reemplazo, considerando 13°, motivo que también cita fallos en el mismo sentido, **roles 2918-13, 3841-12 y 5436-10**. Que en síntesis expresa, en relación a la improcedencia alegada por el Fisco de Chile, que esta no es efectiva. Así en términos precisos, *la acción civil es la obtención de la compensación íntegra de los daños ocasionados por el actuar de los Agentes del Estado de Chile*. Las disposiciones de derecho internacional deben tener aplicación preferente en nuestro régimen jurídico al tenor del artículo 5° de la Constitución Política de la República. Del mismo modo el hecho que los demandantes hayan sido favorecidos por el Estado por la Ley 19.123 y leyes posteriores no es óbice para demandar civilmente (tanto la cónyuge, los hijos y los hermanos) toda vez que la citada Ley no establece de modo alguno la incompatibilidad que reclama el Fisco de Chile.

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes por quienes invocan la calidad de padrastro y hermano de la víctima. Como se ha razonado en las múltiples sentencias que se han citado,

las que han sido falladas por este Tribunal y confirmadas por los Tribunales Superiores, no existe ninguna norma en materia de indemnización por delitos de lesa humanidad como el que se investiga en esta causa, que los hermanos no puedan demandar indemnización por la muerte en este caso de Marcos Quezada Yáñez. En este apartado el Tribunal reproduce los fundamentos dados precedentemente. Respecto al demandante que reviste la calidad de padrastro, en consecuencia para la época de los hechos 24 de junio de 1989, el demandante estaba en calidad de padrastro y era parte del hogar de Marcos Quezada Yáñez. Toda vez que según consta a fs. 3.706 y siguientes (Tomo XI) es el padre de dos de sus hermanos, a saber Wilson Reiner Yáñez Yáñez y Sergio Omar Yáñez Yáñez, evidenciando que a lo menos desde el año 1978 Juan Yáñez Aedo era parte del núcleo familiar de la víctima de autos,-

Del mismo modo la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el fallo Trujillo Oroza vs Bolivia del 27 de febrero de 2002 (reparaciones y costas) en el párrafo 61: *“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, como en el presente caso, cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados. La obligación de reparar que se regula, en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los beneficiarios) por el derecho internacional, no puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado invocando para ello disposiciones de su derecho interno.”* De la misma forma en el caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras del 21 de julio de 1989 en su párrafo 26 *“La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (restitutio in integrum), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior y la reparación de las consecuencias que la infracción produjo y el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales incluyendo el daño moral.”*. Y luego está el caso Juan Humberto Sánchez vs Honduras interpretación de sentencia del 26 de noviembre de 1993, en su párrafo 59: *“ La Corte ha evolucionado en sus criterios sobre la sucesión en su reciente sentencia dictada en el caso Caracazo vs Venezuela, al otorgar determinado porcentaje de las indemnización por sucesión a los hijos, cónyuges o compañera, padres o a quienes hubieran tenido una relación afectiva del mismo carácter, en su condición de padre de crianza, tíos, tías o abuelos ”*. En relación a la misma sentencia, en las reparaciones y

costas del 2002 en su párrafo 71 en relación con el reglamento vigente dice: “*Los familiares ascendientes, hermanos, cónyuges o compañeros permanentes o aquellos determinados por la Corte en su caso.*”

A mayor ahondamiento en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro “*Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007*” (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro “*Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena*” (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Complementando lo anterior con lo dispuesto en el artículo 31 del Código Civil “*Parentesco por afinidad es el que existe entre una persona que está o ha estado casada y los consanguíneos de su cónyuge. La línea y el grado de afinidad de una persona con un consanguíneo de su cónyuge, se califican por la línea y grado de consanguinidad de dicho cónyuge con el referido consanguíneo. Así, uno de los cónyuges está en primer grado de afinidad, en la línea recta, con los hijos habidos por su cónyuge en anterior matrimonio, y en segundo grado de afinidad, en la línea transversal, con los hermanos de su cónyuge. Las leyes u otras disposiciones que hagan referencia a las expresiones marido y mujer, marido o mujer, se entenderán aplicables a todos los cónyuges, sin distinción de sexo, orientación sexual o identidad de género*”.- **Así las cosas no es posible dar lugar a la excepción de preterición legal alegada por el Consejo de Defensa del Estado.**-

C. Que en cuanto a la excepción de prescripción extintiva del artículo 2.332 en relación al artículo 2.497 y 2.515 en relación al artículo 2.514 del Código Civil: También **será rechazada**. Este Tribunal, en igual sentido, estará a lo ya resuelto por la Excma. Corte Suprema en el fallo de remplazo **rol 1424-2013** de 1 de abril de 2014, considerando 11°, el cual en síntesis y en lo pertinente, señala que tratándose de un delito de lesa humanidad cuya acción penal persecutoria es imprescriptible, no resulta coherente entender que la acción civil indemnizatoria esté sujeta a las normas sobre prescripción establecidas en la ley civil interna, ya que ello contraría la voluntad expresa manifestada por la normativa internacional sobre Derechos Humanos, integrante del ordenamiento jurídico nacional por disposición del inciso segundo del artículo 5° de la Carta Fundamental, que consagra el derecho de las víctimas y otros legítimos titulares a obtener la debida reparación de todos los perjuicios sufridos a consecuencia del acto ilícito, e incluso por el propio Derecho Interno, que en virtud de la Ley N° 19.123 y su posterior modificación contenida en la Ley N° 19.980, reconoció de manera explícita la innegable existencia de los daños y concedió también a los familiares de las víctimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados y ejecutados políticos, por violación a los derechos humanos en el período 1973-1990, reconocidos por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, beneficios de carácter económico o pecuniario. Por consiguiente, agrega la Excma. Corte Suprema, cualquier diferenciación efectuada por el juez, en orden a dividir ambas acciones y otorgarles un tratamiento diferenciado, es discriminatoria y no permite al ordenamiento jurídico guardar la coherencia y unidad que se le reclama. Como se aprecia, la Excma. Corte Suprema de manera sostenida en el tiempo ha rechazado esta excepción de prescripción extintiva, como se puede observar en este fallo y otros posteriores, como en causas roles 15.294-2018 y 2.471-18 del ingreso de la Excma. Corte Suprema, entre otros. Sobre la materia también es importante señalar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018, el que se relaciona con la alegada responsabilidad del Estado por violación de los derechos a las garantías judiciales y protección judicial como consecuencia de la aplicación de la figura de prescripción de acciones civiles de reparación relacionadas con crímenes de lesa humanidad. Las presuntas víctimas son siete grupos de personas que, entre 1997 y 2001, interpusieron por separado siete acciones civiles de indemnización de perjuicios, en razón del secuestro y desaparición o ejecución de sus familiares por parte de agentes estatales en 1973 y 1974, durante la dictadura militar. Tales acciones fueron rechazadas entre 1999

y 2003, por juzgados, Tribunales de apelación o la Corte Suprema de Justicia, con base en la aplicación del plazo de la figura de prescripción establecida en el Código Civil. Si bien las presuntas víctimas han recibido una pensión mensual administrativa en virtud de lo dispuesto en la Ley 19.123 de 1992, así como otros beneficios en algunos casos (bono de reparación o bonificación compensatoria), la Comisión consideró que la existencia de un programa administrativo de reparaciones no excluye la posibilidad de que las víctimas de graves violaciones opten por reclamar reparación por vía judicial y que, tratándose de crímenes de lesa humanidad, es desproporcionado negarles sus derechos a una reparación bajo el argumento de prescripción. Sobre estos hechos, en el párrafo 13, el Estado de Chile acepta los hechos que se han tenido por probados por la Comisión en el Capítulo IV de su Informe. En los puntos resolutivos la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Chile por violación al derecho de acceso a la justicia, en los términos de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma y se ordena además al Estado a pagar determinadas sumas dinero.

E. En cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas: Que en un examen somero de las siguientes Constituciones Chilenas la expresión para referirse a los Tribunales, es “Tribunales de Justicia”. De esta forma , lo hacían los siguientes textos: de 1822, capítulo I , artículo 158, donde a los Tribunales se les denomina “Tribunales de Justicia”; de 1823, título XIII, artículo 143, “Suprema Corte de Justicia”; de 1833, capítulo VIII, “De la administración de justicia”; de 1925, artículos 23 y 39, aluden a la expresión “Tribunales de Justicia”; de 1980, artículos 45, 52 N° 2 letra c) y 76 se refieren a la expresión “Tribunales de Justicia”. En consecuencia, la tradición constitucional, constata que el nombre para referirse a los Tribunales para que ejerzan su función no es de Tribunales de Ley, Tribunales de Derecho, Tribunales de Jurisprudencia, Tribunales de administración, sino que es **Tribunales de Justicia, lo que significa que tienen una conexión directa con este valor e ideal Constitucional**. Por lo tanto, siempre los Tribunales en conformidad, además, al Código Iberoamericano de Ética Judicial, vigente en Chile para los magistrados, en su artículo 35 señala: “el fin último de la actividad judicial es realizar la justicia por medio del Derecho”. Con mayor énfasis los jueces, frente a casos extraordinarios, únicos, irrepetibles que puedan suceder en una República, los Tribunales deben considerar la colisión que pueda producirse entre el Derecho positivo y la Justicia, debiendo considerarse, además, que la Corte de Apelaciones de Temuco ya recogió esta tradición constitucional de

principios y valores en el fallo rol 45-2008 de 1 de septiembre de 2008, recaído en la **causa rol 113.959 del Primer Juzgado del Crimen de Temuco, caso “Curiñir Lincoqueo”**. Sólo a modo de ejemplo, ya que hay muchos sobre la materia, la Corte Constitucional Federal de la Republica Bonn, en una decisión ya en 1953, citando a Radbruch, declaró que en interés de la seguridad jurídica, un conflicto entre una prescripción de Derecho positivo y la justicia de fondo se resuelve normalmente en favor de la primera; sin embargo, cuando la discrepancia entre una ley positiva y la justicia llega a un grado intolerable, la ley por ser derecho injusto, debe ceder ante la justicia (**Antonio Pedrals: Atisbos de Supralegalidad en el ordenamiento positivo**. Universidad de Valparaíso, 1982, pág. 584). Que en este caso es aplicable, a propósito de la indemnización reclamada.

c.1) Que asimismo podemos decir que la naturaleza humana es de tal condición que adquiere un deseo de actuar justamente cuando hemos vivido en un marco de Instituciones justas y nos hemos beneficiado de ellas. (**John Rawls. Una Teoría de la Justicia**. Fondo de Cultura Económica, año 2006, página 412).

c.2) Que en la misma línea, el autor citado en su obra *Liberalismo Político*, igual editorial, año 2013, página 224 y 225, donde expresa que los Tribunales cuando deban decidir los casos deben recurrir a los valores políticos que en su opinión pertenecen a la comprensión más razonable del concepto público de la justicia y a sus valores políticos de justicia y de razón pública (esto no tiene que ver con su propia moral personal) pues, los valores anotados son los valores que la ciudadanía y en general todos creen de buena fe, como les exige el deber de civilidad y que se espera que suscriban todos los ciudadanos en tanto personas razonables y racionales. Agrega este Tribunal que el valor justicia consagrado en nuestras Constituciones por lo menos desde 1822, es un acervo que cualquier ciudadano de una república independiente y soberana, como la chilena, adhiere.

c.3) Que continuando con lo anterior yendo más al fondo en esta introducción, si uno analiza, incluso, el desarrollo del Derecho Civil y su interpretación, como lo hizo **Alejandro Guzmán Brito** en su artículo *La historia Dogmática de las Normas sobre Interpretación recibidas por el Código Civil de Chile*, (Interpretación, Integración y razonamientos Jurídicos Editorial Jurídica de Chile, año 1992, página 77) en cuanto a que toda la evolución del derecho civil desarrollado por los jurisconsultos romanos y sus sucesores puede entenderse al Derecho como equidad constituida, lo mismo podemos decir con la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de

Derechos Humanos, en especial en materia de reparación integral a las víctimas. Aquí el Derecho es equidad constituida. Del mismo modo, en materia de reparaciones, el autor chileno **Claudio Nash Rojas**, que ha hecho un estudio sistemático y completo hasta ahora en su libro *“Las Reparaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 1988 - 2007”* (editorial Facultad de Derecho Universidad de Chile, Centro de Derechos Humanos) y también en su libro *“Responsabilidad Internacional Del Estado En La Jurisprudencia Internacional y La Experiencia Chilena”* (Editorial Legal Publishing) donde manifiesta en forma clara, en páginas 67 y siguientes del primero, que la Corte Interamericana ha señalado que en aquellos casos en que se han producido violaciones de los derechos y libertades convencionales, el Estado tiene el deber de actuar en el ámbito interno de forma tal que se determine la verdad de los hechos violatorios de la Convención, se juzgue y sancione a los responsables y se repare a las víctimas. Todo ello en el entendido que las situaciones de impunidad pueden inducir a futuras violaciones de Derechos Humanos. Agrega, además, este Tribunal, que lo anterior se ve refrendado por el artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo mismo en el segundo libro del autor mencionado, página 183, donde luego de hacer un análisis exhaustivo de la jurisprudencia chilena, concluye que la reparación siempre debe ser integral porque se debe prestar atención a la persona de la víctima y no el Estado victimario y, además, en el ámbito interno, el Estado tiene la obligación de evitar cualquiera interpretación que impida en pleno cumplimiento que signifique la reparación integral de la víctima. Que finalmente, hay que considerar el artículo de **Alejandro Vergara Blanco**, publicado en el Diario El Mercurio, el 30 de mayo de 2013, titulado “Ley Natural, Reglas o Principios Jurídicos: ¿Dónde está el Derecho?”. El autor acota que el derecho es aquel que sufre o goza cada sociedad en su tiempo, no aquel ideal de cada filósofo del derecho y añade, a propósito de un fallo de la Corte Suprema, de los consumidores de las empresas del comercio detallista, y se pregunta ¿Cuál era el Derecho? ¿El que provenía de una antigua ley supuestamente obedecida? ¿El de alguna Ley Natural? O ¿El que dijo la sentencia de la Corte Suprema? Y añade que la respuesta social fue esta última, pues todos los actores adquirieron la convicción de que sólo después de tal sentencia, habían cambiado las reglas. Continúa, ¿La Corte Suprema aplicó las reglas, la ley natural o un principio jurídico? Y se responde indicando que la respuesta es esta última, aplicó un principio jurídico y expresó que eso no es ni positivismo, ni lus Naturalismo, es Derecho. En el caso en estudio, dictado por la **Corte Suprema, sentencia rol 1424-2013, de 1 de abril de 2014**, ya el máximo Tribunal, lo que hizo, como en muchos otros casos, aplicó un principio jurídico ya establecido en la comunidad jurídica internacional, específicamente en la Convención Americana, artículo 63, el artículo 38 de la Corte

Internacional de Justicia, como también lo ha manifestado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, realizado un daño por el Estado y acreditado éste, la víctima debe ser reparada íntegramente. Finalmente, el mismo Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, establece el principio *ex aequo et bono* (De acuerdo con lo correcto y lo bueno).

c.4) Que respecto a la responsabilidad civil del Estado, este Tribunal se ceñirá a las sentencias antes aludidas dictadas por este Ministro Visitador y en especial a la sentencia de la Sala Penal de la **Excma. Corte Suprema, de fecha 1 de abril de 2014, rol N° 1424-13**, que en su **considerando décimo**, en síntesis y en lo pertinente, señala que la responsabilidad del Estado, que se pretende hacer efectiva deriva, por un lado, de la comisión de hechos ilícitos por parte de sus agentes y, por el otro, de normas constitucionales precisas y de leyes de igual rango, que han sido incorporadas al Ordenamiento Jurídico Nacional, como lo son las obligaciones contempladas por los instrumentos internacionales que recogen los principios generales del Derecho Humanitario, entre los cuales se encuentra aquel relativo a la obligación de indemnizar los daños producidos por la violación de los derechos humanos. En consecuencia **procede rechazar la excepción de prescripción opuesta por el Fisco de Chile**.

c.5) Que siguiendo la misma línea de la sentencia citada, en cuanto al daño e indemnizaciones reclamadas, sobre esta materia este Tribunal estará a lo que ha resuelto en fallos precedentes en los últimos años, tratándose de cónyuge, hermanos, convivientes, primos, sobrinos u otros parientes de víctimas y al estándar que ha dispuesto además la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de la sentencia citada y los promedios habituales fijados por los Tribunales superiores de justicia en el último tiempo. Sobre este punto la Excma. Corte Suprema ha tenido la oportunidad de pronunciarse en:

- i. **Causa rol N°5572-2029, caratulados Schuster Pinto Macarena y otros**, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios contra Fisco de Chile, en sentencia del 29 de mayo de 2020, a propósito de la tragedia ocurrida en la isla Juan Fernández, que ante un hecho trágico de esta naturaleza para los actores (viuda e hijos), fijó la suma de \$150.000.000 para cada uno.
- ii. **El fallo de 05 de agosto de 2021, rol 82-2021**, sentencia de remplazo que en expresa en su considerando Décimo Quinto:..."Que la responsabilidad del Estado Administrador, a partir una interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 2°, 4°, 5°, 6°, 7° y 38 de la Constitución Política de la República en relación a los artículos 4° y 42 del D.F.L N° 1 que fija el texto refundido,

coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado (en adelante Ley N° 18.575 actualizada), ha evolucionado hasta llegar a un estado pacífico, en cuanto a sostener que dicho instituto se funda exclusivamente en las referidas normas y tiene como factor de imputación la “**falta de servicio**”, que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo, lo hace en forma irregular y/o lo hace tardíamente, operando así como un factor de imputación que genera la consecuente responsabilidad indemnizatoria. Es importante precisar que la norma del inciso segundo del artículo 21 de la Ley N° 18.575 actualizada, no excluye la aplicación del concepto de falta de servicio y el consecuente régimen de responsabilidad de Derecho Público a las Fuerzas Armadas, toda vez que tal norma no afecta la disposición del artículo 4°, piedra angular de la responsabilidad de los órganos del Estado, por lo que a su respecto debe atenderse a la concepción de la Administración que expresa el inciso segundo del artículo 1° del mencionado cuerpo de leyes, de forma tal que, sin duda alguna, este régimen de responsabilidad se aplica a las Fuerzas Armadas, como a las de Orden y Seguridad Pública”. En este sentido, en su parte resolutive “se revoca la sentencia apelada de 13 de septiembre de 2018 dictada, en cuanto rechazó la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio y, en su lugar, se declara que la acoge sólo en cuanto se condena al Fisco de Chile a pagar a favor de cada uno de los actores la suma de \$250.000.000 por concepto de daño moral, la que deberá reajustarse conforme a la variación que experimente el Índice de Precios al Consumidor, entre la fecha en que la presente sentencia quede firme y ejecutoriada y el mes anterior al pago efectivo, e intereses desde que esta sentencia quede firme”.

c.6) Que razonado lo anterior, éste sentenciador, sobre la indemnizaciones reclamadas, estará a una ponderación acorde con los daños ocasionados que se desprenden del mérito del proceso y del ilícito cometido. Teniendo presente que aquí se trata de actuaciones de agentes del Estado que han cometido un Delito de Lesa Humanidad. Habiendo por otro lado, la Excma. Corte Suprema fijado nuevo estándar sobre las indemnizaciones y la actuación del Estado para casos por falta de servicio. En consecuencia aparece justo y razonable que se otorgue un monto de: **\$150.000.000.- (ciento cincuenta millones de pesos)**, para **cada uno de los demandantes civiles**, por lo razonado anteriormente, y así se dirá en lo resolutive del fallo.

E. Improcedencia del pago de reajustes e intereses con anterioridad a que la sentencia definitiva quede ejecutoriada: Que como ha venido razonando este Tribunal en las sentencias citadas anteriormente, efectivamente como lo plantea el Fisco de Chile, para el caso de que se condene a pagar a los actores una indemnización determinada, éste pago debe devengarse desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada y el demandado se encuentre en mora.

56°) Que con el fin de probar el daño moral sufrido por los demandantes civiles, desde esa fecha hasta la actualidad, como consecuencia del delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, se presentaron los siguientes antecedentes:

A. Testimonios sin tachas y legalmente examinados de Benjamín Eladio Araneda Varela de fs. **3.553 a 3.554 (Tomo X)**, Ana Verónica Manosalva Carrasco de fs. **3.555 a 3.556 (Tomo X)**, Víctor Hernán Maturana Burgos de fs. **3.557 a 3.558 (Tomo X)** y Viviana Odisea Benítez Parada de fs. **3.559 a 3.560 (Tomo X)** quienes en síntesis declaran que conocen a la familia de Marcos Quezada Yáñez, quien era un joven estudiante, tranquilo y trabajador. Que su muerte fue un fuerte golpe para la familia, especialmente para su madre y hermano. Que el fallecimiento de la víctima acarreó un cambio negativo en la dinámica familiar.-

B. De fs. **3.661 a 3.662 (Tomo X)**, del **25 de noviembre de 2022**, informe del Programa de reparación y atención integral de salud, remite antecedentes teóricos, en relación a secuelas en el plano de la salud mental de los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos humanos en Chile.

C. De fs. **3.574 a 3.582 (Tomo X)**, de fecha **08 de marzo de 2022**, Informe de Salud Mental y Derechos Humanos (ILAS) que contiene documentación sobre las secuelas en el plano de la salud mental en los familiares de víctimas de violaciones a Derechos Humanos. Éste informe a modo de conclusión manifiesta que “no obstante las manifestaciones y consecuencias psicopatológicas descritas, no se trata únicamente de cuadros o síndromes psicopatológicos, sino al mismo tiempo de expresiones concretas del conflicto social y político desarrollado en una sociedad determinada, que se manifiesta tanto en el psiquismo individual, como en la subjetividad social (...) Se puede apreciar que frente a diversas situaciones traumáticas, la sintomatología y la desestructuración que se observan pueden manifestarse de manera similar. Es preciso enfatizar, que la especificidad radicada en la situación traumática, que en

Chile se definió a través de la represión política. Esta trasforma el contexto social haciendo amenazador y traumatizante y con un gran potencial destructivo. Incidiendo en las condiciones materiales de la vida concreta, en la sobrevivencia psíquica, y en los significados y valores que constituyen el sentido de la vida de los sujetos”.

D. A fs. 3.028 (Tomo VIII) Informe de la Fundación, Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad, en virtud del cual se adjunta fotocopia los siguientes documentos de trabajo internos elaborados por la Vicaría de la Solidaridad: 1) Pre informe trabajo diagnostico niños familiares de detenidos desaparecidos. 2) Informe trabajo diagnostico niños familiares de detenidos desaparecidos. 3) Salud mental: síntesis del trabajo con niños familiares de detenidos desaparecidos. 4) Algunos factores de daño a la salud mental. 5) Trabajo Social, una experiencia solidaria en la promoción y defensa de los derechos humanos. 6) Algunos Problemas de Salud Mental detectados por Equipos Psicológicos Psiquiátrico. 7) Daño psicológico prolongado de los familiares de detenidos desaparecidos. 8) Salud mental y violación a los derechos humanos.

E.- De fs. 3.592 a 3.599 (Tomo X), Informe del centro de salud mental y derechos humanos, que informa acerca de los daños y consecuencias en la salud mental sufrida por familiares de ejecutados políticos durante la dictadura militar.-

F.- De fs. 2.785 a 2.794 (Tomo VIII), resolución 60.147 de la Asamblea general de las Naciones Unidas, denominada “principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.”

G.- De fs. 2.795 a 2.813 (Tomo VIII), texto de la comisión de derechos humanos de Consejo económico y social de las Naciones Unidas, relativo a la promoción y protección de los derechos humanos, aprobado con fecha 8 de febrero de 2005.-

H.- A fs. 3.699 a 3700 y de 3.706 a 3.707 (Tomo XI) certificados de nacimiento emitidos por el Registro Civil e Identificación.-

57°) Que ponderando tales documentos y testigos, teniendo además presente que de acuerdo a lo expuesto latamente en esta sentencia, el daño moral que reclaman los actores, provocado por **el homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez**, se encuentra acreditado. En efecto, en la especie se ha establecido la concurrencia de todos los requisitos que hacen procedentes las indemnizaciones que se demanda, esto es: **a)** la perpetración de un delito por agentes del Estado; **b)** la existencia de un daño sufrido por los demandantes;

y **c)** la concurrencia del nexo causal entre estos y aquellos. Respecto del quantum de la indemnización, si bien tal daño, por su carácter inmaterial, es difícil de cuantificar, no es menos cierto que debe ser considerada la prolongación del dolor sufrido por los querellantes y considerando la restitución integral, aparece adecuado, congruente y lógico según lo que se ha dicho sobre los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los promedios fijados por los Tribunales superiores de justicia, fijar como indemnización para los actores, por el delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, cometido por los Agentes del Estado, **la suma que antes se ha detallado**, esto es:

a) \$150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos), para cada uno de los demandantes civiles.-

Lo que equivale a la **suma total de \$ 450.000.000 (cuatrocientos cincuenta millones de pesos).**

58°) En nada arredra lo razonado, sobre la responsabilidad civil del Estado lo informado por el Instituto de Previsión Social. Respecto a la víctima Marcos Quezada Yáñez: El ORD. N°4792/456 de 09 de febrero de 2021, a fs. 3.339 (Tomo IX), emitido por el Instituto de Previsión social, en virtud del cual informa los beneficios obtenidos de reparación de las Leyes N°19.992 y 20.874, recibido por la madre de la víctima precedentemente señalada. Toda vez, que no es posible privar a las víctimas del acceso a la justicia y demandar al Estado por los delitos cometidos por los agentes del Estado. De esta forma, se obtiene una reparación más integral en relación al daño causado a la víctima. En todo caso como se ha razonado precedentemente, no existe ninguna norma que impida demandar a los actores civiles.

59°) Que habiéndose fijado la suma a indemnizar y como se ha razonado precedentemente, ésta deberá ser **reajustadas en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior que quede ejecutoriada la sentencia y el mes anterior al de su pago, devengando intereses corrientes por el mismo período, más costas.

X.- ASPECTOS RESOLUTIVOS.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 3, 6, 7, 10, 11 N° 1, 6, 8 y 9, 12 N° 8 y 12, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 50, 51, 52, 56, 61, 68, 69, 391 **Código Penal**; artículos 10, 42, 43, 50, 51, 56, 67, 68 y siguientes, 81 a 84, 108 a 120, 121 y siguientes, 424 y siguientes, 447 y siguientes, 451 y siguientes, 456 bis, 457, 458 y siguientes, 471 y siguientes, 474

y siguientes, 477 y siguientes, 481 y siguientes, 485 y siguientes, 488 y siguientes, 499, 500 y siguientes, 533 y 682 y siguientes del **Código de Procedimiento Penal**; artículos 31, 2.314 y siguientes del **Código Civil**; **Ley 18.575**; artículos 1, 5, 6 y 38 inciso 2° de la **Constitución Política de la República**; **Ley 18.216**; **Ley 19.123** y sus modificaciones posteriores; **Ley 19.980**; **Ley 20.357**, **Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Convenios de Ginebra de 1949**, se declara:

EN CUANTO A LAS TACHAS:

I.- SE ACOGE LA TACHA interpuesta por doña Damary Melo por la causal N° 8 del artículo 460 del Código de Procedimiento Penal respecto a la testigo Elizabeth Emilia Solís Báez, no siendo necesario pronunciarse respecto de la otra causal invocada, sin costas por no haberlas solicitado.

EN CUANTO A LA ACCIÓN PENAL:

I.- QUE SE ABSUELVE a NELSON ADALBERTO ALMENDRAS ILLESCA, JOEL ERWIN PEREZ ISLA y MARCO ANTONIO AGUIRRE GUAJARDO ya individualizados del auto acusatorio de fs. 2.671 y siguientes de la presente causa.-

II.- QUE SE CONDENA a JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ, R.U.N. 5.414.884-4, ya individualizado, en calidad de **AUTOR**, a la pena de **DOCE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, **por el delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez. Perpetrado el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín, en su carácter de lesa humanidad.** Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

III. QUE SE CONDENA a CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR, R.U.N. 7.550.123-4, ya individualizado, en calidad de **AUTOR**, a la pena de **DIEZ AÑOS Y UN DÍA DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MEDIO** y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, **por el delito de homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez.**

Perpetrado el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín, en su carácter de lesa humanidad. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

IV. QUE SE CONDENA a BERNARDO IVAN AEDO LEIVA, R.U.N. 10.606.928-K, ya individualizado, en calidad de CÓMPLICE, a la pena de SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, por el delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, de Marcos Quezada Yáñez. Perpetrado el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

V. QUE SE CONDENA a JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA, R.U.N. 7.928.074-7, ya individualizado, en calidad de CÓMPLICE, a la pena de SIETE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO y a la accesoria legal de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos e inhabilitación absoluta para profesiones titulares durante el tiempo de la condena, por el delito de homicidio calificado, en su carácter de lesa humanidad, de Marcos Quezada Yáñez. Perpetrado el 24 de junio de 1989, en la comuna de Curacautín. Lo anterior, de conformidad a lo previsto y sancionado en el artículo 391 N°1 del Código Penal vigente a la época de los hechos.

VI.- Que respecto al acusado **JOSÉ DOLORINDO FERNÁNDEZ COFRÉ**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A). ARRESTO DOMICILIARIO PARCIAL: Desde el 19 de octubre de 2017, como consta de fs. 2.093 (Tomo VI), cuando es notificado del auto de procesamiento y arresto domiciliario parcial; **hasta el 13 de junio de 2018** que se confirma la resolución que otorga la libertad bajo fianza según consta a fs. 2.396 (Tomo VII).

VII.- Que respecto al acusado **CÉSAR OCTAVIO ADRIAZOLA AZOCAR**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley

N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A). PRISIÓN PREVENTIVA: Desde el 12 de marzo de 2015, como consta de fs. 1.043 (Tomo III), cuando es notificado del auto de procesamiento y la prisión preventiva; **hasta el 14 de abril de 2015** donde le fue otorgada la libertad bajo fianza según consta a fs. 1.286 (Tomo IV).

VIII.- Que respecto al acusado **BERNARDO IVAN AEDO LEIVA**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A). PRISIÓN PREVENTIVA: Desde el 17 de marzo de 2015, como consta de fs. 1.102 (Tomo IV), cuando es notificado del auto de procesamiento y la prisión preventiva; **hasta el 20 de marzo de 2015** donde le fue otorgada la libertad bajo fianza según consta a fs. 1.147 (Tomo IV).

IX.- Que respecto al acusado **JOSÉ DOMINGO CÁDIZ PARADA**, según se expresó, no se le concederá algún beneficio de la ley N°18.216, solicitado por la defensa. En consecuencia, deberán cumplir la pena privativa de libertad en forma efectiva, sirviéndole de abono los días que ha estado privado de libertad con motivo de este proceso, lo que se detalla de la siguiente forma:

A) PRISIÓN PREVENTIVA: Desde el 17 de marzo de 2015, como consta de fs. 1.100 (Tomo IV), cuando es notificado del auto de procesamiento y la prisión preventiva; **hasta el 20 de marzo de 2015** donde le fue otorgada la libertad bajo fianza según consta a fs. 1.146 (Tomo IV).

X.- La pena impuesta a los condenados comenzará a regir desde **que se presenten o sea habidos en la presente causa**.

XI.- Que una vez ejecutoriada la sentencia, deberán dejarse sin efecto las medidas cautelares personales impuesta a los acusados, oficiándose a los organismos respectivos que fueren procedente.

EN CUANTO A LA ACCIÓN CIVIL:

I.- QUE NO HA LUGAR a las excepciones interpuestas por el abogado Procurador Fiscal de Temuco, Álvaro Sáez Willer en representación del Fisco de Chile de fs.**3.078 a 3.098 bis (Tomo IX)**, esto es:

A. Excepción de reparación satisfactiva. Improcedencia de la indemnización reclamada por haber sido ya indemnizada la actora, Nélida Yáñez Bustos, en conformidad a las leyes de reparación.-

B. Improcedencia de la indemnización dineraria demandada, por preterición legal de los demandantes que invocan calidad de padrastro y hermano de la víctima directa, respectivamente.-

C. Excepción de prescripción extintiva.

Sin perjuicio de lo razonado en los párrafos precedentes, respecto del monto de la indemnización y sobre la fecha en que deben aplicarse los reajustes e intereses.

II.- Que HA LUGAR a la Demanda Civil interpuesta por el abogado **Sebastián Saavedra Cea**, en representación de Juan Vicente Yáñez Aedo, Nélida Eliana Yáñez Bustos y Jorge Absalón Quezada Yáñez, de fs. 2.814 a 2.853 (Tomo VIII), en contra del Fisco de Chile. Condenándose a la parte demandada a pagar como indemnización de perjuicios, por concepto de daño moral producto del homicidio calificado de Marcos Quezada Yáñez, la suma de:

a) 150.000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) para cada uno de los demandantes civiles.-

Dando un total de **\$450.000.000** (cuatrocientos cincuenta millones de pesos).

III.- La suma anterior deberán ser **reajustada en la misma proporción en que varíe el Índice de Precios al Consumidor** entre el mes anterior a que la sentencia quede ejecutoriada y el mes anterior al de su pago; devengando intereses corrientes por el mismo período.

Que se condena en costas, al FISCO de Chile.

Notifíquese esta sentencia personalmente a los sentenciados, dirigiendo los exhortos pertinentes, si correspondiere.

Notifíquese a los abogados querellantes y al abogado que representa al Fisco de Chile, a través del Receptor de turno del presente mes.

Regístrese y cúmplase en su oportunidad, con lo que ordena el artículo 509 bis del Código de Procedimiento Penal, comuníquese a los diferentes Tribunales en que se tramitaren procesos en contra de los sentenciados para informarles sobre las decisiones del presente fallo y **en su oportunidad, archívese.**

Consúltese si no se apelare y archívese en su oportunidad.

Siendo un hecho ocurrido en el año 1989 remítase por la vía más expedita a la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial.

Rol N° 18.779.-

Dictada por don **ÁLVARO CLAUDIO MESA LATORRE**, Ministro en Visita Extraordinaria.

Autoriza don Germán Varas Cicarelli, Secretario de la Iltrma. Corte de Apelaciones de Temuco

En Temuco, a catorce de marzo de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución precedente. (FRF).